

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ

Escuela de Posgrado



La representación de la protesta social en el discurso mediático: Análisis crítico de la cobertura periodística de las manifestaciones en enero del 2023

Tesis para optar el grado académico de Maestro en
Comunicaciones que presenta:

Ignacio de Jesús Hermilio Vigo Fernández-Prada

Asesora:

Sharun Mia Gonzales Matute


Lima, 2025

Informe de Similitud

Yo, Sharún Gonzales Matute, docente de la Escuela de Posgrado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, asesor(a) de la tesis/el trabajo de investigación titulado "LA REPRESENTACIÓN DE LA PROTESTA SOCIAL EN EL DISCURSO MEDIÁTICO: ANÁLISIS CRÍTICO DE LA COBERTURA PERIODÍSTICA DE LAS MANIFESTACIONES EN ENERO DE 2023", del autor Vigo Fernández-Prada, Ignacio de Jesús Hermilio, dejo constancia de lo siguiente:

- El mencionado documento tiene un índice de puntuación de similitud de 7%. Así lo consigna el reporte de similitud emitido por el software *Turnitin* el **06/10/2025**.
- He revisado con detalle dicho reporte y la Tesis o Trabajo de Suficiencia Profesional, y no se advierte indicios de plagio.
- Las citas a otros autores y sus respectivas referencias cumplen con las pautas académicas.

Lugar y fecha: Lima, 06 de octubre del 2025

Apellidos y nombres del asesor / de la asesora: <u>Gonzales Matute, Sharún Mia</u>	
DNI: 71819900	Firma 
ORCID: 0000-0002-9668-7382	

DEDICATORIA

Para los nadies, los olvidados:

nombres que desbordan los registros,
rostros a los que se niega la luz de existir.

Para quienes no hallan justicia y, aun así, la persiguen.

Porque todas las luchas son un solo río

empecinado en encontrar su mar,

y la trascendencia, cuando asoma,

se revela en el rostro que nos reclama:

dios es el otro.



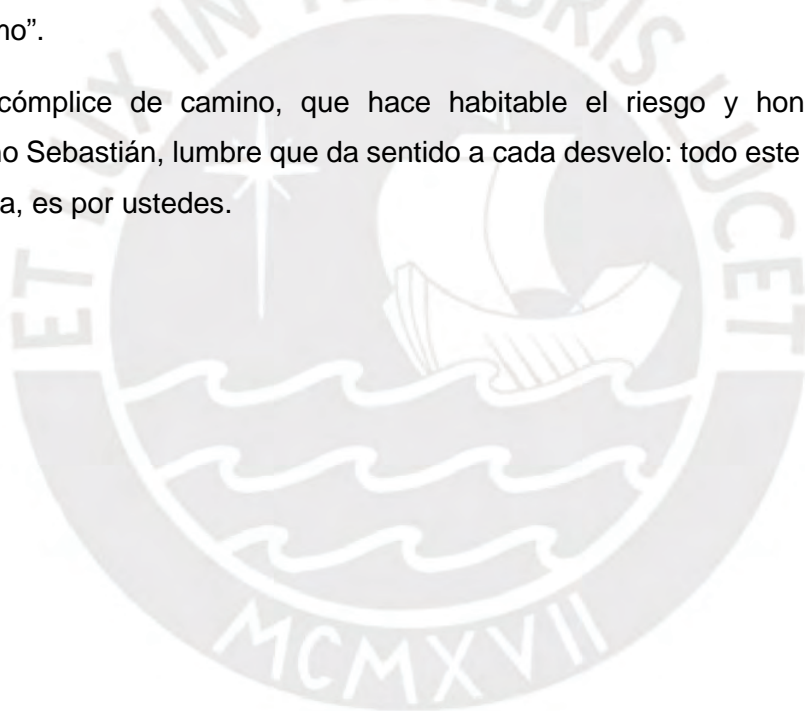
AGRADECIMIENTOS

A mis padres, Hermilio y Mercedes, por la fe en el amor que no se cansa y por la ética puesta en mis manos como herencia y horizonte. Con ustedes aprendí que estudiar es una forma de cuidar el mundo; por eso seguí la larga subida de la educación superior, con sus dudas y sus luces.

A mi hermana Victoria, compañera de infancia y lucidez intelectual: tu rigor y perseverancia me mostraron que aprender también es un acto de valentía.

A mi abuelita Mercedes, maestra de la ternura: de ti aprendí la compasión que antecede al juicio y la mirada que reconoce al otro antes que a sí mismo. En tus gestos se me reveló la palabra “prójimo”.

A Alicia, mi cómplice de camino, que hace habitable el riesgo y honda la alegría. Y a mi pequeño Sebastián, lumbre que da sentido a cada desvelo: todo este esfuerzo, toda esta esperanza, es por ustedes.



RESUMEN

Las protestas sociales en Perú durante enero de 2023, desencadenadas por la destitución de Pedro Castillo y la designación de Dina Boluarte, evidenciaron la persistencia de brechas históricas entre el Estado y las regiones andinas del sur, marcadas por exclusiones sociales y económicas. En ese contexto, las demandas de renuncia presidencial, adelanto de elecciones y nueva constitución se enfrentaron a una respuesta estatal con saldo de más de 50 fallecidos y cientos de heridos. En este contexto, los medios de comunicación desempeñaron un papel crucial en la construcción de discursos, actuando tanto como transmisores de información como espacios de disputa ideológica.

Este estudio analiza el discurso de cuatro diarios peruanos (Perú21, La República, El Comercio y El Peruano) mediante Análisis Crítico del Discurso articulado con la teoría de la colonialidad del poder, el modelo tridimensional de Fairclough, el cuadrado ideológico de van Dijk y la representación de actores sociales de van Leeuwen. Se trabajó con un corpus de 60 portadas y, para un examen microdiscursivo, con un subcorpus de 12 portadas correspondientes a tres días de alta conflictividad (20–22 de enero de 2023). Los hallazgos muestran enfoques diferenciados: Perú21 tiende a criminalizar la protesta con énfasis sensacionalista; La República visibiliza demandas y denuncia la represión; El Comercio prioriza marcos de orden y gobernabilidad, con crítica focalizada hacia acciones asociadas a la protesta (p. ej., bloqueos y episodios de violencia) y menor problematización de la respuesta estatal; mientras que El Peruano legitima la actuación gubernamental.

En conjunto, los resultados confirman que el discurso mediático no es neutral y, desde un enfoque decolonial, reproduce o disputa jerarquías y otredades. El estudio aporta evidencia comparativa sobre marcos textuales y visuales en picos de conflictividad y pone a disposición una matriz replicable de 16 categorías. Asimismo, propone una lectura articulada texto–imagen–intertexto para examinar legitimaciones y responsabilizaciones. En el plano profesional, las implicancias demandan criterios editoriales y éticos que eviten la criminalización y promuevan coberturas pluralistas y responsables. Estos aportes buscan contribuir a un debate público mejor informado y a prácticas periodísticas más conscientes de su responsabilidad social.

Palabras clave: Análisis Crítico del Discurso, protesta social, representación de actores sociales, discurso mediático, colonialidad del poder, medios, ideología, construcción de la otredad.

ABSTRACT

Social protests in Peru in January 2023—triggered by the ouster of Pedro Castillo and the appointment of Dina Boluarte—laid bare persistent historical divides between the state and the Andean southern regions, marked by social and economic exclusion. In that setting, demands for presidential resignation, early elections, and a new constitution met a state response that left more than 50 people dead and hundreds injured. In this context, the media played a crucial role in constructing discourse, acting both as transmitters of information and as arenas of ideological contestation.

This study analyzes the discourse of four Peruvian newspapers (Perú21, La República, El Comercio, and El Peruano) through Critical Discourse Analysis articulated with the theory of the coloniality of power, Fairclough's three-dimensional model, van Dijk's ideological square, and van Leeuwen's representation of social actors. It works with a corpus of 60 front pages and, for a micro-discursive examination, a subcorpus of 12 front pages from three high-conflict days (20–22 January 2023). The findings show differentiated approaches: Perú21 tends to criminalize the protests with a sensationalist tone; La República foregrounds demands and denounces repression; El Comercio prioritizes frames of order and governability, with focused criticism directed at actions associated with the protests (e.g., roadblocks and episodes of violence) and less problematization of the state response; while El Peruano legitimizes governmental action.

Taken together, the results confirm that news discourse is not neutral and, from a decolonial perspective, reproduces or contests hierarchies and othering. The study contributes comparative evidence on textual and visual framing at the peak of conflict and offers a replicable 16-category matrix for future research. It also advances an integrated text–image–intertext reading to examine legitimation and attributions of responsibility. At the professional level, the implications call for editorial and ethical criteria that avoid criminalization and promote pluralistic, responsible coverage. These contributions aim to inform public debate and encourage journalistic practices more attuned to their social responsibility.

Keywords: Critical Discourse Analysis, social protest, representation of social actors, media discourse, coloniality of power, news media, ideology, construction of otherness.

TABLA DE CONTENIDOS

Resumen	1
Capítulo I: Introducción	6
1.1. Planteamiento del problema	10
1.2. Justificación de la investigación	15
1.3. Objetivos de la investigación	18
1.3.1. Objetivo general	18
1.3.2. Objetivos específicos	18
1.3.3. Hipótesis	18
Capítulo II: Estado del debate	19
2.1. Antecedentes sobre la representación mediática de la protesta social	20
2.2. Estudios previos sobre análisis crítico del discurso en medios de comunicación.....	24
2.3. Proyecciones ideológicas en la cobertura mediática	27
Capítulo III: Marco teórico y conceptual	33
3.1. Discurso	35
3.1.1. Modelo tridimensional de Norman Fairclough	39
3.1.1.1. Dimensión textual	40
3.1.1.2. Dimensión de la práctica discursiva	43
3.1.1.3. Dimensión sociocultural	46
3.1.2. Cuadrado ideológico de Teun van Dijk	49
3.1.2.1. Enfatización de lo positivo del “nosotros”	50
3.1.2.2. Desenfátización de lo positivo del “ellos”	51
3.1.2.3. Enfatización de lo negativo del “ellos”	51
3.1.2.4. Desenfátización de lo negativo del “nosotros”	52
3.1.3. Representación de actores sociales en Theo van Leeuwen	53
3.1.3.1. Nominación y categorización	54
3.1.3.2. Inclusión y exclusión	55
3.1.3.3. Activación y pasivación	55
3.1.3.4. Individualización y asimilación	56
3.2. Discurso mediático	57
3.2.1. Ideología de la prensa en el Perú	58
3.2.2. Poder y hegemonía mediática	59

3.2.3. Estrategias discursivas	61
3.2.4. Representación del otro en el discurso mediático	63
3.3. Protesta social	64
3.3.1. Discurso de conflicto y resistencia en el Perú	67
3.3.2. Representación de la protesta social	69
3.4. Colonialidad en la construcción de la otredad	72
3.4.1. Construcción de raza, clase e identidad nacional	74
3.4.2. Construcción de la otredad y subalternidad	76
Capítulo IV: Metodología	82
4.1. Diseño de la investigación	82
4.2. Fuentes, criterios de selección de portadas y contextualización temporal	84
4.2.1. Justificación del análisis de portadas.....	84
4.2.2. Corpus, unidades de análisis y fechas seleccionadas.....	86
4.2.3. Línea de tiempo contextual del conflicto durante el mes de enero 2023.....	87
4.2.4. Diarios elegidos para el análisis.....	88
4.3. Matriz de categorías para el análisis crítico del discurso	94
4.4. Proceso de codificación y análisis de datos	99
4.5. Consideraciones éticas y posicionalidad del investigador	110
Capítulo V: Análisis comparativo desde el modelo tridimensional de Fairclough	
.....	113
5.1. Aplicación del modelo tridimensional de Fairclough	113
5.1.1. Dimensión sociocultural	115
5.1.2. Dimensión textual	118
5.1.2.1. Portadas del 20 de enero de 2023: “Toma de Lima” y visiones opuestas.....	118
5.1.2.2. Portadas del 21 de enero de 2023: Entre la violencia y el llamado al diálogo.....	127
5.1.2.3. Portadas del 22 de enero de 2023: Represión en San Marcos, conspiraciones y narrativas divergentes	134
5.1.3. Dimensión de la práctica discursiva: producción, audiencia y estrategias narrativas.....	142

5.2. Discusión del análisis y hallazgos	149
5.2.1. Dimensión textual: enfoques y encuadres en titulares e imágenes	154
5.2.2. Dimensión de la práctica discursiva: producción y circulación de los discursos	157
5.2.3. Dimensión sociocultural: ideologías, memoria histórica y colonialidad	159
Capítulo VI: Conclusiones	163
Referencias bibliográficas	169
Anexos.....	180
A. Consolidado de tablas de síntesis por categorías y portadas.....	180



CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN

En el Perú, la inestabilidad política no es una anomalía reciente, sino el reflejo de una estructura estatal históricamente fracturada, fundada sobre desigualdades persistentes y mecanismos excluyentes de representación. Desde la transición democrática del año 2000, el país ha atravesado múltiples crisis de gobernabilidad, pero ninguna con la intensidad y densidad simbólica que alcanzó el estallido social de enero de 2023. La destitución del presidente Pedro Castillo, tras su intento fallido de disolver el Congreso, reveló la fragilidad del sistema institucional y además detonó una movilización social en distintas regiones del territorio protagonizada por sectores históricamente subalternizados: comunidades indígenas, poblaciones rurales del sur andino, estudiantes, sindicatos, y redes juveniles organizadas, que demandaban la legitimidad de un cambio político acompañado de transformaciones estructurales para combatir las desigualdades persistentes en el sistema político peruano (Baeza, 2022). Sin embargo, estas demandas fueron enfrentadas con una severa represión estatal, exacerbando las tensiones existentes y evidenciando las fragilidades institucionales del país mientras la otrora vicepresidenta Dina Boluarte asumía la presidencia. Degregori (2004) ya advertía sobre la exclusión política de vastos sectores indígenas y rurales, históricamente marginados del pacto republicano, y cuya presencia en las calles representa una demanda por reconocimiento y justicia estructural. En este contexto de desafección generalizada, la protesta no emergió como un fenómeno aislado ni espontáneo, sino como el reflejo de una fractura más profunda que atraviesa las dimensiones étnicas, territoriales y socioeconómicas del Perú.

Según la Defensoría del Pueblo, se registraron al menos 67 muertes, incluyendo 48 civiles durante las protestas, 11 fallecidos por hechos vinculados al bloqueo de carreteras y un policía, así como más de 1,300 civiles heridos y 580 policías lesionados (Defensoría del Pueblo, 2023). Estas cifras permiten dimensionar empíricamente la magnitud de la violencia estatal desatada durante las jornadas de protesta, justificando su análisis desde una perspectiva crítica sobre derechos humanos.

Diversas organizaciones internacionales de derechos humanos, como Amnistía Internacional, Human Rights Watch, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH-OEA), expresaron su alarma por el uso excesivo de la fuerza, la

militarización del conflicto y la discriminación racial estructural en la respuesta estatal. Según Amnistía Internacional (2023), la represión tuvo un componente racializado, al dirigirse desproporcionadamente contra comunidades andinas y rurales. Esta fuente es clave, pues permite vincular la violencia estatal con un patrón histórico de exclusión étnica en el Perú. Human Rights Watch (2023), por su parte, denunció una falta de investigaciones diligentes sobre los abusos cometidos por las fuerzas del orden y la impunidad sistemática que ha seguido a los hechos. Esta cita respalda la idea de que la violencia no solo fue desmedida, sino que fue tolerada por las instituciones encargadas de fiscalizar el poder. En la misma línea, la Oficina del ACNUDH (2023) observó indicios de ejecuciones extrajudiciales y violaciones del derecho a la protesta pacífica, alertando sobre una regresión democrática preocupante. Además, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH, 2023) incluyó en su informe una crítica directa al Estado peruano por la desproporcionalidad en el uso de la fuerza, donde el 80% de las muertes ocurrieron en regiones con población mayoritariamente indígena, y recomendó medidas urgentes de reparación y justicia transicional. Su inclusión permite consolidar una lectura multilateral del carácter autoritario de la respuesta estatal.

Este no fue un ciclo de protestas convencional, señala Coronel (2023), sino una “explosión social” sin centro unificado, con múltiples temporalidades, demandas y repertorios, lo que refleja una acumulación de malestares sociales históricos que permiten comprender el carácter fragmentario, pero profundamente simbólico de las movilizaciones. Según argumentan John Crabtree y Francisco Durand (2017) las élites peruanas han capturado el poder político y económico, limitando la participación democrática y exacerbando las desigualdades sociales. Este escenario de exclusión y concentración de poder ha generado un caldo de cultivo para el descontento social y las protestas masivas. En este contexto, se hizo evidente que la prensa escrita no solo relató los acontecimientos, sino que también moldeó activamente las narrativas públicas sobre su legitimidad, peligrosidad o sentido político. La presente tesis analiza las representaciones mediáticas de las protestas sociales de enero de 2023 en las portadas de cuatro diarios peruanos: El Comercio, La República, El Peruano y Perú21, con el objetivo de identificar las estrategias discursivas, visuales y editoriales que permitieron construir determinados sentidos ideológicos en torno a los hechos.

Según Fairclough (1992), el discurso mediático es una práctica social vinculada a estructuras de poder, capaz de reproducir o desafiar el orden dominante. Esta perspectiva

se complementa con la noción de “mediaciones” de Martín-Barbero (1991), quien sostiene que los medios no imponen ideología de manera directa, sino que articulan sentidos en relación con matrices culturales e históricas compartidas, activando imaginarios sedimentados que influyen en la recepción y resignificación del mensaje. En este sentido, entender a los medios como operadores ideológicos implica reconocer su papel en la disputa simbólica por el sentido común, especialmente en contextos de alta conflictividad política y social. Tal como advierte Van Dijk (2006), los medios de comunicación tienen un papel central en la reproducción de ideologías dominantes, en especial en contextos de polarización, al legitimar ciertas voces mientras silencian o criminalizan otras. Su inclusión respalda la hipótesis central de esta investigación: que los discursos mediáticos no son neutrales, sino que operan como dispositivos de control cultural y construcción de otredad.

A través del enfoque metodológico del ACD, se propone examinar cómo las portadas, en tanto dispositivos semiótico-discursivos, reflejan y configuran luchas de poder en el espacio público peruano contemporáneo. En su enfoque tridimensional del Análisis Crítico del Discurso (ACD), Fairclough (1992) sostiene que todo texto debe ser comprendido en tres niveles interrelacionados: el nivel textual, donde se analizan las estructuras lingüísticas y semánticas que configuran representaciones sociales; el nivel discursivo, que examina cómo se producen, circulan y consumen los discursos, revelando los mecanismos de legitimación o deslegitimación de ciertos actores; y el nivel sociocultural, donde se articulan estos discursos con las configuraciones estructurales de poder, ideología y hegemonía propias del contexto histórico. Desde esta perspectiva, los medios contribuyen activamente a la reproducción o transformación del orden social al definir quién tiene voz, qué narrativas se validan y cuáles se excluyen del debate público.

El presente marco teórico se enriquece con los aportes de Teun van Dijk (1998), quien introduce el concepto del cuadrado ideológico para analizar cómo los discursos enfatizan lo positivo del "nosotros" y lo negativo del "ellos". Esta estrategia discursiva legitima exclusiones y refuerza narrativas hegemónicas. Asimismo, Theo van Leeuwen (2008) explora cómo los medios incluyen o excluyen actores sociales mediante mecanismos como la criminalización y la pasivación, configurando percepciones públicas que justifican o deslegitiman acciones colectivas. En el caso de las protestas de enero de 2023, estas representaciones mediáticas influyeron en la opinión pública, condicionaron las respuestas estatales, justificando prácticas represivas y perpetuando jerarquías sociales preexistentes.

Las representaciones mediáticas también deben entenderse dentro del marco de la colonialidad del poder, un concepto desarrollado por Aníbal Quijano (2000) que analiza cómo las jerarquías raciales y sociales instauradas en la época colonial siguen configurando las relaciones de poder contemporáneas. En el contexto peruano, los manifestantes indígenas y rurales fueron frecuentemente representados como "otros" peligrosos o irracionales, perpetuando estereotipos que legitiman su exclusión del espacio político (Maldonado Rivera, 2017). Este proceso de otredad, como describe Said (1978), contribuye a justificar la violencia estatal y deslegitimar las demandas sociales, reproduciendo una narrativa que privilegia los intereses de las élites económicas y políticas.

El corpus de análisis incluye sesenta portadas de los cuatro diarios seleccionados durante quince días clave de las protestas. Este enfoque permite identificar patrones discursivos recurrentes, como el énfasis en la violencia de los manifestantes, la invisibilización de sus demandas o la construcción de discursos que legitiman la represión estatal. Al comparar las representaciones de diarios con orientaciones editoriales divergentes, esta investigación busca evidenciar las tensiones ideológicas que configuran el tratamiento mediático de las movilizaciones sociales.

Más allá del análisis discursivo, esta investigación se plantea también como una reflexión crítica sobre las implicancias estructurales que tienen las representaciones mediáticas en la configuración del espacio público y la cultura política. En contextos de exclusión histórica como el peruano, las protestas sociales constituyen formas de irrupción desde los márgenes que interpelan el orden institucional; sin embargo, los medios tienden a reducirlas a marcos narrativos que refuerzan su ilegitimidad o las omiten. En esta lógica, los medios no solo tematizan los hechos, sino que operan como dispositivos de visibilidad que jerarquizan voces y cuerpos según criterios ideológicos, culturales y de clase, produciendo una cartografía desigual del reconocimiento político. En términos de Rancière (2000), los medios participan en el reparto de lo sensible: delimitan lo que puede ser visto, dicho y escuchado, estableciendo qué sujetos pueden aparecer como interlocutores válidos y cuáles quedan relegados al silencio o la criminalización. Esta operación se distancia radicalmente del ideal habermasiano de una esfera pública deliberativa, donde todos los ciudadanos participan en igualdad de condiciones; por el contrario, la representación mediática contemporánea, especialmente durante momentos de crisis como las protestas de enero de 2023, evidencia una esfera pública estratificada, donde las condiciones de acceso están mediadas por relaciones de poder simbólico y estructuras de exclusión.

Comprender estos marcos interpretativos resulta crucial para imaginar una democratización radical del discurso público que permita la emergencia de voces subalternas como sujetos legítimos de transformación social.

En última instancia, esta investigación busca aportar elementos para comprender de qué manera las representaciones mediáticas podrían incidir en las percepciones públicas y destacar la importancia de un periodismo que promueva el diálogo y la representación equitativa de todas las voces sociales. En un contexto marcado por la polarización y la exclusión, el análisis crítico del discurso se erige como una herramienta pertinente para desafiar los discursos dominantes y construir un espacio público más inclusivo. Este estudio aspira a contribuir al debate sobre el rol de los medios en la configuración de democracias más equitativas, donde las demandas de los sectores marginados no solo sean escuchadas, sino también respetadas y representadas.

1.1 Planteamiento del problema:

El Perú, como nación, está configurado por contradicciones entre su diversidad cultural y sus desigualdades estructurales. Estas tensiones, enraizadas en un legado colonial y acentuadas por un modelo político centralista, se manifiestan en conflictos sociales y movilizaciones populares. Uno de los episodios más significativos en la historia reciente fueron las protestas de enero de 2023, que surgieron tras la destitución del expresidente Pedro Castillo y la asunción de la vicepresidenta Dina Boluarte. Estas movilizaciones evidenciaron el rechazo al cambio político, sino que también visibilizaron un descontento acumulado relacionado con siglos de exclusión económica, política y social de las regiones andinas y amazónicas (Grompone y Tanaka, 2009). La magnitud de estas protestas no puede entenderse sin considerar su contexto histórico: los sectores rurales e indígenas han sido históricamente marginados de las decisiones políticas y de los beneficios económicos, lo que ha perpetuado dinámicas de desigualdad y subordinación. Según Yashar (2005), los Estados latinoamericanos, incluidos los andinos, han construido sus instituciones sobre estructuras de ciudadanía diferenciada, donde las poblaciones indígenas fueron sistemáticamente excluidas de la representación política sustantiva, a pesar de haber sido formalmente incorporadas como ciudadanos. Esta exclusión se articula con lo que Aníbal Quijano (2000) denominó la "colonialidad del poder": una persistente organización jerárquica de la sociedad basada en criterios raciales y étnicos que sobrevive más allá del colonialismo formal. En el caso peruano, esta matriz ha cristalizado en prácticas estatales que históricamente han tratado a los sectores indígenas y rurales como poblaciones

“menores”, sujetas a tutela y asistencia, más que como actores con agencia política. Degregori (2000) advierte que la tradición republicana peruana ha reducido a estos sectores a objetos pasivos de políticas públicas, excluyéndolos de los procesos decisorios fundamentales y negándoles voz en los espacios donde se definen los proyectos de nación. Esta dinámica de exclusión también se traduce en brechas persistentes en inversión pública, servicios básicos y acceso a justicia, como ha sido documentado por organismos como la Defensoría del Pueblo (2023) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2021), que muestran cómo las regiones con mayor composición indígena concentran los más altos índices de pobreza y menor presencia estatal efectiva. Así, la participación masiva de estos sectores en las protestas de enero de 2023 debe leerse como una forma de interpelación histórica a un modelo de ciudadanía que los ha sistemáticamente despojado de representación, redistribución y reconocimiento.

Las movilizaciones, encabezadas por comunidades indígenas, campesinas y jóvenes de regiones olvidadas por el Estado, no se limitaron a exigir justicia política. También representaron demandas acumuladas relacionadas con derechos fundamentales como la educación, la salud y la representación política. Según el Informe IEP (2023), estos sectores expresaron un clamor colectivo por la redistribución del poder y la atención a problemas estructurales que durante años han sido ignorados. Estas regiones históricamente marginalizadas no solo han sido excluidas de los espacios de toma de decisiones, sino que además han sido objeto de políticas que las despojan de recursos sin ofrecer beneficios tangibles. En este sentido, las protestas de 2023 no son eventos aislados, sino parte de un patrón histórico que revela las tensiones latentes entre las regiones periféricas y el centro político-económico limeño (Espinoza Lewis, 2016). Esta es una de las razones por las cuales surgió un interés personal particular para iniciar esta investigación.

El rol de los medios de comunicación en este contexto es fundamental, ya que actúan como mediadores entre los hechos y la percepción pública. Históricamente, la prensa escrita en el Perú ha sido criticada por su alineación con intereses económicos y políticos de las élites, reproduciendo discursos que deslegitiman las demandas sociales. Giusti Salazar (2020) señala que los medios, en lugar de informar de manera imparcial, tienden a construir discursos que perpetúan la desigualdad al presentar a los movimientos sociales como amenazas al orden público. En este marco, los medios son espectadores de los acontecimientos y a la vez actores que influyen activamente en cómo se interpretan y legitiman los conflictos sociales.

Las coberturas de enero de 2023 ejemplifican esta dinámica. Diarios como El Comercio, Perú21, La República y El Peruano ofrecieron perspectivas divergentes sobre las protestas, reflejando sus inclinaciones editoriales e ideológicas. Mientras que El Comercio y Perú21 enfatizaron la violencia y el caos asociados a las manifestaciones, legitimando de facto las respuestas represivas del Estado, La República intentó visibilizar las causas estructurales del descontento y denunciar los excesos gubernamentales. Esta disparidad en los enfoques no es accidental; responde a un marco ideológico más amplio que condiciona las formas en que los medios representan a los actores sociales y las dinámicas del poder estatal (Richardson, 2007). Estos discursos moldean la percepción pública e influyen en el discurso oficial y en las decisiones políticas, legitimando respuestas represivas y criminalizadoras.

En un contexto de profunda crisis política, la encuesta de IPSOS de febrero (IPSOS, 2023) reflejó un descontento masivo hacia el gobierno de Dina Boluarte. Solo un 7% aprueba su gestión, con niveles de desaprobación que se incrementan en el medio rural. Un 60% de los encuestados en zonas rurales considera excesivo el accionar de la Policía Nacional durante las protestas, y un 41% a nivel nacional cree que la presidenta o el primer ministro dieron órdenes de “disparar a matar” durante los operativos en Ayacucho y Juliaca. Además, el 49% responsabiliza directamente a Boluarte y a Otárola por la crisis, en contraste con solo un 10% que culpa a grupos extremistas como el Movadef.

Un aspecto central en las representaciones mediáticas de la protesta social en el Perú es el recurso al terruqueo, entendido como una estrategia discursiva sistemática de estigmatización política que asocia a los actores disidentes con el terrorismo, especialmente con Sendero Luminoso. Esta práctica no es una mera táctica retórica, sino un mecanismo ideológico profundamente enraizado en el aparato de poder estatal y mediático. El terruqueo opera como una forma de violencia simbólica que construye al “otro político”, frecuentemente indígena, rural y popular, como un sujeto peligroso y radical, deslegitimando sus demandas y habilitando la represión estatal. Esta forma de enmarcar a los manifestantes hereda y reactualiza los dispositivos de clasificación social gestados durante el conflicto armado interno (1980–2000), y articula una matriz de colonialidad que racializa el conflicto político, como han señalado Quijano (2000) y De la Cadena (2007). Velásquez Villalba (2022) sostiene que el terruqueo no solo reproduce jerarquías sociales y raciales, sino que también reconfigura el espacio público al instalar una narrativa de miedo y exclusión que bloquea el disenso legítimo. En este sentido, el terruqueo debe ser entendido como una tecnología de gobierno que naturaliza la criminalización de la protesta

y que encarna una forma de necropolítica discursiva, donde determinados cuerpos y voces pueden ser descartados sin duelo, al ser contruidos previamente como enemigos del orden democrático.

Además, los discursos mediáticos perpetúan la construcción de la otredad, una estrategia discursiva que separa a los manifestantes del "nosotros" civilizado y los posiciona como "otros" irracionales y peligrosos. Según Quijano (2000), esta lógica colonialista sigue vigente en el Perú contemporáneo, reforzando jerarquías raciales y culturales que marginan a las comunidades indígenas y rurales. Arrunátegui (2010) subraya que esta construcción discursiva refuerza las desigualdades existentes y legitima las respuestas represivas al presentar las demandas sociales como irracionales o inaceptables en el marco del orden neoliberal.

Por otra parte, la cobertura mediática tiende a convertir en espectáculo los conflictos sociales, reduciéndolos a imágenes sensacionalistas de violencia y caos y, al mismo tiempo, despolitizando las demandas que los originan. Esta pauta ha sido documentada en Chile por Gascón i Martín y Pacheco Silva (2015) mediante un análisis verbo-visual de la prensa de Valparaíso, que muestra cómo la focalización en el suceso, la confrontación y los aspectos negativos simplifica la movilización y diluye su entramado de actores y causas. En la misma línea, Silva-Escobar (2015) caracteriza la estetización de la protesta como un dispositivo que vacía su contenido político y la convierte en objeto de consumo informativo. Sobre ese trasfondo empírico, Gascón i Martín (2016) propone, desde un marco latinoamericano, una lectura de la producción discursiva que ayuda a nombrar y comprender estos patrones de espectacularización y despolitización que, si bien no provienen del caso peruano, dialogan estrechamente con la cobertura de las protestas de 2023 aquí analizada. En este último caso, tales operaciones favorecieron la invisibilización de las demandas de los sectores movilizados y reforzaron marcos oficiales que justificaron la represión como orden necesario.

Como bien advierte Norman Fairclough, el lenguaje no es un mero vehículo de comunicación, sino una forma de acción social que produce efectos concretos en la realidad (Fairclough, 1995). En esa medida, el Análisis Crítico del Discurso (ACD) se convierte en una herramienta privilegiada para explorar cómo las representaciones mediáticas no solo reflejan el mundo social, sino que participan activamente en su configuración. Esta perspectiva resulta fundamental en el contexto de las protestas de enero de 2023 en el Perú, donde los medios de comunicación actuaron como agentes discursivos que

disputaron el sentido de la crisis, legitimaron determinadas respuestas institucionales y delimitaron el campo de lo políticamente aceptable. El enfoque de Fairclough permite mapear estas operaciones a través de tres dimensiones interconectadas (la textual, la discursiva y la sociocultural) revelando las huellas ideológicas que subyacen en el lenguaje periodístico. Teun van Dijk (1997), por su parte, aporta un marco para entender cómo estas prácticas discursivas pueden contribuir a la reproducción simbólica del poder, mediante la construcción de imaginarios sociales que naturalizan la exclusión o la criminalización de ciertos actores. Complementariamente, Theo van Leeuwen (2008) ofrece categorías analíticas que permiten observar los mecanismos con los cuales los actores sociales son silenciados, devaluados o codificados como amenaza. En esta investigación, el ACD no se emplea como un método meramente técnico, sino como una forma de interrogación política sobre los discursos que modelan la percepción pública de la protesta social y reconfiguran las fronteras del conflicto democrático.

La presente investigación busca abordar esta problemática a partir de un análisis de las representaciones mediáticas de las protestas sociales de enero de 2023 en los principales diarios peruanos. La pregunta central que guía este estudio es: **¿Cómo han sido representadas por los medios de comunicación peruanos las protestas sociales durante enero de 2023, y qué estrategias discursivas e ideológicas han utilizado para construir estos discursos?** De esta interrogante general se derivan tres preguntas específicas:

- ¿Cómo se construye la representación de las protestas sociales en El Comercio, La República, El Peruano y Perú21 durante enero de 2023?
- ¿Cómo influye la tendencia ideológica¹ de cada medio en la construcción de los discursos sobre las protestas sociales?

¹ En el marco del Análisis Crítico del Discurso (ACD), la “tendencia ideológica” de un medio se refiere al conjunto de esquemas de creencias compartidas que guían su posicionamiento frente a los hechos, actores y conflictos sociales. Según Van Dijk (1997), las ideologías actúan como estructuras mentales que organizan las representaciones sociales de los grupos, influyendo en la manera en que los medios seleccionan, jerarquizan y encuadran la información. Fairclough (1995) complementa que estas ideologías se manifiestan en prácticas discursivas que articulan el lenguaje con relaciones de poder, contribuyendo a la naturalización de ciertos órdenes sociales.

- ¿De qué manera se construye la otredad y la identidad nacional en las coberturas mediáticas de las protestas?

Este análisis pretende identificar las estrategias discursivas empleadas por los medios y contribuir a una reflexión crítica sobre el papel del periodismo en la construcción de dinámicas de poder en un país de profundas desigualdades. En última instancia, esta investigación busca ofrecer una comprensión más amplia de cómo las representaciones mediáticas influyen en las percepciones públicas y en la configuración del espacio público peruano, aportando elementos clave para un debate sobre la democracia, la justicia social y la representación en el Perú contemporáneo.

1.2. Justificación de la investigación

En una sociedad como la peruana, donde las desigualdades estructurales están arraigadas, el análisis de las representaciones mediáticas adquiere una relevancia especial. Los medios de comunicación, lejos de ser simples transmisores de información, son actores clave en la configuración del espacio público. A través de sus discursos, moldean la percepción colectiva sobre los conflictos sociales, legitiman o cuestionan ciertos discursos (Fairclough, 1995) y, en última instancia, influyen en la manera en que la sociedad entiende las dinámicas de poder. Las protestas de enero de 2023 representan un caso emblemático para explorar estas tensiones, ya que revelaron, simultáneamente, un descontento político inmediato y demandas históricas acumuladas de sectores históricamente marginados.

La necesidad de esta investigación surge de la complejidad del fenómeno que se busca estudiar. Durante las protestas, los principales diarios del país ofrecieron coberturas que informaron sobre los hechos y construyeron representaciones que afectaron directamente la percepción pública de los manifestantes y sus demandas. Esta práctica no es nueva en el Perú. Giusti (2020) destaca cómo los discursos mediáticos en el Perú tienden a deslegitimar las protestas sociales, al reproducir discursos que refuerzan la exclusión y justifican respuestas represivas del Estado. Estas dinámicas no solo son relevantes para entender el presente, sino que también tienen implicaciones profundas para el futuro del país, en términos de democracia, justicia social y representación.

Esta investigación también responde a un vacío en el análisis crítico de cómo los medios peruanos manejan discursos en contextos de conflicto social. Aunque se han realizado estudios sobre la prensa durante episodios históricos de tensión, como el conflicto armado interno, el enfoque contemporáneo y específico sobre las protestas de 2023 resulta necesario. Durante estas movilizaciones, estrategias discursivas como el "terruqueo", que consiste en asociar a los manifestantes con el terrorismo, fueron utilizadas ampliamente para criminalizar a los actores sociales. Velásquez (2022) subraya que este recurso no solo refuerza el miedo, sino que también perpetúa jerarquías sociales y raciales al presentar a los sectores rurales e indígenas como una amenaza al orden establecido. Comprender estas dinámicas es crucial para cuestionar los mecanismos mediante los cuales se deslegitiman las demandas de los sectores históricamente marginados.

Desde una perspectiva práctica, este estudio tiene implicancias directas para el ejercicio del periodismo en el Perú y América Latina. Los medios de comunicación tienen una responsabilidad elemental en la formación de la opinión pública y en la configuración de discursos que pueden amplificar o silenciar ciertas voces. En un país donde las protestas son una forma de resistencia frente a las desigualdades estructurales, resulta imprescindible reflexionar sobre el rol ético y profesional del periodismo en estos contextos. Desde un punto de vista social, esta investigación también aborda una preocupación más amplia: la relación entre los medios, la ciudadanía y los derechos fundamentales. En un contexto donde la estigmatización y la criminalización de las protestas son estrategias frecuentes, analizar cómo se construyen estos discursos es un paso necesario para fortalecer la democracia. El derecho a la protesta y a la participación política es esencial en cualquier sociedad democrática, y los discursos mediáticos desempeñan un papel determinante en la forma en que estos derechos son percibidos y ejercidos.

En el plano académico, este estudio busca contribuir al análisis crítico del discurso (Fairclough, 1995), un enfoque teórico y metodológico que permite desentrañar las relaciones entre lenguaje, poder y sociedad. El contexto de las protestas de 2023 ofrece una oportunidad única para aplicar estas herramientas en un caso contemporáneo y altamente relevante. Además, esta investigación dialogará con trabajos previos en el campo de la sociología, la comunicación y los estudios culturales, enriqueciendo el debate sobre cómo los medios de comunicación configuran las percepciones colectivas en contextos de conflicto social. A través de un enfoque interdisciplinario, se espera aportar al entendimiento

de fenómenos similares en otros contextos latinoamericanos, donde los conflictos sociales y los discursos mediáticos también son temas centrales.

Considero que este estudio tiene un valor político y ético al situarse en un momento crucial para el país. Las protestas de enero de 2023 no solo fueron una expresión de demandas insatisfechas, sino también un punto de inflexión para reflexionar sobre el estado de la democracia en el Perú. En un sistema político donde las instituciones estatales y los medios de comunicación tienen una influencia desproporcionada en la construcción de discursos, analizar cómo se representaron las protestas es fundamental para entender las limitaciones y los desafíos de la democracia peruana. Este análisis puede abrir un debate más amplio sobre cómo construir un sistema político más inclusivo, donde las voces de los sectores históricamente marginados sean reconocidas y valoradas.

Esta investigación trasciende la simple descripción de las coberturas mediáticas para situarse en un plano crítico, político y filosófico. Foucault (1975) subraya que el poder no solo se ejerce mediante la coerción, sino también a través del control de los discursos, configurando lo que puede ser visto como legítimo o ilegítimo en el espacio público. En este caso, los medios de comunicación actúan como dispositivos de poder que regulan qué voces son escuchadas y cuáles son silenciadas. De manera similar, Habermas (1989) argumenta que el espacio público debería ser un lugar de deliberación democrática, pero advierte que, cuando los intereses privados dominan los discursos mediáticos, se corre el riesgo de transformar ese espacio en un ámbito de exclusión y manipulación. Finalmente, Derrida (1976) nos invita a reflexionar sobre cómo los "significantes privilegiados", aquellos términos y conceptos que adquieren centralidad en el discurso, consolidan jerarquías y relaciones de poder. En el caso de las protestas, palabras como "terrorismo", "caos" o "violencia" operan como ejes semánticos que estructuran el discurso mediático y condicionan la percepción pública de los hechos. Integrar estas perspectivas permite comprender las dinámicas discursivas en juego, además de sus implicaciones éticas y políticas. De este modo, esta investigación busca contribuir al conocimiento académico e incidir en la manera en que entendemos y practicamos la democracia, la representación y la justicia social en el Perú contemporáneo. Al analizar cómo los medios han representado las protestas de enero de 2023, este estudio aspira a abrir un debate más amplio sobre el papel del periodismo en la construcción de un país más inclusivo y democrático, donde todas las voces puedan ser escuchadas y valoradas en igualdad de condiciones.

1.3. Objetivos de la investigación

1.3.1. Objetivo general

Analizar la representación de las protestas sociales en el discurso mediático de cuatro medios de comunicación peruanos (El Comercio, La República, El Peruano y Perú 21) durante enero del 2023, identificando las estrategias discursivas utilizadas y su impacto en la percepción pública y la respuesta estatal.

1.3.2. Objetivos específicos

- Describir y comparar la cobertura de las protestas sociales en los cuatro medios de comunicación seleccionados (El Comercio, La República, El Peruano y Perú 21).
- Identificar y analizar las estrategias discursivas empleadas por cada medio para representar las protestas y a sus participantes.
- Examinar la construcción de la otredad y la identidad nacional en las coberturas mediáticas.

1.3.3. Hipótesis:

- Los medios de comunicación, con sus respectivas tendencias ideológicas, representan las protestas sociales de manera distinta, utilizando estrategias discursivas que reflejan sus inclinaciones políticas.
- Los discursos mediáticos sobre las protestas sociales en Perú tienden a deslegitimar a los manifestantes y sus demandas, reforzando estereotipos en la construcción de la otredad.

CAPÍTULO II: ESTADO DEL DEBATE

La representación mediática de las protestas sociales en el Perú constituye un campo de análisis clave para entender cómo los medios moldean las percepciones públicas y legitiman dinámicas de poder. En contextos de desigualdades históricas y tensiones estructurales, los medios informan, sino que construyen discursos que influyen en la percepción colectiva de los actores sociales y las respuestas estatales. Como se exploró en el capítulo anterior, esta función mediadora ha sido particularmente relevante en conflictos emblemáticos como el Baguazo, Conga y Tía María², y más recientemente, en las protestas de enero de 2023 tras la destitución del expresidente Pedro Castillo. Estas dinámicas reflejan cómo los discursos mediáticos refuerzan narrativas de exclusión, deslegitimando las demandas sociales y justificando intervenciones autoritarias. Por ejemplo, en los conflictos relacionados a la minería como Tía María y Conga, la cobertura mediática ha priorizado momentos de crisis y violencia sobre las causas subyacentes del descontento (Macassi, 2015), esto contribuye a una percepción pública que no solo estigmatiza a los manifestantes, sino que también legitima respuestas estatales represivas, exacerbando la polarización y dificultando un entendimiento integral de los conflictos sociales.

Este capítulo revisa los principales antecedentes y estudios que abordan estas representaciones discursivas en el Perú, destacando investigaciones que han analizado la criminalización de los manifestantes, el uso del "terruqueo" y los estereotipos coloniales. Trabajos como los de Espinoza Lewis (2016), Torrejón Hoefken (2013) y Rodríguez

² Para comprender los antecedentes de conflictividad social en el Perú contemporáneo, resulta imprescindible revisar casos emblemáticos como el Baguazo (2009), donde se produjo un enfrentamiento entre comunidades indígenas amazónicas y la Policía Nacional debido a decretos legislativos que afectaban derechos territoriales sin consulta previa, con un saldo trágico de decenas de muertos. De igual modo, el conflicto por el proyecto minero Conga (2011-2012) en Cajamarca, analizado por Espinoza (2016), reveló cómo los medios construyeron imágenes que estigmatizaban a los manifestantes como violentos y opuestos al desarrollo nacional. Por su parte, el conflicto de Tía María (2011 y 2015) en Arequipa mostró un patrón similar de representación mediática, en donde se priorizó la cobertura de los estallidos de violencia antes que las demandas estructurales de la población, como evidenció Macassi (2015) en su análisis comparativo de la cobertura de ambos conflictos

Bustamante (2024) aplican herramientas del análisis crítico del discurso (ACD) y la teoría del *framing* (Entman,1993) para deconstruir estas estrategias mediáticas, evidenciando cómo la ideología de los medios influye en sus coberturas. Estas investigaciones subrayan la necesidad de un análisis que exponga las tácticas discursivas y explore su impacto en la memoria colectiva y las relaciones de poder. En México, por ejemplo, Colorado Ruiz (2014) analizó cómo el periódico *La Jornada* visibilizó las demandas sociales del conflicto de Atenco³, en contraste con otros medios que enfatizaron la violencia de los manifestantes. Este estudio ilustra cómo las orientaciones ideológicas influyen en el enfoque mediático, destacando la capacidad del ACD para revelar estas dinámicas.

Al articular los hallazgos previos con el objeto de estudio de esta investigación, el presente capítulo inserta las protestas sociales de enero de 2023 en un marco más amplio de conflictividad estructural, tanto en el plano sociopolítico como mediático. Se argumenta que los medios de comunicación peruanos, lejos de operar como meros transmisores de información, desempeñan un papel activo en la producción de sentidos sobre lo político, operando desde posicionamientos editoriales claramente diferenciados que amplifican tensiones históricas y profundizan la polarización. En este contexto, la cobertura mediática no solo podría dar forma a las percepciones colectivas sobre la legitimidad de la protesta, sino que también podría incidir en la construcción de imaginarios sociales sobre los sectores populares movilizados. Así, el análisis permite comprender cómo los discursos mediáticos participan en la delimitación simbólica de lo aceptable y lo sancionable dentro del espacio público, reproduciendo jerarquías sociales preexistentes y condicionando el horizonte democrático del país.

2.1. Antecedentes sobre la representación mediática de la protesta social

Hablar de protesta social en el Perú es, inevitablemente, hablar también de cómo se la representa. En un país atravesado por profundas desigualdades históricas, donde la movilización ciudadana ha sido uno de los pocos recursos efectivos para exigir derechos,

³ El conflicto de Atenco, ocurrido en mayo de 2006, fue un episodio de protesta social protagonizado por el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), en rechazo a la represión policial y la criminalización de su resistencia contra megaproyectos como el aeropuerto de Texcoco. La cobertura del diario *La Jornada* se distinguió por visibilizar las violaciones a los derechos humanos cometidas por el Estado y criticar el uso excesivo de la fuerza, contrastando con el enfoque punitivo y estigmatizante adoptado por otros medios hegemónicos. Véase Colorado Ruiz (2014), quien analiza el caso desde la construcción discursiva de la agentividad y la estructura evaluativa en los textos periodísticos.

lo que los medios de comunicación deciden mostrar y, sobre todo, cómo lo muestran se vuelve un acto político de primer orden. No es casual que, en cada ciclo de conflictividad, surjan patrones similares de cobertura: imágenes de caos, titulares alarmistas, una narrativa que opone “orden” y “violencia”, y un silenciamiento sistemático de las causas estructurales detrás de la protesta.

Esta preocupación está lejos de ser nueva. Desde hace más de una década, diversos estudios han intentado evidenciar cómo los medios peruanos no solo informan, sino que construyen sentido común. El trabajo de Ramírez Farías (2023), por ejemplo, pone en relieve cómo los grandes conglomerados mediáticos fuertemente entrelazados con intereses empresariales y políticos tienden a deslegitimar la protesta enfatizando los actos violentos cometidos por algunos manifestantes, mientras justifican el accionar represivo del Estado. El foco puesto en los estallidos y no en las razones que los motivan no es inocente: se trata de una forma de vaciar la protesta de contenido político, de reducirla a mero “desorden”.

Una de las contribuciones teóricas más relevantes para el análisis de la representación mediática de la protesta social es el concepto de “paradigma de la protesta” desarrollado por McLeod y Hertog (1998). Este paradigma describe un patrón sistemático en la cobertura noticiosa donde las protestas tienden a ser presentadas de manera despectiva, con énfasis en episodios de violencia, disturbios o desórdenes públicos, mientras que los manifestantes son retratados como agentes disruptivos que amenazan la estabilidad social. Según estos autores, los medios no operan como meros intermediarios neutrales, sino que reproducen narrativas que refuerzan el *statu quo*, marginan las demandas estructurales de los movimientos sociales y legitiman la acción estatal o policial. La cobertura se centra, por lo general, en el conflicto visible (en especial en los enfrentamientos con las fuerzas del orden), omitiendo deliberadamente las causas profundas o los reclamos políticos de los manifestantes. Este encuadre narrativo, al privilegiar la espectacularización del conflicto sobre su comprensión sociopolítica, favorece un tipo de opinión pública despolitizada y refractaria a los procesos de transformación social.

Precisamente, uno de los objetivos centrales de esta tesis es analizar cómo esa lógica se manifiesta en un soporte clave: las portadas de los principales diarios del país, en un momento particularmente álgido como fue enero de 2023. Las portadas no son simples umbrales informativos; condensan, jerarquizan y dramatizan lo que será considerado

noticia. Por eso, su análisis permite observar con nitidez los mecanismos de encuadre que orientan la interpretación de los hechos por parte del público.

Ahora bien, esta forma de representación no surgió de la nada. Al revisar episodios anteriores, como el Baguazo o el conflicto por el proyecto Conga, encontramos indicios claros de una narrativa ya instaurada. Investigadores como Arrunátegui (2010), Torrejón (2013) y Espinoza (2016) mostraron cómo las coberturas mediáticas en estos contextos representaron a las comunidades indígenas como fuerzas de obstaculización al desarrollo, reforzando estereotipos profundamente arraigados: el indígena irracional, violento, manipulado o incapaz de comprender el “progreso”. Estas lecturas no sólo desinforman, sino que despojan de agencia política a los sujetos movilizados, justificando así su exclusión y la intervención represiva del Estado.

Más allá de los estereotipos, también están las técnicas discursivas. Vasilachis (2005), desde un enfoque de análisis crítico del discurso, ha estudiado cómo recursos como la categorización, la metáfora o el silenciamiento estratégico contribuyen a construir una imagen distorsionada de la protesta: el manifestante como amenaza, el conflicto como anomalía. Es allí donde la narrativa mediática se vuelve especialmente peligrosa, pues no solo informa; educa emocional y políticamente a las audiencias, naturalizando respuestas autoritarias y excluyentes.

Si bien algunos estudios han profundizado en la cobertura informativa más amplia, también resulta útil observar cómo ciertas investigaciones sobre conflictos sociales complejos, como la de Macassi (2015), muestran que los medios privilegian casi exclusivamente los momentos de crisis y confrontación. Su análisis sobre Conga y Tía María revela que los encuadres más utilizados fueron los de responsabilidad y confrontación, mientras que los enfoques orientados al diálogo o la resolución del conflicto fueron prácticamente marginales. Aunque su foco no fueron las portadas, sus hallazgos ayudan a entender la lógica más amplia en la que estas se inscriben.

En un plano más contemporáneo, Mendoza (2022) ha estudiado cómo la narrativa del terruqueo fue empleada por los medios durante la campaña electoral de 2021 para deslegitimar simbólicamente a Pedro Castillo. Lo interesante es que esta lógica de estigmatización (que asocia lo popular con el peligro) se reactivó con fuerza durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte, donde muchos de los manifestantes fueron representados como “azuzadores”, “extremistas” o incluso “terroristas”, reviviendo así una

memoria traumática para justificar la represión. Este fenómeno de continuidad discursiva entre lo electoral y lo represivo es uno de los hilos que atraviesan nuestro análisis.

En conjunto, estos antecedentes permiten comprender mejor el terreno sobre el que se inscribe esta investigación. Si el objetivo de esta tesis es analizar críticamente cómo las portadas de El Comercio, La República, Perú21 y El Peruano construyeron una narrativa sobre las protestas de enero de 2023, entonces es necesario partir del reconocimiento de que no partimos de cero. La producción mediática sobre conflictos sociales en el Perú no parte de un vacío interpretativo. Investigaciones previas demuestran que la prensa ha reproducido patrones de representación sesgados: por un lado, se legitima la voz de las élites y de los portavoces oficiales y, por otro, se despersonaliza a quienes protestan mediante encuadres criminalizantes y racistas. En trabajos como el de Arrunátegui Matos (2010), se detalla cómo los medios recurren a etiquetas como “vándalos” o “terroristas” para deslegitimar las demandas de poblaciones indígenas y rurales. Estudios posteriores sobre coberturas amazónicas y mineras confirmaron que esta visibilidad selectiva y la atribución de responsabilidad operan a través de recursos textuales y visuales que diluyen la agencia de los manifestantes. Asimismo, autores que analizan la prensa de los últimos años señalan que los marcos de confrontación y culpabilización se actualizan constantemente, como en las portadas sensacionalistas de Perú21 comentadas por Silva Escobar (2023).

La persistencia de estos encuadres a lo largo del tiempo constituye el telón de fondo de la investigación actual. Sin embargo, este estudio se distingue de los precedentes por tres razones. En primer lugar, examina las portadas de cuatro diarios nacionales durante un periodo reciente (enero de 2023) que no había sido abordado sistemáticamente, aplicando una matriz de 16 categorías que integra dimensiones textuales, visuales e ideológicas de análisis. En segundo lugar, confronta los hallazgos empíricos con un marco teórico que articula el Análisis Crítico del Discurso, la representación de actores sociales y la colonialidad del poder, lo que permite reconocer continuidades y rupturas en la narrativa mediática. Finalmente, al contrastar portadas de diarios con perfiles editoriales diversos, el estudio ofrece un panorama comparativo que evidencia tanto la reproducción de viejos marcos como las estrategias particulares de cada medio frente a la protesta de enero de 2023. Con ello, la investigación se inscribe en una larga tradición de análisis crítico de la prensa, además de que busca aportar un enfoque actualizado que evidencia la manera en que se reconfiguran las representaciones mediáticas en contextos de crisis recientes.

2.2. Estudios previos sobre análisis crítico del discurso en medios de comunicación

El análisis crítico del discurso (ACD) ha proporcionado herramientas teóricas y metodológicas cruciales para desentrañar los modos en que los medios de comunicación construyen sentidos sobre la realidad, particularmente en contextos de conflicto social. En el caso peruano, múltiples investigaciones han evidenciado cómo la cobertura mediática de las protestas se inscribe en lógicas ideológicas que deslegitiman la acción colectiva, invisibilizan a los actores subalternos y reproducen estructuras coloniales de representación. Estas contribuciones permiten no solo rastrear continuidades discursivas, sino también ofrecer claves interpretativas esenciales para esta tesis, que se propone analizar las portadas de cuatro diarios durante las protestas de enero de 2023, con el objetivo de identificar las formas en que se construye la otredad, se legitima la represión y se polariza la opinión pública.

Uno de los estudios más significativos es el de Bolo Varela (2016), quien emplea el modelo tridimensional de Fairclough para analizar la cobertura de El Comercio sobre el conflicto armado interno. El autor demuestra cómo el medio articuló una narrativa oficialista que eximía al Estado de responsabilidad en violaciones de derechos humanos y criminalizaba a los actores insurgentes, reforzando una memoria histórica funcional al poder institucional. Este patrón de construcción simbólica es un antecedente directo de los marcos actuales de criminalización, como los que esta investigación detecta en la cobertura de las movilizaciones de 2023.

El análisis de Arrunátegui (2010) sobre la cobertura mediática del Baguazo constituye un referente crucial para nuestra investigación, pues permite observar cómo los grandes medios escritos en el Perú operan como dispositivos de producción simbólica alineados con el poder político. A través de estrategias como la tematización, la nominalización, la supresión de voces disidentes y la manipulación intertextual, El Comercio y El Peruano no solo informan, sino que moldean ideológicamente el sentido de los acontecimientos, reforzando la polarización entre un “nosotros” civilizado y un “otro” bárbaro. Esta lógica de representación, anclada en la colonialidad del poder, resuena con los hallazgos de esta tesis en torno a las protestas de enero de 2023, donde se reproducen marcos similares de criminalización, invisibilización y despolitización de los sujetos populares andinos. Integrar el enfoque de Arrunátegui nos permite, por tanto, historicizar el discurso mediático como parte de una estructura de larga duración que legitima la represión del disenso social mediante mecanismos de naturalización ideológica, lo cual refuerza el carácter estructural

y persistente del encuadre excluyente que esta investigación busca develar. En la misma línea, Espinoza (2016), por su parte, analiza las portadas de los principales diarios nacionales durante los conflictos de Conga y Espinar, aplicando el modelo de Van Leeuwen sobre representación de actores sociales. Identifica patrones de visibilidad selectiva, donde los voceros oficiales son activados discursivamente mientras que los actores subalternos son pasivados o eliminados del relato. Esta dinámica resuena directamente con nuestra hipótesis sobre la exclusión de voces populares en la cobertura de enero de 2023, donde la agencia de los manifestantes es anulada por medio de metáforas despersonalizadas como “turba” o “horda”.

Por otro lado, la tesis de Torrejón (2013) sobre la cobertura de las protestas amazónicas de 2009 en El Comercio aporta una lectura crítica desde el ACD, evidenciando cómo los marcos discursivos de desarrollo y civilización se usan para despolitizar el conflicto y representar al sujeto indígena como irracional y violento. Esta operación discursiva no solo legitima la intervención estatal, sino que reactiva oposiciones coloniales profundamente arraigadas. En este sentido, Torrejón introduce la noción de racismo epistémico como clave explicativa de las narrativas mediáticas, un enfoque que esta tesis retoma para analizar la racialización implícita en el tratamiento de las protestas recientes.

La tesis de Carla Rossana Giusti Salazar (2016) ofrece un análisis crítico del discurso (ACD) sobre el tratamiento mediático del conflicto minero en Espinar (Cusco, 2012) por parte del diario El Comercio. A partir de la revisión de 36 ediciones del diario durante la vigencia del estado de emergencia, el estudio examina columnas y editoriales mediante matrices analíticas basadas en el cuadrado ideológico de Van Dijk, estrategias discursivas y marcos interpretativos. Los resultados evidencian una posición editorial abiertamente favorable hacia la empresa minera Xstrata Tintaya y el gobierno central, quienes son representados como agentes de orden, legalidad y responsabilidad social. En contraste, las autoridades locales y los ciudadanos de Espinar son representados predominantemente con atributos negativos: manipuladores, violentos o ineficientes. La protesta social es sistemáticamente criminalizada, y se refuerzan discursos de seguridad y control como justificación del estado de emergencia. El uso reiterado de términos como "poner orden", "resguardar la paz social" o "límite a los desmanes" refuerza una narrativa que legitima la represión estatal y deslegitima las demandas sociales.

Del mismo modo, la investigación de Flores (2012) constituye un antecedente valioso para el análisis de los marcos discursivos construidos por los medios de comunicación en

contextos de conflicto, pues demuestra cómo los discursos mediáticos no solo informan, sino que posicionan activamente a los actores sociales en escenarios de disputa simbólica. Al comparar las representaciones del conflicto ambiental en La Oroya por El Comercio y La República, la tesis revela que los diarios pueden alinearse con distintos intereses ideológicos, priorizando ciertas voces (estatales, empresariales o de la sociedad civil) según sus agendas informativas. Esta aproximación resulta fundamental para el presente estudio, que analiza de manera comparativa la cobertura mediática de las protestas de enero de 2023, ya que permite evidenciar cómo la selección de fuentes, el encuadre de los titulares y el uso de recursos gráficos operan como dispositivos ideológicos que configuran la legitimidad o ilegitimidad de los actores movilizados. Al igual que en La Oroya, en las recientes protestas peruanas los medios reproducen narrativas que refuerzan estructuras de poder y construyen representaciones polarizadas de los sujetos sociales en lucha.

Otra investigación significativa que aplica el análisis crítico del discurso en el estudio de medios peruanos es la realizada por Angulo-Giraldo y Bolo-Varela (2021), quienes examinaron 53 portadas de El Comercio, La República, Trome y El Popular durante las protestas de noviembre de 2020 contra el gobierno de Manuel Merino. A partir del modelo tridimensional de Fairclough (1992, 2003) y de la tipología de enfoques de Macassi (2013), los autores evidenciaron una prevalencia de los encuadres de amenaza y confrontación, y una total ausencia del enfoque de diálogo. Este hallazgo es clave para comprender cómo los medios no solo reproducen el conflicto, sino que lo moldean desde perspectivas ideológicas específicas, reforzando oposiciones binarias y afectando el espacio deliberativo democrático. El estudio demuestra que, si bien algunos medios tomaron posición favorable a las protestas ciudadanas, lo hicieron desde una lógica polarizante que invisibilizó posibilidades de consenso o transformación del conflicto, lo cual refuerza la tesis de que los marcos mediáticos son dispositivos discursivos de poder que legitiman ciertas agendas y excluyen otras. Esta investigación aporta así evidencia empírica y teórica fundamental al campo del ACD en contextos de crisis política y demuestra la pertinencia de aplicar esta metodología para desentrañar los mecanismos ideológicos de representación mediática.

Estas siete investigaciones no deben leerse de manera aislada, sino como parte de un entramado analítico que permite cartografiar las formas contemporáneas de producción mediática de la otredad en contextos de protesta. En conjunto, configuran un corpus que revela no solo la persistencia de ciertas estrategias discursivas (como la criminalización, la pasivación o la racialización), sino también la manera en que estas se articulan en distintos

niveles: textual, visual, editorial e ideológico. Mientras Bolo (2016) y Torrejón (2013) destacan la función legitimadora de los medios respecto al accionar estatal, Giusti (2014) y Espinoza (2016) problematizan las jerarquías de visibilidad que privilegian a actores oficiales y silencian a las comunidades afectadas. Flores (2012) complementa esta perspectiva al demostrar que los discursos mediáticos no solo informan, sino que posicionan activamente a los actores sociales en escenarios de disputa simbólica, favoreciendo determinadas agendas en función de sus alineamientos ideológicos. Por su parte, Arrunátegui (2010) aporta una lectura centrada en la construcción racializada del sujeto manifestante, mientras que Angulo-Giraldo y Bolo-Varela (2021) amplían el análisis al contexto pandémico, donde la emergencia sanitaria reconfigura los marcos de sentido y habilita nuevas formas de control discursivo. La convergencia entre estos estudios permite sostener que las coberturas mediáticas no solo reflejan el conflicto, sino que participan activamente en su codificación simbólica, anclando los acontecimientos en estructuras más profundas de poder, colonialidad y exclusión.

A través de estas investigaciones se configura un cuerpo teórico y empírico que no solo valida el uso del ACD como metodología rigurosa, sino que también revela la existencia de patrones persistentes en la forma en que los medios construyen al sujeto protestante como “otro” amenazante, desprovisto de legitimidad política. Sus hallazgos permiten comprender que la representación mediática de la protesta no responde simplemente a coyunturas, sino a una estructura de sentidos donde se juegan la hegemonía, el racismo, la colonialidad del poder y la disputa por el espacio público simbólico. Esta tesis se inserta en esa genealogía crítica, proponiendo una actualización del análisis discursivo en un escenario de agudización de la crisis democrática peruana. A través del estudio comparativo de portadas durante un ciclo reciente de protestas, buscamos no solo evidenciar las formas de criminalización y exclusión simbólica, sino también pensar en los límites y posibilidades de una ciudadanía mediáticamente construida.

2.3. Proyecciones ideológicas en la cobertura mediática

La ideología de los medios de comunicación constituye un eje estructurante en la producción del discurso periodístico, en tanto determina qué se visibiliza, cómo se representa y desde qué posición enunciativa se construyen los hechos sociales. Según Van Dijk (1998), las ideologías funcionan como sistemas de creencias compartidas por grupos

sociales, que orientan la interpretación del mundo y configuran marcos de sentido desde los cuales se jerarquizan actores, acciones y valores. En este sentido, la “tendencia ideológica” de un medio puede entenderse como el conjunto de orientaciones axiológicas que, inscritas en sus rutinas discursivas, reflejan su adscripción explícita o implícita a determinados intereses de clase, posiciones políticas o proyectos de sociedad. Estas ideologías se manifiestan no solo en el contenido de las noticias, sino también en los modos de representación, en los silencios significativos y en la configuración de la otredad.

Diversas investigaciones han evidenciado que la cobertura mediática de los conflictos sociales en el Perú no es neutra, sino que reproduce alineamientos ideológicos profundamente arraigados en las estructuras de poder. En este sentido, Cornejo (2023) analiza el conflicto en torno al proyecto minero Tía María desde una perspectiva de comunicación para el desarrollo, denunciando cómo los medios regionales despolitizan los conflictos socioambientales al privilegiar una lógica de “orden público” por encima del reconocimiento de los derechos colectivos. Por su parte, el estudio de Arrunátegui (2010) representa un aporte metodológico singular, al aplicar rigurosamente el ACD al caso de la cobertura mediática del “Baguazo”. Su análisis revela cómo las estrategias lingüísticas de los diarios (mediante procesos de exclusión, pasivización, pronominalización o marcación étnica) contribuyen a construir una imagen deshumanizante de los pueblos indígenas amazónicos, reforzando estigmas coloniales que conectan alteridad racial, criminalización y ilegitimidad política. Así, aunque con enfoques distintos, estas investigaciones coinciden en señalar que la tendencia ideológica de los medios peruanos no solo moldea el discurso informativo, sino que también delimita el campo de lo políticamente pensable, reproduciendo matrices de poder que obstaculizan la construcción de una esfera pública democrática e inclusiva.

Por otro lado, los aportes de Silva (2015) permiten articular una crítica refinada a la lógica de representación mediática de la protesta social, que dialoga directamente con lo que McLeod y Hertog (1998) conceptualizaron como el “paradigma de la protesta”. Como se mencionó anteriormente, este paradigma describe un patrón estructural de cobertura periodística que deslegitima la acción colectiva, enfatizando la violencia, el caos y la disrupción, al tiempo que omite las causas estructurales de las movilizaciones. En este esquema narrativo, los manifestantes son retratados como amenazas al orden público, mientras las fuerzas del Estado aparecen como garantes de la estabilidad. Silva complementa esta crítica desde una mirada antropológica y semiótica al señalar que los

noticiarios no solo informan sobre las protestas, sino que construyen un discurso mitificador y estetizante que vacía de contenido político las demandas sociales. Mediante mecanismos como el “ocultar mostrando” y el “cerco informativo”, la televisión no niega las protestas, pero las transforma en imágenes fugaces, emotivas y descontextualizadas, generando una opinión pública que reproduce sin cuestionamiento las jerarquías del neoliberalismo.

Esta operación discursiva se inscribe, como advierte Stuart Hall (1981), en una economía simbólica que transforma las luchas sociales en sentido común mediático, naturalizando las desigualdades y desplazando el conflicto desde lo político hacia lo moral o lo criminal. La protesta, en tanto fenómeno colectivo cargado de historicidad, es fragmentada, individualizada y reencuadrada bajo códigos visuales que operan como filtros ideológicos. En esta línea, Martín-Barbero (2002) ha advertido que el tránsito de los medios a las mediaciones implica reconocer que los dispositivos comunicativos no solo transmiten ideología, sino que configuran experiencias, afectos y marcos de percepción colectiva. Así, tanto el paradigma de la protesta como las categorías desarrolladas por Silva, Hall y Martín-Barbero, revelan cómo la cobertura mediática contribuye a consolidar un “orden de visibilidad” donde la protesta social pierde su capacidad de interpelación política y se reconfigura como un espectáculo neutralizado, funcional a la hegemonía. Esta convergencia crítica justifica plenamente la necesidad de abordar las portadas periodísticas desde un enfoque de análisis crítico del discurso que permita deconstruir estas operaciones de legitimación simbólica del poder.

Del mismo modo que las investigaciones anteriormente citadas, existen estudios como los de Caballero (2023) y Ramírez (2023) que han evidenciado las inclinaciones políticas de los conglomerados mediáticos influyen en la construcción del discurso mediático. El Comercio y Perú21, por ejemplo, han sido consistentemente asociados con una orientación conservadora, mientras que La República ha adoptado una postura más progresista. En esta misma línea crítica, el estudio de García Llorens (2011) sobre El Comercio ofrece una contribución sustancial al análisis de las proyecciones ideológicas de los medios en el Perú. A través del concepto de “fantasía neutral”, la autora demuestra cómo este diario, uno de los más influyentes del país, se presenta como defensor de la objetividad, la veracidad y la libertad de expresión, mientras en la práctica reproduce una racionalidad neoliberal alineada con intereses económicos y políticos conservadores. Su investigación, basada en el análisis crítico del discurso, revela cómo El Comercio opera como un actor político que no solo informa, sino que produce sentido común, jerarquiza actores sociales y contribuye

a despolitizar el conflicto. En casos como el paro amazónico de 2008 y la cobertura de escándalos vinculados al poder económico, el diario despliega una lógica discursiva que criminaliza la protesta, invisibiliza las voces populares y refuerza el orden dominante mediante silencios estratégicos, marcos de enunciación elitistas y mecanismos de exclusión simbólica (García Llorens, 2011). Así, la cobertura mediática no solo configura narrativas sobre el acontecer político, sino que se convierte en una herramienta de legitimación del poder, que bloquea la emergencia de significantes políticos alternativos y consolida una esfera pública restrictiva, excluyente y centralista. Por otro lado, Samanez (2023), al analizar la cobertura de El Comercio y La República durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte, encontró que ambos medios reflejaban sesgos ideológicos en sus discursos, con El Comercio priorizando narrativas de orden y seguridad, y La República visibilizando las demandas sociales.

El sensacionalismo, característico de medios como Perú21 (Caballero, 2023), exagera estas divisiones al enfatizar el caos y la violencia, relegando al margen las causas estructurales de los conflictos. Este enfoque no solo fragmenta la opinión pública, sino que también refuerza discursos autoritarios que justifican la represión estatal. Como se mencionó en el capítulo anterior, estas dinámicas no son exclusivas del Perú. Villagómez-Rodríguez (2020), en su estudio sobre las protestas en Ecuador, encontró patrones similares, destacando las formas en que los medios comunitarios y progresistas presentan las movilizaciones como expresiones legítimas de participación democrática, en contraste con los discursos deslegitimadores de los medios tradicionales.

En este contexto, el trabajo de Calveiro (2012) sobre las estrategias de control estatal y violencia estructural ofrece también una perspectiva valiosa desde el derecho penal para ampliar la comprensión sobre la manera en que los medios contribuyen a la legitimación de políticas represivas. Al enfatizar discursos de seguridad y orden público, los medios perpetúan un estado de excepción permanente que naturaliza la violencia como una respuesta legítima a la protesta social. Dentro de esa misma línea, Bailone (2010) analiza las políticas antiterroristas cuando estas son instrumentalizadas como paradigma para desalentar la participación ciudadana. Su enfoque revela que estas políticas, al etiquetar conductas críticas o disidentes como "terrorismo", no solo justifican respuestas punitivas del Estado, sino que también fomentan un ambiente de miedo y autocensura que afecta directamente la movilización social. Este tipo de criminalización contribuye a la percepción pública negativa de las protestas, alineándose con las estrategias mediáticas que refuerzan

narrativas de orden y estabilidad. En el Perú, este tipo de discurso ha sido particularmente prevalente en la cobertura de conflictos socioambientales y protestas sociales recientes, donde el "terruqueo" opera como una estrategia discursiva para vincular a los manifestantes con el terrorismo, deslegitimando sus demandas legítimas. Estas afirmaciones se contextualizan mejor según el texto "Quien habla es terrorista" de Jo-Marie Burt, incluido en su libro *Political Violence and the Authoritarian State in Peru: Silencing Civil Society* (2007), donde se examina cómo el gobierno peruano, especialmente durante el régimen de Alberto Fujimori, utilizó la etiqueta de "terrorista" para silenciar y desacreditar a los opositores políticos y activistas de derechos humanos.

Este enfoque de etiquetar a cualquier voz disidente como terrorista tuvo un impacto profundo en la sociedad peruana, contribuyendo a la deshumanización y estigmatización de diversos sectores, incluyendo activistas, defensores de derechos humanos y personas de origen indígena. La asociación entre terrorismo y ciertas características étnicas reforzó prejuicios y facilitó abusos sistemáticos de derechos humanos, perpetuando un clima de miedo y represión durante y después del conflicto armado interno. Muchos de estos prejuicios persisten hasta ahora. De la misma manera, Degregori (2011) advierte que la categoría de "terrorista" ha sido un recurso constante del Estado y los medios para deslegitimar cualquier forma de disidencia popular, prolongando los efectos ideológicos del conflicto armado interno. Por su parte, Theidon (2004) complementaría este análisis al mostrar cómo los cuerpos indígenas fueron históricamente marcados como objetos de vigilancia, sospecha y violencia semiótica. Estos mecanismos discursivos, visibles en las portadas analizadas, reactivan estereotipos raciales para despolitizar las demandas de sectores excluidos. Así, el tratamiento mediático de las protestas no solo informa, sino que reproduce una colonialidad estructural que niega ciudadanía plena a los actores populares.

Los antecedentes revisados en este capítulo también aportan insumos relevantes para la metodología de esta investigación. Estudios como el de Espinoza (2016) y Torrejón (2013) han empleado el ACD para analizar cómo los medios representan a los actores sociales en contextos de conflicto, proporcionando un marco metodológico que será retomado en este estudio. Además, las investigaciones sobre el uso del "terruqueo" y las proyecciones ideológicas en los medios, como las de Rodríguez (2024) y Zavala y Almeida (2022), ofrecen herramientas conceptuales para explorar las estrategias discursivas empleadas en la representación de las protestas sociales en enero de 2023.

El estado del debate revisado en este capítulo destaca la centralidad de los medios de comunicación en la configuración del discurso público sobre las protestas sociales. Como se señaló en el capítulo anterior, los medios no son actores neutrales; sus discursos reflejan y refuerzan dinámicas de poder que afectan la percepción pública y las respuestas estatales a los conflictos. Los estudios revisados subrayan cómo los medios peruanos han construido discursos polarizados que legitiman la represión estatal y perpetúan la exclusión social, en línea con patrones históricos observados en conflictos como el Baguazo y Conga. Esta revisión también evidencia la necesidad de un análisis crítico que conecte las representaciones mediáticas actuales con las dinámicas históricas y estructurales del Perú. Al emplear herramientas como el ACD, esta investigación busca contribuir a un entendimiento más amplio y crítico de cómo los medios configuran la percepción de las protestas sociales, ofreciendo una base para reflexionar sobre su papel en la consolidación de una esfera pública democrática e inclusiva.



CAPÍTULO III: MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL

Las palabras no describen el mundo tal como es; más bien, lo configuran, lo ordenan y lo hacen inteligible desde coordenadas históricas, políticas y culturales específicas. En este sentido, el lenguaje no puede entenderse solamente como un simple vehículo neutro de transmisión de ideas, es también un campo de disputa, una arena donde se sedimentan relaciones de poder y se proyectan visiones del mundo (Fairclough, 1992). Esta premisa constituye el núcleo del análisis crítico del discurso, una corriente teórica que entiende el lenguaje como una práctica social situada, que actúa en la producción, reproducción o transformación de estructuras de dominación. A través del análisis crítico del discurso se revela cómo las palabras moldean la realidad, refuerzan estructuras de poder y legitiman exclusiones, se desentrañan los significados detrás de las palabras. En el contexto peruano, donde las tensiones sociales se han manifestado históricamente en conflictos y protestas, el análisis del discurso se convierte en una herramienta esencial para comprender cómo los medios representan estas dinámicas y, al hacerlo, influyen en la percepción pública y en las respuestas del Estado.

Como se discutió en el capítulo anterior, la representación mediática de las protestas en Perú ha estado marcada por estrategias discursivas que a menudo deslegitiman las demandas sociales, asociando a los manifestantes con el caos, la irracionalidad o incluso el terrorismo. Este fenómeno no es casual ni aislado. Tiene raíces profundas en la ideología de los medios y en las estructuras de poder económico y político que controlan la narrativa pública. Por ello, este capítulo busca profundizar en los conceptos y teorías que permiten analizar críticamente estos discursos mediáticos, revelando cómo se construyen, perpetúan o desafían las relaciones de poder en este contexto.

El enfoque central parte de la propuesta de Norman Fairclough, cuya concepción tridimensional del discurso permite analizarlo como texto, como práctica discursiva y como práctica sociocultural. Esta distinción metodológica ofrece un marco sólido para interpretar no solo los elementos lingüísticos y visuales de los titulares y portadas, sino también los procesos de producción, circulación y recepción que los atraviesan, así como las condiciones históricas y sociales que los hacen posibles. En el caso peruano, esta tercera dimensión resulta especialmente relevante, pues los discursos mediáticos están inscritos

en un entramado estructural de desigualdades históricas que configuran las formas contemporáneas de representación de la protesta.

En este punto, se incorpora la teoría de la colonialidad del poder formulada por Aníbal Quijano, la cual permite comprender cómo persisten en la sociedad peruana matrices de clasificación social basadas en criterios raciales, geoculturales y epistémicos heredados del orden colonial. Esta teoría es pertinente para el análisis del discurso porque visibiliza cómo los medios reproducen jerarquías simbólicas al representar a los sujetos movilizados desde un lugar de subalternidad, sospecha o peligro. La colonialidad se manifiesta, por ejemplo, en la forma en que se construye la otredad andina o rural como irracional, manipulada o violenta, lo que habilita narrativas que justifican su exclusión del espacio político legítimo. En este sentido, la teoría de Quijano no solo contextualiza históricamente el análisis discursivo, sino que ilumina los mecanismos de reproducción simbólica de desigualdades que operan en el presente.

Complementando esta lectura, el marco teórico incorpora los aportes de Teun van Dijk, en particular su teoría del discurso ideológico y el concepto del “cuadro ideológico”, que permite identificar cómo los medios organizan oposiciones binarias entre actores legítimos e ilegítimos. Esta herramienta resulta clave para el análisis de las portadas, ya que permite detectar estructuras discursivas que refuerzan la polarización entre un “nosotros” civilizado, institucional y racional, y un “ellos” violento, irracional o desestabilizador. Según Van Dijk, tales oposiciones no operan de forma explícita en todos los casos, sino a través de mecanismos como la presuposición, la omisión, el encuadre o la repetición de ciertas fórmulas discursivas. Esta perspectiva es útil para comprender cómo el discurso mediático contribuye a consolidar esquemas mentales colectivos que dificultan una lectura crítica de los conflictos sociales.

Asimismo, el marco analítico se enriquece con la perspectiva metodológica de Theo van Leeuwen sobre la representación de los actores sociales. Su propuesta se orienta a identificar cómo los sujetos son construidos discursivamente a través de procesos de inclusión o exclusión, activación o pasivación, personalización o anonimización, entre otras estrategias. Esta tipología permite observar con precisión cómo los manifestantes son representados en la prensa: si se les otorga voz, si se les retrata como agentes activos o pasivos, si se especifica su identidad o se les diluye en categorías genéricas. Esta aproximación resulta crucial para analizar el modo en que se configura la visibilidad pública

de los actores en conflicto, y cómo se distribuye simbólicamente el poder de narrar en el espacio mediático.

En conjunto, este marco teórico permite abordar de manera estructurada y situada la representación de la protesta social en la prensa escrita peruana, combinando herramientas del análisis crítico del discurso con enfoques ideológicos y decoloniales que iluminan las relaciones entre lenguaje, poder y legitimidad política. La convergencia entre los enfoques de Fairclough, Van Dijk, Van Leeuwen y Quijano ofrece una base coherente y complementaria que articula el análisis textual con los procesos sociales e históricos que configuran las prácticas discursivas en contextos de alta conflictividad. Este andamiaje no busca únicamente identificar patrones formales, sino interpretar cómo las narrativas mediáticas contribuyen a definir qué actores son reconocidos como interlocutores válidos y cuáles son desplazados hacia márgenes de invisibilidad o sospecha. Así, el marco teórico aquí desarrollado permite comprender el papel estructurante del discurso en la configuración del espacio público y proporciona las herramientas necesarias para el análisis crítico que se presentará en los capítulos siguientes.

3.1. Discurso

La noción de discurso constituye el núcleo conceptual de esta investigación. Más que un simple medio de expresión, el discurso se concibe aquí como una práctica social estructurada que interviene directamente en la organización del conocimiento, la producción de sentido y la legitimación de relaciones de poder. Su estudio permite examinar de manera rigurosa cómo los medios de comunicación representan los acontecimientos de conflictividad social y, al hacerlo, participan activamente en la configuración de la realidad social, política y simbólica. En el marco de esta tesis, la categoría de discurso no se limita a lo textual o lingüístico, sino que se extiende hacia los planos ideológicos, cognitivos e institucionales, en los que se inscriben los procesos de representación mediática de la protesta social.

Desde el análisis crítico del discurso (ACD), Norman Fairclough propone una concepción que articula tres dimensiones interdependientes: la textual, la práctica discursiva y la práctica sociocultural (Fairclough, 1992). Esta formulación permite comprender que los discursos mediáticos no son meros reflejos de la realidad, sino modos de intervención sobre

ella. La dimensión textual se ocupa de los recursos lingüísticos concretos presentes en los textos; la práctica discursiva analiza los procesos de producción, circulación y recepción de esos textos en contextos comunicativos específicos; y la dimensión sociocultural examina las condiciones estructurales e ideológicas que influyen en la generación del discurso y que, a su vez, son reproducidas por él. Esta perspectiva resulta especialmente útil para el caso peruano, donde la cobertura mediática de la protesta ha estado históricamente atravesada por narrativas estigmatizantes que se articulan con matrices de exclusión racial, territorial y política.

Complementando esta visión, Michel Foucault enfatiza que el discurso delimita qué puede ser dicho, quién tiene derecho a enunciarlo y con qué autoridad epistemológica. Su enfoque destaca el carácter regulador del discurso como dispositivo que organiza los saberes legítimos, establece los umbrales de visibilidad y traza fronteras entre lo permitido y lo censurado (Foucault, 1980). Esta perspectiva es especialmente útil para comprender el modo en que los medios configuran narrativas dominantes sobre el conflicto social, autorizando ciertas voces, desplazando otras y estructurando los marcos de lo políticamente imaginable.

Desde una dimensión más aplicada, Teun van Dijk desarrolla una aproximación que vincula el discurso con las estructuras cognitivas y sociales que determinan su producción y recepción. Para este autor, el discurso mediático funciona como un mecanismo de reproducción ideológica que modela esquemas mentales colectivos y legitima la posición dominante de determinados actores sociales. Su propuesta del “cuadro ideológico” permite identificar estrategias discursivas recurrentes, tales como la intensificación de los rasgos negativos del grupo “otro” y la valorización de los atributos positivos del grupo de referencia (van Dijk, 1998). Este marco interpretativo resulta crucial para examinar cómo las protestas sociales son representadas de manera estigmatizante, vinculándolas con la violencia, la irracionalidad o la amenaza al orden.

En este proceso de configuración discursiva, resulta esencial analizar cómo los actores sociales son visibilizados o marginados. Theo van Leeuwen ha desarrollado una tipología metodológica que permite examinar las formas de inclusión, exclusión, activación, pasivación, personalización y anonimización de los sujetos representados en los textos. Estos mecanismos no operan de forma neutral, sino que están atravesados por intereses ideológicos que regulan el acceso simbólico al espacio público (van Leeuwen, 2008). En el caso de la prensa peruana, estas estrategias permiten comprender por qué los

manifestantes suelen aparecer como masas sin rostro ni voz, mientras las autoridades políticas o policiales son presentadas como agentes activos con autoridad discursiva.

Desde una perspectiva sociohistórica, Ruth Wodak subraya que el discurso debe ser entendido como una práctica situada que se produce y se interpreta dentro de coordenadas históricas específicas. Su enfoque de la “historización” permite analizar cómo los discursos actuales se inscriben en trayectorias discursivas previas y contribuyen a modelar las memorias colectivas y las dinámicas futuras (Wodak y Meyer, 2001). Esta clave de lectura es especialmente relevante en el caso peruano, donde las narrativas sobre la protesta se encuentran moldeadas por décadas de conflicto armado interno, prácticas de estigmatización y discursos de seguridad nacional que han dejado huellas persistentes en el imaginario mediático.

Stuart Hall sostiene que el discurso no es simplemente un vehículo para expresar ideas preexistentes, sino una instancia constitutiva que produce los objetos de los que habla, al tiempo que delimita las posiciones posibles desde las que pueden ser pensados o vividos (Hall, 1997). Esta concepción coincide con la noción de discurso desarrollada por el análisis crítico, particularmente por Norman Fairclough, para quien el discurso no solo refleja la realidad social, sino que participa activamente en su construcción, en sus formas de legitimación y en la reproducción de sus estructuras. Aunque esta investigación se centra exclusivamente en el análisis del discurso como práctica social, resulta pertinente señalar que existen otros enfoques teóricos que también exploran la producción de sentido en los medios. Términos como narrativa, relato, récit y mito no serán utilizados como categorías analíticas en esta tesis, pero su mención permite contextualizar el discurso dentro de un campo más amplio de representaciones culturalmente estructuradas. Estas nociones no equivalen al discurso en sentido estricto, tal como lo define el análisis crítico, pero permiten advertir que existen múltiples niveles de codificación simbólica que contribuyen a su inteligibilidad. En este marco, se hace necesario delimitar su significado y diferenciarlo conceptualmente.

La narrativa ha sido definida por Jerome Bruner (1991) como una forma específica de pensamiento humano que organiza la experiencia en estructuras secuenciales dotadas de sentido. Esta capacidad de la narrativa para dotar de coherencia a los acontecimientos es esencial en contextos mediáticos, donde los hechos no se presentan como datos aislados, sino como partes de tramas inteligibles. Paul Ricoeur (1984) profundiza esta idea al conceptualizar el relato como una mediación entre la experiencia y su representación

temporal, estableciendo vínculos interpretativos entre lo vivido y lo narrado. Desde esta perspectiva, el relato articula significados mediante una configuración de la temporalidad que hace posible la comprensión y la evaluación de los acontecimientos.

Roland Barthes (1977), por su parte, entiende el récit como una forma de narración inscrita en códigos culturales específicos que definen qué puede ser contado y cómo debe ser interpretado. A diferencia de la narrativa como estructura cognitiva general o del relato como mediación hermenéutica, el récit enfatiza las convenciones estilísticas e ideológicas que rigen la narración dentro de una cultura determinada. Finalmente, el mito ha sido analizado por Claude Lévi-Strauss (1955) como una estructura narrativa que organiza las oposiciones fundamentales del pensamiento simbólico. En los medios de comunicación, el mito funciona como una forma de codificación social que estabiliza sentidos y clasifica identidades, especialmente cuando se representan actores sociales en términos binarios como orden/caos, civilización/barbarie, legalidad/subversión.

Estas categorías poseen una potencia explicativa significativa, pero se diferencian del discurso en tanto no abordan de manera sistemática las condiciones institucionales, ideológicas y materiales de su producción, circulación y recepción. Mientras que la narrativa, el relato, el récit y el mito operan como dispositivos internos de estructuración simbólica, el discurso, en la tradición del análisis crítico, se concibe como una práctica social que articula lenguaje y poder en contextos históricamente situados (Fairclough, 1992; van Dijk, 1998). Por ello, esta tesis opta por centrar su análisis en el discurso y no en las formas narrativas, dejando abierta la posibilidad de que futuras investigaciones aborden las representaciones mediáticas desde estas otras perspectivas. Reconocer su existencia y su relevancia teórica permite delimitar con mayor precisión la categoría de discurso, destacando que esta investigación se inscribe en una tradición que lo entiende como el lugar donde se configuran, disputan y sedimentan los significados sociales a través del lenguaje.

Estas nociones contribuyen a descomponer el discurso en sus componentes simbólicos, pero no desplazan su centralidad teórica. Por el contrario, permiten comprender su heterogeneidad interna, su inscripción cultural y su eficacia en la producción de sentido. El discurso, en el marco de esta investigación, se define entonces como una práctica significativa históricamente situada que organiza las condiciones de posibilidad de lo decible, estructura la percepción pública de los sujetos sociales, y reproduce o disputa las jerarquías ideológicas del espacio mediático. En el análisis de las portadas de prensa

durante las protestas de enero de 2023, esta concepción del discurso permite observar cómo los medios no solo representan los acontecimientos, sino que modelan activamente los marcos de interpretación legítimos sobre el conflicto, la ciudadanía y el poder. En ese sentido, comprender el discurso mediático implica describir sus contenidos manifiestos y además analizar las operaciones estructurales y simbólicas que lo constituyen como instrumento de mediación entre lo social, lo político y lo cultural. Esta mirada exige una aproximación metodológica que permita captar su densidad multiescalar: desde las elecciones lingüísticas más elementales hasta las condiciones sociales e ideológicas que determinan su circulación y legitimidad. Precisamente por ello, el modelo tridimensional propuesto por Fairclough ofrece un marco analítico integral que permite descomponer el discurso en sus distintos niveles de funcionamiento e interrogar las formas en que estos niveles se articulan para consolidar o cuestionar relaciones de poder en el campo mediático. El siguiente apartado profundiza en esta propuesta teórica, detallando sus tres dimensiones y su aplicación concreta al estudio del discurso periodístico sobre la protesta social en el Perú.

3.1.1. Modelo tridimensional de Norman Fairclough

Norman Fairclough (1992) propone un modelo tridimensional que considera el discurso como una práctica social vinculada a las estructuras de poder y dominación. Este modelo se compone de tres dimensiones: la textual, la discursiva y la social. La dimensión textual se centra en el análisis de las características lingüísticas del texto, como la gramática, la cohesión y el léxico. La dimensión discursiva examina los procesos de producción y consumo del texto, incluyendo la intertextualidad y la interpretación. La dimensión social analiza cómo los textos y las prácticas discursivas están relacionados con las estructuras sociales más amplias, incluyendo las relaciones de poder y las ideologías (Fairclough, 1992). Este autor sostiene que el análisis crítico del discurso debe revelar cómo los textos contribuyen a la reproducción o al cambio de las estructuras sociales y de poder. Las tres dimensiones anteriormente mencionadas se podrían sintetizar de la siguiente forma:

- **Dimensión textual:** Analiza las características lingüísticas del texto, como la elección de palabras, la gramática y la estructura narrativa. Esta dimensión permite entender cómo el lenguaje se utiliza para construir significados y persuadir al público.

- **Dimensión de la práctica discursiva:** Examina los procesos de producción y consumo del texto, incluyendo quién produce el discurso, cómo se distribuye y quiénes son los destinatarios. Esta dimensión revela las relaciones de poder implicadas en la creación y difusión del discurso.
- **Dimensión de la práctica sociocultural:** Considera las relaciones entre el texto y las estructuras sociales más amplias, explorando cómo el discurso refuerza o desafía las relaciones de poder existentes. Esta dimensión conecta el análisis del texto con los contextos sociales, políticos y económicos en los que se produce.

Este enfoque es crucial para entender cómo los medios de comunicación en Perú, a través de las portadas de los diarios, pueden influir en la percepción pública de las protestas sociales. La teoría de Fairclough permite explorar cómo el lenguaje de los medios refuerza o desafía las narrativas dominantes, especialmente en contextos de conflicto y resistencia social (Fairclough, 1992). La aplicación de este modelo al análisis de las portadas de los diarios peruanos puede ayudar a identificar las estrategias discursivas que se utilizan para representar a los manifestantes y sus demandas.

3.1.1.1. Dimensión textual

La primera dimensión, el análisis textual, se centra en los elementos lingüísticos y formales del texto, como el vocabulario, la gramática, las metáforas y la coherencia. Según Fairclough (1992), estos aspectos son esenciales para identificar cómo se construyen significados en un texto y cómo estos pueden ser utilizados para persuadir o manipular. Por ejemplo, en la cobertura mediática de las protestas en Perú durante 2023, los términos empleados para describir a los manifestantes, como "vándalos" o "terroristas", podrían revelar un intento deliberado de criminalizar las demandas sociales y justificar la represión estatal. Estas elecciones lingüísticas no son neutrales; reflejan y perpetúan las ideologías dominantes que buscan mantener el *statu quo*.

Además, el análisis textual incluye el estudio de la narrativa y la estructura argumentativa de los textos. John Richardson (2007) destaca que los patrones lingüísticos en los medios pueden reforzar jerarquías de poder al enmarcar los eventos de manera que beneficien a ciertos grupos. En el caso peruano, el discurso mediático construido en torno a las protestas a menudo omite o minimiza las causas subyacentes de los conflictos, como la desigualdad

social o la exclusión histórica de ciertos sectores. Este tipo de análisis textual revela cómo las decisiones aparentemente técnicas o estilísticas tienen un impacto político significativo.

El estudio detallado del texto, entendido como producto lingüístico, permite observar cómo determinadas configuraciones verbales funcionan como dispositivos de legitimación, exclusión o naturalización de actores sociales y acontecimientos. Esta dimensión permite identificar, en consecuencia, cómo los enunciados no solo informan, sino que modelan las coordenadas desde las que se construye el sentido común, las identidades sociales y la legitimidad de determinadas acciones o reclamos. Como se ha señalado anteriormente, Stuart Hall (1997) plantea que el lenguaje actúa como un sistema de representación que organiza el conocimiento y define qué puede ser pensado, dicho o legitimado en un contexto determinado. Esta concepción del lenguaje como constructor de realidad se articula con la dimensión textual propuesta por Fairclough (1992), al evidenciar que las elecciones léxicas, sintácticas y semánticas del texto no son arbitrarias, sino socialmente condicionadas. De este modo, el análisis textual permite observar cómo las formas lingüísticas participan en la consolidación de marcos interpretativos dominantes, en la delimitación de lo decible y en la producción ideológica de los sujetos sociales. Esta dimensión es esencial porque revela cómo los textos son vehículos de significados sociales que reflejan y reproducen estructuras más amplias. A continuación, se desarrollan los aspectos centrales de esta dimensión en cuatro ejes: selección léxica y construcción semántica, estructura gramatical y organización sintáctica, modalización y grado de certeza, y finalmente intertextualidad e interdiscursividad.

Selección léxica y construcción semántica

La elección de palabras dentro de un texto revela posicionamientos ideológicos que orientan la interpretación de los acontecimientos. Fairclough (1995) ha sostenido que el léxico refleja no solo actitudes culturales y contextos sociales específicos, sino también estructuras de dominación que operan de forma implícita. El modo en que se denomina a los actores sociales, así como las asociaciones semánticas que se activan a través de determinadas palabras, moldea profundamente la percepción pública.

Por ejemplo, el uso de términos como “vándalos”, “terroristas” o “agitadores” en el discurso mediático no puede desligarse de su función política. Estos sustantivos arrastran connotaciones que criminalizan a los sujetos representados, restringiendo el campo semántico de la protesta a escenarios de violencia, desorden o amenaza. Van Dijk (1998)

ha demostrado que esta elección léxica responde a una estrategia de polarización ideológica, en la que los grupos dominantes son retratados positivamente, mientras que los actores disidentes son construidos como “otros” peligrosos. Esta dimensión ideológica del léxico ha sido también analizada por Halliday y Matthiessen (2014), quienes destacan que el vocabulario desempeña una función ideacional, ya que selecciona y organiza experiencias socialmente codificadas.

Estructura gramatical y organización sintáctica

La gramática cumple una función estructurante en el discurso, ya que determina cómo se distribuyen los roles de agencia, responsabilidad y afectación. Fairclough (1992) ha argumentado que la voz pasiva, la nominalización y las formas de subordinación pueden ser empleadas para invisibilizar agentes, atenuar responsabilidades o despolitizar los hechos representados. Estas operaciones gramaticales configuran jerarquías enunciativas que posicionan a los sujetos sociales en distintos niveles de legitimidad.

Desde la teoría de la transitividad de Halliday (1994), se comprende que los patrones gramaticales definen quién actúa, quién recibe la acción y cómo se interpreta la relación entre ambos. Por ejemplo, en una oración como “la policía dispersó a los manifestantes”, se visibiliza la acción estatal y se establece un vínculo claro de causalidad. En contraste, la construcción pasiva “los manifestantes fueron dispersados” omite al agente y transforma la represión en un hecho neutro o inevitable. La elección gramatical, en este sentido, no es inocente, sino parte de un proceso discursivo más amplio de encuadre ideológico.

Modalización y grado de certeza

La modalidad del discurso se refiere al grado de certeza, posibilidad o compromiso que el emisor adopta respecto de lo que afirma. Fairclough (2003) ha mostrado que el análisis de la modalidad permite identificar las formas en que el texto construye autoridad, duda o especulación, lo cual incide directamente en la manera en que los lectores interpretan la veracidad y la legitimidad de lo enunciado. Las modalidades no se expresan únicamente mediante verbos auxiliares, sino también a través de adverbios epistémicos, tiempos verbales y estructuras sintácticas complejas.

Martin y White (2005), desde su teoría del appraisal, sostienen que la modalidad constituye un sistema de evaluación con el que los hablantes manifiestan actitudes y posicionamientos ideológicos. Una afirmación como “es probable que los manifestantes hayan iniciado la

violencia” insinúa culpabilidad sin asumirla de forma directa, mientras que “los manifestantes iniciaron la violencia” clausura el debate al establecer una interpretación cerrada. Esta diferencia no es meramente lingüística, sino discursiva, ya que condiciona la forma en que los públicos perciben la legitimidad de los actores representados.

Intertextualidad e interdiscursividad

El discurso no se produce en aislamiento, sino en constante relación con otros discursos anteriores o paralelos. Fairclough (1992) define esta característica como intertextualidad, es decir, la incorporación, apropiación o recontextualización de voces ajenas en el interior del texto. Esta presencia puede tomar la forma de citas, alusiones, géneros discursivos integrados o estilos enunciativos que remiten a otras esferas sociales. La interdiscursividad, en este sentido, se refiere a la combinación de discursos de distintas procedencias que conforman un nuevo marco interpretativo.

Bakhtin (1981) había señalado que todo enunciado es, en última instancia, una respuesta a otros enunciados previos. En el ámbito mediático, esta intertextualidad puede consolidar la autoridad de ciertas fuentes como las declaraciones de autoridades estatales o invisibilizar otras como los testimonios de actores subalternos. Richardson (2007) sostiene que la organización intertextual de los textos periodísticos permite jerarquizar discursos y definir qué voces son presentadas como legítimas, verídicas o creíbles. A través de esta jerarquización, los medios ejercen un poder simbólico que estructura la circulación del conocimiento y la construcción del sentido social.

3.1.1.2. Dimensión de la práctica discursiva

La dimensión de la práctica discursiva, dentro del modelo tridimensional de Norman Fairclough (1992), examina cómo los discursos son producidos, distribuidos y consumidos, analizando los procesos socioculturales e ideológicos que los moldean. Esta perspectiva es clave para entender cómo se construyen y mantienen relaciones de poder mediante prácticas comunicativas específicas. En este apartado, se abordarán tres aspectos esenciales: la producción discursiva y las líneas editoriales, el consumo discursivo y la percepción de las audiencias, y las estrategias de legitimación discursiva. A través del análisis de esta dimensión se puede analizar cómo los discursos mediáticos son moldeados por procesos de producción y consumo, así como por estrategias de legitimación que

responden a intereses de poder específicos. En este nivel analítico, el discurso no se reduce a un producto lingüístico autónomo, sino que se concibe como el resultado de una interacción entre agentes, instituciones y formaciones ideológicas. Este enfoque es crucial para entender cómo las representaciones mediáticas influyen en la percepción pública de eventos sociales, como las protestas en Perú, y contribuyen a la reproducción o contestación de las estructuras de poder. Al conectar estos procesos con el contexto sociohistórico en el que operan, se puede revelar cómo los discursos no solo reflejan, sino también construyen realidades sociales.

Producción discursiva y líneas editoriales

La producción discursiva se refiere al proceso de construcción de discursos dentro de un contexto institucional. Según Fairclough (1992), los discursos mediáticos son producidos bajo influencias ideológicas y económicas que responden a intereses de poder específicos. Este proceso no es neutral ni transparente; está condicionado por las líneas editoriales que reflejan las posiciones políticas y culturales de los medios de comunicación.

En el caso peruano, medios como El Comercio o La República ilustran esta dinámica: mientras el primero se alinea con posturas conservadoras y tiende a reforzar narrativas que legitiman las políticas estatales de orden y represión, el segundo suele adoptar una perspectiva progresista, criticando la violencia institucional y visibilizando las demandas sociales (Becerra y Mastrini, 2009). Estas líneas editoriales influyen en la selección y jerarquización de las noticias, así como en el encuadre narrativo que define cómo se presenta un hecho. Por ejemplo, en el contexto de las protestas de enero de 2023, ciertos medios destacaron actos de violencia protagonizados por manifestantes mientras minimizaban las denuncias de abuso policial, reforzando percepciones sesgadas en el público.

El proceso de producción discursiva también está condicionado por factores estructurales, como la concentración de los medios en manos de grandes conglomerados económicos, lo que limita la diversidad de voces y perspectivas. Richardson (2007) advierte que las rutinas editoriales, las políticas de fuentes y los marcos de noticiabilidad actúan como filtros ideológicos que configuran la versión de los hechos que será presentada como legítima. Estas rutinas no son neutras: reflejan las condiciones estructurales del campo mediático, como la concentración de medios, la dependencia publicitaria o la relación con el poder político. Por su lado, Fairclough (1992) advierte que esta homogeneización discursiva

puede ser un instrumento para la reproducción del poder hegemónico, al naturalizar ciertas ideologías como verdades incuestionables.

Consumo discursivo y percepción de las audiencias

El consumo discursivo se centra en cómo los textos son interpretados y resignificados por las audiencias. Fairclough (1992) sostiene que las personas no reciben pasivamente los discursos, sino que los interpretan activamente a partir de sus experiencias previas, conocimientos culturales y posiciones sociales. En este proceso, las audiencias pueden aceptar, negociar o resistir los significados propuestos por los medios.

En el Perú, las audiencias tienen percepciones distintas sobre la cobertura mediática de las protestas según su afiliación ideológica y experiencia personal con los conflictos. Por ejemplo, mientras ciertos sectores urbanos podrían interpretar las narrativas mediáticas dominantes como legítimas, los sectores rurales, históricamente marginados, podrían identificarlas como distorsiones que invisibilizan sus demandas. Estas divergencias ilustran cómo los discursos no operan de manera uniforme en toda la sociedad.

La percepción de las audiencias también está influida por el entorno digital, donde las redes sociales permiten reinterpretar y redistribuir los discursos mediáticos. Este espacio no solo amplifica la difusión de contenidos oficiales, sino que también da lugar a narrativas alternativas que desafían las versiones hegemónicas. Fairclough subraya que este tipo de resignificaciones son fundamentales para analizar cómo se construyen y cuestionan las representaciones sociales.

Estrategias de legitimación discursiva

Las estrategias de legitimación discursiva son mecanismos retóricos que los productores de discursos emplean para justificar ciertas acciones, ideologías o estructuras de poder. Fairclough (1992) identifica estas estrategias como esenciales para reforzar narrativas dominantes y perpetuar relaciones de poder.

En los medios de comunicación, estas estrategias incluyen, por ejemplo:

- **Apelación a la autoridad:** Utilización de figuras o instituciones reconocidas, como gobiernos, expertos o fuerzas del orden, para validar narrativas específicas. Por ejemplo, citar a autoridades estatales para justificar intervenciones policiales.

- **Construcción de consenso:** Presentación de determinadas posturas como universales o ampliamente aceptadas, lo cual puede invisibilizar otras perspectivas. Un ejemplo es afirmar que "la mayoría de los peruanos apoya las acciones del gobierno", sin respaldarlo con datos verificables.
- **Moralización:** Recurso a juicios morales para legitimar o deslegitimar acciones. En el caso de las protestas, describirlas como "irresponsables" o "ilegales" refuerza un marco narrativo que justifica la represión.
- **Naturalización:** Representación de eventos o decisiones como inevitables o "naturales", despolitizando sus causas y efectos. Por ejemplo, justificar la represión como una respuesta "necesaria" para restablecer el orden público.

Este tipo de estrategias no solo legitiman acciones específicas, sino que también buscan deslegitimar las voces opositoras. En el caso de las protestas en Perú, los discursos mediáticos han recurrido a estas tácticas para criminalizar a los manifestantes y reforzar la percepción de la protesta como una amenaza al orden social. Según Richardson (2007), estas representaciones discursivas configuran una estructura narrativa que privilegia la perspectiva de los grupos dominantes, reforzando jerarquías existentes.

3.1.1.3. Dimensión sociocultural

La dimensión sociocultural del modelo tridimensional de Norman Fairclough se centra en analizar cómo los discursos están vinculados a los contextos históricos, sociales y políticos que los enmarcan. Según Fairclough (1992), los discursos no solo reflejan las estructuras sociales, sino que también contribuyen activamente a su mantenimiento o transformación. Por ejemplo, en el caso de las protestas sociales en Perú, los medios de comunicación operan dentro de un contexto marcado por la concentración mediática y las desigualdades estructurales. Este contexto condiciona cómo los discursos sobre las protestas son producidos y consumidos, naturalizando representaciones que criminalizan a los manifestantes y justifican la represión estatal (Fairclough, 1992; Espinoza Lewis, 2016). Este análisis implica examinar las relaciones de poder y las ideologías subyacentes, identificando cómo las prácticas discursivas están moldeadas por y a su vez configuran las dinámicas sociales más amplias.

Un elemento central en esta dimensión es el concepto de hegemonía, adoptado de Gramsci, que describe cómo las clases dominantes logran imponer sus ideas y valores como universales. Fairclough (1992) subraya que los discursos desempeñan un papel clave en este proceso, al presentar ideologías particulares como si fueran neutrales o inevitables. En el contexto peruano, esto puede observarse en la representación mediática de los manifestantes como "vándalos" o "delincuentes," lo cual refuerza el *statu quo* al legitimar la acción represiva del Estado y marginar las voces disidentes. Estas representaciones no surgen de manera espontánea, sino que están profundamente arraigadas en las dinámicas históricas y culturales que estructuran la sociedad peruana.

La dimensión sociocultural, además, permite analizar cómo los discursos están relacionados con procesos de cambio social. Fairclough (1992) sostiene que estos discursos pueden ser tanto herramientas de reproducción como de resistencia frente a las estructuras de poder. Por ejemplo, investigaciones como las de Espinoza Lewis (2016) destacan cómo los discursos mediáticos descontextualizan las demandas sociales, reforzando la percepción de los manifestantes como amenazas al orden público y desarticulando posibles alternativas inclusivas y democráticas. Este tipo de análisis sociocultural no solo se limita al texto, sino que explora las condiciones estructurales que determinan su producción y recepción.

Otro aspecto crucial que aborda Fairclough (1992) es el papel de las ideologías en la configuración de las prácticas discursivas. Los discursos no son neutrales; están impregnados de valores e intereses específicos que buscan moldear las percepciones y las actitudes del público. En el caso de la cobertura mediática de las protestas en Perú, las ideologías neoliberales y autoritarias presentes en ciertos medios condicionan tanto la representación de los manifestantes como la interpretación que las audiencias hacen de estos eventos. Este análisis subraya la importancia de considerar no solo los textos individuales, sino también las estructuras ideológicas más amplias que los sustentan, Fairclough (1992) enfatiza que el análisis sociocultural no debe limitarse a describir las dinámicas existentes, sino que debe asumir un carácter crítico y transformador. Al revelar cómo los discursos están implicados en la reproducción de las desigualdades y exclusiones sociales, este enfoque abre posibilidades para imaginar y construir estructuras sociales más justas e inclusivas. En este sentido, el análisis de la dimensión sociocultural se convierte en una herramienta fundamental para cuestionar las estructuras de poder y promover el cambio social.

En contextos como el latinoamericano, y particularmente en el caso peruano, esta dimensión adquiere especial relevancia si se la articula con el concepto de colonialidad del poder, formulado por Aníbal Quijano (2000). La colonialidad no es un residuo del pasado colonial, sino una matriz estructural de dominación que persiste en las formas de representación, en las jerarquías epistémicas y en la organización de lo social. Este marco teórico permite comprender cómo los discursos mediáticos pueden reproducir estructuras de exclusión racial, étnica, geográfica y cultural, al codificar lo indígena, lo rural o lo disidente desde marcos de inteligibilidad subordinados.

La colonialidad del poder opera, entre otras formas, a través de la producción discursiva de otredades deslegitimadas: sujetos que aparecen en el espacio público no como interlocutores válidos, sino como amenazas, anomalías o cuerpos sin voz. Esta operación puede leerse como una forma de control discursivo que privilegia ciertas voces y silencia otras, reforzando así estructuras de desigualdad históricamente sedimentadas. La articulación entre hegemonía discursiva y colonialidad permite entonces ampliar el análisis sociocultural, considerando cómo el discurso institucionalizado está atravesado por lógicas de raza, clase, género y territorio. Más adelante, en el marco teórico, se desarrollará de manera más exhaustiva la teoría de colonialidad de poder.

En esta misma línea, Ruth Wodak (2001) ha insistido en la necesidad de una historización crítica del discurso, es decir, en la incorporación del análisis de las trayectorias discursivas, de las memorias sedimentadas y de los encuadres históricos que dotan de inteligibilidad a los textos contemporáneos. El discurso no emerge en abstracto, sino que está anclado en contextos históricos específicos que condicionan su forma y su recepción. Esta perspectiva resulta particularmente útil en escenarios marcados por conflictos sociales recurrentes, donde el discurso mediático no solo refleja, sino que construye y reinscribe representaciones sobre actores sociales históricamente marginalizados.

Por lo tanto, el análisis sociocultural en el modelo de Fairclough permite vincular los discursos con los sistemas ideológicos que operan a largo plazo y que atraviesan instituciones, prácticas sociales y saberes dominantes. Esta dimensión no debe abordarse como un simple contexto externo al texto, sino como una red de relaciones históricas, políticas y epistémicas que constituyen el entramado dentro del cual el discurso adquiere sentido, autoridad o resistencia.

La aplicación del modelo tridimensional de Norman Fairclough permite descomponer los discursos mediáticos en niveles complementarios que articulan el análisis lingüístico, las prácticas comunicativas y los condicionamientos socioculturales. Esta perspectiva revela que los textos no operan como entidades aisladas, sino como producciones inscritas en relaciones de poder históricamente situadas. En este marco, el discurso mediático no se limita a reproducir contenidos, sino que interviene activamente en la organización simbólica de lo social, fijando posiciones de autoridad, legitimidad y exclusión. La dimensión textual evidencia cómo las elecciones lingüísticas contribuyen a la construcción ideológica; la dimensión de la práctica discursiva permite comprender los circuitos de producción, circulación y recepción de los mensajes; y la dimensión sociocultural vincula estos procesos con las estructuras de poder y dominación que los atraviesan. Para profundizar en el componente ideológico de estas representaciones, resulta pertinente incorporar el modelo del cuadro ideológico propuesto por Teun van Dijk, el cual permite analizar con mayor precisión los mecanismos discursivos que polarizan identidades colectivas y refuerzan jerarquías sociales mediante oposiciones sistemáticas entre grupos sociales. Esta articulación teórica entre Fairclough y van Dijk ofrece un marco integral para examinar cómo los discursos sobre la protesta social son configurados, difundidos y legitimados en el espacio público.

3.1.2. Cuadrado ideológico de Teun van Dijk

El cuadrado ideológico es un modelo teórico desarrollado por Teun van Dijk para analizar cómo los discursos construyen y refuerzan identidades colectivas mediante estrategias que buscan fomentar una polarización. Este enfoque se centra en las formas en que los discursos representan al "nosotros" y al "ellos," promoviendo una visión favorable del propio grupo mientras deslegitiman o distorsionan la imagen del grupo opuesto. Según van Dijk (1998), estas estrategias discursivas son fundamentales en la reproducción de las ideologías, ya que moldean la percepción pública y perpetúan estructuras de poder e inequidad.

El modelo del cuadrado ideológico opera en cuatro dimensiones principales: enfatizar lo positivo del "nosotros," desenfaticar lo positivo del "ellos," enfatizar lo negativo del "ellos," y desenfaticar lo negativo del "nosotros." Cada una de estas dimensiones permite a los emisores del discurso consolidar una identidad colectiva y justificar sus acciones o

ideologías al tiempo que marginan o deslegitiman al "otro." Este enfoque es particularmente relevante en contextos de conflicto social, donde las tensiones entre diferentes grupos suelen ser amplificadas y manipuladas a través de los discursos, como se ha observado en la representación mediática de las protestas sociales en Perú. Van Dijk (1998) señala que estas estrategias no solo están presentes en el contenido explícito de los textos, sino que también se manifiestan en las estructuras subyacentes del discurso, como la selección de información, la organización temática y el estilo retórico. En los medios de comunicación, estas prácticas discursivas son herramientas poderosas que configuran las narrativas sobre los eventos y los actores sociales, influyendo en la percepción pública y en las decisiones políticas.

La teoría del cuadrado ideológico proporciona un marco analítico útil para revelar cómo los discursos perpetúan jerarquías de poder y exclusión, permitiendo identificar los mecanismos lingüísticos y semióticos que refuerzan las desigualdades sociales. A continuación, se analizan en detalle las cuatro dimensiones principales de este modelo, con ejemplos específicos y un enfoque crítico sobre su aplicación en el contexto peruano.

3.1.2.1. Enfatización de lo positivo del "nosotros"

La estrategia de enfatizar los rasgos positivos del grupo propio cumple una función clave en la consolidación de identidades colectivas y en la legitimación de posiciones dominantes. Esta práctica consiste en destacar atributos como la racionalidad, el compromiso con el orden, la defensa de valores democráticos o la protección del interés público. Van Dijk (1998) argumenta que esta operación no se limita a la descripción de hechos objetivos, sino que implica una construcción narrativa que asigna al grupo emisor un rol de autoridad moral.

En el ámbito mediático, esta estrategia se manifiesta a través de relatos que presentan a las instituciones estatales o a ciertos actores políticos como garantes de la estabilidad y el bienestar social. Al priorizar estas representaciones, los discursos refuerzan la imagen del grupo dominante como portador legítimo del orden discursivo. Tal como lo señala Bourdieu (1991), el poder simbólico opera precisamente en esa capacidad de imponer significados como legítimos sin necesidad de coerción explícita. Este énfasis en lo positivo también puede traducirse en el silenciamiento de contradicciones internas o en la racionalización de medidas autoritarias, cuando estas son presentadas como necesarias o inevitables.

Según van Dijk (1998), al exaltar las virtudes del grupo propio, los discursos también legitiman implícitamente sus decisiones, incluso en escenarios de crisis. En el caso peruano, la representación del gobierno como un actor "justo" y "moderado" puede dificultar el escrutinio público de sus acciones represivas, perpetuando una visión parcializada del conflicto.

3.1.2.2. Desenfaticación de lo positivo del "ellos"

La omisión o minimización de los aspectos positivos del grupo opuesto es una estrategia discursiva que actúa mediante mecanismos de exclusión simbólica. Esta forma de representación evita reconocer logros, motivaciones legítimas o dimensiones humanas del otro, contribuyendo a su deslegitimación progresiva. Van Dijk (1998) sostiene que esta táctica no requiere una negación abierta, sino que opera a través de la ausencia, el desplazamiento temático o la elección de fuentes que omiten sistemáticamente los puntos de vista disidentes.

Nos sirve para ejemplificar este punto, desde el enfoque del framing, cómo Entman (1993) plantea que las omisiones selectivas en la cobertura mediática son tan significativas como las inclusiones, ya que determinan qué aspectos del conflicto son interpretables y cuáles quedan excluidos del horizonte de sentido. La desenfaticación de lo positivo del "ellos" limita, en consecuencia, la posibilidad de construir una comprensión plural y compleja de los sujetos implicados. En contextos donde los actores subalternos intentan interpelar el orden establecido, esta invisibilización discursiva contribuye a su despolitización, transformándolos en figuras carentes de legitimidad pública.

3.1.2.3. Enfatización de lo negativo del "ellos"

La amplificación de los rasgos negativos atribuidos al grupo opuesto constituye una de las formas más eficaces de reproducción ideológica a través del discurso. Esta operación busca presentar al otro como una amenaza, un agente irracional, violento o contrario a los valores predominantes. Van Dijk (1998) subraya que esta estrategia no solo actúa a nivel descriptivo, sino también emocional, generando sentimientos de miedo, rechazo o desprecio en el receptor del discurso.

Esta forma de representación podríamos vincularla con lo que Barthes (1977) llama “efecto de naturalización del sentido”, es decir, la transformación de una construcción ideológica en una apariencia de sentido común. Al reforzar la imagen negativa del otro, el discurso despliega una función legitimadora de las acciones tomadas en su contra. En el plano mediático, esto se traduce en narrativas que conectan al grupo opositor con prácticas ilegítimas, omitiendo los marcos estructurales que dan origen al conflicto. Esta práctica discursiva refuerza el binarismo moral y disminuye la posibilidad de comprensión o empatía hacia el grupo estigmatizado.

3.1.2.4. Desenfaticación de lo negativo del "nosotros"

La minimización de los aspectos negativos del grupo propio cumple una función defensiva en el mantenimiento de su legitimidad. Van Dijk (1998) advierte que esta estrategia permite conservar una autoimagen positiva incluso ante eventos que podrían erosionarla, como abusos de poder, errores estratégicos o contradicciones ideológicas. Esta operación se realiza mediante omisiones, eufemismos, desplazamientos de foco o recontextualizaciones justificatorias.

Desde la perspectiva de análisis de la ideología, Thompson (1990) señala que los mecanismos simbólicos de la ideología no consisten únicamente en expresar contenidos, sino en gestionar la visibilidad y el encuadre de los mismos. La desenfaticación de lo negativo puede llevarse a cabo mediante el uso de formas impersonales, la atribución de errores a factores externos o la construcción de narrativas que relativizan las responsabilidades. Estas prácticas refuerzan una visión unívoca del grupo emisor como racional y correcto, blindándolo de críticas sistemáticas y dificultando el escrutinio público de sus acciones.

El modelo del cuadro ideológico de Teun van Dijk permite identificar cómo los discursos, en especial los mediáticos, estructuran oposiciones entre grupos sociales a través de estrategias retóricas que refuerzan la identidad del grupo emisor y deslegitiman la del otro. Esta organización discursiva no es meramente una forma de polarización semántica, sino un instrumento ideológico de gran eficacia para la reproducción simbólica del poder. La utilidad de este modelo reside en su capacidad para revelar cómo los textos no solo comunican información, sino que organizan el campo de lo decible y de lo pensable a través

de mecanismos de inclusión y exclusión que operan de forma sistemática. Sin embargo, para comprender con mayor precisión cómo se configuran las posiciones, roles y grados de visibilidad de los sujetos dentro de los discursos, resulta necesario integrar una perspectiva complementaria centrada en la representación de los actores sociales. En este sentido, el enfoque propuesto por Theo van Leeuwen ofrece herramientas analíticas que permiten descomponer las formas específicas mediante las cuales los discursos asignan funciones, identidades y atributos a los sujetos que intervienen en el relato, aportando así una dimensión adicional al análisis de las estrategias ideológicas presentes en el discurso mediático.

3.1.3. Representación de actores sociales de Theo van Leeuwen

La teoría de la representación de actores sociales propuesta por Theo van Leeuwen ofrece un marco analítico detallado para entender cómo el discurso construye identidades, roles y relaciones de poder entre los diversos actores que interactúan en la esfera pública. Este modelo se centra en identificar las estrategias discursivas utilizadas en los textos para incluir, excluir, activar o pasivar a los actores sociales de formas que reflejan y refuerzan las estructuras de poder e ideologías dominantes.

Según van Leeuwen (2008), las representaciones de actores sociales no son neutras, más bien se diseñan estratégicamente para consolidar determinadas perspectivas dentro de un contexto social específico. Este enfoque es especialmente relevante para el análisis de la cobertura mediática de las protestas sociales, donde las representaciones discursivas influyen directamente en la percepción pública y en la legitimación de ciertos discursos. Estas operaciones no se distribuyen de manera uniforme ni responden necesariamente a lógicas binarias fijas entre “dominantes” y “subalternos”, sino que varían en función del contexto comunicativo, el género discursivo y los objetivos comunicativos del emisor. La utilidad analítica de este modelo radica precisamente en su capacidad para identificar las formas en que el lenguaje configura jerarquías simbólicas y ubica a los actores sociales dentro de campos de sentido previamente estructurados

En el contexto de los medios de comunicación, donde la circulación simbólica de los discursos tiene consecuencias directas sobre la representación de sujetos colectivos, este enfoque resulta especialmente pertinente. Las operaciones discursivas no se limitan a

designar a los actores sociales, sino que articulan jerarquías entre ellos, definen sus márgenes de acción y condicionan las interpretaciones sociales disponibles sobre su presencia en la esfera pública. Para esta investigación, se utilizarán cuatro categorías del modelo de van Leeuwen: nominación y categorización, inclusión y exclusión, activación y pasivación, e individualización y asimilación. Estas categorías han sido seleccionadas por su utilidad teórica para observar de manera precisa los mecanismos a través de los cuales los medios configuran a los sujetos que participan en situaciones de protesta o conflicto social.

3.1.3.1. Nominación y categorización

La nominación consiste en la designación explícita de los actores sociales a través de nombres propios, títulos institucionales o identificadores personales. Esta estrategia cumple una función clave en la construcción de autoridad discursiva, ya que otorga identidad diferenciada al sujeto y delimita su estatus dentro del relato. Van Leeuwen (2008) advierte que la elección de nombrar a un actor no es una operación inocente, pues el uso de nombres específicos puede generar reconocimiento o exposición, mientras que su omisión o reemplazo por términos genéricos tiende a diluir su protagonismo o disminuir su agencia. Esta observación resulta central para comprender que la nominación no solo visibiliza, sino que también inscribe jerarquías de valor en el texto.

Por su parte, la categorización implica agrupar a los actores sociales dentro de clases sociales, étnicas, políticas, ideológicas o profesionales. Esta estrategia organiza el discurso en torno a nociones previamente disponibles en el imaginario social, activando significados culturalmente sedimentados. Las categorías operan como marcos interpretativos, ya que orientan al receptor hacia determinadas lecturas. En palabras de van Leeuwen (2008), las categorías contribuyen a estabilizar los sentidos del discurso mediante asociaciones que no requieren ser explicitadas, ya que circulan como convenciones sociales. Esta función estructurante de las categorías permite comprender su papel en la reproducción ideológica, especialmente cuando las clasificaciones se imponen como descripciones neutras, invisibilizando su carga valorativa.

3.1.3.2. Inclusión y exclusión

La inclusión o exclusión de actores sociales dentro del discurso constituye una operación fundamental para entender cómo se construyen las dinámicas de poder. Incluir a un actor implica conferirle un lugar en el entramado discursivo, mientras que excluirlo significa relegarlo fuera del campo simbólicamente visible. Esta exclusión puede manifestarse de múltiples formas: mediante omisiones directas, referencias impersonales o la delegación de su voz a fuentes indirectas. Van Leeuwen (2008) distingue entre exclusiones supresivas, en las que el actor es completamente eliminado del discurso, y exclusiones nominales, en las que su presencia se diluye a través de abstracciones colectivas o referencias vagas. Esta distinción es relevante porque permite detectar operaciones discursivas sutiles que, sin negar la existencia del actor, restringen su visibilidad y su posibilidad de agencia simbólica.

La inclusión, sin embargo, no siempre implica una representación equitativa o favorecedora. Existen formas de inclusión subordinada que sitúan al actor en posiciones marginales, delegando su voz a enunciaciones mínimas o recurriendo a fragmentos que no permiten construir una perspectiva compleja de su rol. El hecho de estar presente en el texto no garantiza protagonismo, ni reconocimiento, ni legitimidad. El análisis de estas estrategias, por tanto, debe atender no solo a la presencia o ausencia del actor, sino a las condiciones bajo las cuales esa representación se produce. Este enfoque permite ir más allá del conteo cuantitativo de apariciones y explorar las cualidades semióticas y discursivas de las formas de visibilización.

3.1.3.3. Activación y pasivación

La estrategia de activación presenta a los actores sociales como agentes de acciones, decisiones o procesos, mientras que la pasivación los representa como receptores, víctimas o beneficiarios de esas acciones. Esta distinción, según van Leeuwen (2008), tiene implicancias directas sobre la distribución de la responsabilidad, la agencia y la legitimidad dentro del discurso. La activación no solo implica la mención explícita del actor como sujeto gramatical, sino también su construcción como agente intencional y autónomo dentro del evento representado.

La pasivación, en cambio, puede operar mediante construcciones gramaticales impersonales o mediante la focalización en los efectos de una acción sin precisar quién la ejecuta. Existen formas intermedias, como la pasivación semántica, donde los actores aparecen como “afectados” sin que se detalle su rol en la configuración de los hechos. Estas ambigüedades permiten al discurso distribuir la carga de responsabilidad de manera selectiva, atribuyendo agencia a ciertos actores y difuminándola en otros. La relevancia de esta categoría radica en que permite observar cómo el lenguaje participa en la construcción de relaciones de autoridad, vulnerabilidad o legitimidad, sin que estas deban ser expresadas explícitamente.

3.1.3.4. Individualización y asimilación

La individualización se produce cuando un actor social es representado como entidad única, con atributos, nombres o acciones que lo distinguen de los demás. La asimilación, en cambio, consiste en agrupar a los actores dentro de una colectividad homogénea, subordinando sus particularidades a la lógica del grupo. Van Leeuwen (1996) señala que estas dos estrategias no son excluyentes, sino que pueden operar simultáneamente en distintos niveles del texto. Un mismo sujeto puede ser individualizado en un titular y asimilado en el cuerpo del texto, o viceversa, lo que exige un análisis atento a las variaciones internas del discurso.

La individualización puede contribuir a construir reconocimiento o responsabilidad, dependiendo del contexto discursivo en el que opera. Representar a una figura política por su nombre y apellido puede reforzar su estatus institucional o hacerla blanco de crítica. Del mismo modo, individualizar a un manifestante mediante su rostro o historia personal puede humanizar su presencia o convertirlo en objeto de escrutinio público. La asimilación, por su parte, permite al discurso operar sobre colectivos amplios, facilitando generalizaciones que pueden ser funcionales a marcos ideológicos preestablecidos. Esta estrategia resulta especialmente útil para representar actores sociales percibidos como homogéneos, ya que simplifica su tratamiento discursivo. Sin embargo, esta simplificación puede producir efectos de despersonalización, especialmente cuando se representa a grupos sociales históricamente estigmatizados.

El desarrollo teórico anterior ha permitido construir una noción compleja del discurso como una práctica social situada que produce significados, organiza relaciones simbólicas e interviene directamente en la configuración de las estructuras de poder. Las contribuciones de Norman Fairclough, Teun van Dijk y Theo van Leeuwen han facilitado un marco de análisis que articula aspectos lingüísticos, ideológicos y representacionales del discurso en su dimensión estructurante de lo social. Esta arquitectura teórica no se agota en el plano abstracto, sino que encuentra una aplicación crítica en los espacios donde el lenguaje adquiere una centralidad institucionalizada, como ocurre en los medios de comunicación. En este ámbito, el discurso adquiere una doble condición: actúa como instrumento de construcción de lo real y como vehículo de legitimación o deslegitimación de actores, prácticas y demandas sociales. A través de operaciones de selección, jerarquización y encuadre, el discurso mediático interviene en la producción del sentido común y en la configuración de los marcos interpretativos que orientan la percepción pública de los conflictos. Por esta razón, resulta necesario abordar el discurso mediático no únicamente como una prolongación del lenguaje periodístico, sino como un campo donde se ejercen disputas por la hegemonía simbólica, y donde las representaciones de la protesta, la autoridad o la ciudadanía no emergen de forma neutral, sino que responden a alineamientos ideológicos específicos. La sección que sigue se dedica al estudio del discurso mediático como categoría analítica, enfocando su potencial performativo en la representación del conflicto social y en la reproducción de imaginarios que estructuran las dinámicas de inclusión y exclusión en el espacio público.

3.2. Discurso mediático

El discurso mediático no es simplemente un vehículo para transmitir información; es una construcción compleja que moldea y da forma a las percepciones sociales y las dinámicas de poder. Desde una perspectiva crítica, el discurso mediático implica cómo los medios de comunicación seleccionan, estructuran y presentan los eventos, actores y narrativas sociales, influyendo en la manera en que las audiencias interpretan el mundo que los rodea. Manuel Castells (2009) destaca que el poder en la sociedad contemporánea radica en el control de la comunicación, convirtiendo a los medios en actores centrales de legitimación y perpetuación de estructuras políticas, sociales y económicas. El discurso mediático no es simplemente un canal informativo neutral, sino una construcción discursiva que estructura las formas en que los eventos sociales, los actores y sus demandas son significados en el

espacio público. Desde una perspectiva crítica, el discurso mediático es parte activa de la configuración del sentido común, operando mediante selecciones, exclusiones y encuadres que reflejan y reproducen relaciones de poder. En este marco, Manuel Castells (2009) plantea que el poder en la era de la información se ejerce fundamentalmente mediante el control de la comunicación simbólica, lo cual convierte a los medios en instituciones centrales de legitimación y reproducción de las estructuras sociales, políticas y económicas existentes. Tal afirmación es clave para comprender el rol de los medios en contextos de conflicto, como las protestas sociales, donde la disputa por la legitimidad simbólica se libra, en gran medida, a través del discurso periodístico.

Como repasamos anteriormente, Fairclough (1992) propone que los discursos, entendidos como prácticas sociales, tienen la capacidad de reproducir o transformar las relaciones de poder. Aplicado al campo mediático, este planteamiento permite analizar las formas en que las prácticas discursivas de los medios reconfiguran constantemente los marcos de interpretación de la realidad social. En el caso peruano, investigaciones como la de Ramírez Farías (2023) han evidenciado que los medios han tendido a representar a los manifestantes como agentes desestabilizadores, contribuyendo así a la legitimación de la respuesta estatal represiva. El discurso mediático actúa, entonces, como un dispositivo ideológico que organiza el campo de lo visible, lo decible y lo pensable.

3.2.1. Ideología de la prensa en el Perú

La ideología de la prensa peruana no es homogénea, pero sí está marcada por la concentración de medios en manos de pocos conglomerados económicos que responden a intereses políticos y corporativos específicos. Según Becerra y Mastrini (2009), esta concentración mediática en América Latina limita la pluralidad informativa y refuerza discursos que benefician a las élites dominantes. La ideología de la prensa en el Perú se inscribe en un sistema mediático altamente concentrado, donde un reducido grupo de conglomerados controla la mayor parte de los medios de comunicación. Esta configuración institucional condiciona las lógicas de producción de sentido, priorizando intereses políticos y corporativos específicos. Según Becerra y Mastrini (2009), la concentración mediática en América Latina limita la pluralidad informativa y favorece el posicionamiento de discursos alineados con las élites económicas. En el caso peruano, esta situación se refleja en la distinción entre medios como El Comercio, asociado históricamente con una postura

conservadora, y La República, vinculado a posiciones más progresistas, lo que afecta el tratamiento informativo de los conflictos sociales.

Autores como Arrunátegui Matos (2010) han documentado cómo los medios peruanos tienden a reproducir representaciones racistas y clasistas en la cobertura de protestas lideradas por poblaciones indígenas o rurales. Estas representaciones recurren a etiquetas como “vándalos” o “terroristas” para deslegitimar las demandas, lo que revela la persistencia de estructuras discursivas heredadas del orden colonial. En este sentido, la ideología de los medios no se limita a una lógica editorial manifiesta, sino que se expresa en las prácticas cotidianas de selección y jerarquización de la información.

Entman (1993) propone que el encuadre mediático consiste en seleccionar ciertos aspectos de una realidad percibida para hacerlos más prominentes en un texto comunicativo. Esta operación implica definir problemas, diagnosticar causas, emitir juicios morales y sugerir soluciones. En el caso peruano, este encuadre ha privilegiado representaciones que destacan la violencia en las protestas, omitiendo el análisis de las condiciones estructurales que las originan, como la desigualdad, la desconfianza institucional o el racismo estructural.

La cobertura mediática de las protestas sociales ilustra cómo la ideología de la prensa influye en la representación de los actores sociales. Por ejemplo, Arrunátegui Matos (2010) destaca cómo los medios han perpetuado representaciones racistas y clasistas de los pueblos indígenas y amazónicos, utilizando términos como "vándalos" o "terroristas" para deslegitimar sus demandas. Este fenómeno refleja prejuicios históricos y contribuye a la construcción de una opinión pública que respalda las acciones represivas del Estado.

Además, la ideología de los medios se manifiesta en la selección de los temas que se cubren y en la forma en que se enmarcan las noticias. Como señala Entman (1993), el encuadre mediático no solo selecciona ciertos aspectos de la realidad, sino que también les da énfasis, definiendo problemas, interpretando causas y proponiendo soluciones. En el caso de las protestas peruanas, los medios han tendido a centrarse en los episodios de violencia, minimizando las causas estructurales del descontento social, como la desigualdad, la exclusión y la falta de representación política.

3.2.2. Poder y hegemonía mediática

El concepto de hegemonía mediática, derivado de los planteamientos de Gramsci (1971), se refiere a la capacidad de los medios de comunicación para imponer una visión del mundo que beneficia a los grupos dominantes, obteniendo el consentimiento de las clases subordinadas. En este sentido, los medios no solo informan sobre la realidad, sino que también la construyen, moldeando las percepciones colectivas y legitimando las relaciones de poder existentes.

La noción de hegemonía mediática, derivada del pensamiento gramsciano, refiere a la capacidad de los medios para articular un consenso ideológico que favorezca los intereses de los grupos dominantes. En este sentido, los medios no actúan solo como reproductores pasivos del poder, sino como instancias activas en la construcción simbólica de lo social. Gramsci (1971) ya advertía que el dominio de una clase no se ejerce exclusivamente por medios coercitivos, sino mediante la producción de consenso en el campo de la cultura y la comunicación.

Castells (2009), por su parte, señala que, en la sociedad de la información, el poder se reconfigura en términos de control de los flujos simbólicos. El dominio mediático se expresa mediante la reiteración de ciertas narrativas, la selección de fuentes legitimadas y la exclusión de voces disidentes. Esta lógica se complementa con el planteamiento de Foucault (1977), quien concibe el poder como una red de relaciones que atraviesa y produce discursos, estableciendo los límites de lo decible y lo pensable. Desde esta perspectiva, los medios son parte constitutiva del dispositivo de poder, en tanto producen marcos interpretativos que condicionan las posibilidades de acción social.

López (2023) analiza las protestas sociales ocurridas tras la destitución de Pedro Castillo como una expresión de democratización popular frente a la re-elitización neoliberal del poder político en el Perú. Lejos de ser meros estallidos espontáneos, las movilizaciones son interpretadas como una resistencia histórica de los sectores subalternizados, especialmente rurales, indígenas y andinos, frente a un Estado capturado por élites políticas, económicas y mediáticas. El autor identifica una estrategia sistemática de represión estatal, criminalización mediática y uso del “terruqueo” como mecanismo discursivo para deslegitimar las demandas ciudadanas y reproducir imaginarios coloniales que asocian lo indígena con la amenaza. Las protestas reclaman una nueva Asamblea Constituyente, el cierre del Congreso y la refundación del pacto democrático desde abajo, lo que pone en evidencia un proyecto de país alternativo que cuestiona la exclusión estructural del modelo vigente. López (2023) articula así un marco interpretativo que

conecta la coyuntura actual con procesos históricos de resistencia social, aportando claves fundamentales para entender el papel de los medios no solo como reproductores de discursos, sino como actores ideológicos activos en la disputa por la legitimidad política y simbólica. En esta misma línea, resulta imprescindible entender a Foucault (1977) cuando argumenta que el poder opera a través de los discursos, estableciendo los límites de lo que se puede decir, pensar y hacer en una sociedad.

Por otro lado, Manuel Castells (2009) enfatiza que en la sociedad de la información, el poder no reside únicamente en la posesión de recursos materiales, sino en el control de los flujos de información. Este poder mediático se ejerce mediante estrategias como la repetición de ciertas narrativas, la selección de fuentes informativas alineadas con las élites y la omisión de voces disidentes.

3.2.3. Estrategias discursivas

Las estrategias discursivas son operaciones mediante las cuales los medios construyen significados, jerarquizan información y configuran marcos interpretativos. Van Dijk (2010) señala que estas estrategias responden a intereses ideológicos específicos y se manifiestan en distintos niveles del discurso, desde la selección léxica hasta la estructura global de los textos. Entre las más relevantes se encuentran la omisión informativa, la focalización en episodios espectaculares, la atribución de intenciones o responsabilidades y la metaforización de los actores sociales.

Estas estrategias no son aleatorias, sino que obedecen a dinámicas de poder y a intereses ideológicos que buscan influir en la percepción pública y legitimar ciertas posiciones. De acuerdo con van Dijk (2010), las estrategias discursivas operan en diferentes niveles del lenguaje y del discurso, moldeando cómo se entienden y evalúan los acontecimientos sociales. En el caso del Perú, estas estrategias han sido empleadas para deslegitimar las protestas sociales y justificar medidas represivas, como lo demuestran estudios recientes de autores como Ramírez Farías (2023) y Espinoza Lewis (2016).

Una estrategia ampliamente utilizada es la selección y omisión de información, que implica decidir qué aspectos de un evento serán destacados y cuáles serán ignorados. Esta práctica permite construir una versión sesgada de los hechos, moldeando la percepción pública de acuerdo con los intereses de quienes controlan los medios. En el contexto de las

protestas peruanas de 2023, los medios han privilegiado imágenes de violencia y caos, dejando de lado las causas estructurales de las movilizaciones o las demandas específicas de los manifestantes (Macassi, 2015). Al hacerlo, se estigmatiza a quienes protestan y se ocultan las condiciones de desigualdad y exclusión que los llevaron a protestar en primer lugar.

En el caso peruano, se ha recurrido a marcos que representan a los manifestantes como "radicales," "violentistas" o incluso "terroristas", reforzando estereotipos negativos que invisibilizan la legitimidad de sus demandas (Arrunátegui Matos, 2010). Este tipo de encuadre no solo criminaliza a los actores sociales, sino que también fortalece las narrativas oficiales que buscan justificar la intervención estatal y la represión.

La metáfora discursiva es otra herramienta poderosa utilizada para simplificar y dramatizar eventos complejos. Según Lakoff y Johnson (1980), las metáforas estructuran el pensamiento humano, influyendo en cómo conceptualizamos fenómenos sociales. En el caso de las protestas, expresiones como "hordas," "asalto" o "anarquía" generan una percepción de amenaza y desorden, fomentando el miedo y justificando medidas drásticas. Este tipo de lenguaje no es casual; responde a una estrategia deliberada para consolidar una imagen negativa de los manifestantes (Velásquez Villalba, 2022). De este modo, la metáfora actúa como un vehículo que traduce conflictos complejos en narrativas sencillas pero cargadas de connotaciones negativas.

Otra estrategia común es la dramatización y espectacularización. Esta técnica se centra en resaltar los aspectos más visuales y emocionalmente impactantes de los eventos, como enfrentamientos violentos o disturbios, mientras se ignoran los contextos estructurales y las demandas legítimas de los manifestantes. Según Richardson (2007), esta práctica genera un discurso sensacionalista que prioriza el impacto emocional sobre el análisis crítico. En el caso peruano, las portadas de diarios como El Comercio o Perú21 han utilizado imágenes de violencia y titulares alarmistas para presentar a los manifestantes como una amenaza al orden público, sin ofrecer un análisis equilibrado de sus motivaciones o reclamos.

Por último, la representación selectiva de los actores sociales es una práctica discursiva que revela mucho sobre las dinámicas de poder en el discurso mediático. Siguiendo a van Leeuwen (2008), los medios suelen categorizar a los actores sociales de formas que refuercen narrativas preestablecidas. En el caso de las protestas en Perú, los manifestantes suelen ser presentados como una masa homogénea y carente de agencia, mientras que

las figuras estatales son individualizadas y presentadas como agentes de orden y racionalidad (Espinoza Lewis, 2016). Este desequilibrio no es inocuo, ya que refuerza jerarquías y legitima las decisiones del poder establecido.

Estas estrategias discursivas afectan la percepción pública de los conflictos sociales y desempeñan un papel crucial en la reproducción de las estructuras de poder existentes. Al construir narrativas que deslegitiman a ciertos grupos y justifican la represión, los medios se reconocen como actores en la configuración del orden social. Por esta razón, resulta fundamental realizar un análisis crítico de estas estrategias para desentrañar las implicancias ideológicas del discurso mediático y promover una representación más justa y equilibrada de los actores sociales y sus demandas.

3.2.4. Representación del otro en el discurso mediático

La construcción del "otro" en el discurso mediático es un proceso discursivo que refuerza dinámicas de poder históricas y contemporáneas al representar a grupos marginados como sujetos deshumanizados, peligrosos o irracionales. Este mecanismo se fundamenta en la perpetuación de estereotipos que legitiman su exclusión y consolidan jerarquías sociales y políticas. Edward Said (1979), en su seminal análisis sobre el orientalismo, describe cómo las representaciones discursivas del "otro" construidas por Occidente no solo justificaron la dominación colonial, sino que también normalizaron estas estructuras de poder. En el Perú, las representaciones mediáticas del "otro" están profundamente marcadas por las dinámicas de exclusión racial, étnica y de clase. Estudios como los de Arrunátegui Matos (2010) y Espinoza Lewis (2016) han documentado cómo los pueblos indígenas y amazónicos han sido categorizados como "salvajes" o "bárbaros," reforzando narrativas de inferioridad y deslegitimando sus demandas. Esta representación estigmatizante es una extensión del legado colonial, que construye a estos actores sociales como una alteridad radical, destinada a ser controlada o reprimida por el Estado.

La representación del "otro" en el discurso mediático peruano no solo perpetúa jerarquías coloniales y desigualdades estructurales, sino que también legitima la violencia y la exclusión como respuestas aceptables frente a la disidencia social. Este fenómeno destaca la importancia de abordar las prácticas mediáticas desde un marco crítico que permita visibilizar y desafiar estas dinámicas de poder, promoviendo una representación más equitativa y justa de todos los actores sociales.

Por otro lado, la representación del "otro" en el discurso mediático también puede analizarse desde la perspectiva de la "colonialidad del poder," propuesta por Aníbal Quijano (2000). Este concepto explica cómo las jerarquías raciales y culturales establecidas durante la colonización siguen vigentes en las estructuras de poder contemporáneas, incluidas las prácticas mediáticas. En el caso de Perú, los discursos mediáticos no solo perpetúan esta colonialidad, sino que también refuerzan un imaginario nacional que excluye a los sectores indígenas y rurales, retratándolos como obstáculos para el progreso y la modernidad.

La representación del "otro" en los medios también se vincula a las estrategias de legitimación discursiva identificadas por Theo van Leeuwen (2008), que incluyen la exclusión y categorización de actores sociales. Los medios, al invisibilizar a ciertos grupos o al presentarlos de manera simplista y homogénea, contribuyen a despojar a estos actores de su agencia y complejidad.

La comprensión del discurso mediático como espacio de producción simbólica ha permitido evidenciar cómo los medios participan activamente en la construcción de los marcos de interpretación legítimos de la realidad social. Este tipo de discursos, lejos de ser reflejos objetivos de los acontecimientos, funcionan como dispositivos de poder que organizan narrativas, jerarquizan voces y modelan imaginarios colectivos. En contextos marcados por disputas sociales, estas dinámicas adquieren una especial relevancia, ya que inciden directamente en la visibilidad, la legitimidad y la configuración del sentido público de determinadas prácticas colectivas. Uno de los fenómenos donde esta lógica se vuelve más evidente es en el tratamiento mediático de las protestas sociales, entendidas como formas de acción colectiva que irrumpen en el orden discursivo dominante. La representación de la protesta en los medios constituye un terreno privilegiado para observar la tensión entre los discursos hegemónicos y las voces subalternizadas que buscan disputar el significado de la política, la ciudadanía y la justicia social. En este sentido, es necesario incorporar ahora una reflexión teórica sobre la protesta social como acontecimiento político y forma discursiva que cuestiona el orden establecido y reconfigura el espacio público desde la acción colectiva.

3.3. Protesta social

Las protestas de enero de 2023 contra el gobierno de Dina Boluarte son un ejemplo emblemático de estas dinámicas. En este contexto, se observa cómo las recurrentes crisis políticas intensifican el descontento social y también actúan como catalizadores para visibilizar demandas históricamente ignoradas. La persistente exclusión económica, cultural y política de amplios sectores de la población ha generado un escenario en el que la protesta social se convierte en una herramienta indispensable para la resistencia colectiva. Estas movilizaciones no surgen en el vacío; forman parte de un entramado complejo en el que convergen discursos mediáticos, estrategias estatales y reacciones públicas, componiendo un escenario que refleja tensiones sociales que redefinen constantemente las dinámicas del poder y la legitimidad.

En el caso peruano, estas tensiones se han traducido en ciclos de movilización que expresan descontentos que exceden lo coyuntural y remiten a una crisis sostenida de representación política, caracterizada por una desconexión estructural entre las instituciones del Estado y amplios sectores de la ciudadanía, particularmente en zonas rurales, indígenas y periféricas. Esta desconexión ha sido documentada en estudios que señalan cómo el modelo político vigente ha sido capturado por élites que restringen la participación efectiva de las mayorías, generando una demanda persistente por nuevas formas de justicia social, cultural y territorial (Ilizarbe, 2023; López, 2023; Grompone & Tanaka, 2009). Esta situación evidencia una crisis de legitimidad del sistema democrático y activa repertorios de movilización que buscan redefinir el contrato social desde actores históricamente marginados.

Ramírez Farías (2023) y Colorado Ruiz (2010) destacan que los medios de comunicación desempeñan un papel crucial en la construcción de percepciones colectivas sobre las protestas. Lejos de ser neutrales, estas representaciones responden a intereses específicos que moldean las narrativas dominantes, presentando a menudo a los manifestantes bajo marcos negativos que buscan deslegitimar sus demandas. La criminalización de las protestas y la invisibilización de las razones detrás de estas movilizaciones son estrategias comunes en el discurso mediático, diseñadas para favorecer a las élites y justificar la represión estatal. Esta construcción discursiva afecta la percepción pública y también condiciona la acción política y las respuestas estatales.

Bajo esta misma línea, el discurso de conflicto y resistencia en el Perú está profundamente influido por una historia de violencia política y desigualdad. Como lo señala Tarrow (1998), los movimientos sociales suelen aprovechar momentos de crisis para movilizar apoyo y

desafiar estructuras de poder existentes. En el contexto peruano, estas protestas expresan descontento, además de representar una lucha activa contra políticas gubernamentales que perpetúan la exclusión y la desigualdad. Este fenómeno, lejos de ser un evento aislado, debe analizarse como parte de un proceso continuo de resistencia que busca transformar la estructura social y política del país.

La inclusión de los medios en este análisis es esencial para comprender las complejas relaciones entre las protestas y la percepción pública. Como se apunta en estudios como los de Gunturiz, Lucca y Puello-Socarras (2022), las movilizaciones sociales en América Latina son escenarios donde se negocian significados, se articulan demandas plurales y se disputan narrativas hegemónicas. En el caso del Perú, esta disputa también refleja una confrontación directa con los discursos mediáticos que históricamente han favorecido a las élites. Esta perspectiva, al articular los factores históricos, discursivos y estructurales que alimentan la protesta social, ofrece una comprensión más profunda de cómo las movilizaciones pueden actuar como catalizadores de cambio, desafiando las narrativas dominantes y promoviendo una mayor inclusión social.

La protesta no puede analizarse al margen de las dinámicas de dominación y resistencia. Como afirma Touraine (1997), toda acción colectiva debe leerse como una confrontación entre proyectos sociales, en la cual se disputa el control de los recursos materiales y simbólicos de una sociedad. En este sentido, las protestas sociales no son expresiones caóticas o irracionales, sino momentos de agencia política en los que los sujetos subalternizados articulan discursos propios que desafían el orden establecido. De ahí que su representación en los medios y su recepción en el debate público adquieran una importancia estratégica. El lenguaje con el que se describe una protesta no es inocuo: incide en su legitimidad, en su capacidad para generar empatía, y en la posibilidad de que sus demandas sean escuchadas o criminalizadas. La protesta social, por tanto, no es solo una reacción ante las crisis; es una manifestación activa de resistencia y un llamado persistente por la justicia y la equidad en un país marcado por sus desigualdades. Comprender estos fenómenos requiere atender a las formas en que el conflicto social ha sido discursivamente configurado en la historia reciente del Perú, lo que implica examinar los acontecimientos visibles de confrontación y las matrices ideológicas y narrativas que han moldeado las nociones de orden, legitimidad y ciudadanía a lo largo del tiempo. Desde esta perspectiva, resulta importante abordar el discurso del conflicto y la resistencia como parte integral del

proceso mediante el cual los sujetos excluidos disputan los significados hegemónicos de lo político y reconfiguran, desde sus márgenes, el sentido de lo común.

3.3.1. Discurso de conflicto y resistencia en el Perú

El discurso de conflicto y resistencia en el Perú está profundamente arraigado en su historia política y social, caracterizada por períodos de violencia política, desigualdad estructural y crisis institucional. Las protestas sociales, como señala Tarrow (1998), son una forma de acción colectiva que surge en momentos de oportunidad política, permitiendo a los sectores marginados movilizarse para desafiar las estructuras de poder. En este contexto, el Perú ha sido un escenario de diversas manifestaciones sociales que reflejan el descontento y la lucha por el reconocimiento y los derechos fundamentales de grupos históricamente excluidos.

Tilly (2004) describe la protesta como una forma de contención política, en la que los ciudadanos organizan acciones colectivas para visibilizar tensiones y promover cambios en las estructuras de poder. En el caso peruano, estas tensiones suelen estar asociadas con las desigualdades históricas de carácter racial, económico y cultural. Un ejemplo reciente de este fenómeno son las protestas de enero de 2023 contra el gobierno de Dina Boluarte, que evidencian una convergencia entre las crisis políticas y las demandas sociales de sectores tradicionalmente marginados, como las comunidades indígenas y rurales. Estas movilizaciones reflejan el descontento frente a políticas específicas y representan un llamado por justicia social y dignidad (Ramírez Farías, 2023). La autora documenta cómo estas manifestaciones expresan una crítica estructural al modelo de representación política y revelan el agotamiento del vínculo entre el Estado y los sectores populares, aportando una lectura contextualizada de las motivaciones que impulsaron la protesta.

La interacción entre las movilizaciones y los discursos mediáticos es sumamente relevante para comprender las dinámicas del conflicto y la resistencia. Según Velásquez (2022), el “terruqueo”, una estrategia discursiva que asocia la protesta social con el terrorismo (se hace referencia no tanto a un fenómeno empíricamente comprobado de violencia armada organizada, sino a una construcción discursiva utilizada estratégicamente para deslegitimar la protesta social), se ha convertido en una herramienta clave para deslegitimar las demandas sociales en el Perú. Esta práctica tiene raíces en las dinámicas de exclusión y

control derivadas del conflicto armado interno peruano, donde la alterización de los manifestantes como “peligrosos” o “subversivos” justifica la represión estatal y refuerza narrativas oficiales que consolidan el orden establecido. La criminalización discursiva de las protestas afecta significativamente la percepción pública, al tiempo que legitima el uso de la fuerza como respuesta política válida (Benites, 2023). Como se ha señalado anteriormente, Stuart Hall (1982) propuso que el discurso mediático opera como un sistema de codificación ideológica que produce sentido común, organizando los significados dominantes en torno a lo que debe ser entendido como “orden” y lo que debe considerarse como “amenaza”. Esta visión encuentra una continuidad en Raymond Williams (1977), quien sostiene que la hegemonía se reproduce a través de la cultura cotidiana y los medios de comunicación, no mediante la imposición directa, sino mediante la sedimentación de valores presentados como naturales. En esa misma línea, Chomsky y Herman (1988) argumentan que los medios no actúan como meros transmisores neutrales de información, sino como filtros ideológicos al servicio de intereses corporativos y estatales, generando consenso en torno a decisiones políticas o represivas mediante la repetición estratégica de marcos narrativos. Pierre Bourdieu (1996) complementa este enfoque al señalar que el campo mediático participa activamente en la construcción de legitimidad simbólica, delimitando quiénes pueden hablar, con qué autoridad y en qué términos se presenta el conflicto. De este modo, los medios reproducen discursos de poder que intervienen directamente en la definición de la legitimidad política, dando forma a los contornos de lo posible y lo decible en el espacio público. Sin embargo, las protestas no son únicamente espacios de confrontación, sino también territorios discursivos en disputa. Como afirman Gunturiz, Lucca y Puello-Socarrás (2022), los movimientos sociales en América Latina han recurrido a medios alternativos y redes digitales para contrarrestar las narrativas hegemónicas, visibilizar sus demandas y construir marcos interpretativos propios desde la resistencia.

En el artículo de López (2023) analiza las protestas sociales ocurridas tras la destitución de Pedro Castillo como una expresión de democratización popular frente a la re-elitización neoliberal del poder político en el Perú. Lejos de ser meros estallidos espontáneos, las movilizaciones son interpretadas como una resistencia histórica de los sectores subalternizados frente a un Estado capturado por élites políticas, económicas y mediáticas. El autor identifica una estrategia sistemática de represión estatal, criminalización mediática y uso del “terruqueo” como mecanismo discursivo para deslegitimar las demandas ciudadanas y reproducir imaginarios coloniales que asocian lo indígena con la amenaza.

Las protestas reclaman una nueva Asamblea Constituyente, el cierre del Congreso y la refundación del pacto democrático desde abajo, lo que pone en evidencia un proyecto de país alternativo que cuestiona la exclusión estructural del modelo vigente. López articula así un marco interpretativo que conecta la coyuntura actual con procesos históricos de resistencia social, aportando claves fundamentales para entender el papel de los medios como reproductores de discursos y como actores ideológicos activos en la disputa por la legitimidad política y simbólica.

En el Perú, esta resistencia discursiva se observa en los esfuerzos por documentar y compartir testimonios que destacan las causas legítimas de las movilizaciones, desafiando las representaciones oficiales y mediáticas que minimizan o tergiversan sus reivindicaciones. De esta manera, al analizar el discurso de conflicto y resistencia en el Perú se destaca que también la capacidad de los movimientos sociales para articular demandas y desafiar los discursos dominantes resaltan. Este proceso, aunque enfrentado a desafíos significativos como la criminalización y la represión estatal, representa un componente de la lucha por la justicia social en el país. Comprender cómo se representan estos procesos en los medios resulta clave para analizar las formas en que se configuran simbólicamente los actores sociales, sus demandas y las respuestas institucionales que enfrentan. A continuación, se examinará cómo la protesta social ha sido representada discursivamente en el contexto peruano reciente, considerando los marcos narrativos, semánticos y visuales que median su legitimación o estigmatización en el espacio público.

3.3.2. Representación de la protesta social

El estudio de la representación mediática de la protesta social requiere una toma de distancia crítica respecto a modelos comunicativos lineales y deterministas, como la teoría de la aguja hipodérmica, la cual asumía que los mensajes mediáticos eran inyectados directamente en una audiencia pasiva, sin mediaciones cognitivas ni contextuales. Esta concepción ha sido superada por enfoques contemporáneos que reconocen la agencia interpretativa de las audiencias y las complejas relaciones entre medios, poder e ideología (Hall, 1980; Morley, 1992). En lugar de concebir a los medios como emisores todopoderosos, se los entiende hoy como espacios de lucha simbólica, donde se disputan sentidos, representaciones y legitimidades. Desde esta perspectiva, analizar cómo se representa la protesta social implica examinar los dispositivos discursivos que construyen a los actores colectivos en el espacio público, lo cual se vincula con el marco ya expuesto

sobre la representación de actores sociales desarrollado por Van Leeuwen (2008), que permite explorar cómo ciertas figuras son visibilizadas, estigmatizadas o borradas de la narrativa dominante según lógicas de inclusión, exclusión o categorización ideológica.

El discurso mediático sobre las protestas, como sostiene van Dijk (2010), opera seleccionando y jerarquizando información, favoreciendo ciertas interpretaciones sobre otras. En el contexto peruano, esta operación discursiva se ha caracterizado históricamente por representar las movilizaciones sociales como una amenaza al orden y la estabilidad, particularmente cuando los actores involucrados provienen de sectores indígenas, rurales o subalternizados. Estas construcciones no son neutrales: responden a esquemas ideológicos que organizan la alteridad y naturalizan respuestas represivas, configurando lo que Hall (1997) denomina un “sistema de representación” que articula el lenguaje con las relaciones de poder.

Estudios como los de Ramírez Farías (2023) y Colorado Ruiz (2010) han documentado cómo en Perú y México, respectivamente, los medios privilegian marcos interpretativos que criminalizan a los manifestantes, desplazando las causas estructurales del conflicto —como la desigualdad, la exclusión o la falta de representación política— en favor de narrativas que enfocan el vandalismo o la violencia puntual. Esta tendencia se materializa discursivamente a través del uso de etiquetas como “terroristas”, “violentistas” o “vándalos”, términos que, lejos de ser meras descripciones, actúan como mecanismos de control simbólico. Uno de los dispositivos más recurrentes en este sentido es el denominado terruqueo, que como ha analizado Velásquez (2022), consiste en la asociación automática entre protesta y terrorismo, heredera de los discursos de seguridad del periodo del conflicto armado interno, que aún persisten en la esfera pública. Esta estrategia discursiva funciona como una forma de estigmatización que justifica el accionar represivo del Estado y bloquea la posibilidad de construir un diálogo político legítimo en torno a las demandas sociales.

En este contexto, resulta indispensable deconstruir críticamente el concepto de “terrorismo” al que apelan los discursos mediáticos cuando emplean el terruqueo como estrategia de deslegitimación. Este término, en el caso peruano, no remite exclusivamente a hechos concretos de violencia política, sino que ha sido resignificado en el espacio mediático como una categoría vacía y maleable, capaz de ser aplicada a cualquier forma de disidencia o protesta organizada. Como se ha desarrollado anteriormente en esta investigación, el terruqueo opera como una estrategia discursiva heredada del conflicto armado interno, pero reactivada estratégicamente en tiempos de movilización social para asociar simbólicamente

a los manifestantes con la figura del enemigo interno, despojándolos de legitimidad política y convirtiéndolos en sujetos susceptibles de represión. Esta criminalización discursiva responde a lógicas de control social que evidencia una continuidad histórica en el tratamiento del “otro peligroso” desde las élites mediáticas y estatales. Por ello, entender la representación de la protesta exige analizar cómo categorías como “terrorismo” se utilizan para clausurar el debate público, invisibilizar el contenido de las demandas sociales y reducir la protesta a una cuestión de orden público, antes que de justicia democrática.

El Instituto de Estudios Peruanos (IEP, 2023) ha advertido que este discurso polariza el debate público y limita el reconocimiento de los movimientos sociales como interlocutores válidos en el espacio democrático. Esta deslegitimación no opera únicamente mediante la criminalización explícita, sino también a través de la omisión, el encuadre sesgado y la falta de contextualización. En esta línea, Arrunátegui Matos (2010) ha señalado que los medios recurren a estereotipos culturales y raciales para representar a los actores sociales en conflicto, lo que refuerza imaginarios de inferioridad y contribuye a reproducir estructuras de exclusión basadas en jerarquías coloniales y clasistas.

Sin embargo, como lo plantean Gunturiz, Lucca y Puello-Socarras (2022), los movimientos sociales no se presentan únicamente como objetos del discurso, sino también como sujetos productores de contranarrativas. La emergencia de medios alternativos y el uso estratégico de redes sociales ha permitido a diversos colectivos construir representaciones propias, visibilizar sus demandas, disputar el sentido de los acontecimientos y establecer redes de solidaridad transnacional. Estas iniciativas cuestionan las versiones hegemónicas y evidencian la dimensión política de la representación y el carácter dinámico de la lucha discursiva en contextos de conflicto. Comprender este proceso requiere una mirada crítica que considere tanto los dispositivos de estigmatización como las formas de resistencia discursiva, atendiendo a las mediaciones ideológicas, históricas y estructurales que configuran el sentido de la protesta en las sociedades contemporáneas.

La representación de la protesta social, tal como ha sido analizada, no puede entenderse plenamente sin situarla en una matriz histórica más amplia que explica la persistencia de jerarquías sociales y epistemológicas en la configuración del espacio público. Las formas en que los discursos mediáticos representan a los actores movilizados no emergen de manera aislada ni responden únicamente a coyunturas específicas, sino que se inscriben en estructuras de largo aliento vinculadas a la colonialidad del poder, concepto desarrollado por Aníbal Quijano (2000) para describir la continuidad de los patrones de dominación

racial, cultural y epistémica establecidos desde la conquista. Esta perspectiva permite interpretar cómo ciertas subjetividades —particularmente indígenas, rurales o andinas— son sistemáticamente construidas como otredades peligrosas o irracionales, cuyas demandas deben ser neutralizadas antes que escuchadas. Al conectar la representación de la protesta con los mecanismos históricos de exclusión, se abre la posibilidad de comprender cómo los discursos hegemónicos criminalizan la disidencia y reproducen un orden social fundado en la deshumanización de los sectores subalternizados. Desde esta perspectiva, el análisis de la colonialidad en la construcción de la otredad se convierte en una herramienta útil para desentrañar las bases ideológicas que sustentan la legitimación de la violencia simbólica y material ejercida contra quienes desafían las estructuras históricas de poder vigentes.

3.4. Colonialidad en la construcción de la otredad

La colonialidad, un concepto desarrollado por Aníbal Quijano (2000), describe la permanencia de las estructuras jerárquicas y de dominación originadas durante el colonialismo, las cuales siguen organizando las relaciones sociales, económicas, políticas y culturales en la actualidad. Este marco teórico se centra en cómo las jerarquías establecidas por los colonizadores, particularmente las basadas en la racialidad, etnia y la cultura, persisten como parte integral de las dinámicas contemporáneas de poder y exclusión. Estas estructuras no solo organizan la distribución de recursos y oportunidades, sino que también moldean la manera en que las sociedades comprenden su propia identidad y las diferencias con "los otros". Es aquí donde cobra importancia el concepto de otredad, que se refiere al proceso de construcción simbólica y discursiva del "otro" como un ser diferente, separado y, frecuentemente, inferior o peligroso. Esta dinámica enlaza de manera directa con la dimensión sociocultural del modelo tridimensional de Norman Fairclough (1995). El análisis crítico del discurso muestra que los textos mediáticos se producen dentro de estructuras históricas que determinan qué voces adquieren autoridad y cuáles quedan marginalizadas. Al incorporar la perspectiva de la colonialidad, la investigación puede indagar cómo la herencia racial y epistémica del coloniaje informa los encuadres informativos y, en consecuencia, condiciona la interpretación pública de la protesta social.

Jacques Derrida (1976) define la otredad como una categoría filosófica que opera dentro de un sistema binario de diferenciación. Para Derrida, el lenguaje y los discursos sociales son fundamentales en la construcción del "otro" porque establecen un marco dicotómico en el cual el "nosotros" se define siempre en oposición al "otro", esto encaja perfectamente con la teoría de Van Dijk (1998) sobre su teoría del cuadrado ideológico, mencionado anteriormente en este marco teórico. Este proceso, conocido como *différance*, no solo implica una separación, sino también la jerarquización, donde el "otro" es posicionado como lo marginal o lo amenazante. La otredad, en este sentido, no es un fenómeno neutral, sino que tiene implicaciones éticas, políticas y sociales significativas al justificar formas de exclusión y dominación. Emmanuel Lévinas (1979), por su parte, introduce un enfoque ético en el estudio de la otredad, argumentando que la relación con el "otro" debe fundamentarse en el reconocimiento y el respeto irreductibles hacia su alteridad. Lévinas señala que, en la interacción con el "otro", se pone en juego una responsabilidad ética que trasciende la lógica de la instrumentalización y el control, características comunes en contextos marcados por la colonialidad.

En el caso del Perú, la otredad es una herramienta discursiva y simbólica que perpetúa las desigualdades estructurales entre los sectores dominantes y las poblaciones indígenas, afrodescendientes y rurales. Estas jerarquías no solo operan a nivel material, sino también a nivel simbólico, mediante la construcción de narrativas que posicionan a estos grupos como ajenos o incluso contrarios a los valores de modernidad y progreso. Según Quijano (2000), esta lógica está profundamente arraigada en la colonialidad del poder, que organiza las relaciones sociales y económicas mediante la clasificación racial/étnica instaurada durante el colonialismo. Fanon (1967) advirtió que el racismo colonial funciona como violencia ontológica, pues asigna a los cuerpos racializados un lugar fuera de la civilización. En el Perú contemporáneo, esta lógica aparece en titulares que califican las movilizaciones rurales como "caos" o "atraso", reproduciendo lo que Claudio Maldonado Rivera (2017) denomina colonialidad del ver. Tales representaciones convierten la mirada mestiza-criolla en estándar de legitimidad y vuelven invisibles las racionalidades políticas de los pueblos subalternizados, consolidando la fractura entre centro y periferia.

Comprender la colonialidad de la otredad en este contexto particular resulta clave para cualquier estudio que aspire a revelar el carácter ideológico de la cobertura mediática, más aún en un país latinoamericano. Recuperar esta genealogía permite cuestionar la aparente neutralidad del discurso periodístico y trazar un camino de investigación orientado a la

descolonización simbólica: un horizonte en el que los sujetos históricamente situados como “otros” participen en la esfera pública con reconocimiento pleno de su agencia, saberes y dignidad.

El recorrido teórico que sitúa la colonialidad como trama subyacente de los discursos peruanos ha mostrado cómo la producción de alteridades se articula en el nivel sociocultural que Fairclough relaciona con las condiciones históricas de poder. Conviene ahora descender a las formas concretas en que ese legado ordena la vida colectiva. Quijano indica que la matriz colonial del poder traduce diferencias culturales en jerarquías raciales y económicas que se naturalizan en la construcción de la nación (Quijano, 2000); Mignolo agrega que tales jerarquías persisten como “diferencia colonial” cada vez que el proyecto moderno-occidental define los márgenes de ciudadanía válida (Mignolo, 2011). A partir de estas premisas, el siguiente apartado examina cómo la raza se entrelaza con la clase y con un relato nacional mestizo que incorpora lo indígena de modo folclórico a la vez que mantiene su exclusión material, mostrando así la operatividad cotidiana de la colonialidad en las identidades peruanas.

3.4.1. Construcción de raza, clase e identidad nacional

Las jerarquías raciales que la administración colonial impuso en América no desaparecieron con la independencia; se reconfiguraron como el nervio invisible del capitalismo republicano. Quijano explica que la categoría de “raza” articuló un esquema de división del trabajo donde la población blanca concentraba los saberes legítimos y la dirección política, mientras los indígenas y afrodescendientes quedaban confinados a la servidumbre y a la extracción de recursos (Quijano, 2000). El resultado fue una cartografía social en la que el color de la piel se convirtió en un marcador de posición económica y de acceso al conocimiento, condición que el propio autor denomina “colonialidad del poder”. Esta matriz sigue operando en la actualidad y define, por ejemplo, quiénes ocupan los altos cargos estatales y quiénes son representados como “objetos” de políticas asistenciales.

La raza, como categoría social y política, fue establecida durante el colonialismo para justificar la explotación y el control de los pueblos colonizados. Este concepto no se desmanteló con la independencia de los países latinoamericanos, sino que se reconfiguró para adaptarse a las dinámicas del capitalismo global y las narrativas nacionalistas

emergentes. Quijano (2000) argumenta que la raza se convirtió en el eje central de la clasificación social y económica, legitimando la subordinación de los sectores indígenas y afrodescendientes frente a las élites mestizas y blancas. Esta jerarquización racial se entrelaza con la clase, perpetuando una estructura socioeconómica que asocia la pobreza con características étnicas y culturales específicas.

Enrique Dussel (2000) amplía esta discusión al señalar que la construcción de la identidad nacional en América Latina se fundamenta en la exclusión de los pueblos originarios y afrodescendientes. Este proceso crea una narrativa de mestizaje que, aunque aparentemente integradora, invisibiliza las diferencias y refuerza la hegemonía de los valores occidentales. En el Perú, esta lógica se manifiesta en la representación mediática y política de los sectores indígenas y rurales, quienes son frecuentemente descritos como "atrasados" o "bárbaros", justificando así su exclusión de los espacios de poder. Claudio Maldonado Rivera (2017) introduce el concepto de "colonialidad del ver" para describir cómo los medios de comunicación reproducen estas jerarquías mediante imágenes y discursos que deshumanizan a estos grupos y refuerzan estereotipos racistas y clasistas.

Sobre esa base, la nación republicana se proyectó como un relato de homogeneidad: un "mestizaje" que, en apariencia, fundía las diferencias raciales, pero que en la práctica se erigía alrededor de los valores y referentes culturales de las élites criollas. Dussel subraya que la modernidad latinoamericana se instauró ocultando al sujeto colonizado bajo el mito de la universalidad occidental; el discurso de lo mestizo permitió integrar lo indígena en la iconografía patriótica al tiempo que lo mantenía excluido de la ciudadanía plena (Dussel, 1992). De ahí que la identidad nacional peruana reivindique la herencia inca en los museos y los desfiles, pero relegue a los pueblos que encarnan esa herencia a las economías de subsistencia en la sierra y la Amazonía.

La racialización es inseparable de la estratificación de clase. Fanon advirtió que el orden colonial naturaliza la pobreza del colonizado como efecto de su supuesta incapacidad, no como consecuencia de la violencia estructural (Fanon, 1963). En el Perú contemporáneo, los mapas de pobreza extrema coinciden con los territorios de alta población quechua y aimara. Esta superposición confirma la vigencia de lo que Mignolo (2011) llama "diferencia colonial": un dispositivo que clasifica a las poblaciones según su proximidad a la norma eurocéntrica y legitima su posición subordinada en la división internacional del trabajo

La construcción de raza, clase e identidad nacional es un proceso discursivo que tiene consecuencias materiales directas[2] . Los sectores indígenas y afrodescendientes enfrentan tasas más altas de pobreza, exclusión educativa y violencia estatal, condiciones que son legitimadas por los discursos que los posicionan como un "otro" peligroso o incapaz. Estas dinámicas se agravan en contextos de conflicto social, donde las demandas de estos grupos son sistemáticamente deslegitimadas y criminalizadas. Comprender la convergencia entre raza, clase e identidad nacional en clave de colonialidad no implica reducir la realidad a un determinismo histórico, pero sí revela las coordenadas en las que se inscriben las luchas contemporáneas por la redistribución y el reconocimiento. Sin este anclaje, cualquier lectura de la protesta social corre el riesgo de interpretar las demandas de los sectores subalternizados como simples expresiones coyunturales, y no como cuestionamientos a un modelo de ciudadanía que probablemente permanece racializado desde su origen. De esta manera, reconocer el tránsito de las jerarquías materiales a los dispositivos discursivos permite enlazar la discusión con la noción de otredad y la condición subalterna, categorías que problematizan tanto la producción como el silenciamiento de sujetos dentro del espacio público. En el siguiente apartado se explora, por tanto, cómo los mecanismos coloniales de clasificación desembocan en prácticas que construyen alteridades y relegan voces a posiciones de subalternidad, configurando la gramática contemporánea de la exclusión mediática y política.

3.4.2. Construcción de la otredad y subalternidad

El concepto de colonialidad se refiere a los legados y patrones de poder que dejó el colonialismo europeo y que perduran hasta el presente, estructurando jerarquías sociales y epistémicas más allá de la era colonial formal. En particular, la colonialidad establece jerarquías identitarias que definen a ciertos grupos como "otros" inferiores o subalternos, legitimando su dominación simbólica y material. Este texto explora cómo la colonialidad del poder, del saber y del ser configuran la construcción de la otredad (alteridad) en los discursos, integrando las aportaciones de teóricos clave: Aníbal Quijano, Walter Dignolo, Gayatri Spivak, Edward Said, Enrique Dussel, Emmanuel Lévinas, Jacques Derrida, entre otros, y vinculando estas ideas con la dimensión sociocultural del modelo tridimensional de análisis del discurso de Norman Fairclough. A través de una revisión crítica, se sentarán bases conceptuales sólidas para futuros análisis del discurso mediático sobre la protesta

social en el Perú contemporáneo, evidenciando cómo las narrativas mediáticas pueden reproducir o desafiar las lógicas coloniales en la representación del "otro".

Gayatri Spivak (2003) amplía esta discusión al introducir el concepto de subalternidad, que se refiere a aquellos grupos que son excluidos y silenciados en las estructuras de poder. La subalternidad no solo implica la marginalización económica y política, sino también la invisibilización cultural y discursiva. Spivak señala que los subalternos carecen de la capacidad de representarse a sí mismos en el discurso dominante, quedando sujetos a las interpretaciones y construcciones de las élites. En el Perú, este fenómeno es evidente en la representación mediática de los pueblos indígenas y rurales, quienes son frecuentemente descritos como violentos o irracionales para justificar la intervención estatal y la represión. Emmanuel Lévinas (1979) ofrece un contrapunto ético a esta lógica, argumentando que la relación con el "otro" debe basarse en el reconocimiento de su humanidad y en una responsabilidad incondicional hacia su alteridad. Sin embargo, en contextos marcados por la colonialidad, esta ética es reemplazada por discursos que deshumanizan al "otro" y lo convierten en un objeto de control y explotación. Walter Dignolo (2003) introduce aquí el concepto de "diferencia colonial", que describe cómo las estructuras coloniales continúan clasificando y jerarquizando a las poblaciones según su proximidad a los valores occidentales.

La construcción de la otredad y la subalternidad se manifiestan claramente en los conflictos sociales y las protestas. Las representaciones mediáticas de los manifestantes indígenas y rurales perpetúan estereotipos que los posicionan como una amenaza para el orden social, desviando la atención de sus demandas legítimas. Ramírez Farías (2023) analiza cómo estos discursos justifican la represión estatal y refuerzan las jerarquías coloniales, dificultando cualquier posibilidad de cambio estructural. En el Perú contemporáneo, por ejemplo, el "terruqueo" funciona como dispositivo que sintetiza otredad y subalternidad. La etiqueta de terrorista, heredada del conflicto armado interno, descalifica cualquier reclamo rural o indígena asociándolo con la amenaza al orden. Velásquez sostiene que el término activa memorias de violencia y alinea la opinión pública con respuestas represivas (Velásquez, 2022). Esta práctica discursiva demuestra cómo la otredad colonial se reinscribe en la gramática de la seguridad democrática, desplazando la discusión sobre derechos hacia el terreno penal. De nuevo, la perspectiva sociocultural de Fairclough permite comprender la coproducción del texto y la estructura: el encuadre mediático legitima

la intervención policial mientras consolida la imagen del manifestante andino como alteridad peligrosa.

La exploración de la colonialidad y la construcción de la otredad ha revelado un conjunto de teorías fundamentales que proporcionan un marco sólido para analizar las dinámicas de exclusión y dominación en contextos contemporáneos, como el que se aborda en este estudio. Desde la colonialidad del poder de Quijano, que subraya la persistencia de estructuras coloniales en las relaciones económicas, sociales y culturales actuales, hasta la ética de la alteridad de Lévinas y la deconstrucción de Derrida, estas perspectivas permiten una comprensión profunda de cómo operan las jerarquías y exclusiones en las sociedades modernas. La noción de otredad se convierte en un concepto central para este marco teórico, no solo como una herramienta para identificar cómo se construyen las diferencias, sino también para entender cómo estas son instrumentalizadas para legitimar dinámicas de poder y desigualdad. Las contribuciones de Said sobre el orientalismo, de Spivak sobre la subalternidad y de Dussel sobre la colonialidad del ser enriquecen este análisis al conectar la construcción del otro con las prácticas discursivas y materiales que perpetúan la exclusión.

A lo largo de este recorrido teórico hemos visto que la colonialidad opera como un sistema de poder total, que no solo explotó económicamente a los pueblos colonizados sino que instituyó categorías para pensar y sentir la diferencia de manera jerárquica. Dichas categorías –raza, civilización, desarrollo, etc.– siguen informando la producción simbólica contemporánea, muchas veces de forma encubierta. La otredad del colonizado fue construida históricamente como una otredad deficitaria, silenciosa o exotizada, a partir de la cual el Yo occidental/modernizado se definió a sí mismo. Autores poscoloniales y decoloniales han desmontado críticamente estas construcciones: Said reveló el andamiaje discursivo imperial que fabrica un Oriente imaginado; Spivak alertó sobre la imposibilidad de dar voz al subalterno bajo marcos epistémicos coloniales; Quijano y Mignolo explicitaron la matriz de poder-saber eurocéntrica que subyace a nuestras ciencias sociales y percepciones cotidianas; Dussel historizó el problema mostrando el “pecado original” encubridor de la Modernidad; Lévinas y Derrida, desde la filosofía, nos ofrecen lentes ético-deconstructivas para abrirnos a una relación con el Otro no dominadora.

Integrar estas aportaciones nos permite entender la colonialidad en la construcción de la otredad como un fenómeno complejo y multidimensional: no se trata solo de prejuicios

individuales, sino de estructuras de pensamiento, lenguaje e imaginario que naturalizan la subordinación de unos grupos por otros. Esta comprensión es fundamental para abordar críticamente el discurso mediático en el Perú sobre la protesta social (o sobre cualquier conflicto sociopolítico): nos alerta a buscar qué huellas de colonialidad hay en las narrativas (¿Se presenta a ciertos manifestantes como incivilizados o irracionales? ¿Desde qué posición de saber habla el periodista y a quién silencia o subrepresenta? ¿Qué jerarquías identitarias subyacen en la historia contada?). Asimismo, sienta bases para proponer estrategias de descolonización discursiva, promoviendo nuevas formas de representar a los sujetos subalternos en su plena agencia y dignidad, y propiciando diálogos más simétricos.

En conclusión, la colonialidad ha moldeado los regímenes de representación de la alteridad desde la conquista de América hasta nuestros días, pero al visibilizar críticamente sus mecanismos podemos empezar a desactivar sus efectos. Al articular la teoría de la colonialidad con el análisis crítico del discurso, especialmente en su dimensión sociocultural al estilo de Fairclough, disponemos de un marco potente para leer entre líneas el discurso público y evidenciar cómo lo dicho sobre “los otros” no es inocente, sino que reproduce (o desafía) relaciones de poder históricamente constituidas. Comprender estos movimientos abre la posibilidad de imaginar una esfera pública que reconozca la diferencia sin convertirla en estigma. En última instancia, desactivar la maquinaria colonial en el lenguaje significa hacer sitio a una ciudadanía plural, donde la alteridad participe como interlocutora y no como excepción tolerada. Este marco, orientado a descubrir la raíz colonial de muchos discursos, prepara el terreno para investigaciones empíricas en el Perú contemporáneo, donde la persistencia de la colonialidad del poder/saber/ser se juega en la arena mediática día a día. Comprender estos procesos es un paso necesario para imaginar un discurso verdaderamente poscolonial o decolonial, donde la otredad deje de ser sinónimo de subalternidad y se convierta en presencia plural, interlocutora y plenamente humana en el espacio público.

La síntesis del marco teórico confirma que el discurso mediático sobre la protesta peruana se produce en un cruce donde persisten tanto la colonialidad del poder como las dinámicas contemporáneas de concentración informativa. En la dimensión sociocultural, Fairclough (1992) advierte que toda práctica discursiva reproduce o cuestiona el orden social; al poner esta idea en diálogo con Quijano (2000), se evidencia que la matriz colonial continúa jerarquizando quién puede hablar y bajo qué atributos es presentado. Las investigaciones

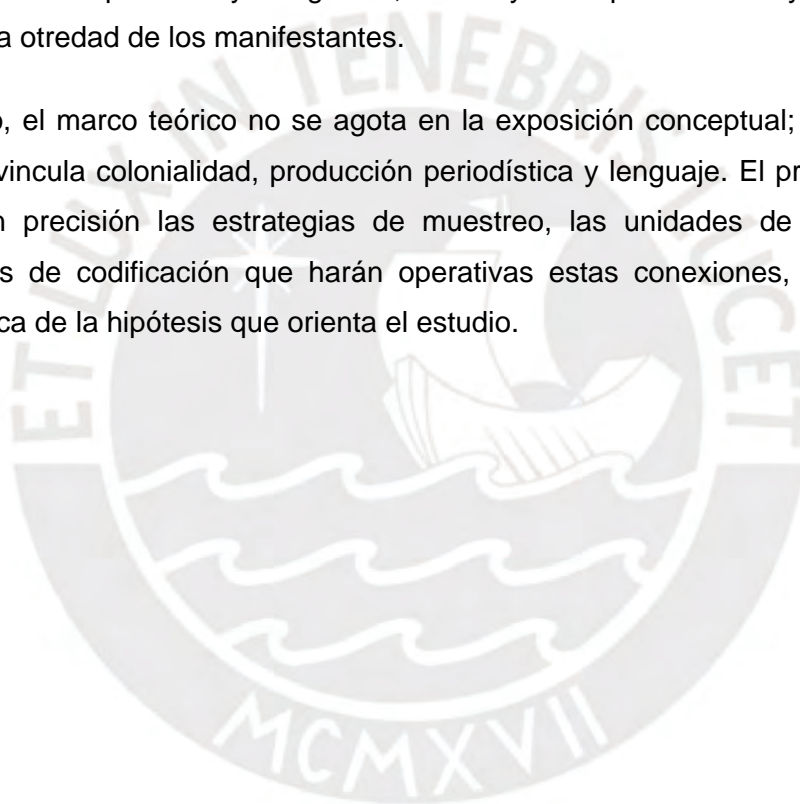
revisadas sobre prensa peruana muestran que las rutinas editoriales y la propiedad concentrada de los medios tienden a privilegiar fuentes estatales y empresariales, mientras sitúan a los manifestantes indígenas o rurales en marcos de criminalidad o atraso. Esa selección no responde únicamente a decisiones estilísticas: traduce en el presente un largo proceso histórico que definió la alteridad como objeto de control y no como interlocutora legítima.

En la dimensión de la práctica discursiva, los estudios comparados sobre líneas editoriales y procesos de sala de redacción permiten contextualizar por qué determinadas portadas se articulan con intereses económicos y políticos preexistentes. Reconocer esas mediaciones resulta crucial para el paso metodológico que sigue, pues el análisis textual no se limitará a describir titulares; buscará, más bien, rastrear cómo categorías léxicas, metáforas y estructuras sintácticas reactualizan jerarquías raciales y de clase. Con este andamiaje conceptual se abre el capítulo metodológico, que explora un corpus de portadas a través del modelo tridimensional de Fairclough, iluminando la forma en que lo cultural, lo institucional y lo lingüístico se entrelazan cuando la prensa representa el conflicto social en el Perú contemporáneo.

El entramado teórico desarrollado a lo largo del capítulo ha mostrado que las portadas periodísticas no simplemente registran acontecimientos: traducen en lenguaje visible una matriz sociocultural moldeada por la colonialidad del poder. Esta síntesis teórica demuestra que la cobertura de las protestas se sitúa en la intersección de dos fuerzas: la dimensión sociocultural del discurso, que fija los límites de lo decible en función de jerarquías coloniales persistentes, y la lógica profesional de las salas de redacción peruanas, moldeada por la concentración de la propiedad y la proximidad a los centros de poder. A partir de Quijano (2000) comprendemos que los medios no describen simplemente la realidad; su narrativa se levanta sobre una matriz racial y clasista que asigna autoridad a las voces oficiales y sospecha a los actores subalternos. Fairclough (1992) permite articular esa observación con un procedimiento analítico escalonado: primero se examina el contexto sociocultural que dota a la prensa de marcos de legitimidad, luego se exploran las rutinas productivas que convierten esas presiones estructurales en criterios de noticia, y finalmente se inspecciona el texto, donde elecciones léxicas, sintácticas y recursos de encuadre cristalizan la colonialidad en formas lingüísticas concretas.

Este encadenamiento conduce de manera natural a la metodología. El estudio partirá de trabajos empíricos que describen los vínculos entre conglomerados mediáticos y élites políticas para abarcar el análisis de la dimensión de la práctica discursiva de los medios elegidos, pues esos hallazgos ofrecen la base para caracterizar el entorno desde el cual emergen las portadas seleccionadas. A continuación se considerarán los aportes de las investigaciones sobre prácticas periodísticas en el Perú, lo que permitirá inferir cómo la jerarquía de fuentes, los criterios de relevancia noticiosa y la política de titulares operan como mecanismos intermedios entre estructura y texto. El último paso consistirá en aplicar un análisis crítico del discurso a la dimensión textual, con el fin de identificar los patrones léxicos y sintácticos que atribuyen agencia, distribuyen responsabilidad y, en definitiva, normativizan la otredad de los manifestantes.

De este modo, el marco teórico no se agota en la exposición conceptual; traza una ruta analítica que vincula colonialidad, producción periodística y lenguaje. El próximo capítulo describirá con precisión las estrategias de muestreo, las unidades de análisis y los procedimientos de codificación que harán operativas estas conexiones, preparando la prueba empírica de la hipótesis que orienta el estudio.



CAPÍTULO IV: METODOLOGÍA

4.1. Diseño de la investigación

El diseño de esta investigación es cualitativo, de carácter exploratorio, orientado a desentrañar las complejidades del discurso mediático en torno a las protestas sociales en Perú durante enero de 2023. Este enfoque se sustenta en los principios del Análisis Crítico del Discurso (ACD), que permite analizar no solo los textos, sino también las prácticas discursivas y los contextos socioculturales que configuran las narrativas mediáticas. Según Fairclough (1992), el ACD aborda la relación entre el lenguaje y las estructuras sociales, lo que resulta esencial para interpretar cómo las representaciones mediáticas refuerzan dinámicas de poder y exclusión.

El objetivo general de la investigación es analizar la representación de las protestas sociales en el discurso mediático de cuatro medios de comunicación peruanos (El Comercio, La República, El Peruano y Perú 21), identificando las estrategias discursivas e ideológicas utilizadas y su impacto en la percepción pública y la respuesta estatal. Este objetivo general se desglosa en los siguientes objetivos específicos:

- Describir y comparar la cobertura de las protestas sociales en los cuatro medios seleccionados.
- Identificar y analizar las estrategias discursivas empleadas por cada medio para representar las protestas y a sus participantes.
- Examinar la construcción de la otredad y la identidad nacional en estas coberturas mediáticas.

Para abordar estos objetivos, el diseño cualitativo permite explorar cómo los medios seleccionan, estructuran y comunican sus discursos. La dimensión exploratoria del diseño busca llenar un vacío en la literatura académica sobre la cobertura mediática de las protestas en Perú, mientras que la dimensión explicativa se centra en comprender cómo los discursos mediáticos reflejan y refuerzan desigualdades históricas y jerarquías de poder.

La investigación también plantea hipótesis ante preguntas clave sobre las dinámicas ideológicas y representacionales del discurso mediático. Primero, se asume que los medios

de comunicación, debido a sus distintas inclinaciones ideológicas, representan las protestas sociales de maneras divergentes, utilizando estrategias discursivas que reflejan sus posiciones políticas. En segundo lugar, se propone que los discursos mediáticos tienden a deslegitimar a los manifestantes y sus demandas, reforzando estereotipos en la construcción de la otredad. Finalmente, se plantea que estas representaciones mediáticas tienen un impacto significativo en la percepción pública, contribuyendo a justificar las respuestas represivas del Estado.

El diseño metodológico de esta investigación se estructuró en torno a los tres niveles propuestos por el modelo tridimensional de Fairclough (1992): análisis del texto, análisis de las prácticas discursivas y análisis de las prácticas sociales. Este enfoque fue seleccionado porque permite entender cómo los discursos de los medios en las portadas analizadas no solo comunican información, sino que construyen interpretaciones de la realidad profundamente vinculadas a dinámicas de poder y exclusión. La elección de esta metodología responde a la necesidad de articular lo textual, lo comunicacional y lo social, de manera que se pueda analizar el impacto ideológico de estas construcciones en el contexto de las protestas sociales en Perú.

Para la dimensión textual, se diseñó una ficha analítica basada en una matriz de categorías que permitió desglosar los elementos discursivos presentes en las portadas. Este instrumento se construyó a partir del marco teórico de la investigación, considerando aspectos como la representación de los actores sociales, las decisiones léxicas y visuales, y las ausencias significativas. El análisis se realizó en cada periódico, para examinar cómo cada medio de comunicación estructura su discurso en función de sus posturas ideológicas. Este enfoque detallado permitió identificar las estrategias empleadas para legitimar ciertas posiciones y deslegitimar otras, proporcionando un panorama claro de las prácticas discursivas particulares de cada medio.

La dimensión de las prácticas discursivas amplió el análisis al considerar cómo los discursos son producidos y distribuidos por los medios, y cómo estos reflejan dinámicas de poder en el contexto de la concentración mediática en Perú. Tras realizar los análisis por cada medio, se consolidaron los resultados para efectuar un análisis comparativo, buscando identificar patrones comunes y diferencias entre ellos. Este ejercicio permitió evidenciar las orientaciones ideológicas de cada medio, y explorar cómo sus discursos refuerzan o

desafían estructuras de poder establecidas, especialmente en momentos de crisis social como las protestas analizadas.

Finalmente, en el nivel de las prácticas sociales, se integraron las teorías del cuadrado ideológico de Van Dijk (1998) y la colonialidad del poder de Quijano (2000), lo que permitió situar los discursos en un marco histórico y estructural más amplio. En esta dimensión es posible explorar cómo los medios de comunicación reproducen jerarquías de exclusión a través de estrategias discursivas que configuran un “nosotros” legítimo, racional y civilizado, frente a un “ellos” percibido como irracional, violento o amenazante. El marco teórico de esta investigación plantea que dichas representaciones están profundamente atravesadas por procesos históricos de racialización y estratificación social, que tienden a desvalorizar la agencia política de los sectores populares, rurales e indígenas. Esta hipótesis articula la categoría de colonialidad del poder con la dimensión sociocultural del discurso, y permite anticipar que los discursos mediáticos no se limitan a narrar acontecimientos, sino que producen sentidos sobre lo social, legitimando ciertas posiciones de poder y marginando otras formas de enunciación política.

4.2. Fuentes, criterios de selección de portadas mediáticas y contextualización temporal

4.2.1. Justificación del análisis de portadas

La presente investigación se centra en el análisis de portadas como unidad de estudio privilegiada en la comprensión del discurso mediático sobre la protesta social. Si bien en la era digital las formas de consumo de noticias han migrado hacia plataformas móviles y redes sociales, las portadas de los diarios, tanto impresos como digitales, siguen siendo espacios de condensación simbólica de alto valor informativo. Tal como plantea Martínez-Fresneda et al. (2004), la portada actúa como un dispositivo de jerarquización editorial que estructura la mirada del lector y condensa la narrativa dominante del medio en torno a los acontecimientos del día. Su construcción es una operación de poder discursivo: decide qué hechos se consideran relevantes, qué actores son visibles, qué imágenes se fijan y desde qué marco interpretativo se representa la realidad.

Incluso en un ecosistema digitalizado, las portadas conservan su relevancia como soportes icónicos de memoria colectiva. Garcimartín (2014) observa que, en contextos de alta

tensión política, los usuarios digitales tienden a buscar y difundir las portadas impresas o en PDF como archivo del relato histórico, debido a que concentran en una sola imagen lo que el medio quiere fijar como interpretación del presente. Además, las portadas poseen un valor adicional al estar insertas en una economía política del impacto: su lenguaje gráfico, su uso del color, sus encuadres visuales y sus titulares buscan disputar el sentido común desde el primer contacto con la audiencia. En tanto objeto de análisis discursivo, la portada permite develar con claridad la posición ideológica del medio, su lógica de exclusión e inclusión, y su estrategia narrativa frente a hechos socialmente disruptivos como la protesta.

Esta elección metodológica se justifica también desde el enfoque del Análisis Crítico del Discurso (ACD), que considera a los medios no solo como reproductores de información, sino como agentes activos en la producción de significados, en la naturalización de relaciones de poder y en la construcción de identidades sociales (Fairclough, 1995; Van Dijk, 2010). Las portadas operan como el umbral entre el acontecimiento y la opinión pública. En situaciones de crisis social, como la vivida en Perú durante enero de 2023, el modo en que los medios configuran sus portadas no es neutro: es una forma de acción política a través del lenguaje visual y textual.

La elección de las portadas de la prensa escrita tradicional como objeto de estudio se sustenta en una serie de consideraciones académicas y contextuales. A pesar del auge de los medios digitales en las últimas décadas, los diarios impresos de alcance nacional en el Perú (como El Comercio, La República, Perú21, entre otros) continúan ejerciendo una influencia significativa en la configuración de la opinión pública y el agenda-setting. Las portadas de estos diarios constituyen espacios privilegiados de construcción discursiva: en ellas se condensan las noticias y enfoques que los editores consideran más relevantes cada día, definiendo así las prioridades informativas que llegarán a un amplio público. Incluso otros medios (radio, televisión e incluso portales web noticiosos) suelen tomar como referencia la cobertura y el énfasis proveniente de la prensa escrita tradicional, amplificando su impacto. Por ello, centrar el análisis en las portadas de diarios impresos permite examinar directamente las narrativas hegemónicas que circulan en la esfera pública peruana. Estas portadas, al ser elaboradas por medios de comunicación de larga trayectoria, reflejan discursos institucionalizados y legitimados socialmente, lo que las convierte en una fuente especialmente valiosa para entender cómo se presentan y significan ciertos hechos o grupos sociales desde posiciones de poder mediático.

Optar por la prensa escrita tradicional delimita claramente el alcance y propósito del estudio, en contraste con otras posibles fuentes como medios digitales alternativos o redes sociales. La investigación buscó indagar en discursos formalizados y persistentes en el tiempo, algo que las portadas impresas proporcionan mejor que el volátil ecosistema digital. Los diarios impresos suelen contar con líneas editoriales definidas, recursos estilísticos reconocibles y audiencias relativamente estables, lo que permite un análisis más controlado de sus contenidos. Por el contrario, las redes sociales y medios alternativos presentan una enorme heterogeneidad de voces, estilos y calidades de información, lo cual habría introducido mayores variables y posibles sesgos difíciles de controlar dentro de los límites de una tesis de maestría.

Analizar exclusivamente portadas impresas de prensa tradicional garantiza así una comparabilidad más sólida entre los datos recopilados (por ejemplo, es posible cotejar cómo distintos diarios tradicionales cubren un mismo hecho bajo marcos discursivos diferentes, manteniendo constantes ciertos parámetros formales). Además, desde la perspectiva teórica, la investigación se enfocó en discursos dominantes y sus relaciones con el poder: los medios impresos convencionales, por su posición privilegiada en el mercado informativo y su vínculo histórico con élites políticas y económicas, representan justamente ese ámbito de producción discursiva hegemónica que interesaba poner bajo escrutinio crítico. En suma, la decisión de estudiar portadas de prensa escrita –y no medios digitales, alternativos o redes sociales– responde a la necesidad de acotar el análisis a un corpus manejable y significativo, así como a la intención de examinar la representación mediática desde el núcleo del establishment periodístico, donde las huellas de la colonialidad y las dinámicas de poder pueden manifestarse de manera particularmente intensa y emblemática.

4.2.2. Corpus, unidades de análisis y fechas seleccionadas

El corpus de análisis comprende un total de 60 portadas de cuatro diarios (15 fechas clave de enero de 2023, seleccionadas por su relevancia en el desarrollo de las protestas: 8, 10, 11, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27 y 29 de enero de 2023). En una primera fase, se realizó un análisis de contenido cuantitativo y comparativo sobre estas 60 portadas, identificando tendencias generales en el encuadre mediático de las protestas. Posteriormente, en una segunda fase, se escogió un subconjunto de 12 portadas, correspondientes a tres días consecutivos (20, 21 y 22 de enero de 2023), para un análisis

crítico-discursivo más profundo. Estos tres días representan el punto álgido de la movilización (“Toma de Lima” y sus inmediatas secuelas) y su elección buscó permitir una comparación sincrónica entre los cuatro diarios frente a los mismos eventos. Finalmente, en una tercera fase, se integraron hallazgos tanto de la etapa extensiva (60 portadas) como de la intensiva (12 portadas) para interpretar las dinámicas discursivas en clave teórica. Esta estructura en fases asegura que los resultados combinan una visión panorámica de todo el mes con un examen detallado de momentos cruciales.

Las fechas seleccionadas como sub-corpus para un análisis a más profundidad son:

- 20 de enero de 2023
- 21 de enero de 2023
- 22 de enero de 2023

Durante esos tres días se condensaron algunos de los episodios más críticos del mes:

- El 19 de enero se llevó a cabo la llamada “Toma de Lima”, una masiva movilización encabezada por delegaciones de Puno, Ayacucho, Apurímac y Cusco. Se registraron enfrentamientos con la policía, incendios, tomas simbólicas de aeropuertos y una fuerte represión estatal.
- El 20 de enero, las portadas reflejaron el acontecimiento anterior desde encuadres radicalmente opuestos: mientras Perú21 y El Comercio hablaron de “vandalismo” y “caos”, La República apeló al derecho a la protesta y El Peruano reforzó el discurso oficial de “recuperación del orden”.
- El 21 de enero, la Policía Nacional intervino la Universidad Nacional Mayor de San Marcos sin orden judicial, deteniendo a más de 200 personas —entre ellas estudiantes, mujeres y manifestantes del sur—. El hecho fue calificado como una violación grave a los derechos fundamentales por la Defensoría del Pueblo (2023) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH, 2023).
- El 22 de enero, las portadas reflejaron la fractura discursiva: los medios oficialistas destacaron la “recuperación de la paz” mientras La República denunció “represión inconstitucional” y mostró imágenes de detenidos en condiciones degradantes.

4.2.3. Línea de tiempo contextual del conflicto durante el mes de enero 2023

Para enriquecer el análisis y dar cuenta del trasfondo histórico de las portadas seleccionadas, se construyó la siguiente línea de tiempo, basada en informes de la Defensoría del Pueblo (2023), la CIDH (2023) y fuentes secundarias verificadas:

Fecha	Evento relevante
4 de enero	Inician bloqueos y protestas en Puno, Cusco y Arequipa. Se incendian oficinas públicas en Juliaca.
9 de enero	Masacre de Juliaca: 18 muertos y más de 100 heridos por intervención de la PNP.
12–17 enero	Escalada del conflicto: bloqueos, suspensión de eventos, militarización de regiones del sur.
18 de enero	Llegada de delegaciones del sur a Lima. Se instalan en la UNMSM como refugio simbólico.
19 de enero	“Toma de Lima”: marchas masivas, enfrentamientos, incendio del edificio Marcionelli, represión policial.
20 de enero	Portadas criminalizan la protesta. Se refuerza el discurso oficial de “todo el peso de la ley”.
21 de enero	Intervención policial sin orden judicial en San Marcos. Detenciones arbitrarias y denuncias de violación.
22 de enero	Fractura narrativa en los medios. Denuncias nacionales e internacionales de uso excesivo de la fuerza.
23–29 enero	Continuación de protestas en Lima e Ica. Se contabilizan más de 50 muertos en el país.

4.2.4. Diarios elegidos para el análisis

La muestra se compone de cuatro diarios de circulación nacional, seleccionados por representar diversos sectores ideológico-políticos de la prensa peruana contemporánea. Se incluye El Comercio, tradicional diario liberal-conservador de élite (fundado en 1839), considerado el decano y uno de los medios más influyentes en Lima y entre las élites políticas-económicas. Por contraste, se incorpora La República, diario de centro-izquierda progresista fundado en 1981, de postura socioliberal, antifujimorista y socialdemócrata, con amplia cobertura regional (en 2021 fue el diario con mayor presencia en al menos ocho departamentos del país). Como exponente de la prensa conservadora popular se selecciona Perú21 (Grupo El Comercio) – diario de formato tabloide con línea editorial de derecha dura, cuyo estilo sensacionalista contrasta con los anteriores. Finalmente, El Peruano, diario oficial del Estado, es incluido dada su relevancia institucional y el giro observado en su línea editorial bajo el gobierno de Dina Boluarte. El Peruano históricamente publica principalmente normas legales y comunicados oficiales, actuando como vocero del gobierno de turno; analizar su cobertura informativa de las protestas permite contrastar el tratamiento estatal con el de la prensa independiente. Su presencia aporta un punto de contraste indispensable para comprender la circulación de marcos de orden y estabilidad desde el aparato estatal y su diálogo con la prensa privada. Se reconoce como limitación que la muestra no incorpora un diario explícitamente de izquierda opositora, como Diario UNO. La decisión responde a criterios de alcance nacional, disponibilidad estable de archivo y comparabilidad de líneas editoriales en un mismo periodo. Esta acotación no impide captar la diversidad ideológica principal, ya que la combinación de un diario liberal de referencia, uno progresista con anclaje regional, un tabloide de corte conservador y el diario oficial estatal produce un espectro suficiente para los objetivos del estudio. La limitación queda consignada y se plantea como una oportunidad de ampliación del corpus en futuras investigaciones.

A. El Comercio

Fundado en 1839 por Manuel Amunátegui, un ciudadano chileno, junto con el argentino Alejandro Villota, lanzaron el primer ejemplar del periódico el 4 de mayo de ese año. La publicación se inició como un periódico comercial, político y literario con el lema "orden, libertad, saber". En sus inicios, El Comercio fue concebido como una hoja con dos caras, y a partir de agosto de 1839, se lanzó una edición matutina, mientras que la edición vespertina se mantuvo como la edición original. Posteriormente, la dirección del periódico pasó a manos de Luis Carranza Ayarza y José Antonio Miró Quesada, formando la empresa

Carranza, Miró Quesada y Compañía. Con el tiempo, la familia Miró Quesada adquirió mayor control sobre el periódico, y desde 1898, han mantenido su influencia en la dirección de El Comercio. A lo largo de su historia ha mantenido una línea editorial conservadora, alineada con intereses empresariales, sectores tradicionales limeños y defensores del modelo económico neoliberal. Su centralidad en la esfera pública peruana lo posiciona como formador de opinión y constructor del sentido común dominante. Diversos estudios han advertido sobre su rol ideológico, especialmente durante procesos de crisis política y conflicto social, en los que su discurso tiende a favorecer la estabilidad institucional por encima de las demandas ciudadanas (Bolo Varela, 2016).

Durante el conflicto de Bagua en 2009, por ejemplo, El Comercio minimizó la responsabilidad del Estado y privilegió un enfoque securitario, destacando la violencia de los manifestantes antes que las causas estructurales del conflicto. Este patrón discursivo ha sido documentado por Arrunátegui (2010), quien identifica un sesgo racial y de clase en la representación de los pueblos indígenas amazónicos. El mismo esquema se ha replicado en la cobertura de conflictos mineros y, más recientemente, en la representación de las protestas de 2022 y 2023, donde el diario aplicó un encuadre centrado en el “caos” y la “irracionalidad” de las movilizaciones, relegando el análisis político de fondo.

Además de su línea editorial, El Comercio ha sido objeto de polémica por su concentración de propiedad. En 2013, adquirió el Grupo Epsa, operación que le permitió controlar más del 75% del mercado de prensa escrita del país, lo cual generó una alerta pública sobre los riesgos a la pluralidad informativa. La Relatoría para la Libertad de Expresión de la CIDH expresó preocupación por esta situación, advirtiendo que tal nivel de concentración “afecta seriamente el derecho a la libertad de expresión” (CIDH, 2014). Aunque posteriormente esta fusión fue anulada por el INDECOPI, el episodio dejó en evidencia la fragilidad del sistema de medios peruano frente a la captura empresarial.

En términos simbólicos, El Comercio encarna un dispositivo de legitimación del orden establecido. Su retórica institucional, el uso de fuentes gubernamentales y empresariales como principales voces, y su escasa apertura a narrativas populares o subalternas, contribuyen a reproducir una visión jerárquica de la ciudadanía. Van Dijk (2010) plantea que los medios dominantes ejercen su poder no solo mediante lo que dicen, sino también mediante lo que silencian: en el caso de El Comercio, la omisión sistemática de voces indígenas, rurales o críticas refleja una estructura colonial persistente. Así, el diario no solo

informa, sino que moldea el imaginario colectivo de lo “normal”, lo “legal” y lo “aceptable” en el Perú contemporáneo.

B. La República

La República, fundado en 1981 por el periodista y político Gustavo Mohme Llona, se consolidó desde sus inicios como una alternativa progresista dentro del ecosistema mediático peruano. Su línea editorial ha estado históricamente vinculada a valores democráticos, pluralismo político, descentralización y defensa de los derechos humanos. A diferencia de otros diarios de alcance nacional, La República ha ofrecido una cobertura sistemática de los conflictos sociales desde perspectivas más inclusivas, poniendo en primer plano las demandas de actores históricamente marginados. Esto le ha valido el reconocimiento como una plataforma contrahegemónica en un sistema mediático fuertemente centralizado y oligopólico (Arrunátegui, 2010).

Durante el conflicto de Bagua en 2009, La República destacó por ofrecer un tratamiento más contextualizado del problema, visibilizando a los líderes indígenas y las demandas territoriales frente a la omisión predominante en otros medios. En el análisis comparativo realizado por Arrunátegui (2010), se concluye que La República recurrió a una representación más simétrica de los actores, alejándose del encuadre binario “orden vs. barbarie” adoptado por diarios como El Comercio. En coyunturas posteriores —como la huelga magisterial de 2017 o las protestas por la vacancia de Pedro Castillo en 2022—, el diario mantuvo su perfil editorial crítico del poder ejecutivo y abierto al debate público con enfoque territorial y social.

No obstante, este posicionamiento no ha estado exento de tensiones. La propiedad del medio, actualmente en manos del Grupo La República, ha enfrentado acusaciones de sesgo político en momentos clave, especialmente durante las campañas presidenciales. En 2021, por ejemplo, diversos analistas y estudios críticos señalaron un alineamiento editorial con el candidato Pedro Castillo en la segunda vuelta electoral frente a Keiko Fujimori (Mendoza, 2022). Sin embargo, a diferencia de otros medios concentrados, La República ha mantenido una mayor apertura a la disidencia interna y ha ofrecido espacio a voces intelectuales, movimientos sociales y ONGs de derechos humanos, reflejando una mayor diversidad en su agenda.

Desde una perspectiva simbólica, La República cumple una función de mediación entre el Estado y los sectores populares, particularmente aquellos provenientes del “Perú profundo”. Su estilo narrativo enfatiza la humanidad de los actores sociales, personaliza a los manifestantes, y contextualiza los hechos dentro de procesos históricos de exclusión y desigualdad. Como señala Van Dijk (2010), este tipo de discurso mediático ofrece un contra-marco ideológico que visibiliza la violencia estructural y cuestiona los discursos de dominación. En las protestas de enero de 2023, por ejemplo, La República optó por titulares como “Día de protestas” o “Represión inconstitucional”, desmarcándose de los encuadres criminalizantes y reproduciendo testimonios de líderes provincianos y defensores de derechos fundamentales (Bolo Varela, 2023). En suma, el diario representa una voz editorial que, sin ser completamente antagonista al poder, ofrece un marco interpretativo más crítico, plural y decolonial que sus competidores conservadores.

C. El Peruano

El Peruano es el diario oficial del Estado peruano, fundado en 1825 por decreto de Simón Bolívar. Su misión institucional consiste en publicar las normas legales, decretos, resoluciones y comunicados oficiales del aparato estatal, así como informar sobre las actividades del gobierno. Aunque cuenta con secciones periodísticas, su función principal no es periodismo de investigación ni cobertura crítica, sino la reproducción del discurso oficial. Esta característica convierte a El Peruano en un medio de comunicación sui generis dentro del ecosistema informativo nacional, pues más que formar parte del mercado libre de prensa, actúa como vocero del Ejecutivo y las instituciones públicas. Su rol simbólico es el de legitimador del orden político vigente, sin espacio para la oposición o el cuestionamiento (Defensoría del Pueblo, 2023).

Durante coyunturas de conflicto social, como las protestas amazónicas de 2009 o las movilizaciones tras la vacancia de Pedro Castillo en 2022, El Peruano ha mostrado una estrategia discursiva de minimización del conflicto y omisión de voces disidentes. La información publicada sobre estos eventos privilegia declaraciones oficiales, partes policiales, y reportes gubernamentales. Como señala Van Dijk (2010), este tipo de práctica constituye una forma de poder simbólico que se ejerce no solo a través de lo que se dice, sino especialmente a través de lo que se silencia. En enero de 2023, por ejemplo, mientras organismos nacionales e internacionales denunciaban violaciones a derechos humanos en la intervención a la UNMSM y en las regiones del sur, El Peruano evitó mencionar estos

hechos en sus titulares, enfocándose en mensajes del Ejecutivo como “el país está en calma” o “el gobierno llama al diálogo”.

Este tipo de cobertura, al limitarse a reproducir el discurso del poder, reproduce una lógica de encubrimiento institucional que dificulta el acceso a una información equilibrada y plural. Como advierte la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (CIDH, 2021), los medios estatales deben garantizar el derecho a la información desde una perspectiva de interés público, lo que implica no convertirse en simples plataformas propagandísticas del gobierno de turno. En el caso peruano, esta función ha sido históricamente desvirtuada. Durante el gobierno de Dina Boluarte, por ejemplo, El Peruano se convirtió en un mecanismo de validación de las medidas represivas adoptadas frente a las protestas sociales, presentando las acciones del Estado como “legítimas”, “legales” y “necesarias para restablecer el orden”.

Desde un enfoque crítico del discurso, el rol de El Peruano puede ser interpretado como el de un artefacto estatal de reproducción ideológica. Según Bourdieu (1997), los dispositivos institucionales como los boletines oficiales cumplen la función de consolidar la visión del mundo del campo dominante, presentando como neutral aquello que es en realidad profundamente político. En este sentido, El Peruano refuerza la hegemonía estatal, no solo al publicar normas legales, sino al construir una narrativa de país en la que las protestas no existen, o si existen, son expresiones desviadas que deben ser “controladas”. En lugar de representar a la sociedad, representa al Estado; en lugar de interpelar al poder, lo enuncia. Esta asimetría convierte su papel en la esfera pública en uno de clausura del debate más que de apertura al pluralismo.

D. Perú21

Perú21 fue fundado en 2002 como parte del Grupo El Comercio, con el objetivo explícito de captar un público joven, urbano y políticamente interesado, pero menos apegado al estilo tradicional de diarios como El Comercio. Desde sus inicios, apostó por un formato gráfico más ágil, un lenguaje coloquial y titulares provocadores. Sin embargo, este estilo informal no implicó una neutralidad ideológica: Perú21 se ha consolidado como un diario abiertamente alineado con posiciones conservadoras, promercado y con fuerte hostilidad hacia discursos de izquierda, movimientos populares y expresiones de protesta social. En ese sentido, más que ofrecer análisis pluralistas, el diario se ha especializado en reforzar marcos ideológicos de criminalización del conflicto y estigmatización del disenso (Bolo Varela, 2016).

Durante las protestas sociales del periodo 2011–2023, Perú21 ha desempeñado un rol protagónico en la construcción de la figura del “enemigo interno”, apelando a categorías como “terroristas”, “vándalos”, “radicales” o “violentistas” para referirse a los manifestantes. Esta estrategia, identificada por Van Dijk (2010) como parte del “cuadro ideológico” de la prensa conservadora, se basa en reforzar lo positivo del grupo propio (“ciudadanos responsables”, “autoridades firmes”) y lo negativo del otro (“turba”, “hordas”, “delincuentes infiltrados”). En enero de 2023, por ejemplo, en plena “Toma de Lima”, Perú21 tituló su portada con frases como “El fuego es su estrategia” y publicó imágenes espectaculares de incendios y disturbios, sin contextualizar los motivos de la protesta ni las demandas sociales (Silva Escobar, 2023).

Este enfoque sensacionalista no se limita al lenguaje gráfico o visual, sino que también permea las editoriales y columnas de opinión. Figuras recurrentes como Aldo Mariátegui o Cecilia Valenzuela han utilizado el espacio editorial de Perú21 para promover discursos anticomunistas, clasistas y abiertamente racistas, en especial durante procesos electorales polarizados como los de 2016 y 2021. Mendoza (2022) advierte que este tipo de retórica cumple una función política clara: deslegitimar la participación política de sectores populares y asociar toda demanda de transformación estructural con el terrorismo. En este sentido, Perú21 opera más como un actor político-mediático que como un canal informativo neutral, reforzando la narrativa del miedo y el castigo como respuestas al conflicto.

Desde el punto de vista del análisis crítico del discurso, Perú21 representa una forma contemporánea de populismo mediático autoritario. A través de un estilo combativo, una estética de indignación permanente y la constante alusión al “caos” como amenaza, el diario contribuye a moldear un sentido común punitivo y excluyente. Como sostiene Bolo Varela (2023), este tipo de medios no solo reflejan una visión conservadora del orden, sino que participan activamente en la producción simbólica de jerarquías ciudadanas: algunos sujetos merecen derechos, otros deben ser disciplinados. Así, Perú21 se inscribe dentro de una lógica de comunicación política donde el objetivo no es informar, sino movilizar afectos (ira, miedo, desprecio) en defensa del modelo dominante. Su rol en el ecosistema mediático peruano es el de un acelerador de discursos polarizantes que, lejos de contribuir al diálogo democrático, consolidan la exclusión estructural.

4.3. Matriz de categorías para el análisis crítico del discurso

Esta tabla de categorías está inspirada en los estudios de John E. Richardson, quien, en su libro "Analysing Newspapers: An Approach from Critical Discourse Analysis" (2007), propone una metodología detallada para analizar textos periodísticos desde el enfoque del Análisis Crítico del Discurso (ACD). El ACD, como enfoque teórico y metodológico, busca desentrañar las relaciones de poder y las ideologías que se construyen y reproducen a través del lenguaje en los medios de comunicación. Richardson sostiene que los periódicos no solo informan sobre los hechos, sino que también participan activamente en la construcción de la realidad social, influenciando la percepción pública de los actores y eventos, y legitimando o deslegitimando ciertas posturas políticas y sociales. Su enfoque propone la disección de elementos discursivos clave como el léxico, la estructura narrativa y la representación de actores sociales para comprender cómo los medios ejercen poder simbólico.

Richardson utiliza el Análisis Crítico del Discurso para estudiar cómo los periódicos construyen ideologías mediante la representación de actores y eventos, centrándose en la agencia (quién realiza la acción) y en la estructura de los textos periodísticos. Según su análisis, los periódicos seleccionan cuidadosamente los temas a destacar, los actores a visibilizar o invisibilizar, y las acciones a enfatizar o minimizar, lo que configura una versión particular de los eventos. El ACD permite, entonces, analizar cómo los medios refuerzan relaciones de poder a través de narrativas que legitiman a ciertos actores (por ejemplo, las fuerzas del orden) mientras deslegitiman a otros (por ejemplo, los manifestantes). Para eso, Richardson destaca la importancia de analizar tanto los aspectos textuales como visuales de las noticias, ya que ambos son fundamentales para la construcción de significado.

Para el análisis de la representación de la protesta social, esta tabla de categorías ha sido adaptada tomando como base los principios del ACD propuestos por Richardson, pero ajustada específicamente a las portadas de periódicos que cubren las protestas en Perú durante enero de 2023. Las portadas de los periódicos juegan un rol crucial en la formación de la opinión pública, ya que no solo presentan los eventos, sino que también enmarcan la narrativa en torno a ellos. Mediante la selección de imágenes, títulos, subtítulos y otros elementos visuales y textuales, las portadas pueden construir una imagen positiva, negativa o neutral de las protestas y de los actores involucrados, ya sean los manifestantes, el gobierno o las fuerzas del orden. Por tanto, esta tabla se enfoca en analizar cómo se

representan estos actores sociales, qué lenguaje se utiliza para describir los eventos y cómo se construye la legitimidad o ilegitimidad de la protesta.

Categoría	Descripción	Preguntas Clave	Valoración / Código
1. Título Principal	Analiza el enfoque del título principal en la portada, su tono y carga ideológica.	¿El título presenta el evento de manera neutral o sensacionalista? ¿Qué conceptos o temáticas resaltan?	Neutral / Sensacionalista Violencia / Paz / Caos / Orden
2. Bajada	Examina si la bajada complementa o refuerza el contenido del título y si ofrece un contexto adicional o matiz.	¿Amplía la información o refuerza el mensaje del título? ¿Ofrece detalles adicionales o se limita a reforzar?	Amplía / Refuerza Matiza / No matiza
3. Volada	Evalúa la volada y su función: introduce, contextualiza o enfatiza el hecho presentado en el título principal.	¿Cómo enmarca la noticia? ¿Aporta un contexto inicial o prepara al lector para una narrativa específica?	Introduce / Contextualiza / Enfatiza
4. Subtítulos	Análisis de cualquier subtítulo o texto que acompañe imágenes o notas secundarias en la portada.	¿Complementa la noticia principal? ¿Contradice o refuerza el discurso principal?	Refuerza / Contradice
5. Imágenes y Elementos Visuales	Evalúa las imágenes en cuanto a su función (acompañamiento, refuerzo o contradicción) y su carga emocional.	¿Qué emociones genera la imagen? ¿Refuerza el texto? ¿Qué representación visual se da a los actores sociales?	Emotiva / Neutra Refuerza / Contradice
6. Contexto Social e Ideológico	Analiza cómo la portada refleja o se alinea con el contexto social y político de las protestas.	¿El contexto es de tensión, estabilidad, violencia? ¿Se promueve o desafía una narrativa ideológica dominante?	Tensión / Estabilidad Promueve / Desafía
7. Tematización Principal y Secundaria	Identifica los temas principales y secundarios que aparecen en la portada.	¿Cuáles son los temas principales que se enfatizan?	Conflicto / Diálogo / Soluciones / Seguridad

8. Representación de Actores Sociales	Evalúa cómo los actores involucrados en las protestas (gobierno, manifestantes, fuerzas de seguridad) son representados (como agentes activos, pasivos, victimizados, criminalizados).	¿Qué actores se destacan en la portada? ¿Cómo son representados? (víctimas, héroes, villanos)	Actores visibilizados / Actores ausentes
9. Agencia y Responsabilidad	Analiza qué actor es presentado como el principal responsable de las acciones descritas en la portada (gobierno, manifestantes, fuerzas de seguridad).	¿Quién es presentado como el agente activo? ¿Hay un responsable claro o se presenta como un conflicto sin culpables definidos?	Gobierno / Manifestantes / Fuerzas del orden
10. Elección Léxica y Estilo	Evalúa el lenguaje utilizado en la portada, considerando su carga emocional, ideológica y su nivel de formalidad o sensacionalismo.	¿Es un lenguaje formal, técnico, emotivo o sensacionalista? ¿Se utilizan palabras con connotación negativa o positiva?	Emotivo / Sensacionalista / Neutral
11. Modalización y Grado de Certeza	Examina si las afirmaciones en los titulares y otros textos expresan certeza o especulación, y si el lenguaje utilizado sugiere hechos o interpretaciones.	¿Se presentan los eventos como hechos cerrados o como algo especulativo? ¿Se utilizan modalizadores como “podría”, “parece”?	Certeza / Especulación
12. Estructura Narrativa	Evalúa cómo se organiza la narración de los eventos en la portada y si prioriza algunos hechos sobre otros.	¿Se narra cronológicamente o se prioriza el conflicto? ¿Hay un énfasis en los resultados o en las causas del conflicto?	Lineal / Priorización de conflicto
13. Retórica Visual y Simbología	Analiza el uso de símbolos, colores y formas en la portada, observando cómo refuerzan o desafían el discurso textual.	¿Qué simbología o colores predominan? ¿Cómo influye visualmente en la percepción de los eventos descritos?	Refuerza / Contradice Emotivo / Neutro
14. Intertextualidad	Identifica si la portada hace referencia a otras noticias, eventos o historias previas, y cómo esto influye en la interpretación del lector.	¿Se conectan los eventos actuales con noticias previas o contextos históricos?	Sí / No Explícita / Implícita
15. Ausencias Textuales y Visuales	Evalúa qué elementos, actores o eventos relevantes son omitidos o minimizados en la portada, y el posible impacto de estas ausencias en la narrativa general.	¿Qué actores o eventos están ausentes? ¿Cómo influye esto en la interpretación del lector?	Ausentes / Presentes

16. Consecuencias Ideológicas y Sociales	Analiza cómo el contenido de la portada puede reforzar o desafiar ciertas ideologías, y cómo esto podría afectar la percepción de las protestas y sus actores sociales.	¿El discurso refuerza o desafía al gobierno? ¿Cómo podría influir en la percepción de las protestas por parte del público?	Refuerza / Desafía Impacto positivo / negativo
---	---	---	---

En concreto, las 16 categorías incluidas en la tabla permiten un análisis detallado de los elementos clave de las portadas, incluyendo el título principal, la bajada, las imágenes, la selección léxica, y la representación de los actores sociales, entre otros. Cada una de estas categorías está diseñada para identificar las estrategias discursivas e ideológicas que los medios de comunicación emplean para construir una narrativa sobre las protestas. Siguiendo los lineamientos del ACD, se analiza no solo lo que se dice, sino también lo que se omite, las ausencias textuales y visuales, y cómo la elección de palabras y el tono del discurso pueden influir en la percepción pública de la protesta. Esta adaptación de la metodología de Richardson para el análisis de portadas sobre las protestas sociales en Perú busca ofrecer una comprensión crítica y profunda de cómo los medios moldean la narrativa en momentos de conflicto social.

El enfoque crítico de esta matriz responde a la necesidad de analizar el contenido de las portadas y también a la responsabilidad de reflexionar sobre las herramientas utilizadas para hacerlo. Como señala Pierre Bourdieu (1991), cualquier análisis corre el riesgo de reproducir las mismas jerarquías que pretende criticar si no se cuestiona constantemente sus propios presupuestos. En este sentido, la matriz no es un sistema rígido ni un fin en sí mismo, sino un recurso abierto a revisiones y reinterpretaciones. Cada categoría está diseñada para capturar las múltiples capas narrativas de las portadas, desde su estructura textual hasta su impacto simbólico, permitiendo explorar las complejidades de los discursos sin imponer una única lectura.

Esta flexibilidad se conecta con la idea foucaultiana de que el discurso describe la realidad pero además la produce y regula (Foucault, 1980). Las portadas de los periódicos no son simples transmisoras de información; son prácticas discursivas que configuran lo que se considera verdadero, legítimo o relevante en un contexto determinado. La matriz, al incluir categorías como las consecuencias ideológicas y sociales, permite analizar cómo estas narrativas afectan las percepciones del público y refuerzan ciertas posiciones de poder, mientras silencian o excluyen otras. Este enfoque no solo enriquece el análisis, sino que

también nos obliga a ser críticos con nuestras propias herramientas, reconociendo que toda práctica analítica está atravesada por dinámicas de poder.

El propósito de esta matriz es, por tanto, doble. Por un lado, organiza el análisis para abordar las portadas desde múltiples dimensiones, como el contexto social e ideológico, la tematización principal y secundaria, y la selección léxica y estilística. Por otro, fomenta una reflexión crítica que va más allá de las portadas mismas, cuestionando los discursos que construyen y las herramientas que utilizamos para analizarlas. Esto se traduce en un compromiso ético con el objeto de estudio, donde el objetivo no es etiquetar o categorizar de manera rígida, sino comprender y desentrañar las dinámicas discursivas con rigor y sensibilidad.

Lejos de buscar respuestas definitivas, la matriz invita a formular preguntas que abran nuevas líneas de análisis: ¿qué discursos refuerzan las portadas?, ¿qué voces y perspectivas son omitidas?, ¿cómo se configuran las jerarquías y legitimidades a través de los discursos? ¿qué estrategias discursivas son utilizadas? Estas preguntas no solo son esenciales para entender las portadas, sino también para reflexionar sobre el papel del discurso en la construcción de la realidad social. Así, la matriz se posiciona como un puente entre la descripción y la interpretación crítica, respetando siempre la riqueza y la diversidad de los significados presentes en todos los discursos mediáticos.

4.4. Proceso de codificación y análisis de datos

La codificación del corpus se realizó mediante la aplicación de una matriz de 16 categorías diseñada específicamente para el análisis de portadas de diarios, adaptada a partir de los lineamientos metodológicos del Análisis Crítico del Discurso (ACD), en particular los desarrollados por autores como Fairclough (1995), van Dijk (1998), van Leeuwen (2008) y Richardson (2007). Esta matriz fue elaborada con el objetivo de permitir una observación sistemática, estructurada y coherente del discurso mediático, focalizada en su forma de representar las protestas sociales durante un periodo de alta intensidad política.

Las categorías fueron construidas a partir de una revisión exhaustiva de estudios previos sobre prensa, discurso y representación ideológica, y organizadas en torno a cuatro dimensiones analíticas: textual (títulos, subtítulos, bajadas, voladas y selección léxica), visual (imágenes, colores, composición gráfica, simbología), contextual (tematización

principal y secundaria, intertextualidad, omisiones) e ideológica (representación de actores sociales, agencia y responsabilidad, consecuencias del discurso). Esta clasificación responde al propósito de cubrir los principales niveles en los que se articula la significación de una portada: desde sus elementos superficiales hasta sus estructuras ideológicas subyacentes.

Cada categoría está acompañada de una definición operativa, preguntas guía y un sistema de valoración codificado, con el fin de garantizar consistencia analítica y trazabilidad interpretativa. La matriz fue aplicada individualmente a cada una de las 60 portadas incluidas en el corpus, correspondientes a cuatro diarios de circulación nacional (El Comercio, La República, Perú21 y El Peruano) durante 15 fechas claves de enero de 2023. El criterio de análisis fue exhaustivo: todas las unidades visuales y textuales principales fueron examinadas según los parámetros de la matriz.

El proceso de codificación se desarrolló en tres fases: una primera fase de análisis individual por portada, una segunda de sistematización por medio, y una tercera fase comparativa, centrada en los días 20, 21 y 22 de enero, por su especial relevancia política y mediática. Este enfoque permitió no solo caracterizar el discurso de cada cabecera, sino también observar desplazamientos, convergencias o divergencias discursivas a lo largo del tiempo.

La codificación adoptó un enfoque cualitativo de base inductiva, apoyado en descripciones densas, contrastes recurrentes y codificación manual controlada. Aunque la matriz incorpora elementos valorativos, su función no fue cuantificar categorías, sino guiar el análisis estructurado de patrones discursivos. El uso de fichas individualizadas permitió registrar tanto configuraciones dominantes como rupturas y contradicciones internas, manteniendo una atención constante a las operaciones de énfasis, omisión, encuadre y atribución de sentido presentes en las portadas.

La presente matriz fue concebida como un soporte metodológico flexible, que estructura la observación sin restringir la interpretación. Su utilidad residió en permitir una lectura rigurosa del discurso mediático desde una lógica comparativa, transversal y argumentativa, adaptada a las especificidades del material periodístico trabajado. A continuación se precisa con mayor detalle cada categoría.

A. Título principal

El análisis del título principal se fundamenta en su rol estructural como eje semántico y jerárquico de la portada. No solo anticipa el contenido central de la noticia, sino que define su marco interpretativo dominante. Van Dijk (1998) señala que los titulares actúan como "macroproposiciones" que condensan el posicionamiento ideológico del medio, seleccionando hechos, jerarquizándolos y dotándolos de una interpretación moralmente orientada. Esta función enmarcadora convierte al título en un objeto privilegiado para el Análisis Crítico del Discurso (ACD), especialmente en contextos de conflicto social, donde la elección léxica y el tono adquieren connotaciones políticas directas.

Siguiendo lo estipulado en la matriz metodológica, esta categoría considera dos indicadores clave: (1) el tipo de tono discursivo (neutral vs. sensacionalista), y (2) los conceptos predominantes (violencia, paz, caos, orden, entre otros). Estos valores no son arbitrarios, sino que responden a marcos interpretativos detectados empíricamente en investigaciones sobre representación mediática del conflicto (Fairclough, 1995; Richardson, 2007). Por ejemplo, titulares que emplean términos como "vándalos", "caos" o "terror" suelen estar cargados de juicios implícitos que criminalizan al actor representado y activan marcos de amenaza o desestabilización. En contraste, el uso de términos como "protesta", "exigencia" o "movilización" puede enmarcar la acción como legítima.

Las preguntas clave formuladas en la matriz ("¿El título presenta el evento de manera neutral o sensacionalista?" y "¿Qué conceptos o temáticas resaltan?") permiten operacionalizar el análisis mediante una codificación clara. Esta metodología posibilita la comparación entre medios con líneas editoriales distintas, revelando sesgos ideológicos, estilos de narración y prácticas de construcción de alteridad. La elección de este valor operativo se justifica no solo por su relevancia teórica, sino también por su impacto empírico demostrado: diversos estudios han documentado que los lectores digitales consumen, en su mayoría, solo el título antes de emitir una opinión o compartir una noticia (Dor, 2003; Bell, 1991).

B. Bajada

La bajada o subtítulo inmediato, ubicada debajo del titular principal, desempeña una función clave de densificación semántica. A diferencia del titular, que sintetiza, la bajada desarrolla o matiza. Como argumenta Richardson (2007), las bajadas son espacios discursivos donde los medios "refinan el posicionamiento editorial" mediante la introducción de detalles contextuales, modulación del tono o ampliación del significado. Esta categoría, por tanto,

resulta fundamental para evaluar si el medio confirma o reorienta la narrativa iniciada en el título.

La matriz incluye dos indicadores esenciales: (1) relación semántica con el título (“¿Amplía la información o refuerza el mensaje del título?”) y (2) función valorativa (“¿Matiza o no matiza?”). La selección de estos indicadores responde a la necesidad de captar operaciones editoriales de modulación ideológica. Por ejemplo, una bajada que refuerza un titular sensacionalista consolida el marco dominante, mientras que una que introduce datos, nombres propios o contexto histórico, puede atenuar o complejizar la lectura del hecho. La elección de códigos como "amplía", "refuerza", "matiza" o "no matiza" permite codificaciones contrastables que facilitan un análisis intersubjetivo y reproducible.

Esta categoría adquiere relevancia adicional en casos donde el titular es ambiguo o metafórico: la bajada entonces actúa como decodificador ideológico. Su análisis, por tanto, no se reduce a su sintaxis o léxico, sino que requiere considerar sus efectos pragmáticos sobre el encuadre general de la noticia.

C. Volada

La volada, o pre-título, representa una zona discursiva con fuerte carga de direccionamiento interpretativo. Aunque su visibilidad tipográfica es baja, su función en la arquitectura de sentido es determinante. Según Van Leeuwen (2008), los pre-títulos forman parte del conjunto de "dispositivos de encuadre" que orientan la percepción desde los márgenes del texto hacia el núcleo. En esta categoría, la matriz propone tres valores operativos: introduce, contextualiza o enfatiza, derivados de una lectura semiótica del papel de la volada en el aparato narrativo.

Las preguntas clave, “¿Cómo enmarca la noticia?” y “¿Aporta un contexto inicial o prepara al lector para una narrativa específica?”, buscan identificar el rol de la volada como herramienta de anticipación discursiva. Este análisis permite observar si se presenta una cronología previa (introducción), un marco institucional o social (contextualización), o si se enfatiza una emoción o resultado (énfasis). Por ejemplo, la volada “Más violencia en el sur” no solo informa: genera un pre-judicio que predispone al lector a interpretar el titular como continuación de una serie negativa.

La inclusión de esta categoría en la matriz responde a su poder heurístico. En contextos de protesta social, las voladas suelen condensar juicios editoriales, juicios previos o

referencias intertextuales implícitas. Su codificación revela estrategias de alineamiento ideológico sutiles pero decisivas en el marco de construcción simbólica del conflicto.

D. Subtítulos

Los subtítulos que acompañan a elementos visuales o noticias secundarias cumplen una función estratégica dentro del discurso multimodal de la portada. Como señala Fairclough (1995), el discurso periodístico se compone de múltiples "movimientos" que construyen sentido por acumulación, yuxtaposición o contradicción. Esta categoría, por tanto, se orienta a detectar si los subtítulos refuerzan o contradicen el discurso dominante establecido por el título y la bajada.

La matriz establece dos indicadores operativos: (1) ¿Complementa la noticia principal?, y (2) ¿Refuerza o contradice la narrativa principal? Estos indicadores permiten observar si hay coherencia interna entre los distintos niveles del texto visual o si emergen tensiones ideológicas. La elección de los códigos "refuerza" y "contradice" responde a la necesidad de registrar contrastes semánticos dentro del espacio editorial: en algunos casos, el subtítulo puede introducir una voz crítica, un dato omitido o una representación visual divergente que complejiza la interpretación del lector.

Esta categoría también habilita un análisis más fino del posicionamiento del medio frente a su audiencia: ¿busca una narrativa cerrada o introduce ambigüedad para ampliar la recepción? El análisis se centra, por tanto, en la relación semiótica entre subtítulos, imágenes y titulares, entendidos como componentes integrados de una misma práctica discursiva.

E. Imágenes y elementos visuales

El componente visual de la portada posee una fuerza simbólica que no solo acompaña, sino que puede dirigir o modificar el significado del texto. Como argumentan Kress y van Leeuwen (2006), las imágenes poseen una gramática propia, basada en la composición, el encuadre, el ángulo y la distancia, que produce sentido de manera tan estructurada como el lenguaje verbal. En la matriz metodológica, esta categoría propone tres indicadores clave: (1) carga emocional (emotiva o neutra), (2) función respecto al texto (refuerza o contradice), y (3) representación visual de los actores sociales.

Estas dimensiones permiten evaluar si la imagen contribuye a legitimar el encuadre del texto, a complejizarlo o a introducir un sesgo emocional. Por ejemplo, una imagen de primer plano de un manifestante encapuchado, encuadrado desde un ángulo bajo, puede construir una imagen de amenaza incluso si el texto es neutral. Por el contrario, una toma abierta de una marcha pacífica puede reforzar un encuadre de legitimidad ciudadana.

Se justifica la elección de esta categoría por su enorme capacidad de impacto cognitivo y afectivo: en el entorno mediático contemporáneo, las imágenes no son decorativas, sino que operan como "evidencias" en la construcción de sentido (Messaris, 1997). La codificación propuesta permite identificar patrones visuales de criminalización, victimización, heroización o anonimización de los actores sociales, aspectos fundamentales en el análisis de cobertura de protestas.

F. Contexto Social e Ideológico

El discurso no existe en el vacío. Cada portada periodística condensa –de forma explícita o implícita– una visión del contexto en que se inserta. Fairclough (1992) afirma que la dimensión sociocultural del discurso es fundamental para entender sus condiciones de producción, circulación y consumo. Esta categoría tiene como propósito examinar cómo las portadas enmarcan el contexto político y social de los eventos noticiados. ¿Se construye un clima de tensión, desorden, violencia o de normalidad institucional? ¿Se presenta la protesta como amenaza al orden democrático o como ejercicio de ciudadanía?

Metodológicamente, se analizó el léxico contextualizador (palabras como “crisis”, “caos”, “estallido”, “represión”, “exigencia”, etc.), las referencias temporales (urgencia, escalamiento, duración), las voces institucionales mencionadas (gobierno, PNP, Defensoría, CIDH) y la atribución de consecuencias (sociales, económicas, políticas). Se observó también si el contexto es presentado como contingente, estructural o excepcional. Esta codificación permite observar si el medio construye un contexto que legitima la represión estatal o que valida la protesta como síntoma de una crisis estructural.

La categoría también habilita la integración con las otras dimensiones de la matriz, ya que el contexto social se expresa tanto en los textos como en las imágenes, en los silencios como en las afirmaciones. Evaluar cómo los medios sitúan discursivamente los hechos en un marco social más amplio permite entender las operaciones ideológicas que sostienen su narrativa y cómo contribuyen a reforzar o desafiar determinadas estructuras de poder.

G. Tematización Principal y secundaria

La tematización en el discurso mediático implica la selección y jerarquización de los temas que estructuran la portada. Esta operación discursiva es clave en la construcción de sentido, ya que define cuáles eventos se presentan como centrales y cuáles como marginales. Tal como señala Van Dijk (1998), el control temático en el discurso periodístico constituye una de las principales estrategias para ejercer poder simbólico, dado que permite decidir qué informaciones se incluyen y cuáles se excluyen, qué actores se visibilizan y cuáles se silencian. Esta categoría evalúa qué temas son priorizados en cada portada (conflicto, diálogo, seguridad, soluciones) y cómo se distribuyen en el espacio visual y textual.

Según la matriz metodológica utilizada, esta categoría considera si el enfoque temático refuerza narrativas de polarización (centradas en el conflicto) o si ofrece vías de resolución o diálogo. Asimismo, se analizan los temas secundarios en relación con los principales, identificando si cumplen funciones de refuerzo, contraste o distracción. De especial interés en este análisis es observar si la tematización prioriza consecuencias sobre causas, lo cual puede tener implicancias ideológicas al descontextualizar los eventos. Se incluyen preguntas clave como: ¿Qué tema ocupa la mayor parte del espacio en la portada? ¿Se tematiza el conflicto como irracionalidad o como demanda estructural? Estas valoraciones permiten establecer patrones discursivos transversales entre los distintos medios.

H. Representación de Actores Sociales

La forma en que los medios representan a los distintos actores sociales (manifestantes, gobierno, fuerzas del orden, ciudadanía) incide directamente en la construcción pública de legitimidad y autoridad. Van Leeuwen (2008) ofrece un modelo robusto para analizar la representación social, considerando operaciones discursivas como la inclusión/exclusión, la individualización/aglutinación, la activación/pasivación, y la legitimación/delegitimación. En el caso de las protestas sociales, estas operaciones permiten determinar si los actores son mostrados como sujetos racionales, violentos, víctimas, agresores, héroes o villanos.

Esta categoría, basada en la matriz de análisis, evalúa quiénes son los actores destacados en la portada, qué atributos se les asignan, y si aparecen con agencia propia o como objetos pasivos del discurso. Además, se registra si los actores colectivos (como "la población", "los manifestantes", "el Estado") son representados de forma homogénea o diferenciada.

Metodológicamente, se codifican las representaciones según su visibilidad (presentes/ausentes), su rol (activo/pasivo) y su valor simbólico (positivo/negativo/neutro). Esta evaluación resulta fundamental para comprender los procesos de construcción de alteridad que atraviesan el discurso mediático.

I. Agencia y responsabilidad

La atribución de agencia y responsabilidad es un componente crítico del análisis del discurso, ya que indica quién es representado como causante de los eventos y quién aparece como víctima o beneficiario. Fairclough (1995) subraya que la estructura gramatical del discurso puede encubrir o revelar la responsabilidad de los actores mediante el uso de pasivas, impersonales o construcciones nominalizadas. En esta categoría se analiza si la portada atribuye claramente responsabilidades, y a quién: gobierno, manifestantes o fuerzas del orden.

A partir de la matriz utilizada, se consideran preguntas como: ¿Quién aparece como sujeto de la acción principal? ¿Hay una atribución explícita o implícita de culpa? ¿Se presenta el conflicto como un evento provocado o como un hecho espontáneo? Se codifica si la agencia recae en el Estado, en los manifestantes o si se difumina bajo formas de elusión discursiva. Este análisis es clave para evidenciar cómo los medios distribuyen la responsabilidad moral y política en contextos de protesta social.

J. Selección Léxica y Estilo

El léxico utilizado en las portadas tiene una carga semántica que no puede ser reducida a su valor referencial. Las palabras elegidas no son neutrales, sino que vehiculizan valoraciones, emociones y posicionamientos ideológicos. Richardson (2007) indica que los medios construyen discursos políticos mediante elecciones léxicas que clasifican a los actores y los hechos en categorías morales: bueno/malo, legal/ilegal, ordenado/caótico. Esta categoría evalúa si el estilo es formal, emotivo o sensacionalista, y qué tipo de adjetivación o metáforas se emplean.

Con base en la matriz, se identifican términos recurrentes como "vándalos", "violentos", "radicales", "reivindicación", "desborde", etc., y se analiza su función en la construcción del sentido. También se registra el tono discursivo (alarmista, moderado, celebratorio) y la presencia de recursos retóricos como la hipérbole o la generalización. Esta codificación

permite observar cómo se configuran campos léxicos asociados a distintos actores y eventos, así como las estrategias de afectivización o despolitización del conflicto.

I. Modalización y grado de certeza

La modalización expresa el grado de certeza o duda que el enunciador atribuye a los hechos que relata. En el discurso periodístico, el uso de modalizadores como "podría", "al parecer", "según fuentes" indica un posicionamiento epistémico que puede servir tanto para protegerse legalmente como para sembrar ambigüedad. Van Dijk (1998) señala que la modalización es una estrategia discursiva relevante para analizar cómo se construye credibilidad o sospecha sobre distintos actores.

En esta categoría se evalúa si los eventos presentados en la portada se comunican como hechos consumados, como hipótesis o como afirmaciones sin evidencia. Se codifica el uso de estructuras verbales condicionales, pasivas o impersonales, así como la referencia a fuentes (citadas o anónimas). Las valoraciones se agrupan en certeza y especulación, permitiendo identificar tendencias editoriales: algunos medios pueden privilegiar discursos categóricos (que afirman sin duda la culpabilidad o inocencia de ciertos actores), mientras otros emplean un lenguaje más precautorio o ambiguo. Esta dimensión resulta esencial para evaluar los niveles de veracidad y transparencia del discurso mediático en contextos de crisis

K. Estructura narrativa

La estructura narrativa de una portada constituye el andamiaje a partir del cual se organizan los hechos y actores representados. Esta categoría evalúa si la narración de los eventos es lineal y cronológica o si, por el contrario, prioriza elementos del conflicto y omite sus causas. Según Fairclough (1995), la organización narrativa revela decisiones editoriales que posicionan al lector en una trayectoria interpretativa específica, destacando ciertos aspectos y relegando otros. Esta estructura puede operar de forma implícita, mediante la secuencia de títulos, imágenes y subtítulos, o de manera explícita, a través de frases que sitúan temporal o causalmente los hechos.

En correspondencia con la matriz de categorías, esta sección analiza si el relato de la portada privilegia el clímax del conflicto (violencia, desorden, enfrentamientos) o si ofrece antecedentes, motivaciones o consecuencias sociales. La evaluación considera también la progresión argumentativa: ¿se parte de un hecho para generalizarlo a una narrativa? ¿Se

induce una conclusión sobre los actores involucrados a partir de una secuencia visual o textual? Este análisis permite revelar si el medio opta por dramatizar los eventos, diluir su complejidad o mantener una narrativa explicativa y contextualizada.

L. Retórica visual y simbología

Esta categoría aborda los recursos simbólicos y visuales utilizados en la portada como dispositivos retóricos. El análisis no se limita a las imágenes en sí, sino que incluye colores, tipografías, composición, iconografía y diseño gráfico. Kress y van Leeuwen (2006) proponen una gramática visual según la cual los elementos gráficos poseen funciones comunicativas específicas. La matriz metodológica considera si estos elementos refuerzan o contradicen el discurso textual, y si su carga es emotiva o neutra.

Se examinan símbolos como fuego, humo, banderas, armas, así como el uso de colores como el rojo (alerta, violencia), negro (luto, amenaza), o blanco (paz, institucionalidad). También se analiza el posicionamiento de los cuerpos (centrales, marginales, caídos, enfrentados), la dirección de la mirada y el punto de vista fotográfico (picado, contrapicado, frontal). Estos elementos visuales, cuando son sistemáticos, revelan narrativas emocionales e ideológicas implícitas. Esta categoría es fundamental para entender cómo el discurso mediático apela a la emoción y construye afectos que influyen en la percepción del conflicto social.

M. Intertextualidad

La intertextualidad hace referencia a las conexiones explícitas o implícitas que un texto establece con otros discursos previos, contemporáneos o futuros. Fairclough (1992) señala que todo discurso está atravesado por voces ajenas que son incorporadas, citadas o recontextualizadas. En el caso de las portadas, estas referencias pueden adoptar múltiples formas: mención a declaraciones de actores políticos, evocaciones de eventos históricos, referencias a otras noticias previas o al imaginario cultural.

De acuerdo con la matriz, esta categoría evalúa si las portadas establecen conexiones explícitas (a través de citas o nombres propios) o implícitas (mediante metáforas, evocaciones simbólicas o referencias colectivas). Estas referencias pueden servir para legitimar un argumento, reforzar un marco ideológico o activar conocimientos previos en el lector. Se codifica si la conexión es explícita/implícita y si se articula con eventos recientes o pasados significativos. Esta categoría es clave para entender cómo los medios insertan

su discurso en una cadena histórica de significados, apelando a la memoria colectiva o a la validación institucional.

N. Ausencias textuales y visuales

En el análisis crítico del discurso, lo que no se dice es tan importante como lo que se explicita. Esta categoría permite detectar omisiones significativas de actores, hechos o contextos que podrían ofrecer una lectura alternativa de los eventos representados. Como sostiene Richardson (2007), las ausencias discursivas contribuyen a construir hegemonías narrativas al excluir ciertas voces o eventos del campo de lo visible.

La matriz metodológica propone identificar qué elementos están ausentes: manifestantes pacíficos, víctimas de la represión, antecedentes históricos, propuestas políticas, etc. También se considera si las omisiones son sistemáticas o excepcionales, y cuál es su posible impacto en la interpretación del lector. Esta categoría se entrecruza con las demás, pues una ausencia puede observarse en la imagen, en el título, en el contexto o en los actores representados. Su análisis permite comprender cómo el discurso se construye tanto por inclusión como por exclusión, delimitando los márgenes de lo decible y lo visible.

O. Consecuencias ideológicas y sociales

Esta categoría sintetiza el efecto performativo del discurso mediático sobre la percepción pública de los hechos, actores y demandas sociales. Siguiendo a Van Dijk (1998), los medios participan en la reproducción de ideologías al organizar el conocimiento social y distribuir legitimidad o estigmatización. En este caso, se analiza si la portada refuerza o desafía los discursos hegemónicos sobre el conflicto, la violencia, la protesta y el poder institucional.

Metodológicamente, se codifica si el discurso refuerza la posición del gobierno, legitima la represión, criminaliza la protesta, o por el contrario, si visibiliza las demandas ciudadanas, denuncia los abusos de poder y promueve un enfoque de derechos. También se evalúa el impacto potencial: ¿puede el discurso generar miedo, rechazo, solidaridad o movilización? Esta lectura de consecuencias ideológicas no es especulativa, sino que se construye a partir de los elementos analizados en todas las categorías anteriores, en diálogo con el contexto sociopolítico peruano y con investigaciones previas sobre representación mediática de la protesta como la de Silva Escobar (2015) o la de Espinoza Lewis (2016), anteriormente referenciadas.

Con esta sección se cierra el recorrido metodológico que sostiene y orienta el análisis que se presentará a continuación. La matriz de categorías construida ha sido pensada como una herramienta sensible al carácter complejo, político y simbólicamente cargado del discurso periodístico en contextos de protesta. Cada decisión metodológica responde a la necesidad de leer las portadas como espacios activos de producción de sentido, en los que se negocian miradas, se legitiman versiones y se silencian otras. El enfoque elegido no busca reducir el conflicto a etiquetas prefijadas, sino abrir preguntas sobre cómo los medios representan a los actores sociales, cómo ordenan los acontecimientos, qué imágenes movilizan y qué marcos interpretativos privilegian. Esta mirada crítica permite acercarse a los textos con atención a sus formas y matices, reconociendo que el discurso mediático es también una forma de intervención sobre lo real. A partir de aquí, el análisis se detendrá en las sesenta portadas seleccionadas, examinando sus estructuras y desplazamientos, con especial énfasis en los días 20, 21 y 22 de enero, cuando la intensidad del conflicto se tradujo en narrativas especialmente significativas. El propósito será comprender cómo se configura, desde el lenguaje y la imagen, un relato sobre la protesta social que no es neutro, sino situado, cargado de sentidos y consecuencias.

4.5 Consideraciones éticas y posicionalidad del investigador

Se realizó el presente trabajo con portadas de diarios de circulación nacional publicadas en enero de 2023; son materiales públicos y su uso en esta tesis responde a fines académicos de cita, crítica y análisis. Reproduzco únicamente lo indispensable, preservando la integridad de cada pieza y acreditando medio, fecha y edición, sin realizar alteraciones que cambien su sentido. Para evitar sesgos de recorte e incrementar la transparencia, incluyo en anexos las imágenes completas de las portadas. No trato datos personales ni identifico sujetos privados más allá de lo publicado; describo solo lo que es textual y visualmente verificable, y cuido no amplificar estigmas presentes en los propios materiales.

Aseguro trazabilidad y replicabilidad definiendo la portada como unidad de análisis y aplicando una matriz de 16 categorías (textual, visual e intertextual) con reglas claras de codificación y resolución de ambigüedades. Cada inferencia puede recorrerse en el itinerario evidencia → codificación → interpretación, documentado en fichas por portada y con referencias cruzadas entre el cuerpo del texto y los anexos. Triangulo sistemáticamente recursos léxicos, encuadres visuales e intertextualidades para contener sesgos y contrastar

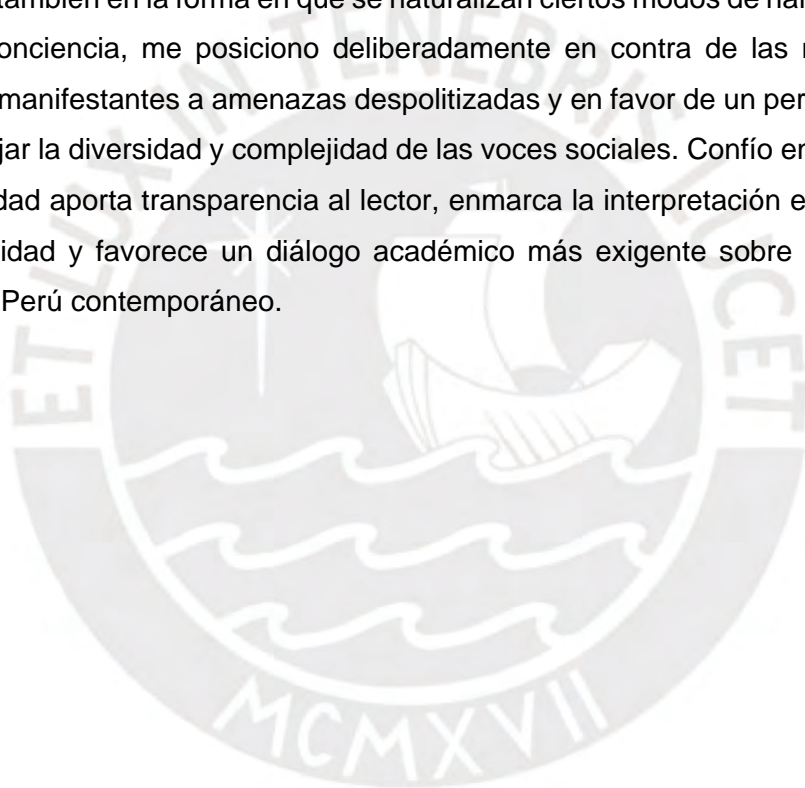
lecturas. Reconozco limitaciones del estudio (calidad de reproducción, periodo acotado y tipología de medio) y, por ello, delimito la transferibilidad de los hallazgos. Los archivos (portadas, matrices y versiones) se organizan con nomenclatura estandarizada y copias de seguridad.

Asumo esta investigación desde una postura interpretativa crítica que reconoce explícitamente mi propia implicación en el proceso investigativo. Como investigador peruano, formado en comunicación y con un interés particular en las representaciones mediáticas de la protesta social, entiendo que mi mirada no es neutra ni puede presentarse como desprovista de valores. En este sentido, reconozco que mi experiencia personal, mi trayectoria académica y mi compromiso con los derechos humanos han moldeado tanto la elección del problema de investigación como las preguntas que guían el análisis. La perspectiva decolonial me ha permitido comprender cómo los discursos mediáticos reproducen relaciones históricas de desigualdad (Quijano, 2000; Lander, 2000)., y esta comprensión atraviesa de manera transversal mi aproximación a las portadas de los diarios seleccionados. Desde este punto, he procurado sostener una vigilancia reflexiva sobre mis supuestos y mis expectativas. Me reconozco especialmente sensible frente a la marginación de voces andinas y populares, y frente a la criminalización de la protesta en clave securitaria. Esa sensibilidad puede orientar mis interpretaciones hacia una atención prioritaria a los dispositivos de despolitización y a las prácticas de alterización. Para contrapesar esta inclinación, he reforzado la trazabilidad del análisis mediante la explicitación de criterios de codificación, la incorporación de las portadas íntegras en anexos y la sistematización tabular de resultados por categorías. Estos soportes metodológicos no eliminan mi punto de vista, pero lo vuelven verificable y discutible.

Consciente de que el Análisis Crítico del Discurso parte de la premisa de que todo texto está inscrito en relaciones de poder y que las ideologías se reproducen a través del lenguaje (Fairclough, 1992; van Dijk, 2005), he procurado mantener una vigilancia constante sobre mis propios supuestos. Reconozco que mi sensibilidad hacia la marginación de las voces andinas y populares, así como mi rechazo a la criminalización de la protesta, son factores que han orientado la forma en que observo y describo las representaciones mediáticas. Lejos de restar validez, explicitar esta posicionalidad añade transparencia, pues sitúa al lector frente a las coordenadas interpretativas desde las cuales realizo el análisis. Siguiendo a Arrunátegui (2010), quien demuestra cómo la prensa peruana ha reproducido estereotipos racistas hacia los pueblos amazónicos, entiendo que mis lecturas se inscriben en un

horizonte ético-político que busca cuestionar esas formas de representación y abrir espacio a visiones más inclusivas.

Mi posición no pretende colocarse como una verdad absoluta, sino como una perspectiva situada que reconoce sus propios límites. Soy consciente de que otras lecturas del mismo corpus podrían destacar aspectos distintos, quizás menos centrados en la colonialidad del poder o en la ideología mediática. Sin embargo, considero que mi enfoque aporta al debate académico y social en la medida en que problematiza las ausencias y silenciamientos en la prensa peruana durante las protestas de enero de 2023. Tal como advierte Lander (2000), la colonialidad del saber no solo se expresa en los marcos eurocéntricos de las ciencias sociales, sino también en la forma en que se naturalizan ciertos modos de narrar la realidad. Desde esta conciencia, me posiciono deliberadamente en contra de las narrativas que reducen a los manifestantes a amenazas despolitizadas y en favor de un periodismo crítico capaz de reflejar la diversidad y complejidad de las voces sociales. Confío en que explicitar mi posicionalidad aporta transparencia al lector, enmarca la interpretación en una ética de la responsabilidad y favorece un diálogo académico más exigente sobre la prensa y la protesta en el Perú contemporáneo.



CAPÍTULO V: ANÁLISIS COMPARATIVO DESDE EL MODELO TRIDIMENSIONAL DE FAIRCLOUGH

5.1. Aplicación del Modelo Tridimensional de Fairclough

En diciembre de 2022, el Perú entró en una profunda crisis política tras el fallido intento del entonces presidente Pedro Castillo de disolver el Congreso y gobernar por decreto. Aquella maniobra llevó a su destitución y detención el 7 de diciembre, y a la asunción de Dina Boluarte, su vicepresidenta, como nueva presidenta de la República. Lejos de apaciguarse, la situación desató una ola de protestas sociales en diversas regiones del país, en especial en el sur andino y zonas urbano-populares, donde muchos seguidores de Castillo y ciudadanos descontentos exigieron la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso y elecciones generales adelantadas. Las movilizaciones adquirieron rápidamente un carácter masivo y descentralizado, bloqueando carreteras, paralizando actividades y generando enfrentamientos con las fuerzas del orden. Durante diciembre y enero, estas protestas escalaron en intensidad y lamentablemente también en violencia, dejando decenas de fallecidos (principalmente manifestantes) en choques con la policía y el ejército.

Tras una tregua parcial por las fiestas de fin de año, la conflictividad resurgió con más fuerza a inicios de 2023. El 19 de enero de 2023 tuvo lugar la denominada “Toma de Lima”, una megamarcha en la capital a la que confluyeron miles de ciudadanos provenientes de regiones andinas. Aquella jornada estuvo marcada por duros enfrentamientos en el centro de Lima: se produjeron incendios de edificios históricos (como la casona Marcionelli, de casi 100 años de antigüedad, que ardió dramáticamente cerca de la Plaza San Martín), numerosos heridos entre manifestantes y policías, y un saldo fatal de al menos un muerto en Arequipa. En paralelo, continuaban disturbios en regiones: intentos de toma de aeropuertos en Arequipa, Cusco y Puno, ataques a comisarías (como la de Zepita, Puno, que fue incendiada) y daños a infraestructura pública y privada.

El 20 de enero, ante la magnitud de la crisis, la presidenta Boluarte dio un mensaje a la nación a última hora del día, en el cual lamentó las muertes pero descartó su renuncia, y endureció su discurso contra los elementos “extremistas” de la protesta, llegando a calificar la movilización como una amenaza violenta organizada, a la vez que hizo un llamamiento ambiguo al diálogo. Sin embargo, ese mismo 20 de enero las protestas continuaron: en

Espinar (Cusco) manifestantes incendiaron instalaciones de la minera Antapaccay, forzando la paralización de sus operaciones; en Lima se reportaron nuevos choques aunque de menor intensidad que el día previo.

El 21 de enero ocurrió un hecho crítico: la Policía Nacional, con uso de tanquetas, intervino la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Lima –donde se habían alojado estudiantes y manifestantes de distintas provincias–, deteniendo a casi 200 personas dentro del campus universitario. Esta operación policial, realizada sin presencia fiscal inmediata y con denuncias de abusos (reteniendo incluso a transeúntes y estudiantes que no protestaban), fue señalada posteriormente como una violación de la autonomía universitaria y de derechos fundamentales. En suma, en esos días 19, 20 y 21 de enero de 2023 el país vivía momentos álgidos: para entonces el total de fallecidos en la crisis rondaba las 60 personas, la presión nacional e internacional sobre el gobierno crecía, y el desenlace del conflicto era incierto.

En este contexto convulso, los principales diarios peruanos –El Comercio, El Peruano, La República y Perú21– reflejaron en sus portadas narrativas notablemente divergentes sobre lo ocurrido durante los días 20, 21 y 22 de enero de 2023, correspondientes a la cobertura de los eventos de los días previos. Estas portadas no solo informaron sobre los hechos, sino que los representaron discursivamente de formas distintas y alineadas con las posturas ideológicas de cada medio. El presente trabajo ofrece un análisis crítico del discurso (ACD) comparativo de esas portadas, aplicando el modelo tridimensional propuesto por Norman Fairclough (1989, 1992, 1995). Este modelo considera: (1) la dimensión textual (los textos en sí –titulares, subtítulos, léxico empleado, imágenes–), (2) la dimensión de la práctica discursiva (procesos de producción, distribución y consumo del discurso periodístico, incluyendo la línea editorial, las fuentes privilegiadas, el género periodístico de la portada, los supuestos sobre la audiencia) y (3) la dimensión sociocultural o práctica social (el contexto histórico, social e ideológico más amplio en que se inscribe el discurso y las relaciones de poder que lo atraviesan).

Siguiendo esta metodología, organizamos el análisis en secciones correspondientes a dichas dimensiones, comenzando por el contexto sociocultural, para luego examinar comparativamente los contenidos textuales/visuales de las portadas y finalmente las prácticas discursivas de los diarios. Se incorporan citas textuales directas de titulares, bajadas (subtítulos) y otros elementos de las portadas como evidencia empírica, así como

referencias teóricas clave de la bibliografía del ACD y estudios sobre comunicación (Fairclough, 1995; van Dijk, 2010; van Leeuwen, 2008; Quijano, 2000, entre otros).

El énfasis central recae en develar cómo cada diario construyó su propia versión de la realidad en torno a la protesta social de enero de 2023, evidenciando similitudes y diferencias en sus enfoques. En particular, dada la naturaleza del conflicto, se profundiza en la dimensión sociocultural articulándola con la noción de colonialidad del poder (Quijano, 2000) y con la idea del “paradigma de la protesta” en la cobertura mediática (Chan & Lee, 1984; McLeod, 2007). La pregunta de fondo que orienta el análisis es: ¿de qué manera la prensa escrita, en medio de una sociedad polarizada, reprodujo o desafió narrativas históricas de poder y exclusión al representar estas protestas? Al comparar las portadas de El Comercio, El Peruano, La República y Perú21 del 20, 21 y 22 de enero, veremos cómo cada una, desde su trinchera discursiva, disputó la definición del acontecimiento: para ciertos medios se trató de vandalismo y amenaza subversiva que justificaba mano dura; para otros, de una legítima explosión de malestar social ante un gobierno cuestionado. Ninguna postura fue neutral. A continuación, desarrollamos el análisis en profundidad.

5.1.1. Dimensión Sociocultural:

Toda práctica discursiva está enmarcada en un contexto sociocultural que le da sentido (Fairclough, 1992). En el caso de las portadas analizadas, el trasfondo es un conflicto social de raíces históricas en el Perú, donde se entrecruzan factores políticos inmediatos (la crisis de sucesión presidencial) con estructuras de larga duración relacionadas con la desigualdad regional, étnica y de clase. Para entender las representaciones mediáticas de estas protestas, es útil recurrir al concepto de colonialidad del poder, desarrollado por Aníbal Quijano (2000). Según Quijano, aun después del fin del colonialismo formal, en sociedades latinoamericanas como la peruana persiste una matriz colonial de poder que jerarquiza a la población en función de constructos de raza, cultura y región originados en la colonia. Esta matriz coloca en la cúspide a las élites blanco-mestizas, urbanas (limeñas) y acomodadas, quienes detentan privilegios políticos y simbólicos, mientras subalterniza a los sectores indígenas, andinos, rurales y populares, construyéndolos como “otros” peligrosos, atrasados o inferiores (Quijano, 2000; Grosfoguel, 2007). En palabras de Quijano, los subalternos (campesinos, provincianos indígenas) siguen siendo construidos en la imaginación hegemónica como alteridades peligrosas o incapaces de gobernarse, legitimando así la dominación de las élites centralistas.

En el contexto de enero de 2023, las protestas sociales tuvieron un fuerte componente regional y étnico: muchos de los manifestantes provenían de regiones andinas históricamente postergadas, como Puno, Cusco, Ayacucho, Apurímac, entre otras. Sus demandas –renuncia de Boluarte, elecciones anticipadas, Asamblea Constituyente– representaban en gran medida el hartazgo de poblaciones excluidas del poder político real y del beneficio del crecimiento económico. Al mismo tiempo, en Lima (la capital centralista y asiento del poder político-económico), un sector importante de la ciudadanía y la élite percibía estas protestas con recelo o franca hostilidad, considerándolas caóticas, instigadas por grupos radicales (incluso se habló de infiltración “terrorista”) y atentatorias contra el “orden” y la estabilidad del país. En paralelo, congresistas de la República reforzaron un encuadre securitario de las movilizaciones: el 9 de enero de 2023, Alejandro Cavero sostuvo que “tomar por asalto las instalaciones de los poderes del Estado es terrorismo y sublevación” y, el 26 de enero de 2023, Jorge Montoya afirmó que “el terrorismo está avanzando y muchos no lo quieren entender” (Cavero, 2023; Montoya, 2023). Este tipo de mensajes convivió con un clima de opinión pública tensado y ambivalente. En el estudio América TV–Ipsos del 9–10 de febrero de 2023, la aprobación presidencial fue 18 % y 76 % se mostró a favor de la renuncia de la presidenta (continuidad: 20 %); además, la opinión mayoritaria no justificó tácticas disruptivas como bloqueos de carreteras (77 %), intentos de toma de aeropuertos (85 %) o quema de instalaciones públicas (88 %), con diferencias entre Lima y el interior (por ejemplo, continuidad de Boluarte: 32 % en Lima vs. 14 % en el interior) (Ipsos, 2023a). A la vez, en la encuesta Perú21–Ipsos del 12–13 de enero de 2023, la atribución de responsabilidades por las muertes en Ayacucho/Juliaca aparecía disputada: 42 % señalaba a dirigentes que alentaron las incursiones, 36 % a autoridades que ordenaron el operativo y 29 % a las fuerzas del orden por no contener sin armas (Ipsos, 2023b). En conjunto, estas evidencias permiten sostener que, mientras actores de élite (congresistas en ejercicio) instalaron marcos de amenaza/ “terrorismo”, una porción relevante de la ciudadanía rechazó ciertas tácticas y, al mismo tiempo, distribuyó responsabilidades entre líderes de protesta y autoridades/ “Fuerzas del orden” configurando un terreno de lectura pública que condiciona la cobertura mediática y su recepción.

Los discursos mediáticos de aquellos días, como veremos, reflejan y a la vez refuerzan estos esquemas socioculturales. Los diarios de línea conservadora reactivaron lo que Quijano (2000) denomina los patrones coloniales de poder: un relato donde “nosotros” (el Estado, las fuerzas del orden, la ciudadanía “de bien” urbana) debemos defender la nación

frente a “ellos” (los manifestantes andinos presentados como vándalos irracionales, o como títeres manipulados por intereses oscuros).

En cambio, un diario de línea más crítica buscó subvertir parcialmente ese marco, presentando a los manifestantes como sujetos políticos legítimos y denunciando el abuso estatal. Esta pugna discursiva se explica, en parte, por las condiciones sociopolíticas del momento: Boluarte había asumido con apoyo de partidos tradicionales y de la cúpula militar, mientras que los manifestantes provenían en gran medida de sectores que se sintieron traicionados por la clase política.

La prensa escrita, lejos de ser un actor neutral, participó en la lucha simbólica por definir la naturaleza de la crisis. Como señala Teun van Dijk (2008, 2010), los medios de comunicación suelen alinearse con las visiones e intereses de grupos de poder específicos, reproduciendo ideologías dominantes a través de sutiles mecanismos discursivos. En una situación de conflicto, esta alineación ideológica se exagera: los medios tienden a polarizar la representación entre “buenos” y “malos”, enfatizando lo positivo de un lado y lo negativo del otro –lo que van Dijk denomina el “cuadrado ideológico” de la comunicación de masas.

En el Perú, además, subyacen memorias del conflicto armado interno de los años 1980-2000 (terrorismo de Sendero Luminoso y la respuesta contrainsurgente del Estado). Estas memorias alimentan un imaginario del “enemigo interno” que se reactivó en enero de 2023: autoridades y medios conservadores asimilaron rápidamente a los manifestantes más radicales con terroristas o “subversivos”. Este encuadre sirvió para justificar en la opinión pública el uso de la fuerza letal contra la población movilizada, presentándolo como una defensa de la paz y la legalidad.

Vemos así una continuidad de la narrativa de orden oligárquico, donde cualquier desafío popular al status quo es retratado como una amenaza violenta al “orden democrático” que debe ser sofocada. En contrapartida, desde sectores progresistas surgió la narrativa alternativa de la “resistencia decolonial”: es decir, entender la protesta como la irrupción legítima de los históricamente marginados para reclamar derechos, visibilizando la violencia estructural del Estado contra ellos. Estas dos visiones opuestas –orden vs. resistencia– forman el trasfondo sociocultural e ideológico sobre el cual se erigieron las portadas de El Comercio, El Peruano, La República y Perú21.

Antes de continuar, conviene aclarar que hablaremos de las portadas del 20, 21 y 22 de enero de 2023, que corresponden respectivamente a la cobertura de los acontecimientos ocurridos el 19, 20 y 21 de enero. Cada diario se imprime en la madrugada con la información del día anterior. Por tanto, la portada del 20/1 refleja la “Toma de Lima” del 19/1; la del 21/1 refleja los eventos del 20/1; y la del 22/1 refleja lo ocurrido el 21/1, incluyendo la intervención policial en San Marcos.

5.1.2. Dimensión textual

En el nivel textual se analizan qué se dice y cómo se dice en las portadas: los titulares principales, subtítulos, epígrafes, fotografías y elementos gráficos que cada diario escogió para representar la crisis. Estas decisiones textuales no son neutrales, sino que –como vimos– responden a estrategias discursivas alineadas con la línea editorial e ideología de cada medio. A continuación, realizamos un recorrido comparativo por las portadas de los cuatro diarios en las fechas señaladas, destacando sus frases clave y recursos visuales, para evidenciar las tácticas de criminalización vs. legitimación, el uso de ciertas metáforas o adjetivos, la visibilidad/invisibilidad otorgada a distintos actores y la construcción narrativa global de los hechos.

5.1.2.1. Portadas del 20 de enero de 2023: “Toma de Lima” y visiones opuestas

La mañana del 20 de enero, tras la violenta jornada de la Toma de Lima, los diarios amanecieron con interpretaciones dispares de lo ocurrido. Perú21 desplegó en primera plana un titular en mayúsculas rojas y negras de tono confrontacional: “ES VIOLENCIA POLÍTICA, NO ES PROTESTA SOCIAL”. Este enunciado categórico, casi a modo de eslogan, niega explícitamente el carácter legítimo de la movilización ciudadana, redefiniéndola desde el propio titular como mera violencia organizada. La construcción retórica “no es X, es Y” establece una dicotomía absoluta: lo sucedido no merece llamarse protesta, sino que debe catalogarse como “violencia política” deliberada.

Al usar ese término, Perú21 sugiere que detrás de los disturbios hay motivaciones subversivas o conspirativas, desvinculándolos de cualquier reivindicación social genuina. Esta frase así formulada encapsula la estrategia discursiva del diario: criminalizar el movimiento presentándolo ante sus lectores como una agresión coordinada contra el Estado, más cercana al terrorismo que a una protesta ciudadana. De hecho, Perú21

refuerza ese marco con un cintillo superior que afirmaba: “De manera sincronizada el vandalismo quiso tomar los aeropuertos de Arequipa, Juliaca y Cusco”. Nótese la personificación de “el vandalismo” como sujeto agente (“quiso tomar los aeropuertos”), figura retórica que deshumaniza por completo a los manifestantes y los reduce a una fuerza abstracta delincencial.

El léxico empleado –“vandalismo”, “violencia política”– carga la narración de connotaciones altamente negativas, preparando al lector para condenar los hechos y avalar respuestas punitivas. Perú21 ni siquiera menciona la palabra “manifestantes” en su portada: los actores colectivos quedan borrados o subsumidos bajo rótulos delincuenciales. Esta elección coincide con lo que Van Leeuwen (1996) denomina exclusión y categorización negativa de los actores sociales: se excluye la identidad concreta de las personas (no hay “ciudadanos”, “campesinos” ni “protestantes” en su discurso) y en su lugar se los presenta en categoría general negativa (“vándalos”, “violentistas”). El resultado es una deslegitimación total de la protesta en cuanto tal.



Por contraste, La República ofreció una portada diametralmente distinta el 20 de enero. Su titular principal, breve y objetivo, rezaba simplemente: “Día de protestas”. Con esta frase escueta –casi anodina en apariencia– el diario optó por nombrar los hechos sin adjetivación

peyorativa, reconociéndolos como “protestas” (término neutro que ya implica una acción colectiva con motivación social) y enmarcando el 19 de enero como una jornada de movilización ciudadana generalizada, no como una mera serie de actos vandálicos.

En la bajada o subtítulo, La República ampliaba este enfoque aportando contexto específico, con un tono informativo más que editorial. Según la reconstrucción de dicha bajada (en la edición impresa): “Miles de personas llegadas de provincias y gremios de la capital se movilizaron y chocaron con la policía hasta horas de la noche en su propósito de llegar al Congreso”, añadiendo además que en regiones como Arequipa, Cusco y Juliaca hubo intentos de tomar aeropuertos.

Esta redacción merece desglosarse: se humaniza y pluraliza a los manifestantes (“miles de personas”, “llegadas de provincias y gremios de la capital”), reconociendo la diversidad de actores sociales involucrados y evitando etiquetas criminalizantes. En términos de Van Leeuwen (1996), aquí se privilegia la inclusión y la especificación: se identifica a los participantes como gente concreta, con procedencias y afiliaciones (provincianos, sindicatos limeños), en lugar de asimilarlos a una masa amorfa o un ente maligno.

Asimismo, los verbos empleados son reveladores: La República dice “se movilizaron” y “chocaron con la policía”, en lugar de alternativas más cargadas como “atacaron” o “sembraron caos”. “Movilizarse” pertenece al repertorio de la acción colectiva legítima, mientras que “chocar” sugiere un enfrentamiento bilateral –implica que hubo confrontación entre manifestantes y fuerzas del orden, sin atribuir automáticamente la culpa a uno solo de los bandos.

Este matiz difiere notablemente del discurso de Perú21, que presentaba la violencia como unilateral de parte de los manifestantes. Además, La República incluyó en el subtítulo la motivación de los protestantes: “en su propósito de llegar al Congreso” (para exigir, se entiende, cambios políticos como la renuncia presidencial o nuevas elecciones). Al nombrar la meta de la protesta, el diario brinda un marco interpretativo donde la movilización aparece contextualizada por una demanda política específica, algo que los otros medios omitieron completamente en sus portadas. Esta inclusión de las causas responde a lo que Fairclough (1992) señala sobre el discurso informativo: la decisión de incluir o excluir contexto y motivaciones es ideológica; aquí La República opta por incluir, otorgando inteligibilidad y, por ende, cierta legitimidad a la acción de los manifestantes.

NOCHE DE VIOLENCIA SE CIERRA CON INCENDIO EN EDIFICIO CERCANO A LA PLAZA SAN MARTÍN → 2-12

Día de protestas

— Miles de personas llegadas de provincias y gremios de la capital se movilizaron y chocaron con los policías hasta en horas de la noche en su propósito de llegar al Congreso.

— Esquinas de Nicolás de Piérola-Abancay, Lampa-Cusco, Carabaya y Larco Mar fueron puntos en donde se concentraron los enfrentamientos entre los manifestantes y la PNP.

— En Arequipa, Cusco y Juliaca intentaron tomar aeropuertos. En el primero murió Giancarlo Condori. En Macusani fallece Salomón Valenzuela herido un día antes por disparo de bala.



Fuego consume edificio en el Centro de Lima

7:30 p.m. En medio de las protestas que seguían en varios puntos del Cercado de Lima, el incendio, en un edificio antiguo ubicado entre el jirón Carabaya y Lino Cornejo, cambió el panorama. Vemos culpables a bombas lacrimógenas de la PNP. Ministro del Interior, lo desmintió.

EN PORTADA → 2-3

Delegaciones continúan en Lima: hoy seguirán con sus marchas

— Primer día de la toma de Lima estuvo marcado por escenas como la de la derecha: manifestantes vs. policías.



TENSION. Contingente policial impide que las delegaciones avancen hacia el Congreso.

POLÍTICA → 5

Boluarte dice que actos de violencia no quedarán impunes

— Presidenta reitera su apoyo a la Policía y se pregunta: "¿quién financia a los manifestantes?"

POLÍTICA → 6-7

La Libertad, Amazonas y Tacna bajo estado de emergencia

— Quedan suspendidos derechos de inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito y de reunión.

ENTREVISTA → 11

"La renuncia de la presidenta sería el primer paso para salir de la crisis"

— El antropólogo y sociólogo Eduardo Ballón estima que las elecciones deberían darse este año.

En suma, las portadas de Perú21 y La República del 20 de enero representan polos opuestos en el espectro discursivo: la primera demonizando la protesta como un caos criminal infundado, la segunda normalizándola como una protesta social (sí, con episodios de violencia, pero enmarcada en un conflicto político comprensible). ¿Y qué hay de El Comercio y El Peruano ese mismo día? Ambos adoptaron posiciones intermedias pero significativas.

El diario El Comercio, decano de la prensa limeña, presentó en su portada del 20 de enero un titular que combinaba elementos de factualidad con otros claramente editoriales. El encabezado declaraba: "Vándalos desatan caos en Lima y asaltan aeropuertos en 3 regiones". A primera vista, esta formulación se acerca a la retórica de Perú21 –de nuevo aparece la palabra "vándalos" para caracterizar a los manifestantes, junto con "caos" y "asaltan"– todos términos cargados negativamente.

Se trata, sin duda, de un léxico de criminalización: "vándalos" posiciona a los protestantes como delincuentes, y enfatizar el caos en Lima y los asaltos en aeropuertos focaliza

exclusivamente los aspectos violentos y desordenados de la jornada. Esta elección léxica alineó a El Comercio con la visión de que la noticia principal era el desorden público ocasionado por grupos violentos, más que las demandas o la represión.

Sin embargo, a diferencia de Perú21, El Comercio atenuó ligeramente el tono mediante recursos de presentación factual: junto al titular sensacional, incluyó un subtítulo y viñetas con cifras y hechos concretos, lo cual daba una pátina de objetividad. Por ejemplo, en una franja superior, reportó: “Se reportaron 22 policías y 16 civiles heridos, y un fallecido en el país”. Al enumerar tanto bajas policiales como civiles, El Comercio aparenta brindar un balance informativo que reconoce víctimas en ambos bandos, algo que ni Perú21 ni El Peruano hicieron en portada (estos priorizaron las bajas policiales y omitieron las civiles).



Este gesto le permite a El Comercio proyectar una neutralidad aparente –reconociendo en números el costo humano general– pero sin profundizar en las causas ni responsabilidades

de esas cifras. De hecho, el diario no explicita que el fallecido era un manifestante muerto por disparos (en Arequipa) ni cuestiona cómo resultaron heridos esos civiles; simplemente lo deja como dato frío, diluyendo cualquier acusación directa contra la fuerza pública.

Podemos interpretar esto como una técnica de mitigación: se admite que hubo víctimas civiles pero sin contextualización, lo que minimiza implícitamente el peso de la represión (no se lee en ninguna parte “heridos por bala” ni “por acción policial”). En el resto de su subtítulo, El Comercio organizó la información en viñetas temáticas con títulos como “Destrucción”, “Más ataques” y “Mensaje al país”. Bajo “Destrucción” detalló prolijamente los instrumentos usados por manifestantes violentos (piedras, palos, adoquines arrancados) y los daños causados, reforzando la imagen de peligrosidad y barbarie (una estrategia de enfatizar lo concreto de la violencia para dar verosimilitud al calificativo “vándalos”).

En “Más ataques” enumeró los intentos de toma de aeropuertos en regiones, subrayando la simultaneidad, lo que sugiere cierta coordinación nacional de la violencia (un guiño al marco de “ataques sincronizados” que también destacaba Perú21). Finalmente, en “Mensaje al país” El Comercio resumió partes del discurso de Boluarte, enfatizando que la presidenta “enfatizó que las protestas carecen de ‘agenda social’ y que buscan...” (presumiblemente “...desestabilizar el país” u “...imponer agendas políticas”).

Es decir, reprodujo el mensaje gubernamental que deslegitima la protesta acusándola de no tener causas sociales reales. El Comercio, con esta combinación de datos duros + adjetivos duros, logró presentarse como informativo y moderado, pero dentro de un encuadre general alineado con el orden establecido: la portada transmite que hubo grave violencia causada por vándalos, que el Estado respondió (Boluarte habló), y deja fuera cualquier mención de abusos estatales o de las motivaciones de los protestantes.

Por su parte, El Peruano –diario oficial del Estado– actuó abiertamente como vocero del gobierno. Su portada del 20 de enero llevó como titular central una declaración atribuida a Dina Boluarte: “Presidenta: Todo el rigor de la ley caerá sobre violentistas”. Esta frase proviene directamente del mensaje presidencial de la noche anterior, y El Peruano la coloca sin mediación crítica.

El uso del término “violentistas” es significativo: en el léxico político peruano oficial, violentista se emplea para referir a sujetos violentos con connotación subversiva, casi

sinónimo de agitador extremista. Que el diario ponga ese término en boca de la presidenta en titular implica respaldar la narrativa gubernamental: lo acontecido es obra de violentistas infiltrados que merecen castigo ejemplar.

De hecho, el subtítulo de El Peruano reforzaba esa dicotomía al afirmar: “Protesta de ciudadanos se empañó por actos de violencia”. Aquí se distingue entre “ciudadanos que protestan” (legítimos) y “violentistas” (ilegítimos) que arruinaron la protesta. Esta es una estrategia discursiva oficial clásica para fragmentar el movimiento: validar a la “buena” ciudadanía que reclama pacíficamente, pero aislar y condenar a los elementos “malos” culpables de los disturbios.

Con ello, el gobierno –y su diario– pretende deslegitimar la protesta sin parecer que niega el derecho a protestar: “castigamos a los violentos, no al pueblo”. En la práctica, sin embargo, esta distinción suele ser retórica, pues se criminaliza al movimiento en conjunto insinuando que los violentos son externos o minoritarios, aunque no se identifique a ninguno en concreto (El Peruano no nombra quiénes serían esos violentistas, simplemente los postula como chivo expiatorio).

Además, la bajada de la portada enumeraba medidas y reacciones oficiales: “Los desmanes no quedarán impunes, sostiene Boluarte, y asegura que se individualiza a quienes buscan generar el caos... Mandataria reitera llamado al diálogo... Saldo a escala nacional de la jornada es de un fallecido en Arequipa y 38 heridos... Ministros destacan actuación de las Fuerzas Armadas y la Policía”.

Vemos aquí un guion perfectamente alineado al gobierno: promesa de castigo legal (“todo el rigor de la ley”, “no quedarán impunes”), discurso punitivo-legalista por un lado, combinado con la oferta de diálogo por otro (el clásico “mano dura pero también puerta abierta” que busca legitimar al régimen como firme pero democrático). Se resalta la cifra de un fallecido pero sin contexto (igual que El Comercio, no se dice que murió un manifestante por bala policial), y se elogia la actuación de la Policía y FF.AA.

DIARIO OFICIAL DEL BICENTENARIO

DIRECTOR GENERAL
FELIX ALBERTO PALQUEROS

GERENTE GENERAL
OSWALDO ESCOBAR

GERENTE DE MARKETING
RODRIGO LEAL

www.elperuano.pe

FUNDADO EL 22 DE OCTUBRE DE 1825 POR EL LIBERTADOR SIMÓN BOLÍVAR



El Peruano

VIERNES 20
DE ENERO DE 2023

AÑO DE LA UNIÓN Y DEL DESARROLLO

www.elperuano.pe

PRECIO: S/2.000
AÑO: 161 Nº: 2307

PROTESTA DE CIUDADANOS SE EMPAÑÓ POR ACTOS DE VIOLENCIA

Presidenta: Todo el rigor de la ley caerá sobre violentistas

- Los desmanes no quedarán impunes, sostiene, y asegura que se individualiza a quienes buscan generar el caos durante las movilizaciones en diversas regiones.
- Mandataria reitera llamado al diálogo a fin de solucionar problemas del país.
- Saldo a escala nacional de la jornada es un fallecido en Arequipa y 38 heridos.
- Ministros destacan actuación de las Fuerzas Armadas y la Policía. **P. 2-3**





La presidenta Dina Boluarte se pronunció sobre las protestas y la violencia que se generaron en diversos lugares del país, como en Lima, donde un incendio se incendió en la plaza San Martín.

MINSA GARANTIZA LA ADQUISICIÓN DE MEDICINAS. P. 5

El Peruano, más que ningún otro, difuminó la frontera entre información y propaganda: prácticamente toda la portada es el discurso del Poder Ejecutivo en formato noticia. Fairclough (1995) advertía cómo los textos periodísticos pueden fusionarse con voces institucionales en contextos de hegemonía; aquí ocurre tal cual: la portada de El Peruano es la voz del gobierno hablando a la ciudadanía.

Como consecuencia, cualquier agencia o subjetividad de los manifestantes quedó anulada en este medio: no aparecen testimonios de protestantes, ni una sola referencia a sus motivaciones (salvo llamarlas “demandas populares” de manera genérica en el titular del día siguiente). En la portada del 20, el gobierno es sujeto y los manifestantes solo objeto de control. Esta narrativa busca legitimar la represión presentándola como cumplimiento de la ley y protección a la sociedad, encarnando perfectamente la matriz colonial/autoritaria: el Estado central se arroga la posición de tutor de la nación, castigando a quienes se desvían del orden.

Esta primera comparación deja ver ya los alineamientos ideológicos: Perú21 y El Peruano, aunque uno es privado sensacionalista y el otro estatal institucional, coincidieron en legitimar la respuesta dura del Estado y deslegitimar la protesta, empleando incluso términos similares (“vandalismo/violentistas”, énfasis en caos y castigo). La República se colocó en la vereda opuesta, buscando visibilizar el conflicto social y no solo los actos de violencia, con un lenguaje sobrio que implícitamente reconoce derechos a los manifestantes. El Comercio quedó al medio: comparte con los primeros la preocupación por el orden (habla de vandalismo y caos), pero mantiene una cuidada fachada de equilibrio informativo (menciona heridos de ambos lados, incluye el llamado al diálogo de Boluarte en una viñeta). En términos de van Dijk, podríamos decir que El Comercio aplica una estrategia de “equilibrio aparente”, reduciendo la estridencia para conservar credibilidad entre las clases medias, pero sin salirse del marco que culpa primordialmente a los protestantes.

Cabe añadir una nota sobre las imágenes de portada del 20 de enero, que acompañaron estos titulares y reforzaron los encuadres. Perú21 suele recurrir a diseños llamativos: aunque no tenemos la imagen exacta a mano, es probable que usara fotografías de enfrentamientos o llamas para dramatizar su mensaje (dado su énfasis en “violencia” es común que muestren algún incendio o destrozos en primer plano). La República probablemente publicó fotos de la multitud movilizada o de los choques con la policía, pero enfatizando la gran cantidad de gente (“miles de personas” mencionaba su bajada) o alguna escena representativa del conflicto (por ejemplo, manifestantes con banderas siendo dispersados). El Comercio, según el análisis recuperado, mostró en gran tamaño la imagen del edificio histórico Marcionelli envuelto en llamas, con bomberos intentando apagarlo. Esta fotografía espectacular servía a un doble propósito: ilustrar materialmente el “caos” (una ciudad en llamas) y a la vez evocar la pérdida patrimonial/cultural causada por la “turba”, reforzando la idea de que la protesta devino en barbarie contra la civilización. Efectivamente, el pie de foto en El Comercio destacaba el valor histórico del edificio incendiado y lo atribuía directamente a los manifestantes, lo cual legitima la indignación del lector y sugiere que ante semejante destrucción la mano dura estaría justificada. Esto conecta con una narrativa de larga data: la oposición entre patrimonio/orden vs. vandalismo/caos. En tanto, El Peruano probablemente usó imágenes del presidente Boluarte dando su mensaje (enfocando en la autoridad) o de policías restableciendo el orden; incluso es posible que evitara fotos muy violentas para proyectar que “ya todo está bajo control gracias al gobierno”. Desafortunadamente, no contamos aquí con la imagen exacta de su portada del 20, pero su titular y contenido sugieren que visualmente el

protagonismo habría sido la propia figura presidencial o símbolos de orden (bandera, policía en acción, etc.), en coherencia con su discurso institucional.

5.1.2.2. Portadas del 21 de enero de 2023: Entre la violencia persistente y el llamado al diálogo

Las portadas del día 21 de enero de 2023 reflejaron los eventos del 20 de enero, marcados por continuidades en la protesta (nuevos actos violentos en regiones, heridos acumulados, discurso presidencial) y por un intento oficial de moderar el tono mediante la promesa de diálogo. Veamos cómo cada diario ajustó (o mantuvo) su marco narrativo.

En Perú21 del 21 de enero, el énfasis estuvo en las bajas policiales sufridas desde el inicio de las protestas, como manera de subrayar la agresión a la autoridad. Su titular principal anunció en grandes cifras: “VAN 580 POLICÍAS HERIDOS”. Esta frase, con el verbo coloquial “van” (por “van contabilizados”) y el número sobresaliente, busca causar impacto en el lector: más de medio millar de policías heridos indica una magnitud de violencia contra las fuerzas del orden. Es una manera de victimizar a la policía colectivamente y, por contraste, pintar a los manifestantes como brutalmente violentos.

Justo debajo, Perú21 agregaba otro titular secundario: “Vándalos incendian la comisaría de Zepita...”. Aquí nuevamente el término “vándalos” encabeza la frase, reforzando la categoría criminal del manifestante, y se destaca un hecho específico: la quema de una comisaría en Zepita (Puno) por parte de turbas. Es decir, el diario realza los ataques contra símbolos de autoridad (la policía, las comisarías) como prueba de que esto no es legítima protesta sino sedición delincinencial.

Además, en la portada del 21 de enero Perú21 incluyó elementos gráficos y testimoniales para reforzar su línea: presentó, por ejemplo, la fotografía de la comisaría ardiendo (imagen de fuego que confirma visualmente el titular) y un recuadro con declaraciones de algún personaje afín a su postura. En efecto, sabemos que ese día Perú21 llevó una entrevista al exministro del Interior Óscar Valdés con la cita: “Todos estos actos ya configuran una situación subversiva”. Esto se anunció en la portada, funcionando como autoridad experta que valida la interpretación del diario: un exministro (figura de orden) declara que lo que ocurre es subversión. Con ello, Perú21 cierra el círculo de su discurso: no solo reporta

hechos violentos, sino que los etiqueta formalmente como subversión/terrorismo, justificando implícitamente un tratamiento militar o de seguridad del Estado al asunto.



En síntesis, el 21 de enero este diario redobló su apuesta por el sensacionalismo punitivo: grandes números de policías heridos (apelando a la solidaridad con la policía y al escándalo), lenguaje de “vándalos” y “subversivos”, e imágenes de fuego y destrucción. La polarización ideológica aquí es extrema: la portada no tenía ningún espacio para voces de protesta o para mencionar heridos civiles, todo el foco eran las víctimas policiales y los excesos de los manifestantes. Esto corresponde perfectamente al cuadrado ideológico de van Dijk: enfatizar lo malo de ellos (manifestantes violentos), enfatizar lo bueno o lo digno de lástima de nosotros (los policías heridos cumpliendo su deber), silenciar lo malo del nosotros (no se habla de abusos policiales) y silenciar lo bueno del ellos (no se menciona qué piden los manifestantes ni que también hay muchos heridos entre ellos).

El Comercio, en su edición del 21 de enero, optó por un tema central distinto, desviando la atención de Lima hacia un suceso económico-estratégico: “Minera Antapaccay paraliza operaciones tras otro ataque de vándalos”. Con este titular, el diario pone el foco en las consecuencias económicas de la protesta (una gran mina de cobre deteniendo producción) y responsabiliza directamente a los manifestantes a través de la palabra “vándalos”.

Nótese el matiz: mientras el 20 de enero El Comercio había destacado el caos en Lima, el 21 su portada prioriza lo ocurrido en Espinar, Cusco (la quema y saqueo en la mina Antapaccay). Esto revela una estrategia editorial de agenda-setting: el diario decide que la noticia del día no es tanto la continuidad de las marchas o el discurso de Boluarte, sino el daño a una empresa estratégica por acción violenta. Así, construye un relato en el cual los protestantes, además de causar desmanes urbanos, también atentan contra la economía nacional.

Nuevamente emplea “vándalos” para referir a los atacantes, reforzando esa etiqueta deslegitimadora. Según el análisis del contenido, El Comercio acompañó este titular con subtítulos que iniciaban con palabras clave como “Caos:” y “Efecto:”, seguidas de descripciones: por ejemplo, “invadieron y quemaron zonas del campamento minero...” y que “debido a esos ataques, la empresa opera en condiciones limitadas”. Esto aporta un aire de informe objetivo de daños, pero –como señala van Dijk– la selección temática es intencionada: se listan los actos violentos y sus consecuencias negativas (incendios, pérdidas económicas), omitiendo completamente cualquier referencia a las razones de los manifestantes para arremeter contra la minera.

No se menciona, por ejemplo, que en Espinar existían reclamos medioambientales y sociales de larga data contra Antapaccay; simplemente se presenta el incidente como un “ataque de vándalos” irracional.

El Comercio, con su estilo más serio, enmarca esto casi como un reportaje investigativo: de hecho, en la portada figuraba el rótulo “Unidad de Investigación” junto al titular, dándole mayor peso de veracidad y exclusividad (como diciendo: descubrimos la conexión de estos ataques). Hay aquí un aspecto interesante: al día 21, tras dos días de violencia, El Comercio parece inclinarse a buscar explicaciones conspirativas. Y efectivamente, su portada del 22 de enero abundó en la teoría de una conexión política detrás de las protestas. En cierto modo, el titular de Antapaccay es un preludio: ya habla de “otro ataque”, sugiere repetición y quizás coordinación, abonando la idea de un plan mayor.

En cuanto a la imagen, El Comercio el 21 de enero seguramente ilustró con algo relacionado a la mina (por ejemplo, foto de las instalaciones dañadas o de buses incendiados, etc.) y también incluyó en un recuadro la noticia de Lima: la intervención policial en San Marcos. En un recuadro secundario se leía: “PNP entra a San Marcos: hay más de 200

intervenidos...”, acompañado de una foto de agentes conduciendo detenidos en la universidad.



Obsérvese la diferencia de jerarquía: para El Comercio, la detención masiva de personas en un campus universitario ocupó solo un recuadro, mientras que Antapaccay fue el titular principal. Esto habla de sus prioridades: protección del orden económico y combate al supuesto complot subversivo primero, y apenas después el operativo policial (presentado además de forma neutra: “PNP entra...” con enfoque en detenidos, sin cuestionamiento). Al no titular con San Marcos, el diario evitó términos como “allanamiento” o “violación de la autonomía universitaria” que estaban siendo denunciados en redes y por juristas. En su lugar, neutralizó la descripción del hecho policial y enfatizó los “más de 200 detenidos” probablemente como éxito de la acción contra infiltrados.

En suma, el 21 de enero El Comercio continuó criminalizando la protesta (uso de vándalos, omisión de demandas) pero envolviendo la narrativa en un tono aparentemente objetivo: hechos duros, números, investigación propia. Esa es su manera de mantener autoridad

ante sus lectores de clase media empresarial: no grita como Perú21, pero conduce hacia la misma conclusión de fondo –que las protestas están fuera de control por actores violentos organizados, y que la respuesta estatal es necesaria.

Por su parte, La República el 21 de enero tituló: “Fuera de control y no hay diálogo”. Este titular es notable porque puede leerse con doble significado. “Fuera de control” alude a la situación caótica que vive el país: reconoce que la crisis se ha desbordado (seguramente pensando en los nuevos brotes de violencia del 20 de enero, como Antapaccay y otros). Pero inmediatamente añade “y no hay diálogo”, lo que direcciona la interpretación hacia la responsabilidad gubernamental: la frase completa sugiere que el país está fuera de control porque no hay diálogo desde el Ejecutivo.

Es, de hecho, una crítica directa a Boluarte y su gabinete, pues implícitamente dice: esto se incendia y el gobierno no dialoga para solucionarlo. La República, con este titular, logró encapsular su postura crítica: por un lado, no niega que hubo violencia y desborde (no es un medio que oculte los hechos; “fuera de control” admite que la cosa está grave), pero por otro lado señala la falta de diálogo como factor clave. Está colocando la carga de la salida en la acción (o inacción) del gobierno.

En el subtítulo, La República seguramente amplió esta idea, posiblemente mencionando que Boluarte seguía negándose a adelantar elecciones o a conversar con líderes sociales, mientras la conflictividad se agravaba. Es incluso factible que haya incluido referencias a la cantidad de fallecidos y denuncias de excesos. De hecho, conocemos por la portada del 22 que La República se basó mucho en opiniones de juristas y organismos de derechos humanos; quizás el 21 ya citaba alguna reacción de la Defensoría del Pueblo u ONGs instando al diálogo.

En cuanto a imágenes, en portada probablemente mostró escenas tanto de los disturbios (podría ser la imagen de la comisaría quemada u otras, para ilustrar el “fuera de control”) como de alguna conferencia del gobierno sin resultados (por ejemplo, Boluarte en Palacio, sola, enfatizando el “no hay diálogo”). En todo caso, el encuadre general de La República el 21 es crítico al gobierno: a diferencia de los otros diarios, que centraron la culpa en los manifestantes, aquí se sugiere que la crisis se prolonga porque la respuesta estatal es deficiente (falta de diálogo). Esto se alinea con la línea editorial pro-derechos humanos de La República, que veía a Boluarte como intransigente y desconectada.



De nuevo, La República cumple el papel de contradiscurso: mientras los otros medios pedían más mano dura o celebraban las operaciones policiales, este medio clamaba por diálogo y cuestionaba la estrategia gubernamental de solo represión.

Finalmente, El Peruano en su portada del 21 de enero parece haber ajustado ligeramente el mensaje con respecto al día anterior. Su titular principal fue: “Ejecutivo llama al diálogo para resolver demandas populares”. Este enunciado destaca deliberadamente la faceta conciliadora del gobierno: “llama al diálogo” para atender “demandas populares”. Notemos que aquí El Peruano sí usa el término demandas populares, reconociendo implícitamente que existen reclamos legítimos que atender.

Tras la dureza del “rigor de la ley” del día previo, el gobierno buscaba ahora (quizá por presión internacional y del sentido común) proyectar una imagen de apertura. El diario oficial, lealmente, ajustó su foco para amplificar esa nota: Boluarte y sus ministros dispuestos a dialogar. Este cambio es interesante: revela la estrategia comunicativa

gubernamental de mezclar disuasión y cooptación –el “zanahoria y garrote”– y cómo su aparato mediático (El Peruano) la sigue.

Sin embargo, cabe preguntarse: ¿omitió El Peruano las dimensiones de violencia o las acciones policiales? Posiblemente en la portada del 21 incluyó también menciones a los hechos, pero bajo la narrativa oficial. Quizá mencionó el operativo de San Marcos en términos positivos (algo como “PNP restablece el orden en universidad” o “Capturan a radicales en San Marcos”, aunque eso podría haberse visto muy duro al lado del llamado al diálogo). Lo que tenemos seguro es que al priorizar “llamado al diálogo”, El Peruano buscó legitimar al Ejecutivo mostrando su voluntad de solución pacífica.

DIARIO OFICIAL DEL BICENTENARIO

EL PERUANO

SABADO 21 DE ENERO DE 2023

ANNO DE LA UNIDAD LA PAZ TEL. 011 411 1000 www.elperuano.pe

LOS RETOS DE LA CELAC

CENTRAL CUMPRE PRESIDENCIAL DESPUES PROBLEMAS DE SUS 33 PAISES MIEMBROS. P. 8-9

ECONOMIA

MTC ejecuta trabajos en 1,440 km de carreteras nacionales

Asfaltado, pavimentación y conservación de rutas. P. 10

EL 85% DEL TERRITORIO NACIONAL REGISTRÓ ACTIVIDAD LABORAL PLENA

Ejecutivo llama al diálogo para resolver demandas populares

●● Ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta, destaca que la única manera de atender las necesidades del país es con tranquilidad, armonía y paz.



●● Titular del Interior, Vicente Romero, denuncia intento de chantajear al Gobierno mediante la violencia.

●● En Puno, el Centro Binacional de Atención en Frontera (Cebaf) fue incendiado y saqueado. P. 2

Ministros de Estado hicieron un balance de los acontecimientos ocurridos durante las protestas en Lima y las regiones.

Es un mensaje a la opinión pública para contrarrestar las críticas: “el gobierno sí escucha”. Claro está, en la realidad ese diálogo no se concretó en nada sustancial en esos días, pero comunicacionalmente servía. En la bajada, probablemente repitió información sobre la identificación de violentistas (según vimos, el 20 mencionó que se “individualiza” a los que causan caos) y las acciones para mantener el orden. Quizá citó a la propia Boluarte diciendo que las puertas siguen abiertas al diálogo pero sin tolerar la violencia.

También es factible que enumerara alguna acción gubernamental concreta, por ejemplo, anuncio de mesas de trabajo o la invitación a alguna comisión de mediación (si es que la hubo). En cuanto a imagen, El Peruano el 21 de enero bien pudo poner una foto de la presidenta en alguna reunión de emergencia o de un ministro conversando con gente, para escenificar ese diálogo (aunque difícilmente tendrían foto real de diálogo con manifestantes, que no ocurrió; tal vez foto de Boluarte en conferencia de prensa llamando a la paz). Alternativamente, pudieron haber usado la imagen del traslado de ayuda humanitaria o algo positivo.

En todo caso, El Peruano no exhibiría imágenes crudas de violencia en primera plana, pues su objetivo es bajar la tensión y resaltar el control del gobierno.

Con las portadas del 21 de enero, se confirma el alineamiento observado: Perú21 y El Comercio continuaron centrados en la violencia atribuida a manifestantes (con distintos estilos), La República en la crítica a la respuesta estatal y la legitimidad de las demandas, y El Peruano en la narrativa institucional que justifica la autoridad (aunque modulando entre amenaza y conciliación).

5.1.2.3. Portadas del 22 de enero de 2023: Represión en San Marcos, conspiraciones y narrativas divergentes

La jornada informativa del 22 de enero correspondió a lo ocurrido el sábado 21: principalmente, la intervención policial en la Universidad de San Marcos con la detención masiva de estudiantes y manifestantes refugiados allí, además de la continuación de algunos bloqueos y la respuesta política a esos hechos. Aquí las portadas exhibieron quizás su mayor grado de divergencia, al punto de parecer que describían realidades paralelas.

La República tituló sin ambages: “Represión inconstitucional”. Este titular califica directamente la acción policial en San Marcos como una represión contraria al orden constitucional. Es un enmarque jurídico-moral muy fuerte: acusa al gobierno de violar la ley y los derechos. Para sustentar esa afirmación, la portada de La República estuvo acompañada por varias bajadas con voces autorizadas: citó a juristas y constitucionalistas que argumentaban que la PNP actuó al margen de la ley, dado que incluso en estado de emergencia se requería la presencia de un fiscal o la constatación de flagrancia para ingresar a la universidad (lo cual no se cumplió). También recogió declaraciones del

constitucionalista Omar Cairo señalando que el gobierno cometió una infracción constitucional con ese operativo y que hubo un agravio grave a derechos fundamentales.

Asimismo, la portada informó del número de detenidos: unas 205 personas, entre estudiantes y ciudadanos llegados de provincias, llevadas a unidades policiales especializadas (Dircote y Dirincri) donde quedaron retenidas. Se destacó que entre los detenidos había gente inocente que simplemente se alojaba allí, lo cual amplificaba la sensación de abuso indiscriminado. La República también incluyó en portada la crítica interna a la Rectora de San Marcos (Jeri Ramón), quien había autorizado el ingreso policial: mencionó que la comunidad universitaria rechazó su decisión y que su excusa fue “no sabía que iban a llegar con tanques”.



Todo este conjunto narrativo presenta el operativo como desproporcionado y violento (“tanqueta irrumpe... detienen sin presencia fiscal”) y enfatiza sus víctimas (estudiantes, provincianos detenidos arbitrariamente). Visualmente, la portada de La República mostraba fotografías de la intervención: es probable que incluyera la imagen de los detenidos boca abajo en el suelo esposados, rodeados de policías armados dentro de San Marcos –imagen que circuló ampliamente en medios internacionales y redes sociales como símbolo de abuso. También pudo mostrar a la tanqueta derribando la puerta de la universidad. Es decir,

La República construyó la portada como una denuncia: tanto textual (“represión inconstitucional”) como visual (escenas de la redada). Este es un claro ejemplo del paradigma de la protesta en su variante contraria a la habitual: mientras la mayoría de medios suelen criminalizar a manifestantes, aquí un medio está criminalizando, por así decir, la actuación del Estado. Se invierte la polaridad: la portada de La República hace énfasis en lo negativo del Nosotros (el gobierno reprimiendo ilegalmente) y en lo positivo o al menos digno de empatía del Ellos (manifestantes víctimas, estudiantes injustamente detenidos). Es un discurso contra-hegemónico, afín a posiciones de organizaciones de derechos humanos y sectores progresistas que ese fin de semana condenaron enérgicamente la operación policial.



En la antípoda, Perú21 continuó su campaña de caracterización de los manifestantes como enemigos violentos. Su portada del 22 de enero gritó en titulares rojos: “EL FUEGO ES SU ESTRATEGIA”. Encima, un cintillo negro informaba: “En lo que va de enero han incendiado, de manera sincronizada, 17 edificios públicos y privados”. Y debajo, un subtítulo añadía: “Subversivos tienen en la mira aeropuertos, comisarías, sedes judiciales y empresas mineras”. Toda la portada de Perú21 fue un despliegue de la narrativa de “terrorismo incendiario”: afirma que los grupos detrás de las protestas usan el fuego intencionalmente como táctica de caos, que hay coordinación (“de manera sincronizada”) en los ataques incendiarios, cuantifica los daños (17 edificios quemados) y directamente llama

“subversivos” a los perpetradores, atribuyéndoles planes para más ataques a infraestructura estratégica.

Es, básicamente, la construcción de un enemigo interno organizado: un grupo subversivo nacional que está atentando contra el Estado. La alusión a “sedes judiciales, comisarías, aeropuertos, empresas mineras” como objetivos pinta la imagen de una insurgencia amplia. Este encuadre va más allá de la espontaneidad de protestas sociales: sugiere conspiración insurgente, casi al nivel de una guerrilla urbana-rural. Perú21 con esto legitima cualquier respuesta de seguridad: si “su estrategia es el fuego” y son subversivos, entonces se implican delitos gravísimos (terrorismo, sedición) y amerita la actuación más dura. De hecho, al usar “subversivos”, el diario se alinea con el léxico contrainsurgente que en Perú evoca a Sendero Luminoso; algo muy potente en el imaginario colectivo.

Además, esa edición incluyó la entrevista a Óscar Valdés cuyo encabezado respaldaba esta visión: “ya configuran una situación subversiva”. Visualmente, Perú21 probablemente puso en portada imágenes de algunos incendios: quizás un collage de fotos de edificios ardiendo (podría estar la del edificio histórico de Lima, la comisaría de Zepita en Ilimas, etc.) con la intención de impactar y atemorizar. Es destacable que no hay mención en absoluto a San Marcos ni a la palabra “policía” en el titular principal de Perú21. Es decir, ignoró por completo la polémica del ingreso a la universidad (que para La República fue la noticia), y siguió hablando solo de la violencia de los manifestantes. Esto revela una selección deliberada: Perú21 eligió no cubrir en portada el posible exceso policial, porque no calzaba con su narrativa; en su lugar, prefirió reiterar que “los malos” son los protestantes incendiarios.

En suma, el diario sensacionalista consolidó su posición de propagandista del orden por cualquier medio, buscando convencer a su audiencia de que el país enfrentaba poco menos que una insurrección terrorista, y por tanto justificando tanto la presencia militar en las calles como eventuales medidas de excepción.

El Comercio, ese 22 de enero, ofreció una portada en la que destaca un reportaje de investigación sobre conexiones políticas: “Azuzadores de protestas se reunieron con Castillo en Palacio y la cárcel”. Con este titular, el diario afirma haber descubierto un nexo directo entre ciertos líderes o promotores de las protestas y el expresidente Pedro Castillo. La bajada detallaba nombres: mencionaba a Marino Flores (un dirigente) que tuvo citas con Castillo tanto en Breña como en la prisión de Barbadillo; también a Lourdes Huanca

(dirigenta social) que ingresó a Palacio de Gobierno cuando Castillo era presidente. Y añadía que hay otros nueve impulsores de las protestas de diversas regiones con accesos a Castillo.



El propósito de esta historia es claro: politizar y deslegitimar la protesta atribuyéndola a una conspiración orquestada por el expresidente Castillo y sus allegados. En esencia, El Comercio suscribe a la teoría del gobierno de que las protestas no son auténticamente espontáneas ni legítimas, sino agitadas por operadores políticos –los “azuzadores”– leales a Castillo. Este marco traslada la discusión del terreno social al terreno político-criminal: en vez de ver a miles de ciudadanos indignados con un gobierno, se ve la mano de un “complot” para desestabilizar promovido por el exmandatario. Vincular las protestas a Castillo sirve para restarles legitimidad ante la opinión pública más amplia, pues Castillo salió del poder desacreditado.

El Comercio, al publicar esta investigación, pretende fijar la agenda en torno a “la trama oculta” de las protestas, desviando el foco de temas como la represión o las demandas ciudadanas. Es notable que este diario pudo acceder a información de inteligencia o de visitas carcelarias para armar la nota –lo cual indica cercanía con fuentes del gobierno o de las fuerzas de seguridad. En la propia portada se señalaba que este era un reporte de la “Unidad de Investigación” de El Comercio, dándole prestigio y connotación de rigurosidad.

Junto a este titular principal, El Comercio también cubrió lo de San Marcos, pero de manera secundaria y alineada con su narrativa: en un recuadro informó “PNP entra a San Marcos: hay más de 200 intervenidos y 3 detenidos”, con una foto de algunos detenidos custodiados por policías. Notemos la elección de palabras: “PNP entra” (eufemismo por “irrumpe”), “intervenidos” (un término técnico-policial que suena más neutro que “detenidos arbitrariamente”) y solo “3 detenidos” –lo cual es extraño porque en realidad todos quedaron detenidos en el momento.

En cualquier caso, El Comercio informó el hecho policial sin calificativos negativos y más bien enfocó en la agencia policial: la institución actuó (“entró”) y logró detener gente. En la foto, según descripción del análisis, El Comercio mostró a algunos detenidos en San Marcos, pero no con énfasis humanitario, sino casi como trofeos: personas sentadas en el suelo vigiladas por policías fuertemente armados. Esto sugiere: miren, la autoridad impuso orden y capturó a los revoltosos. Así, mientras La República mostraba a los detenidos como víctimas, El Comercio los muestra como objetos neutrales de un operativo policial legítimo.

Incluso el lenguaje es burocrático: “intervenidos” cosifica a los manifestantes detenidos, restándoles humanidad o rostro; no son estudiantes, no son provincianos en la narrativa de El Comercio, son simplemente objetos de acción policial. Esto se relaciona con la categoría de Van Leeuwen de activación/passivación: El Comercio passiviza a los manifestantes (los presenta en rol pasivo de “intervenidos”, sin voz) y activa al actor de la autoridad (la PNP entra, la PNP hace). Al mismo tiempo, criminaliza a otros actores supuestamente tras bambalinas (los “azuzadores” vinculados a Castillo).

El resultado es que su portada del 22 de enero justifica la acción estatal y desvía la atención a la hipótesis conspirativa. Visualmente, la imagen principal de su portada fue la de un grupo de detenidos de San Marcos custodiados, pero pequeña, porque el titular principal ocupaba la mayor parte. Quizá también incluyó fotos de Castillo o de los dirigentes mencionados en recuadros, para personalizar a los “azuzadores”. Importante es mencionar que en su bajada

El Comercio usó directamente un término valorativo hacia Castillo, llamándolo “golpista”. Esto marca claramente la posición editorial: denominar “golpista” al expresidente es tomar partido.

Sumado todo, la portada de El Comercio del 22 de enero es un ejemplo de discurso hegemónico sofisticado: con lenguaje aparentemente formal y noticioso, construye un relato en que los manifestantes son manipulados por intereses políticos desestabilizadores y las fuerzas del orden actúan legítimamente para restablecer el orden. No hay cabida para las demandas de fondo ni para cuestionar el modo de la represión.

Finalmente, El Peruano el 22 de enero se desmarcó de todos los anteriores en cuanto a temática principal: su portada priorizó una noticia positiva humanitaria. El titular en grandes caracteres fue: “Ayuda humanitaria beneficiará a más de 100,000 peruanos”, con el subtítulo “Puente aéreo por bloqueo de carreteras” y la aclaración de que la Fuerza Aérea transportó más de 13 toneladas de bienes de primera necesidad a regiones aisladas. Esto significa que el diario oficial deliberadamente restó importancia a la confrontación y decidió mostrar al Estado en acción proactiva para la gente.

DIARIO OFICIAL DEL BICENTENARIO

DIRECTOR GENERAL
FELIX ALBERTO
PAZ QUIROZ

DOMINGO 22
DE ENERO DE 2023

EL PERUANO

www.elperuano.pe

PRECIO S/2.00
IVA 10% S/0.20

FUNDADO EL 27 DE OCTUBRE DE 1825 POR EL LIBERTADOR SIMÓN BOLÍVAR

POLICÍA INTERVIENE LA UNIVERSIDAD SAN MARCOS

POLÍTICA. CASI DOS CENTENARES DE MANIFESTANTES FUERON DETENIDOS EN EL CAMPUS. P. 2



ECONOMÍA
Midagri inicia proyectos de riego en región Ayacucho
Iniciativa forma parte del programa Con Punche Perú. P. 10



DERECHO
OSCE PUBLICA MANUAL PARA ORIENTAR A ENTIDADES. P. 7



POLÍTICA
MTC evalúa alternativas de soluciones satelitales
Objetivo es el cierre de brechas de conectividad en el país. P. 4



PUENTE AÉREO POR BLOQUEO DE CARRETERAS

Ayuda humanitaria beneficiará a más de 100,000 peruanos

•• Más de 13 toneladas de bienes, entre insumos para el tratamiento de agua, alimentos, medicamentos y enseres, fueron trasladados por la Fuerza Aérea del Perú hacia la región Madre de Dios. P. 3

Ayer partieron a Puerto Maldonado dos aeronaves C-27J Spartan llevando ayuda humanitaria. El tercer vuelo está programado para mañana.

El mensaje es claro: el gobierno de Boluarte está preocupado por la población afectada (por ejemplo, por la escasez causada por los bloqueos) y está llevando ayuda, usando incluso un “puente aéreo” militar para saltar los bloqueos. Es un intento de ganar legitimidad mostrando gestión y empatía.

La noticia del operativo en San Marcos sí apareció en portada de El Peruano, pero relegada a una franja superior pequeña, titulada: “Policía interviene la Universidad San Marcos” con un subtítulo conciso: “Casi dos centenares de manifestantes fueron detenidos en el campus”. Obsérvese que ni siquiera se menciona controversia alguna; para el diario, es simplemente un hecho: la policía intervino y detuvo gente. No hay calificación negativa de la acción ni mención de legalidad.

Al estar puesto solo en un recuadro pequeño, El Peruano minimiza el tema, dándole un tratamiento rutinario, mientras despliega gran espacio a fotos de la ayuda humanitaria (imágenes de soldados cargando víveres, un avión Hércules despegando, etc.). Esta elección editorial es táctica: sabiendo que el operativo policial podía generar críticas, el medio estatal opta por cambiar la conversación hacia un logro humanitario del gobierno.

En términos de teoría periodística, esto es agenda framing deliberado: se enmarca el día como “gobierno ayuda a su gente” en vez de “gobierno reprime estudiantes”. Por supuesto, se alinea con su rol: El Peruano existe para servir al régimen de turno. Así, su portada del 22 de enero es prácticamente propaganda gubernamental: no solo defiende (al no criticar) la intervención policial, sino que promueve la imagen de un Ejecutivo eficiente y benevolente.

Es interesante que El Peruano a lo largo de esos días haya sido consistente en perpetuar la narrativa del poder central: primero la mano dura (20 de enero), luego la apertura al diálogo (21 de enero) y finalmente la acción social (22 de enero); todas son facetas del discurso oficial para mantener control y legitimidad. En cambio, no dio ningún espacio a voces disidentes ni a reconocer fallos del gobierno. En efecto, en ninguna portada de El Peruano se mencionó el término “represión” o alguna posible responsabilidad del Estado en las muertes; siempre la culpa recae en “violentistas” o en nadie (casos aislados). Esto ejemplifica lo que Fairclough llamaría un discurso reproductor de la hegemonía dominante: aquel que naturaliza las acciones del poder como necesarias y beneficiosas, sin jamás cuestionarlas.

Aquí las diferencias son más que notorias: cada portada “vivió” un país distinto ese día. Desde un gobierno casi caritativo (El Peruano) hasta un estado represor (La República), pasando por una nación bajo ataque subversivo (Perú21) o un conflicto manejado tras bambalinas por un expresidente preso (El Comercio). En efecto, las portadas funcionaron como trincheras discursivas en la pugna por definir la naturaleza de la crisis de enero. Como señala la teoría del framing, los medios no solo informan hechos sino que le dan sentido a esos hechos mediante sus enfoques. Aquí, los sentidos propuestos eran antagónicos.

Vale la pena destacar el rol de las imágenes y elementos visuales en estas portadas del 22, porque refuerzan los mensajes: Perú21 probablemente puso fotos de fuego y destrucción (impacto emocional de miedo e ira); La República puso fotos de la policía y detenidos en San Marcos (impacto emocional de indignación moral); El Comercio acompañó con fotos de los “azuzadores” o de detenidos pero en clave neutral/punitiva (impacto de “descubrimiento” de la conspiración y de eficacia policial); El Peruano puso fotos de aviones con ayuda y tal vez alguna foto institucional (impacto de alivio y confianza en la acción estatal). En cada caso, la imagen complementa el texto en una narrativa coherente ideológicamente.

5.1.3. Dimensión de la práctica discursiva: producción, audiencia y estrategias narrativas

Tras el análisis textual y visual, corresponde situar estas portadas en el ámbito de la práctica discursiva, es decir, entender cómo y por qué se produjeron de esa manera, considerando las rutinas periodísticas, las líneas editoriales, la estructura de propiedad de los medios y su relación con las audiencias e instituciones. La práctica discursiva conecta la dimensión micro (texto) con la macro (sociocultural), mostrando las mediaciones institucionales. La estructura del mercado y los perfiles de audiencia contextualizan la influencia de las portadas analizadas. El Grupo El Comercio presenta una posición dominante en impresos: según la SEPP (2013–2014), concentró el 80% de la circulación efectiva de diarios y el 78% de la lectoría del mercado peruano, tras la compra de EPENSA en 2013 (MOM Perú, 2016, “Impresos y digitales: Circulación y lectoría”). Esta concentración se extiende al ámbito digital, donde el grupo reúne 65% de la audiencia mensual de usuarios únicos (MOM Perú, 2016). En este contexto, El Comercio, diario de referencia del grupo, resulta particularmente influyente en Lima y entre élites político-económicas (MOM Perú, 2016). Por su parte, La

República mantiene presencia regional a través de ediciones y redes de correspondencia, lo cual amplía su llegada fuera de Lima (véanse los perfiles de consumo regional en mediciones de CPI, 2021). En contraste, El Peruano es un diario oficial con audiencia especializada, centrado en publicación de normas y comunicados, por lo que su impacto en la opinión pública general es acotado; aun así, es referencia en ámbitos gubernamentales y profesionales (Editora Perú, 2023). Finalmente, Perú21 (Grupo El Comercio) se posiciona como tabloide de segmento urbano popular, beneficiándose del alcance del consorcio líder. Estas diferencias de audiencia y alcance deben ponderarse al interpretar la influencia de los encuadres: por ejemplo, un frame de El Comercio es susceptible de llegar a grandes bolsillos de lectoría e intermediarios de opinión; un frame de El Peruano, en cambio, intervendrá sobre públicos institucionales y profesionales más acotados (MOM Perú, 2016; Editora Perú, 2023; CPI, 2021). La concentración del mercado en torno al Grupo El Comercio, la presencia regional de La República, el carácter institucional de El Peruano y la orientación popular de Perú21 configuran escenarios diferenciados de alcance y recepción, donde las portadas no solo reflejan líneas editoriales, sino también relaciones de poder mediático que condicionan su impacto en la opinión pública.

En primer lugar, hay que subrayar la concentración mediática y alineamientos ideológicos en la prensa peruana. El Comercio y Perú21, pese a sus diferencias de estilo (uno serio, otra sensacionalista), pertenecen al mismo conglomerado Grupo El Comercio. Este grupo, al igual que otros pocos (Grupo La República, grupo Epensa), controla la mayoría de diarios nacionales, y ha sido históricamente identificado con posiciones políticas conservadoras, pro-mercado y defensoras del status quo económico-político. En efecto, el Grupo El Comercio –propiedad de la familia Miró Quesada– fue frecuentemente acusado de apoyar a los gobiernos de turno alineados con el modelo neoliberal y de tener una agenda anti-izquierda. En 2013, este grupo adquirió varios otros diarios (Epensa), consolidando un oligopolio mediático que generó preocupación por la pluralidad informativa en el país.

Por su lado, La República pertenece al Grupo La República (familia Mohme), el cual tradicionalmente ha representado una línea centro-izquierdista, nacida al calor de la oposición democrática durante el régimen de Fujimori en los 90. Si bien La República es un medio privado, suele ofrecer una vitrina a voces progresistas, movimientos sociales y denuncias de corrupción, diferenciándose del bloque dominado por El Comercio. Finalmente, El Peruano es un diario de propiedad estatal (fundado en 1825, es el diario oficial del Perú); su director es designado por el gobierno de turno y su función principal es

publicar normas legales, pero también tiene secciones informativas que obviamente responden a la visión del Ejecutivo.

Este panorama explica en gran medida el comportamiento discursivo observado: El Comercio y Perú21 actuaron en tándem como portavoces de la clase gobernante civil tradicional y de la derecha “ordenista”; La República fungió de medio contra-hegemónico dando voz a la indignación ciudadana y vigilando el abuso de poder; y El Peruano sirvió como órgano de propaganda gubernamental tratando de legitimar al régimen ante la opinión pública.

La coordinación entre El Comercio y Perú21 se hizo evidente en la convergencia temática y léxica de sus portadas. Si bien Perú21 fue más estridente (propio de un tabloide), ambos enfatizaron la teoría de la subversión y omitieron las motivaciones de la protesta. Es muy probable que existiera una orientación editorial común dictada desde la dirección del Grupo El Comercio para cubrir estas protestas bajo cierto marco. En lugar de inferir una directiva interna, la evidencia disponible permite describir una sincronía de marcos entre cabeceras del mismo grupo empresarial durante el periodo analizado. Hasta el 31 de enero de 2023, Perú21 formaba parte del Grupo El Comercio (la venta se anunció el 27 de enero y se hizo efectiva el 1 de febrero de 2023), y en fechas clave ambas cabeceras exhibieron alineamientos editoriales. Por ejemplo, el 20 de enero de 2023 las portadas titularon en clave de orden/violencia en la capital: Perú21 (“Es violencia política, no es protesta social”) y El Comercio (“Vándalos desatan caos en Lima...”). Este patrón sugiere convergencia en el tratamiento editorial del pico de conflictividad sin que medien, con la evidencia disponible, pruebas documentales sobre instrucciones formales.

Para Perú21 la audiencia objetivo son sectores populares urbanos y clases medias bajas, a quienes llegan con mensajes simples, emocionales y de mano dura (es un diario que ha cultivado una línea de “ley y orden”, con portadas muchas veces agresivas contra delincuentes, políticos de izquierda, etc.). En cambio, El Comercio apunta a empresarios, profesionales y capas medias-altas urbanas, que valoran la estabilidad económica y el orden, pero también cierto decoro informativo. Por eso El Comercio moduló su discurso para sonar objetivo (datos, investigación), ya que su público podría rechazar un amarillismo abierto, pero a la vez envió las mismas señales de condena a la protesta y apoyo al gobierno de Boluarte que Perú21.

Esta adaptación al público se nota: el framing es equivalente, la retórica cambia. Perú21 apela al miedo y la indignación visceral (“nos están quemando el país, ¡son terroristas!”), El Comercio apela a la razón instrumental del lector (“esto es un complot contra la estabilidad del país, respaldemos la institucionalidad”). En ambos casos, confirmaron los sesgos de sus audiencias: un lector de Perú21 probablemente ya era crítico o temeroso de las protestas, y sus portadas reafirmaron sus creencias (efecto de cámara de eco); un lector de El Comercio, más moderado, recibió un relato que encajaba con su predisposición a desconfiar de Castillo y de las movilizaciones radicales, pero presentado de manera más “seria”.

Por otra parte, La República se posicionó buscando representar a un sector ciudadano crítico del gobierno y empático con la protesta. Su audiencia histórica incluye académicos, universitarios, profesionales progresistas, activistas de derechos humanos e incluso gente del interior del país que ve en este diario un contrapeso a la narrativa limeña conservadora. Durante el conflicto, La República seguramente tenía corresponsales o colaboradores cercanos a las organizaciones de derechos humanos; de hecho, sus notas reflejaron informaciones y argumentos de la Coordinadora de DD.HH., de la Defensoría del Pueblo, etc.

Es decir, su práctica discursiva implicó privilegiar fuentes distintas: mientras El Comercio y Perú21 privilegiaron fuentes oficiales (Ministerio del Interior, policía, partes oficiales, e incluso rumores de inteligencia sin confirmar replicados como posibilidad), La República dio espacio a fuentes alternativas: entrevistas a manifestantes, opiniones de juristas independientes, voceros de ONG y familiares de víctimas. Esta selección de fuentes alimentó las diferencias textuales: por ejemplo, citar a Omar Cairo (constitucionalista) criticando la incursión policial brinda términos como “inconstitucional”, “agravio a derechos” que luego fueron a titular. En cambio, El Comercio citando al Ministro del Interior le dará frases como “golpista Castillo”, “azuzadores captados”, etc.

Van Dijk resalta que la elección de fuentes y voces en la noticia es una macroestrategia ideológica: los medios tienden a citar preferentemente a quienes refuerzan su marco ideológico de base. Esto se cumplió cabalmente. Incluso la estructura narrativa divergió: notamos que en El Comercio y Perú21 la secuencia narrativa es “desorden → acción policial → resultado / explicaciones oficiales”, mientras que en La República era “protesta → represión estatal → reacción crítica”. Es decir, unos narran desde la perspectiva del orden establecido (comenzando por qué hicieron “ellos” y cómo respondieron “nosotros”), y otro

narra desde la experiencia del manifestante (qué reclamaba, cómo lo reprimieron). Este enfoque influye en cómo se construye la comprensión global del lector.

Un elemento clave en la práctica discursiva es el uso de ciertos géneros periodísticos en portada. Observamos, por ejemplo, que El Comercio usó el género “investigativo” (Unidad de Investigación) en la del 22 de enero, lo cual en la práctica es un discurso de autoridad periodística: se presenta como revelando algo oculto, lo que predispone al lector a creer que es la verdad descubierta por periodistas serios. Perú21, en cambio, usó un género más de campaña editorial: sus portadas parecían portadas-opinión, con titulares que bien podrían ser editoriales (afirmaciones valorativas directas, no noticias factuales).

La República y El Peruano se mantuvieron más en género noticioso: La República relatando eventos con adjetivos calificativos pero fundamentados (apoyándose en fuentes); El Peruano, boletín oficial con declaraciones. Esta diferencia de géneros forma parte de la estrategia discursiva para conectar con la audiencia y lograr determinados efectos. Perú21 quiere conmocionar e influir emocionalmente (persuadir directamente, su titular del 20 “No es protesta, es violencia” es casi imperativo cognitivo al lector: “no veas esto como protesta”), El Comercio quiere establecer agenda y persuadir indirectamente (presenta un hecho –“azuzadores se reunieron con Castillo”– y deja que la conclusión “esto está organizado por Castillo” surja en el lector sin decirlo explícito en primera persona del diario).

La República quiere denunciar e influir en la opinión pública y quizás en autoridades (sus portadas buscaban generar indignación y presión para cambios, como que cese la represión o se inicie diálogo), y El Peruano busca justificar y tranquilizar (sus portadas buscaban calmar al ciudadano que consume medios estatales diciéndole: “todo está bajo control, el gobierno actúa por tu bien, los malos serán castigados”).

También es pertinente analizar la intertextualidad y la influencia de entornos digitales. Estas portadas no existieron aisladas: simultáneamente, en redes sociales y TV, circulaban videos de la violencia y diversas narrativas. Por ejemplo, la quema del edificio en Lima fue ampliamente difundida por TV y Twitter con narrativas polarizadas (unos culpando a infiltrados, otros a negligencia de bomberos, etc.). Es posible que Perú21 tomara la frase “Es violencia política, no es protesta” de alguna declaración del gobierno o líder de opinión. Igualmente, “El fuego es su estrategia” pudo originarse en algún discurso (quizá de la policía) o en análisis de inteligencia. Esto sugiere que los medios impresos recogieron y amplificaron ciertos discursos ya circulantes.

Van Leeuwen habla de las estrategias de legitimación en el discurso; una es la autoridad. En nuestro caso, Perú21 y El Peruano legitiman sus narrativas apoyándose en autoridades: Perú21 entrevistando a un exministro, El Peruano citando a la Presidenta. El Comercio legitima la suya usando la autoridad del periodismo de investigación (y obviamente fuentes de inteligencia gubernamental anónimas). La República legitima su denuncia citando a expertos legales y mostrando hechos (fotos de abusos). Son diferentes formas de reclamar “esto que decimos es verídico y ustedes deben creerlo”. En el fondo, todos tratan de ganarse la credibilidad del público, pero lo hacen sirviendo intereses distintos.

Un punto importante es el impacto de la convergencia mediática: dado que Grupo El Comercio tenía varios medios, su narrativa probablemente dominó la cobertura en radios asociadas, portales web y canales de TV que replicaron sus notas. Es sabido que muchos ciudadanos que quizá no leyeron directamente El Comercio o Perú21, igual se enterarían de su enfoque a través de noticieros o redes. Por ejemplo, los titulares de portada suelen comentarse en la radio matutina: “Hoy El Comercio informa que azuzadores se reunieron con Castillo...”, “Perú21 destaca que el fuego es la estrategia de los subversivos...”, etc. Esto amplifica el alcance de esos marcos interpretativos.

La República, al ser minoritaria en tiraje comparado con El Comercio, tuvo menos eco en otros medios tradicionales, pero su mensaje sí caló en redes sociales y entre líderes de opinión críticos, generando debates online sobre la legalidad de las medidas del gobierno. En todo caso, en la arena mediática convencional, la narrativa conservadora fue hegemónica esos días. Incluso diarios regionales o canales de televisión replicaron en buena medida la terminología de “violentos” y el énfasis en destrozos, porque la concentración mediática inclina la balanza.

No obstante, la fuerte reacción de sectores civiles (organismos de derechos humanos, pronunciamientos académicos, comunicados de ONGs) a las muertes y a casos como San Marcos generó también contradiscursos que circularon fuera de estos medios, sobre todo en internet. La República representó parte de ese contradiscurso, pero mucho ocurrió en redes. Cabe mencionar que en Twitter, durante esos días, se popularizaron hashtags tanto a favor de la mano dura como a favor de los manifestantes. Los diarios claramente se alinearon: Perú21 prácticamente reflejaba los argumentos de las tendencias pro-gobierno en redes, y La República los de oposición ciudadana. Esto muestra que la práctica discursiva mediática se nutrió de la polarización social existente y a su vez la alimentó.

Desde el punto de vista de género periodístico de la portada, hay que considerar que las portadas son piezas de alto nivel de edición y no se arman al azar: en la práctica discursiva, los editores jefes y directores de cada medio participaron en decidir esos titulares y enfoques. Es decir, no son meramente obra del reportero; son decisiones editoriales institucionales.

Probablemente el director de Perú21 definió personalmente esos titulares duros, sabiendo el efecto buscado. En El Comercio, un comité editorial habría priorizado el enfoque de “azuzadores” en base a información que el gobierno quería sacar. En La República, su dirección incidió en que había que denunciar lo de San Marcos sin tapujos, fiel a su tradición democrática. Y en El Peruano, obviamente la orientación vino de la Secretaría de Comunicación del gobierno: Boluarte y su equipo seguramente monitoreaban la portada de El Peruano para que transmitiera el mensaje político del día.

En suma, cada portada es resultado de una producción alineada con los intereses de grupo: intereses comerciales (Grupo El Comercio defiende la estabilidad de un país para que sigan los negocios), intereses políticos (El Peruano defiende al gobierno que lo maneja), intereses ideológicos (La República defiende la institucionalidad democrática y los derechos humanos frente a abusos).

Un último aspecto de la práctica discursiva es la cohesión narrativa a lo largo de los días. Vemos que no hubo giros radicales en la postura de cada medio de un día a otro; más bien, se mantuvieron consistentes. Eso obedece a la necesidad de coherencia editorial: los lectores habituales esperan eso. Un lector de Perú21 se habría desconcertado si el 22 de enero el diario salía con “Excesos policiales en San Marcos”; en cambio, espera confirmación de su visión (“subversivos incendiarios”). La coherencia construye credibilidad dentro de su nicho.

Lo mismo con La República: su lector hubiese repudiado que titulase “San Marcos: PNP restablece orden”; eso traicionaría su línea. Así, la práctica discursiva también se rige por la identidad de marca periodística. Cada diario tiene una identidad discursiva cultivada por años, que en momentos de crisis se acentúa. De hecho, estos episodios son definitorios: consolidan ante la sociedad quién es conservador y quién es progresista en medios. Es casi un performance esperado.

En conclusión de esta sección, la práctica discursiva nos revela que no estamos ante “accidentes informativos” sino ante productos deliberados de aparatos mediáticos con intereses. La polarización de portadas respondió a la polarización de las élites y sectores sociales a los que esos medios pertenecen o interpelan. Los diarios no actuaron como observadores neutrales, sino como actores políticos que tomaron partido discursivo en el conflicto, ya sea para sostener el orden establecido (conservadores y gobierno) o para cuestionar su legitimidad (diario crítico). Esta praxis muestra el rol de los medios en la lucha hegemónica: cada portada fue un intento de hegemonizar el sentido público de lo que pasaba. Los conservadores querían fijar el significado como “violencia delincuencial”, los críticos como “protesta legítima reprimida”. En cierta medida, ambos discursos circulan hoy en la memoria colectiva sobre enero 2023, evidenciando que la batalla simbólica sigue abierta.

5.2. Discusión del análisis y hallazgos

Llegando a una visión de conjunto, podemos articular cómo estas prácticas discursivas y textos se inscriben en el contexto sociocultural descrito inicialmente, y qué implicancias ideológicas conllevan. Durante el análisis se han ido mencionando ya elementos de colonialidad del poder, del paradigma de la protesta, etc., pero conviene explicitarlos a modo de cierre.

Primero, salta a la vista que las narrativas mediáticas reproducen esquemas profundamente arraigados en la historia y estructura social peruana. Los diarios conservadores (El Comercio, Perú21 e incluso El Peruano en su papel oficial) recurrieron a tropos que se pueden rastrear desde la época republicana temprana: la idea del “indio revoltoso” o del “provinciano ignorante manipulado”, la dicotomía de Lima civilizada vs. hordas del interior. Al tachar a los manifestantes de “vándalos”, “violentistas” o “subversivos”, reactivaron estereotipos de la otredad subalterna: los pintaron como irracionales, inherentemente violentos, movidos por instintos o azuzados por demagogos. Esto entronca con la colonialidad del poder porque justifica la dominación de la élite (el Estado centralizado, las FF.AA., la “gente decente” limeña) sobre esos “otros” supuestamente incapaces de protesta legítima. De hecho, la criminalización mediática es parte del proceso de racialización y estigmatización histórica: se negó voz y legitimidad a los actores mayoritariamente quechua-aymara y provincianos que estaban protestando, reduciéndolos a encarnaciones

de la violencia. Esto refuerza la jerarquía colonial: las únicas voces válidas que presentaron esos medios eran las de autoridades blancomestizas (Boluarte, ministros, policía) o la élite mediática misma; las voces indígenas, campesinas, fueron ignoradas o distorsionadas.

Por otro lado, La República trató de subvertir en parte esa narrativa colonial, al retratar a los manifestantes como ciudadanos con agencia y reclamos válidos. Al hablar de “miles de personas de provincias”, al visibilizar muertos y heridos civiles, este diario cuestionó la invisibilización del sujeto indígena/provinciano en el espacio público. Se podría decir que La República asumió una postura anti-hegemónica emergente: no es que rompa totalmente con lógicas de poder (sigue siendo un medio limeño también), pero intentó centrar la mirada desde el margen en vez del centro. Por ejemplo, su insistencia en la falta de diálogo implicaba que reconocía la legitimidad de los demandantes y la necesidad de incorporarlos al sistema democrático, lo cual es una postura inclusiva contraria a la lógica colonial de silenciar. En cuanto a La República, sus portadas reflejaron una orientación claramente distinta a las de los diarios conservadores. La República destacó por humanizar a los manifestantes y por criticar la respuesta estatal (por ejemplo, incluyendo testimonios de familiares de víctimas de la represión) y llegando a señalar responsabilidad de las fuerzas del orden en la violencia, algo que ningún otro diario de la muestra hizo). Esta línea editorial contracorriente supone, hasta cierto punto, un quiebre con la narrativa dominante Lima-céntrica; en ese sentido podríamos decir que La República incorpora gestos decoloniales, al recentrar la atención en sujetos históricamente subalternizados. No obstante, caracterizar globalmente a La República como un diario decolonial sería impreciso. Su orientación ideológica se adscribe más bien al progresismo liberal democrático: es un medio de centro-izquierda institucional, defensor de los derechos humanos y la diversidad cultural dentro del marco del estado de derecho. En la cobertura analizada, La República actuó conforme a esos valores liberales pluralistas, cuestionando el abuso estatal y dando voz a los marginados, lo que representa un enfoque más plural y empático que el del resto de la prensa comercial. Empero, su discurso sigue operando en el terreno del periodismo tradicional (por ejemplo, no adopta un lenguaje radical ni demanda cambios estructurales profundos decoloniales, sino más bien reformas democráticas). En síntesis, podemos afirmar que La República jugó un papel relativamente contra-hegemónico en la coyuntura, alineado en parte con lo que un enfoque decolonial propondría (visibilizar al ‘otro’ negado por la colonialidad del poder), pero dentro de los límites de su matriz ideológica liberal. Esta matización es importante para no sobredimensionar su posición: La República fue más

crítica del gobierno que sus pares, pero no deja de ser un periódico del establishment mediático peruano, con las concesiones y sesgos que ello conlleva.

En términos ideológicos, podemos vincular esto con la teoría de Van Dijk sobre el racismo de élite: muchos discursos mediáticos reproducen sutilmente ideologías racistas/clasistas sin mencionarlas abiertamente. En estas portadas, hablar de “vándalos”, “turba”, enfocarse solo en violencia y nunca en las razones sociales, cumple esa función ideológica: presenta a los grupos mayoritariamente andinos como problema social (violentos, desestabilizadores) en lugar de como ciudadanos con derechos. Asimismo, el énfasis de Perú21 y El Comercio en el daño al patrimonio (edificio histórico quemado, mina paralizada, etc.) refleja la ideología de la élite: se valora más la propiedad (privada o cultural) que la vida de los manifestantes (ninguno de esos diarios puso en titular principal las muertes de manifestantes, que para el 21 ya sumaban más de 50). Esa priorización comunica qué (y quiénes) importan y qué no. Como menciona Van Leeuwen, la exclusión de ciertos participantes del discurso equivale a negar su relevancia social. Aquí, los muertos de Puno, Ayacucho, Junín apenas fueron cifras perdidas o ni se mencionaron en portadas conservadoras; las vidas de los manifestantes fueron simbólicamente borradas, mientras se lloraba un edificio o se destacaba a un policía herido. Esto tiene un potente efecto ideológico: refuerza la idea de que el orden y la propiedad (valores de las clases dominantes) valen más que la justicia social o la vida de campesinos (valores de las clases subalternas).

Otro elemento sociocultural es la normalización de la violencia estatal versus la deslegitimación de la violencia popular. En casi toda la prensa analizada, excepto La República, se asumió que la violencia venía solo de un lado y era condenable sin matices; la violencia policial quedó o bien justificada (Perú21 celebró la acción, El Peruano la enmarcó como “rigor de la ley”) o bien oculta (El Comercio la minimizó). Esto responde a la ideología del autoritarismo democrático que ha imperado en Perú pos-Conflicto Armado: una aceptación tácita de que la fuerza pública puede extralimitarse si es “necesario” para mantener el orden. Los medios hegemónicos, al no cuestionar la represión incluso ante decenas de muertos, envían el mensaje ideológico de que la “paz social” se defiende aun a costa de vidas subalternas. Es la perpetuación de lo que Sinesio López ha caracterizado como “ciudadanía segmentada”: plenos derechos (y garantías) para unos, mano dura para otros (López Jiménez, 2023). La República rompe con eso al hablar de “represión

inconstitucional”, introduce el discurso de derechos humanos en la esfera pública, peleando contra la amnesia o indiferencia general.

Empero, hay que notar que La República fue una sola voz contra al menos tres (El Comercio, Perú21, El Peruano) en contrario, más la mayoría de canales de TV que también apoyaron la línea dura en esos días. Esto sugiere que la hegemonía discursiva estuvo del lado del orden establecido. Para Gramsci, hegemonía es la capacidad de una clase de proyectar su visión como sentido común para la sociedad. Las portadas de El Comercio, Perú21 y El Peruano trataron de construir ese sentido común: “estas protestas son violentas e ilegítimas, el Estado hace bien en controlarlas, cuidado que hay terroristas, etc.”. Y, de hecho, lograron influir en una parte de la población que hasta hoy cree esa versión. La República, desde contrahegemonía, buscó plantar la semilla de otro sentido común: “se está reprimiendo injustamente a peruanos que protestan por causas atendibles, el gobierno comete abusos”. Esa batalla narrativa sigue en disputa en la memoria colectiva peruana, pero al menos en el momento, la versión conservadora dominó la agenda mediática principal.

No podemos dejar de mencionar la idea del “paradigma de la protesta” en la cobertura periodística. Según esta idea, los medios tienden a cubrir las protestas enfatizando aspectos como la violencia, el desorden, la desviación de la norma, personalizando en líderes radicales, en lugar de cubrir las causas o reivindicaciones. Eso es exactamente lo que hicieron El Comercio y Perú21: se enfocaron en los actos violentos (incendios, ataques), personalizaron la maldad en “azuzadores” o en la masa “vándalos”, y casi ignoraron las demandas (ni una portada de esos medios mencionó “elecciones anticipadas” o “Asamblea Constituyente”, por ejemplo, que eran pedidos centrales de los manifestantes). Al mismo tiempo, restaron importancia al contenido del discurso de protesta y destacaron el contexto de confrontación.

La República fue la excepción que rompió parcialmente ese paradigma, al menos enumerando demandas y criticando al poder. Es interesante que el paradigma de la protesta se cumpla incluso con medios estatales: El Peruano, uno podría pensar que al ser gubernamental podría decir “sí reconocemos las demandas pero pedimos paz”, etc., sin embargo, actuó más bien para desacreditar también la protesta enfatizando “se empañó por violencia”, “violentistas”, etc. Es decir, cumplió el paradigma igualmente desde la óptica oficial: protesta = problema de orden público, no expresión política válida. Solo al mencionar “demandas populares” en la portada del 21, dio una pequeña concesión retórica, pero sin

detallar cuáles demandas. O sea, las “demandas” se mencionan vacío, sin contenido, trivializándolas.

En cuanto a consecuencias discursivas y sociales, este análisis comparativo evidencia que la prensa escrita peruana, ante una crisis, se fragmentó en relatos divergentes acordes con las posiciones de clase/poder de cada medio. Para parte de la prensa y de la élite, lo ocurrido fue vandalismo delincuencia que requería control estricto; para otra parte (minoritaria), fue una explosión social mal manejada por un gobierno desconectado; para el gobierno mismo, un problema focalizado que se resolvería con orden y diálogo a su manera.

Cada lector, dependiendo de qué diario consumió, pudo haberse formado impresiones radicalmente distintas de la misma realidad. Esto es preocupante porque dificulta la creación de un entendimiento común de los hechos en la ciudadanía, polarizando aún más las percepciones. Medios como El Comercio y Perú21 ayudaron a justificar ex post la represión (pues si todo era subversión, entonces las muertes se ven como “costos necesarios” o se culpa a los mismos manifestantes por exponer a violencia). De hecho, tras aquellas portadas, no hubo una gran indignación nacional por los muertos en el sur hasta que tiempo después se documentó más (en buena medida gracias a esfuerzos de prensa internacional o medios independientes). En cambio, medios como La República mantuvieron viva la narrativa de que hubo responsabilidades estatales, lo que aportó a que organismos internacionales e investigadores posteriores prestaran atención.

Finalmente, desde el punto de vista académico del análisis crítico del discurso, este caso refuerza la idea de que los medios no solo reflejan la realidad: la construyen activamente en favor de ciertas ideologías y relaciones de poder. Las portadas aquí estudiadas son claros ejemplos de discurso como práctica social: al etiquetar a alguien de “vándalo” o “subversivo”, un medio no está describiendo neutro, está haciendo algo –está posicionando a ese actor en una estructura de poder (por debajo, merecedor de castigo). Inversamente, al hablar de “represión inconstitucional”, un medio está empoderando discursivamente a los manifestantes como sujetos de derecho y buscando accountability del poder.

En ese sentido, el análisis nos mostró cómo el lenguaje importa: pequeñas diferencias léxicas (“protesta” vs “violencia”, “intervenido” vs “detenido”, “violentista” vs “ciudadano”, “caos” vs “movilización”, etc.) producen grandes diferencias de sentido. También las omisiones son reveladoras: lo que no se dice (por ejemplo, “muertos”, “por disparos”, “qué

pedían los manifestantes”) grita tan fuerte como lo que se dice, porque invisibiliza aspectos cruciales.

En diciembre de 2022, tras la destitución del presidente Pedro Castillo (quien intentó disolver el Congreso), estalló una convulsión social en Perú. La congresista Dina Boluarte asumió la presidencia el 7 de diciembre, pero esa medida provocó un rechazo masivo en el sur del país. En enero de 2023 continuaron las manifestaciones, especialmente en Puno, Cusco, Ayacucho y otras regiones andinas. Los manifestantes exigían adelanto de elecciones generales, la renuncia de Boluarte y el cierre del Congreso.

Durante la primera quincena de enero se registraron graves enfrentamientos: el 9 de enero, por ejemplo, tuvo lugar una masacre en Juliaca, donde los choques entre civiles y fuerzas del orden dejaron decenas de muertos. Para el 12 de enero, la Defensoría del Pueblo contabilizaba ya 49 fallecidos desde el inicio de las protestas. Ese mismo día, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos visitó el país para recabar información. En Lima, numerosas marchas exigían la salida de Boluarte y la liberación de Castillo. Este “estallido peruano” continuó durante todo enero y más allá, con una breve tregua durante las festividades de Año Nuevo.

Los días seleccionados para el presente estudio –8, 10, 11, 13, 14, 18–25, 27 y 29 de enero de 2023– coinciden con momentos clave del ciclo de protesta: tomas de carreteras, represión en universidades (notablemente San Marcos), y un paro nacional convocado para el 19 de enero por la CGTP, que paralizó amplias zonas del país. Cada una de estas fechas generó portadas contrastantes en la prensa nacional, lo que permite observar los distintos marcos interpretativos y estrategias discursivas empleadas por los medios.

5.2.1. Dimensión textual: enfoques y encuadres en titulares e imágenes

El nivel textual de las portadas constituye el punto de entrada donde se condensan macroproposiciones y se prefiguran lecturas preferentes del conflicto. Siguiendo a Fairclough, el texto no es un mero “reporte” sino un ensamblaje de elecciones léxicas, sintácticas y multimodales que materializan relaciones de poder e ideología; en la noticia impresa estas elecciones se cristalizan en el título, la bajada, los subtítulos y la imagen principal, que juntos orientan desde el primer golpe de vista la interpretación del acontecimiento (Fairclough, 1992, 1995). En las portadas analizadas de enero de 2023 se

observan dos constelaciones de recursos recurrentes. Por un lado, El Comercio y Perú21 activaron una semántica de amenaza y desorden a través de sustantivos y adjetivos de alta carga negativa —“vándalos”, “violentistas”, “ataques”—, cuantificadores enfáticos y construcciones veridictivas que clausuran la duda. Por otro, La República privilegió un léxico de derechos, duelo y demanda de diálogo, mientras que El Peruano desplegó un registro institucional-legalista que legitima la acción estatal y minimiza controversias al reubicar la violencia bajo la tutela del “rigor de la ley”.

Desde la perspectiva de van Dijk, los titulares condensan la macroestructura informativa y, a la vez, ejecutan el “cuadrado ideológico”: realzan lo positivo del propio grupo y lo negativo del otro, a la vez que atemperan lo negativo del propio y lo positivo del ajeno. Titulares como “VAN 580 POLICÍAS HERIDOS” acompañados de bajadas que imputan incendios o “ataques de vándalos” reorientan el foco hacia la victimización estatal, desplazando a segundo plano las muertes civiles y las causas de la protesta. Esa selección léxica cumple una función doble: ancla un marco de orden público y, simultáneamente, prepara inferencias causales en las que “el desorden” deviene antecedente y la “restauración del orden” aparece como consecuente necesario. La operación se refuerza a nivel de transitividad: “manifestantes” suelen ocupar la posición de sujeto agente con verbos de daño (“incendian”, “bloquean”, “atacan”), mientras que las intervenciones estatales se nominalizan o pasivizan (“se produjo el restablecimiento del orden”, “hubo intervención policial”), atenuando responsabilidades. El resultado es un patrón sistemático de asignación de agencia y culpa coherente con la polarización que describe van Dijk y que la literatura peruana ha documentado en coberturas de conflicto: el énfasis en la fase de crisis, la violencia y la responsabilización de quienes protestan, con escasas claves para la transformación del conflicto (Macassi, 2015).

En la semántica de la legitimación, las portadas del Grupo El Comercio y El Peruano activan con frecuencia tres estrategias descritas por van Leeuwen. Se apela a la autorización al citar mandos policiales, ministros o la propia Presidencia como garantes de verdad; se moraliza mediante juicios que califican prácticas como “inaceptables” o “intolerables”; y se racionaliza el uso de la fuerza en nombre de la “seguridad”, la “gobernabilidad” o la “legalidad”. Cuando estas estrategias coocurren con cifras, listas y viñetas, el efecto de objetividad técnica se intensifica y el lector recibe una arquitectura argumental cerrada que naturaliza la oportunidad y necesidad de la respuesta estatal. La República, en cambio, activa con mayor frecuencia la legitimación por evaluación consecuencialista orientada a

los derechos, al visibilizar víctimas, demandas y organismos de control, y al vincular la ausencia de diálogo con el agravamiento de la crisis. Esa diferencia no anula zonas de contacto: incluso en La República se observa una intensificación temática cuando los eventos se concentran en Lima, lo que recuerda que las macroestructuras también responden a jerarquías de centralidad noticiosa propias del ecosistema limeño.

El plano visual refuerza y a veces sobredetermina el encuadre verbal. Fotografías de incendios, encapuchados y multitudes fuera de control, situadas en planos abiertos y ángulos picados, construyen distancia, anonimato y amenaza. La semiótica de la figura del “encapuchado” ha sido analizada en el contexto chileno como metáfora que delegitima al movimiento en su conjunto; su extrapolación a la cobertura de protesta funciona de modo similar: personaliza la violencia, despolitiza las demandas y anula la pluralidad interna del sujeto que protesta (Cárdenas & Pérez, 2017). En el caso peruano, esa iconografía visual se complementa con un repertorio local de estigmatización —el “terruqueo”— que opera como etiqueta reductora y coloca a los manifestantes bajo sospecha de filiación subversiva. La literatura reciente muestra que el “terruqueo” se ha consolidado como tecnología discursiva para negar legitimidad a la protesta e inscribirla en una genealogía securitizada del enemigo, en diálogo con memorias traumáticas del conflicto armado (Velásquez Villalba, 2022). Cuando ese repertorio ícono-verbal aparece, las portadas no solo narran la coyuntura sino que reactivan sedimentaciones ideológicas de larga duración.

El anclaje colonial de estas elecciones se reconoce en la reproducción de dicotomías civilización/barbarie, centro/periferia y modernidad/atraso. La insistencia en rótulos como “violentistas” y la focalización en daños materiales sobre víctimas humanas reeditan un contrato de reconocimiento asimétrico que históricamente ha racializado y desciudadanizado a sujetos andino-amazónicos. Estudios previos de prensa peruana han mostrado cómo estrategias de inclusión/exclusión, pronominalización y selección léxica sostienen representaciones del “Otro” amazónico como “salvaje” o “bravo”, justificando prácticas de control y silenciamiento; estas regularidades reaparecen en el corpus de 2023 bajo nuevas formas, pero con una matriz similar (Arrunátegui, 2010). El texto periodístico, en suma, construye realidades: cuando la macroestructura temática fija “orden público” y la microsemántica intensifica amenaza, el horizonte de soluciones se estrecha a la represión. La alternativa textual —visible en ciertas portadas de La República— ensaya marcos de derechos y duelo, abre preguntas por responsabilidades estatales y, por ende, amplía el repertorio deliberativo sobre salidas políticas. En esa tensión se juega la disputa por el

sentido social de la protesta dentro del régimen de visibilidad limeño y su gramática de reconocimiento.

5.2.2. Dimensión discursiva: producción y circulación de los discursos

La práctica discursiva remite a los procesos de producción y consumo de los textos, a los contratos de lectura y a las cadenas intertextuales que conectan una portada con otras voces, géneros y eventos. En el caso analizado, estas prácticas se anclan en rutinas profesionales e institucionales que condicionan cuáles fuentes hablan, qué versiones circulan primero y cómo se estabilizan esquemas interpretativos. En medios del Grupo El Comercio, la selección y jerarquización de fuentes oficiales —comunicados policiales, pronunciamientos ministeriales, boletines empresariales— resulta dominante en la primera línea de cobertura. Esa preferencia genera dos efectos. El primero es la producción de “ventanas informativas” en las que la versión estatal adquiere estatus de conocimiento común; el segundo es una recontextualización de la protesta como problema de orden y gestión, antes que como conflicto de derechos y representación. La literatura sobre prensa peruana ha documentado que, en coyunturas de confrontación, los medios tienden a concentrarse en la fase aguda del conflicto, privilegiando hechos violentos y marcos de confrontación, con escasa atención a iniciativas de mediación o a voces subalternas; ese patrón es consistente con lo observado en enero de 2023 (Macassi, 2015).

El contrato de lectura, en este contexto, segmenta públicos y refuerza circuitos paralelos de sentido. Los lectores de El Comercio y Perú21 reciben cadenas intertextuales pobladas por cifras policiales, comunicados empresariales y declaraciones gubernamentales que convalidan una solución securitizada. Quien sigue La República encuentra con mayor frecuencia referencias a la Defensoría del Pueblo, organizaciones de derechos humanos, familiares de víctimas y expertos legales, lo que reorienta el marco hacia responsabilidades estatales, garantías y reparación. En El Peruano, órgano oficial del Estado, la cadena intertextual se cierra sobre el propio Ejecutivo; el periódico funciona como aparato de autorización que distribuye, en formato periodístico, la narrativa gubernamental de legalidad, control y eficacia. En términos de van Leeuwen, asistimos a diferentes formas de recontextualización de prácticas sociales: desde la administración del orden hasta la defensa de derechos, pasando por la legitimación de la autoridad. La elección de voces y

la organización de turnos en el texto no son neutrales, pues determinan qué actores adquieren visibilidad, cuáles quedan taciturnos y en qué términos se define lo debatible.

Estos modos de producción no se comprenden al margen de la estructura de propiedad, los alineamientos editoriales y las memorias institucionales de cada marca mediática. Estudios del discurso editorial de El Comercio tras el Informe Final de la CVR muestran mecanismos ideológicos persistentes —racionalización, universalización, nominalización y pasivización— que tienden a atenuar responsabilidades estatales y a enfatizar amenazas subversivas; tales mecanismos reaparecen en la coyuntura de 2023, ahora ligados al repertorio del “terruqueo” y a la securitización de la protesta (Bolo Varela, 2016). A su vez, investigaciones sobre racismo mediático evidencian que las redacciones reproducen, a través de rutinas y valores noticiosos, exclusiones históricas de voces amazónicas y andinas, lo que repercute en una circulación pública asimétrica de testimonios y demandas (Arrunátegui, 2010). Nada de esto excluye variaciones y fisuras. La República, con su tradición de pluralismo post-fujimorista, abre espacios a contrarrelatos; sin embargo, su cobertura también acusó el peso de la centralidad limeña al intensificarse cuando los eventos se desplazaron a la capital, lo que confirma que la práctica discursiva está atravesada por jerarquías territoriales y criterios de noticiabilidad que son parte del orden social más amplio.

La intertextualidad no se agota en las fuentes. Las portadas reactivan repertorios sedimentados como el del “terrorismo” o la “injerencia extranjera”, que funcionan como atajos cognitivos para clasificar la protesta. Esa reactivación, descrita por Fairclough como “orden del discurso”, vincula géneros y discursos heterogéneos —seguridad, economía, legalidad— que, en conjunto, naturalizan una solución específica. En el Perú, el puente entre memoria del conflicto armado y estigmatización del disenso ha sido intensamente trabajado; la conexión con el “terruqueo” ilustra cómo la circulación mediática transforma una disputa social en un problema de enemigo interno, con profundas implicancias para la deliberación democrática (Velásquez Villalba, 2022). Este ensamblaje intertextual contribuye a la “colonialidad del saber”, en tanto reinstala jerarquías epistémicas donde la voz estatal-técnica es tratada como verdad y la voz popular como ruido, rumor o riesgo. La consecuencia es un espacio público en el que ciertas lecturas circulan con baja fricción y otras encuentran barreras de entrada, fenómeno coherente con la crítica latinoamericana a las ciencias sociales y a los dispositivos de naturalización del orden neoliberal y centralista (Lander, 2000).

En síntesis, el análisis de la práctica discursiva muestra que la portada es el nodo visible de cadenas productivas más largas y desiguales. El quién habla primero, el cómo se recontextualizan acciones y el qué memorias se activan definen los horizontes de interpretación y las agendas de solución imaginables. Cuando predomina la cadena oficial, la protesta queda aprisionada en el marco de la seguridad; cuando ingresan contracadenas de derechos y memoria, se habilitan lecturas que reconocen sujetos políticos y estructuras de injusticia. Esa tensión no solo organiza el flujo informativo, sino que modela el aprendizaje social sobre lo que el país considera un conflicto legítimo y sobre quiénes tienen derecho a ser oídos.

5.2.3. Dimensión sociocultural: ideologías, memoria histórica y colonialidad

Desde la perspectiva tridimensional del Análisis Crítico del Discurso, la dimensión sociocultural refiere al plano en el que los textos periodísticos se insertan en formaciones históricas, se articulan con instituciones y rutinas profesionales, y participan en la reproducción o transformación de relaciones de poder (Fairclough, 1992, 1995, 2003). Leída en ese nivel, la cobertura de enero de 2023 no fue un simple espejo de los hechos sino una práctica social constitutiva: las portadas organizaron qué actores podían ser oídos, qué interpretaciones merecían aparecer como “sentido común”, qué memorias se activaban para dotar de inteligibilidad a la coyuntura y qué jerarquías morales definían los límites de la ciudadanía reconocible. En términos de orden del discurso, observamos la hegemonía de repertorios securitarios y tecnocráticos en *El Comercio*, *Perú21* y *El Peruano* —que enmarcan la protesta como amenaza y la respuesta estatal como restauración necesaria de la normalidad— y, en contraste, la introducción de marcos humanitarios y de derechos en *La República*. Esta divergencia no se agota en rasgos textuales; expresa posiciones diferenciales en el campo mediático peruano, moldeado por un centralismo histórico y por una economía política de la comunicación que favorece a los grandes conglomerados impresos y a sus públicos limeños de mayor capital económico y simbólico (Crabtree & Durand, 2017).

El anclaje sociocultural de estos encuadres se vuelve visible cuando se examina su repertorio de memoria e interdiscursividad. La recurrencia de etiquetas que asocian la protesta con “caos”, “vandalismo” o “infiltración extremista” reactualiza guiones sedimentados durante el conflicto armado interno y en oleadas posteriores de “terruqueo”,

transformando la disidencia en problema de orden público. Al presentarlas como hiperrelevantes e indiscutidas, estas etiquetas operan como atajos cognitivos que clausuran la deliberación y legitiman respuestas de excepción, en línea con lo que la teoría denomina macroestructuras semánticas que organizan inferencias causales y jerarquías de preocupación pública (van Dijk, 2006). Desde la teoría de la legitimación, ese cierre se sostiene mediante autorización —la voz oficial como fuente privilegiada—, moralización —juicios sobre lo tolerable— y racionalización —apelaciones a la eficacia técnica—, que convierten decisiones políticas en aparentes exigencias de gestión (van Leeuwen, 2008). El resultado, en el plano sociocultural, es una pedagogía pública que instruye a la audiencia sobre qué temer, a quién creer y qué respuestas considerar razonables en un país con una historia reciente de violencia política y una institucionalidad frágil.

La colonialidad del poder permite comprender por qué ese orden de visibilidad y credibilidad encuentra suelo fértil en el Perú contemporáneo. La persistente división centro–periferia, la racialización de cuerpos y territorios y la jerarquía epistémica que privilegia la voz del centro institucional organizan de antemano las condiciones de posibilidad del discurso mediático: ciertos sujetos son más “disponibles” para la sospecha y la criminalización, mientras otros gozan de presunción de verdad y racionalidad (Quijano, 2000; Lander, 2000). En las portadas, esta matriz se traduce en la asimilación de manifestantes andinos y rurales a colectivos indiferenciados y amenazantes, en la estetización de la multitud como “turba” anónima y en la pasivación o borramiento de la agencia estatal mediante nominalizaciones y construcciones impersonales, prácticas que difuminan responsabilidades y reafirman una topografía moral donde Lima encarna el orden y la periferia el desborde. Incluso cuando La República incorpora voces de víctimas y encuadres de derechos, su mayor intensidad y prominencia al “volver” la protesta a la capital confirma la gravitación de una esfera pública limeña que concentra los criterios de noticiabilidad y define, por su centralidad política, económica y mediática, los contornos de lo públicamente relevante. Esta recentralización de la agenda, observable en los días de la “Toma de Lima”, ilustra cómo la dimensión sociocultural del discurso se juega en la articulación entre geografías del poder y economías de la atención.

En este entramado, la socioculturalidad del discurso explica por qué determinados léxicos y gramáticas visuales se naturalizan como descripciones “neutrales” cuando, en rigor, ayudan a estabilizar relaciones históricas de dominación. Las elecciones léxicas intensificadoras para el “ellos” y atenuadoras para el “nosotros”, la individualización de

autoridades frente a la asimilación de colectivos movilizados, la autorización de fuentes oficiales sin contrapeso y la composición visual que destaca escenas de choque y oculta mediaciones o demandas son prácticas reiteradas que, agregadas, producen efectos sociales: expanden el consenso sobre medidas punitivas, despolitizan el conflicto al ocultar sus causas estructurales y refuerzan una ciudadanía graduada donde el reconocimiento pleno depende de pertenencias territoriales, étnicas y de clase. En el lenguaje de Fairclough, se trata de configuraciones intersemióticas y rutinas de producción que reproducen hegemonía en tanto articulan discursos, géneros y estilos al servicio de una práctica social: la conservación del orden establecido. En el de van Dijk, esas configuraciones sedimentan modelos mentales colectivos que guían la interpretación futura de eventos similares; en el de van Leeuwen, proporcionan repertorios de justificación para acciones estatales que, presentadas como técnicas o inevitables, escapan al escrutinio político.

Ahora bien, la misma dimensión sociocultural que permite la reproducción también admite fisuras. La presencia de marcos de derechos, la individualización de víctimas y la inclusión de contextos por parte de La República muestran que, aun dentro del periodismo mainstream y de su horizonte liberal-pluralista, existen estrategias capaces de desplazar el foco desde el control hacia la justicia. Esas grietas no desbordan el orden hegemónico, pero prueban que los órdenes del discurso son contingentes y disputables, y que la visibilización de memorias alternativas y de actores subalternos puede reorientar criterios de aceptabilidad pública y, con ello, las fronteras de lo políticamente decible. En términos normativos, este punto no es menor: si el discurso periodístico opera socioculturalmente como práctica constitutiva del espacio público, su rearticulación así sea parcial, altera el mapa de la ciudadanía efectiva, amplía el perímetro de reconocimiento y abre posibilidades para una deliberación menos moldeada por la colonialidad del saber.

En suma, el análisis sociocultural de las portadas revela que la coyuntura de enero de 2023 fue significada desde repertorios que la modernidad peruana ha heredado y actualizado: centralismo, racialización y tecnificación del gobierno del disenso. Las cabeceras conservadoras consolidaron ese archivo mediante encuadres securitarios que naturalizan la excepcionalidad punitiva y recortan el horizonte de causas y soluciones; la cabecera progresista introdujo contramarcos que restituyen agencia y derechos, aunque sin escapar del todo a la recentralización limeña y a los límites de su propia matriz liberal. Lo que está en juego en esta dimensión no es una diferencia de adjetivos, sino la disputa por el orden

social: quién define el problema, quién puede hablar con autoridad, qué memorias valen como explicación legítima, qué vidas cuentan como duelo y qué territorios importan como país. Esto confirma la tesis fuerte del ACD: el discurso periodístico, en su dimensión sociocultural, no solo representa la realidad, sino que la produce al jerarquizar voces y estabilizar, o cuestionar, estructuras históricas de dominación en el Perú contemporáneo



VI. CONCLUSIONES

El primer paso para organizar las conclusiones es evaluar cómo los objetivos planteados inicialmente se abordaron y cumplieron a lo largo de la investigación. El objetivo general de este estudio fue analizar la representación de las protestas sociales en los discursos mediáticos de cuatro importantes medios de comunicación peruanos, El Comercio, La República, El Peruano y Perú21, durante enero de 2023, identificando las estrategias discursivas e ideológicas utilizadas y su impacto en la percepción pública y la respuesta estatal. Este objetivo se alcanzó satisfactoriamente, ya que el análisis reveló cómo los discursos mediáticos no solo reflejan, sino también configuran las dinámicas de poder, reforzando desigualdades estructurales y legitimando respuestas estatales específicas.

En relación al primer objetivo específico, que buscaba describir y comparar la cobertura de las protestas sociales en los cuatro medios analizados, el estudio permitió identificar patrones discursivos distintivos. Perú21, con un enfoque alarmista, priorizó narrativas de violencia y caos, deslegitimando las demandas de los manifestantes. El Peruano, como medio estatal, invisibilizó las causas estructurales del conflicto y enfocó su discurso en la estabilidad y el orden, legitimando al gobierno. Por otro lado, El Comercio adoptó una posición ambivalente, criticando ciertos excesos de la respuesta estatal, pero enfatizando la necesidad de preservar el orden. Finalmente, La República destacó las desigualdades estructurales subyacentes al conflicto, aunque con limitaciones en la profundidad del análisis.

El segundo objetivo específico buscaba identificar y analizar las estrategias discursivas empleadas por los medios para representar las protestas y a sus participantes. A través del marco teórico de Van Leeuwen (2008) y Van Dijk (1998), se identificaron prácticas de nominación, categorización y exclusión como herramientas discursivas clave. Los manifestantes fueron frecuentemente nominados como "radicales" o "vándalos" en Perú21 y El Comercio, deslegitimando sus demandas. Las estrategias de exclusión fueron evidentes en El Peruano, que invisibilizó a los líderes sociales y redujo las protestas a un problema de orden público. En contraste, La República intentó humanizar a los manifestantes y visibilizar sus demandas, aunque enfrentó limitaciones estructurales.

El tercer objetivo específico se centró en examinar la construcción de la otredad y la identidad nacional en las coberturas mediáticas. Este objetivo permitió evidenciar cómo los discursos mediáticos perpetúan la colonialidad del poder, un concepto desarrollado por

Quijano (2000). La representación de los manifestantes indígenas y rurales como "otros" peligrosos o atrasados refuerza narrativas que legitiman las jerarquías coloniales y la exclusión social. Mientras que Perú21 y El Comercio destacaron estos estereotipos, La República buscó cuestionar estas dinámicas, aunque sin desafiar completamente las narrativas hegemónicas.

En cuanto a las hipótesis planteadas, la investigación confirmó en gran medida las dos primeras. La primera hipótesis, que sostenía que los medios de comunicación representan las protestas sociales de manera distinta según sus inclinaciones ideológicas, fue corroborada. Cada medio adoptó estrategias discursivas alineadas con su línea editorial y contexto político, mostrando patrones diferenciados en la representación de los actores y las dinámicas del conflicto. Este hallazgo destaca la importancia de analizar los discursos mediáticos como espacios de disputa ideológica y no como meros transmisores de información objetiva.

La segunda hipótesis, que proponía que los discursos mediáticos tienden a deslegitimar a los manifestantes y sus demandas mediante estrategias discursivas específicas, también se corroboró. Las prácticas de criminalización, invisibilización y estigmatización fueron recurrentes en los medios analizados, reforzando estereotipos negativos y dificultando una comprensión más equitativa del conflicto social. Estas representaciones no solo impactan la percepción pública, sino que también legitiman respuestas represivas por parte del Estado, consolidando narrativas que perpetúan dinámicas de exclusión. Si bien el análisis mostró indicios de estas dinámicas, no se cuenta con suficiente información empírica para establecer una relación causal directa. Sin embargo, investigaciones previas han documentado ampliamente cómo los discursos mediáticos pueden influir en las políticas públicas y la opinión pública en contextos de conflicto. Esto sugiere que la hipótesis merece ser explorada en estudios futuros con un enfoque metodológico más amplio que considere la interacción entre los discursos mediáticos y las decisiones estatales.

En conjunto, estas reflexiones subrayan la importancia de estudiar los discursos mediáticos como agentes activos en la configuración de las relaciones de poder y las dinámicas sociopolíticas. Los resultados de esta investigación no solo contribuyen al debate académico sobre el papel de los medios en contextos de conflicto, sino que también resaltan la necesidad de un periodismo más crítico y comprometido con la inclusión y la justicia social. Al conectar los resultados de esta investigación con el marco teórico empleado, se refuerza la idea de que los discursos mediáticos no son meramente descriptivos, sino

performativos. Al legitimizar ciertas acciones y deslegitimar otras, los medios participan activamente en la configuración del orden social. La teoría de la colonialidad del poder de Quijano (2000) y el modelo tridimensional de Fairclough (1992) proporcionan herramientas clave para entender cómo estas dinámicas operan en contextos específicos como el peruano, donde las desigualdades estructurales y las tensiones sociales están profundamente arraigadas.

En este sentido, las hipótesis planteadas no solo guían la investigación, sino que también generan preguntas críticas que trascienden el marco de este estudio. Por ejemplo, ¿cómo podrían los medios desempeñar un papel más inclusivo y crítico en contextos de conflicto? ¿Qué mecanismos podrían implementarse para contrarrestar las dinámicas de exclusión y criminalización? Estas preguntas no solo subrayan las limitaciones de los discursos mediáticos actuales, sino que también apuntan hacia la necesidad de repensar el papel de los medios en sociedades democráticas. El análisis de las hipótesis y los objetivos abre la puerta a nuevas líneas de investigación. La tercera hipótesis, en particular, destaca la necesidad de explorar con mayor profundidad cómo las representaciones mediáticas interactúan con las dinámicas estatales y las percepciones públicas. Esto podría incluir estudios longitudinales que analicen cómo evolucionan estas dinámicas a lo largo del tiempo, así como investigaciones comparativas que examinen casos similares en otros países de América Latina. Asimismo, el marco teórico empleado en esta investigación puede ampliarse para incorporar perspectivas adicionales, como las teorías de Foucault (1975) sobre el poder y la disciplina, o las reflexiones de Deleuze (1992) sobre las sociedades de control. Estas perspectivas podrían enriquecer el análisis al considerar cómo las dinámicas discursivas se entrelazan con las tecnologías de poder que configuran las relaciones sociales en contextos contemporáneos.

La investigación demuestra que la cobertura mediática de enero de 2023 se inscribió en una continuidad histórica de hegemonía discursiva en el Perú. Los principales medios reprodujeron la visión oficial del conflicto, criminalizando la protesta y borrando la pluralidad del sujeto popular. Este comportamiento responde a estructuras de poder profundamente arraigadas: la prensa escrita nacional actúa como guardiana del statu quo, fortaleciendo los intereses de las élites económicas y políticas a costa de silenciar las voces subalternas.

Estas conclusiones coinciden con los postulados de la comunicación crítica, que sostienen que en contextos de polarización y crisis social, los medios masivos tienden a legitimar las respuestas del Estado y a debilitar la credibilidad de los movimientos populares. La

reproducción de marcos coloniales y el uso de un vocabulario cargado de prejuicios contribuyen a desplazar el debate público desde las causas estructurales hacia temas como “orden” o “seguridad”. Es urgente profundizar en el estudio de la interacción entre medios y movimientos sociales desde diversas perspectivas. Por ejemplo, convendría comparar estas coberturas con las de protestas anteriores o posteriores, incluso en otros países latinoamericanos, para evaluar la persistencia o variabilidad del llamado paradigma de la protesta. También es pertinente analizar el papel de las redes sociales y los medios digitales emergentes, ya que los manifestantes intentan difundir sus propias narrativas a través de estas plataformas. Asimismo, futuros estudios podrían examinar la producción periodística, por medio de entrevistas con periodistas o análisis de sesgos en salas de redacción, para comprender cómo las lógicas internas de los medios reproducen determinados discursos. En suma, se sugiere ampliar el marco investigativo más allá del análisis textual de portadas, incorporando metodologías cualitativas (como entrevistas o etnografía mediática) y cuantitativas (como el seguimiento de audiencias o encuestas de percepción) que permitan evaluar el impacto real en la opinión pública.

Los resultados apuntan a la necesidad de reforzar los códigos éticos y las prácticas de transparencia en el ejercicio periodístico, especialmente en contextos de conflicto social. Los y las periodistas deberían esforzarse por incluir fuentes diversas —líderes comunitarios, víctimas de la protesta, expertos independientes— en lugar de limitarse a voceros oficiales. La capacitación en enfoques de “periodismo basado en paz” o “periodismo ciudadano” podría contribuir a humanizar las narrativas y visibilizar las demandas de las comunidades movilizadas. Se recomienda, además, que las salas de redacción evalúen críticamente el lenguaje empleado: por ejemplo, evitando el uso de términos criminalizantes sin evidencias, y diferenciando con claridad entre hechos verificables e interpretaciones valorativas. En el ámbito académico y formativo de la comunicación, deben fortalecerse las asignaturas vinculadas al análisis crítico del discurso y a la ética mediática, con el objetivo de sensibilizar a las futuras generaciones de periodistas sobre las dinámicas de poder y colonialidad presentes en la cobertura noticiosa.

El Estado, con apoyo de organismos reguladores, tiene un rol fundamental en la promoción de un ecosistema informativo plural y equilibrado. Se podrían diseñar políticas que incentiven la descentralización de los medios, fomentando el fortalecimiento de la prensa regional e indígena, y facilitando el acceso a recursos para medios comunitarios o propuestas independientes que ofrezcan perspectivas distintas. Asimismo, es

indispensable asegurar la libertad de expresión y el ejercicio crítico del periodismo, protegiendo a los comunicadores de presiones políticas o económicas. En el ámbito educativo, se debe promover la alfabetización mediática ciudadana, de modo que la población esté en condiciones de detectar sesgos informativos y reconocer narrativas discriminatorias. Finalmente, en el terreno de la gobernanza democrática, es imperativo implementar los llamados de la sociedad civil —y de organismos internacionales— a instaurar diálogos inclusivos. Como subrayó la Relatora Especial de la ONU, es fundamental “promover un diálogo nacional en el que participen las comunidades afectadas, en particular, las comunidades indígenas y rurales” (Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, 2023). Las políticas públicas deben, por tanto, garantizar que las quejas y demandas sociales sean escuchadas y articuladas mediante mecanismos institucionales efectivos, que contribuyan a reducir la polarización y a prevenir el uso desproporcionado de la fuerza.

Las conclusiones de este trabajo buscan trascender la mera síntesis de hallazgos para ofrecer una reflexión más amplia sobre sus implicancias socioculturales y políticas, tanto para el Perú como para la región andina en general. En primer lugar, los resultados obtenidos ponen de relieve cómo las narrativas mediáticas predominantes en la prensa escrita peruana participan en la (re)configuración de imaginarios colectivos. Lo descubierto —por ejemplo, la tendencia a representar a ciertos grupos sociales desde enfoques deslegitimadores o estereotipados— no ocurre en el vacío: se inscribe en un entramado histórico de percepciones y jerarquías culturales que tiene raíces profundas en la sociedad peruana. Así, las portadas analizadas actúan como espejos y a la vez motores de la realidad social: reflejan prejuicios y divisiones que existen en el tejido social, pero a la vez contribuyen a afianzarlos o cuestionarlos. En el contexto sociocultural peruano contemporáneo, marcado por su diversidad étnica, lingüística y regional, estos hallazgos implican que el discurso periodístico dominante aún carga con deudas de representación hacia vastos sectores de la población. La manera en que la prensa encuadra conflictos sociales, movilizaciones ciudadanas o la participación de comunidades andinas y amazónicas puede ya sea perpetuar brechas de incompreensión entre el Estado centralizado y la ciudadanía pluricultural, o bien ayudar a tender puentes de diálogo. Lamentablemente, nuestros hallazgos sugieren más lo primero que lo segundo: persisten marcos narrativos que presentan lo andino o popular bajo lentes de alteridad, exotización o amenaza, lo cual socioculturalmente refuerza la noción de un “nosotros” nacional limitado y excluyente. Este hecho es especialmente relevante en la región andina, donde países vecinos comparten

dinámicas similares –por ejemplo, tensiones entre élites urbanas mestizas y poblaciones indígenas rurales–. En ese sentido, las conclusiones de la tesis dialogan con un fenómeno regional: la prensa, cuando no asume una perspectiva intercultural y crítica, tiende a replicar patrones de la colonialidad del poder en sus contenidos, dificultando la construcción de sociedades más inclusivas.

Desde una perspectiva política, las implicancias de estos hallazgos son igualmente significativas. Si la prensa escrita tradicional sigue privilegiando ciertas voces y deslegitimando otras, ello impacta directamente en la calidad de la deliberación democrática. Un espacio público saludable requiere que las diversas visiones y experiencias de la ciudadanía tengan cabida en los medios masivos sin ser distorsionadas por prejuicios históricos. Nuestras conclusiones invitan a reflexionar sobre el rol ético y social del periodismo en el Perú y la región: ¿están los medios informando de manera equilibrada y responsable, o están contribuyendo –consciente o inconscientemente– a perpetuar relaciones de poder desiguales? Al evidenciar casos concretos de sesgo y enmarcaciones parciales en las portadas analizadas, este estudio señala la urgencia de transformar ciertas prácticas periodísticas. Ello no implica únicamente corregir desbalances en la cobertura, sino también adoptar una mirada decolonial en la comunicación, que cuestione los supuestos heredados (eurocéntricos o limeño-céntricos, en el caso peruano) y abra espacio a narrativas emergentes desde la periferia social y geográfica. Las conclusiones, por tanto, no se quedan en el diagnóstico sino que proyectan una visión prospectiva: para el país y la región andina, avanzar hacia la justicia social y la cohesión requiere también democratizar el discurso. Esto significa empoderar a los históricamente subalternos para contar sus propias historias y fomentar en los medios hegemónicos una autorreflexión crítica sobre cómo representan al “otro”. En suma, el cierre de este trabajo enfatiza que las dinámicas discursivas identificadas no son inmutables; al contrario, reconocerlas es el primer paso para cambiarlas. Al iluminar las conexiones entre discurso mediático, imaginarios sociales y estructuras de poder, la investigación espera contribuir a un periodismo y una esfera pública más conscientes, plurales y comprometidos con la transformación social en el Perú y en los contextos andinos afines.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Aguirre, C. (2011). Terruco de m... Insulto y estigma en la guerra sucia peruana. *Histórica*, 35(1), 103–139. <https://doi.org/10.18800/historica.201101.003>
- Amnistía Internacional. (2023). *Informe sobre la situación de los derechos humanos en Perú*.
- Angulo-Giraldo, M., & Bolo-Varela, O. (2021). Medios de comunicación y conflictos sociales durante la pandemia por COVID-19: Análisis de los enfoques presentes en la prensa de Lima durante las protestas contra el gobierno interino de Manuel Merino (2020). *Desde el Sur*, 13(1), e0005. <https://doi.org/10.21142/des-1301-2021-0005>
- Arrunátegui Matos, C. A. (2010). *El racismo en la prensa escrita peruana: Un estudio de la representación del otro amazónico desde el análisis crítico del discurso* [Tesis de maestría, Pontificia Universidad Católica del Perú]. <https://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/20.500.12404/4729>
- Baeza, J. (2022, 15 de diciembre). Dina Boluarte tras oír testimonio de policía herido: “Eso ya no es protesta, eso es terrorismo”. *Infobae*. <https://www.infobae.com/america/peru/2022/12/15/dina-boluarte-tras-oir-testimonio-de-policia-herido-eso-ya-no-es-protesta-eso-es-terrorismo/>
- Bailone, M. (2010). El antiterrorismo como paradigma de desaliento de la participación ciudadana. En L. Díez-Picazo & A. Nieto Martín (Coords.), *Derechos fundamentales en el derecho penal europeo* (pp. 529–546). <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3645212>
- Bakhtin, M. M. (1981). *The dialogic imagination: Four essays*. University of Texas Press.
- Barrenechea, R., & Vergara, A. (2023). Democratic hollowing in Peru. *Journal of Democracy*, 34(2), 77–89. <https://vergarapaniagua.com/wp-content/uploads/2023/05/democratic-hollowing-in-peru.pdf>
- Barthes, R. (1977). *Image, music, text*. Hill and Wang.
- Becerra, M., & Mastrini, G. (2009). *Los dueños de la palabra: Acceso, estructura y concentración de los medios en la América Latina del siglo XXI*. Prometeo Libros.

- Bell, A. (1991). *The language of news media*. Blackwell.
- Benites, A., Jave, I., Maco, V., & Velarde, P. (2023). *Los legados de la violencia política: El conflicto armado interno y sus vínculos con la respuesta del Estado en el Perú*. Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú (IDEHPUCP). <https://revistaargumentos.iep.org.pe/index.php/arg/article/view/158/94>
- Berger, P., & Luckmann, T. (1966). *The social construction of reality: A treatise in the sociology of knowledge*. Anchor Books.
- Bhabha, H. K. (1994). *The location of culture*. Routledge.
- Bolo Varela, O. M. (2016). «Hordas asesinas» versus «heroicos defensores»: Análisis de las representaciones ideológicas que el diario *El Comercio* difundió, en su discurso editorial, sobre los principales actores del conflicto armado interno (PCP-SL y agentes estatales) durante la década posterior a la presentación del Informe Final de la CVR (agosto de 2003 – agosto de 2013) [Tesis de licenciatura, Universidad Nacional Mayor de San Marcos]. <https://cybertesis.unmsm.edu.pe/item/baca7bb0-dda5-4692-a738-8db6d58ef951>
- Bourdieu, P. (1991). *Language and symbolic power*. Polity Press.
- Burt, J. M. (2014). *Violencia y autoritarismo en el Perú: Bajo la sombra de Sendero y la dictadura de Fujimori*. Instituto de Estudios Peruanos.
- Burt, J.-M. (2006). Quien habla es terrorista: The political use of fear in Fujimori's Peru. *Latin American Research Review*, 41(3), 32–62. <https://doi.org/10.1353/lar.2006.0036>
- Caballero Rojas, G. (2023). Discurso e ideología anticomunista en la prensa popular limeña durante la segunda vuelta presidencial 2021. *Conexión*, 18, 61–98. <https://doi.org/10.18800/conexion.202202.003>
- Calveiro, P. (2012). *Violencias de Estado: La guerra antiterrorista y la guerra contra el crimen como medios de control global*. Siglo XXI. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4762812>
- Carrasco Llavilla, J. C. (2023). *Tratamiento informativo de las noticias en las portadas del diario Expreso de un conflicto social por el Gobierno de Dina Boluarte, periodo 2022–2023* [Tesis de licenciatura, Universidad Jaime Bausate y Meza]. <https://repositorio.bausate.edu.pe/handle/20.500.14229/343>

- Castells, M. (2009). *Comunicación y poder*. Alianza Editorial.
- Cavero, A. [@AlejandroCavero]. (2023, 9 de enero). Tomar por asalto las instalaciones de los poderes del Estado es terrorismo y sublevación, venga de donde venga. Mi condena a los hechos... [Tuit]. X. <https://twitter.com/AlejandroCavero/status/1612272618928742401>
- Chomsky, N., & Herman, E. S. (1988). *Manufacturing consent: The political economy of the mass media*. Pantheon Books.
- Chouliaraki, L., & Fairclough, N. (1999). *Discourse in late modernity: Rethinking critical discourse analysis*. Edinburgh University Press.
- Colorado Ruiz, C. R. (2014). *Prensa y protesta social: La representación del Caso Atenco en La Jornada* [Tesis doctoral, Universitat Pompeu Fabra]. <https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/284232/tcr.pdf>
- Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (2023). *Informe sobre la crisis política y social en Perú*.
- Cornejo Polar, A. (1994). *Escribir en el aire: Ensayo sobre la heterogeneidad socio-cultural en las literaturas andinas*. Editorial Horizonte.
- Cornejo Romero, M. D. P. (2023). *Hacia un periodismo de desarrollo: Representaciones discursivas del conflicto socioambiental Tía María en medios de comunicación escritos de Arequipa* [Tesis de licenciatura, Pontificia Universidad Católica del Perú]. <https://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/20.500.12404/25948>
- Cuevas-Calderón, E., & Dongo, E. Y. (2021). Semiótica de la protesta: Por un modelo de los movimientos sociales. *Acta Semiótica*, 2, 143–175. <https://doi.org/10.23925/2763-700X.2021n2.56790>
- Defensoría del Pueblo del Perú. (2023). *Informe sobre las protestas y violaciones de derechos humanos en Perú*.
- Degregori, C. I., & Matos Mar, J. (1990). *Sendero Luminoso: Cambios y continuidades en el proyecto político de los comunistas peruanos*. Instituto de Estudios Peruanos.
- Derrida, J. (1976). *Of grammatology*. Johns Hopkins University Press.
- Dor, D. (2003). On newspaper headlines as relevance optimizers. *Journal of Pragmatics*.

- Dussel, E. (2000). La colonialidad del saber: Eurocentrismo y ciencias sociales. En E. Lander (Comp.), *La colonialidad del saber: Eurocentrismo y ciencias sociales*. Perspectivas latinoamericanas (pp. 41–53). CLACSO.
- Entman, R. M. (1993). Framing: Toward clarification of a fractured paradigm. *Journal of Communication*, 43(4), 51–58. <https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.1993.tb01304.x>
- Espinosa, S. (2015). Identidad y otredad en la teoría descolonial de Aníbal Quijano. *Ciencia Política*, 10(20), 107–130. <https://doi.org/10.15446/cp.v10n20.53920>
- Espinoza Lewis, E. (2016). *Las representaciones del “Caso Conga” en la prensa escrita peruana: Análisis crítico e interpretación de los discursos periodísticos de portada de los diarios El Comercio y La República durante los primeros meses del conflicto socioambiental en torno al proyecto minero Conga* [Tesis de licenciatura, Pontificia Universidad Católica del Perú]. <https://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/20.500.12404/7385>
- Fairclough, N. (1989). *Language and power*. Longman.
- Fairclough, N. (1992). *Discourse and social change*. Polity Press.
- Fairclough, N. (1995). *Critical discourse analysis: The critical study of language*. Longman.
- Fairclough, N. (2023). Análisis crítico del discurso (D. G. Rojas, Trad.). En *The Routledge handbook of discourse analysis* (2.^a ed.). Longman. <https://doi.org/10.4324/9781003035244-1>
- Flores Galindo, A. (1987). *Buscando un Inca: Identidad y utopía en los Andes*. Instituto de Apoyo Agrario.
- Flores Suárez, G. C. (2012). *Actores y procesos sociales en La Oroya (1999–2009): Un análisis de los discursos de la empresa Doe Run Perú, de sus trabajadores y de dos medios de comunicación escrita* [Tesis de maestría, Pontificia Universidad Católica del Perú]. <http://hdl.handle.net/20.500.12404/1568>
- Fontana Press; Bruner, J. (1991). The narrative construction of reality. *Critical Inquiry*, 18(1), 1–21.
- Foucault, M. (1977). *Discipline and punish: The birth of the prison*. Pantheon Books.

- Foucault, M. (1980). *Power/knowledge: Selected interviews and other writings, 1972–1977* (C. Gordon, Ed.). Pantheon Books.
- Fraser, N. (1992). Rethinking the public sphere: A contribution to the critique of actually existing democracy. En *Habermas and the public sphere* (pp. 109–142). MIT Press.
- Fraser, N. (2005). Mapping the feminist imagination: From redistribution to recognition to representation. *Constellations*, 12(3), 295–307. <https://doi.org/10.1111/j.1351-0487.2005.00418.x>
- Fundación Carolina; Stefanoni, P. (2023, 25 de enero). Protestas, “capitalismo popular” y represión en Perú. <https://www.fundacioncarolina.es/protestas-capitalismo-popular-y-represion-en-peru/>
- Galtung, J. (1996). *Peace by peaceful means: Peace and conflict, development and civilization*. Sage.
- García Llorens, M. (2012). *La fantasía neutral: El diario El Comercio y las estrategias discursivas del poder en el Perú* [Tesis de licenciatura, Pontificia Universidad Católica del Perú]. <https://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/20.500.12404/1395>
- Gascón i Martín, F. (2016). Actores, movimientos sociales y producción discursiva: Tentativas en torno a una epistemografía de la presencia. *Altre Modernità* (Número especial), 176–200. <https://doi.org/10.13130/2035-7680/7059>
- Gascón i Martín, F., & Pacheco Silva, C. (2015). Movimientos sociales emergentes y representaciones mediáticas recurrentes: Tensiones en el discurso verbo-visual construido sobre el movimiento estudiantil por la prensa de Valparaíso. *Última Década*, 23(43), 25–52. <https://doi.org/10.4067/S0718-22362015000200003>
- Gramsci, A. (1971). *Selections from the prison notebooks*. International Publishers.
- Grompone, R., & Tanaka, M. (2009). *Entre el crecimiento económico y la insatisfacción social: Las protestas sociales en el Perú actual*. Instituto de Estudios Peruanos.
- Gunturiz, A., Lucca, J. B., & Puello-Socarras, J. F. (2022). Versus el neoliberalismo: El pluriverso de las protestas en Argentina, Brasil, Chile y Colombia durante el año 2019. *Canadian Journal of Latin American and Caribbean Studies*, 47(3), 458–478. <https://doi.org/10.1080/08263663.2022.2110790>

- Garcimartín, C. (2014). La portada como dispositivo narrativo y símbolo histórico. *Cuadernos de Diseño*, 18(2), 45–62.
- Habermas, J. (1989). *The structural transformation of the public sphere: An inquiry into a category of bourgeois society*. MIT Press.
- Hall, S. (1980). Encoding/decoding. En S. Hall, D. Hobson, A. Lowe, & P. Willis (Eds.), *Culture, media, language* (pp. 128–138). Routledge.
- Hall, S. (1982). La cultura, los medios de comunicación y el “efecto ideológico”. En Centro de Investigaciones Sociales (Ed.), *Cultura, medios y lenguaje: Trabajos del Centro de Estudios Culturales Contemporáneos* (pp. 221–246). Paidós.
- Hall, S. (1997). *Representation: Cultural representations and signifying practices*. Sage.
- Halliday, M. A. K. (1994). *An introduction to functional grammar* (2.^a ed.). Edward Arnold.
- Halliday, M. A. K., & Matthiessen, C. M. I. M. (2014). *Halliday's introduction to functional grammar* (4.^a ed.). Routledge.
- Hallin, D. C., & Mancini, P. (2004). *Comparing media systems: Three models of media and politics*. Cambridge University Press.
- Herrera Santamaría, R., & Pérez Vela, R. (2024). *Los actores y sus narrativas en el estallido social peruano*. Universidad de Lima. <https://hdl.handle.net/20.500.12724/20610>
- Human Rights Watch. (2023). *Reporte sobre el uso excesivo de la fuerza en las protestas de Perú*. <https://www.hrw.org>
- Ilizarbe Pizarro, C. (2023). Perú 2022: Colapso democrático, estallido social y transición autoritaria. *Revista de Ciencia Política*, 43(2), 349–375. <https://www.scielo.cl/pdf/revcipol/v43n2/0718-090X-revcipol-s0718090x2023005000116.pdf>
- Informe OjoPúblico/RSF. (2016). *Los dueños de la noticia en Perú – Monitoreo de propiedad de medios*. <http://latamjournalismreview.org/es/articles/alto-nivel-de-concentracion-de-medios-amenaza-la-libertad-de-informacion-en-peru-dice-reporte-de-ojo-publico-y-rsf/>
- Ipsos Perú. (2023, 10 de febrero). *Opinión Data: Febrero 2023 (estudio América TV–Ipsos)*.

- Ipsos Perú. (2023, 13 de enero). *Encuesta nacional urbano–rural (Perú21–Ipsos): Atribución de responsabilidades por muertes en aeropuertos*.
- Krippendorff, K. (2013). *Content analysis: An introduction to its methodology* (3.ª ed.). Sage.
- Lander, E. (Comp.). (2000). *La colonialidad del saber: Eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas*. CLACSO.
- Lakoff, G., & Johnson, M. (1980). *Metaphors we live by*. University of Chicago Press.
- van Leeuwen, T. (1996). The representation of social actors. En C. R. Caldas-Coulthard & M. Coulthard (Eds.), *Texts and practices: Readings in critical discourse analysis* (pp. 32–70). Routledge.
- Lévinas, E. (1979). *Totality and infinity: An essay on exteriority*. Martinus Nijhoff.
- Lévi-Strauss, C. (1955). *The structural study of myth*. *The Journal of American Folklore*, 68(270), 428–444.
- López Jiménez, S. (2023). Protestas sociales: Democratización social y política contra la re-elitización neoliberal en el Perú. *Discursos del Sur*, 12, 10–35.
<http://www.scielo.org.pe/pdf/dds/n12/2617-2283-dds-12-9.pdf>
- Macassi Lavander, S. (2015). Rol de actores mediáticos y políticos en la representación de los conflictos socioambientales en el espacio público: Estudio comparativo de dos conflictos. *Disertaciones*, 8(2), 60–78. <https://www.redalyc.org/journal/5115/511553193005/html/>
- Martin, J. R., & White, P. R. R. (2005). *The language of evaluation: Appraisal in English*. Palgrave Macmillan.
- Martínez-Fresneda, M., Castillo-Esparcia, A., & Smolak-Lozano, E. (2004). La portada como herramienta ideológica. *Estudios sobre Periodismo*.
- Martínez, M. (2006). El muestreo en investigación cualitativa: Principios básicos y algunas controversias. *Revista de Investigación Educativa*.
- Maldonado Rivera, C. (2017). Colonialidad, mediación social y discurso racial: Apuntes teóricos. *deSignis*, 26. <https://www.redalyc.org/pdf/6060/606066846005.pdf>

- McCombs, M. E., & Shaw, D. L. (1972). The agenda-setting function of mass media. *Public Opinion Quarterly*, 36(2), 176–187.
- McLeod, D. M., & Hertog, J. K. (1998). Social control and the mass media's role in the regulation of protest groups: The communicative acts perspective. En D. Demers & K. Viswanath (Eds.), *Mass media, social control, and social change: A macrosocial perspective* (pp. 305–330). Iowa State University Press.
- McQuail, D. (2010). *McQuail's mass communication theory* (6.^a ed.). Sage.
- Mendoza, M. (2022). La utilización política del terrorismo en la campaña presidencial peruana de 2021. *Universitas-XXI*, 36, 243–268.
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8435632>
- Mendoza, M. G. (2023). Perú, entre la crisis orgánica y las élites políticas capturadas: Un ensayo sociohistórico. *Disjuntiva*, 4(2), 9–22. <https://doi.org/10.14198/DISJUNTIVA2023.4.2.1>
- Montoya, J. [@Alm_Montoya]. (2023, 26 de enero). El terrorismo está avanzando y muchos no lo quieren entender [Tuit]. X. https://twitter.com/Alm_Montoya/status/1618623899058728962
- Morocho Alvia, L. A. (2023). *Twitter como herramienta discursiva: El caso del excandidato presidencial Rafael López Aliaga* [Tesis de Maestría, Pontificia Universidad Católica del Perú].
- Morley, D. (1992). *Television, audiences and cultural studies*. Routledge.
- Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. (2023). *Informe sobre las protestas en Perú, diciembre 2022 – enero 2023*.
- Ramírez Farias, T. L. (2023). El estallido social desde la prensa escrita concentrada en el Perú (2022–2023). *Discursos del Sur*, 12, 101–132. <https://doi.org/10.15381/dds.n12.27096>
- Richardson, J. (2007). *Analysing newspapers: An approach from critical discourse analysis*. Palgrave Macmillan.
- Ricoeur, P. (1984). *Time and narrative*. University of Chicago Press.
- Rodríguez Bustamante, J. C. (2024). *Framing protests in Peru: The resistance to terruqueo on Twitter during Dina Boluarte's presidency, 2022–2023* [Tesis de maestría, University of

North Carolina at Greensboro].

https://libres.uncg.edu/ir/uncg/f/RodriguezBustamante_uncg_0154M_14063.pdf

Sáenz, M. (1998). Enrique Dussel, *The invention of the Americas: Eclipse of the “Other” and the myth of modernity*. *Continental Philosophy Review*, 31, 425–434.

Said, E. W. (1978). *Orientalismo*. Pantheon Books.

Samanez Romero, R. B. (2023). *Periodismo digital: Análisis del tratamiento informativo de los diarios “El Comercio” y “La República” sobre las protestas en contra del gobierno de la presidenta Dina Boluarte del 4 al 19 de enero de 2023* [Tesis de licenciatura, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas].

https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/handle/10757/670627/Samanez_RR.pdf

Segovia Lacoste, P., Basulto Gallegos, Ó., & Zambrano Uribe, P. (2018). Imaginarios sociales y representaciones: Su aplicación a análisis discursivos en tres ámbitos diferentes. *Empiria. Revista de Metodología de Ciencias Sociales*, 41, 79–102.

<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6550314>

Silva Escobar, J. P. (2015). La fabricación mediática de la protesta social: Notas acerca de la conformación de una opinión pública despolitizada y estetizante. *Anagramas*, 13(26), 43–56. http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1692-25222015000100003

Spivak, G. C. (2003). Can the subaltern speak? En *Marxism and the interpretation of culture* (pp. 271–313). Macmillan Education UK.

Svampa, M. (2014). *Medios de comunicación, cultura y poder*. Fondo de Cultura Económica.

Thompson, J. B. (1995). *The media and modernity: A social theory*.

Thompson, J. B. (1990). *Ideology and modern culture*. Stanford University Press.

Torrejón Hoefken, P. (2013). *Cubriendo la noticia: El Comercio, su representación del ciudadano indígena amazónico y la justificación del proyecto desarrollista* [Tesis de maestría, Pontificia Universidad Católica del Perú].

<https://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/20.500.12404/5132>

- van Dijk, T. A. (1993). *Elite discourse and racism*. Sage Publications.
- van Dijk, T. A. (1995). Discourse analysis as ideology analysis. En C. Schäffner & A. Wenden (Eds.), *Language and peace* (pp. 17–33). Dartmouth Publishing.
- van Dijk, T. A. (1998). *Ideology: A multidisciplinary approach*. Sage Publications.
- van Dijk, T. A. (2003). *Ideology and discourse: A multidisciplinary introduction*. Universitat Pompeu Fabra.
- van Leeuwen, T. (1996). The representation of social actors. En C. R. Caldas-Coulthard & M. Coulthard (Eds.), *Texts and practices: Readings in critical discourse analysis* (pp. 32–70). Routledge.
- van Leeuwen, T. (2008). *Discourse and practice: New tools for critical discourse analysis*. Oxford University Press.
- Vasilachis de Gialdino, I. (2005). La representación discursiva de los conflictos sociales en la prensa escrita. *Estudios Sociológicos*, 23(67), 95–137.
<https://www.redalyc.org/pdf/598/59811838004.pdf>
- Velásquez Villalba, F. (2022). A totalidade neoliberal-fujimorista: Estigmatização e colonialidade no Peru contemporâneo. *Revista Brasileira de Ciências Sociais*, 37(109), e3710906.
<https://doi.org/10.1590/3710906/2022>
- Velásquez Villalba, F. (2022). De las batallas por la memoria a la marca del conflicto: “Terruqueo”, estigmatización y violencia en el Perú reciente. *e-I@tina. Revista electrónica de estudios latinoamericanos*, 20(80), 1–15.
<https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=496470836005>
- Velásquez Villalba, P. (2022). *Memory battles in Peru: Coloniality and democratisation in the post-Fujimori era* [Tesis doctoral, University of Auckland].
<https://researchspace.auckland.ac.nz/bitstream/handle/2292/62812/Vel%C3%A1squez%20Villalba-2022-thesis.pdf>
- Villagómez-Rodríguez, P. (2020). Medios y protesta: El levantamiento de octubre de 2019 en Ecuador. En N. Medranda-Morales & N. Valbuena-Bedoya (Coords.), *Comunicación y ciudad: Lenguajes, actores y relatos* (pp. 101–121). Editorial Abya-Yala.
<http://doi.org/10.7476/9789978105702.0009>

Watanabe Farro, A., Hernández Garavito, C., Mejía, A., Méndez, C., Molina-Vital, C., Noles Cotito, M., Pereyra Chávez, N., & Smith, A. (2023). Protests in Peru: Interdisciplinary perspectives on a structural crisis. *Journal of Latin American Cultural Studies*, 32(1), 157–175. <https://doi.org/10.1080/13569325.2023.2219209>

Zavala, V., & Almeida, C. (2022). “Motoso y terruco”: Ideologías lingüísticas y racialización en la política peruana. *Lexis*, 46(2), 481–521. <https://doi.org/10.18800/lexis.202202.002>

Žižek, S. (2008). *Violence: Six sideways reflections*. Picador.



ANEXO

A. Consolidado de tablas de síntesis por categorías y portadas

Fecha	Categoría	# Periódicos	# Revistas	El Contenido	El Formato
8/1/2023	1. Título Principal	Sensacionalista / Violencia	Sensacionalista / Represión	Sensacionalista / Subversión	Neutral / Orden
	2. Bajada	Refuerza / No matiza	Refuerza / No matiza	Refuerza / No matiza	Amplia / Matiza
	3. Volada	Refuerza / Amenaza	Subraya / Represión	Refuerza / Criminalización	Introduce / Diálogo
	4. Subtítulos	Refuerza / Criminalización	Refuerza / Tensión	Refuerza / Ventarización	Promueve / Estabiliza
	5. Imágenes y Elementos Visuales	Refuerza / Criminalización	Refuerza / Tensión	Refuerza / Ventarización	Neutral / Refuerza
	6. Contexto Social e Ideológico	Tensión / Promueve	Tensión / Promueve	Tensión / Promueve	Estabiliza / Promueve
	7. Tematización Principal y Secundaria	Subversión / Caos	Represión / Derechos	Organización / Desorden	Diálogo / Reconciliación
	8. Representación de Actores Sociales	Criminalización / Agresores	Víctimas / Represión	Criminalización / Desorden	Mediación / Facilitadores
	9. Agencia y Responsabilidad	Manifestantes / Culpa	Gobierno / Represión	Manifestantes / Violencia	Gobierno / Solución
	10. Elección Léxica y Estilo	Sensacionalista / Negativa	Sensacionalista / Negativa	Sensacionalista / Negativa	Formal / Positiva
	11. Modalización y Grado de Certeza	Certeza / Contundente	Certeza / Críticas	Certeza / Criminalización	Certeza / Complicadora
	12. Estructura Narrativa	Priorización del conflicto	Priorización de la represión	Priorización del caos	Lineal / Soluciones
	13. Retórica Visual y Simbología	Refuerza / Emotivo	Refuerza / Emotivo	Refuerza / Emotivo	Refuerza / Neutral
	14. Intertextualidad	Implícita	Implícita	Implícita	Explícita
	15. Ausencias Textuales y Visuales	Demandas sociales ausentes	Actores poncibales ausentes	Demandas sociales ausentes	Actores opositores ausentes
	16. Consecuencias Ideológicas y Sociales	Refuerza / Criminalización	Refuerza / Críticas	Refuerza / Criminalización	Refuerza / Gobernabilidad
10/1/2023	1. Título Principal	Sensacionalista / Caos y violencia	Sensacionalista / Represión estatal	Sensacionalista / Impacto humano	Neutral / Solución institucional
	2. Bajada	Refuerza / Amenaza externa	Refuerza / Crítica social	Refuerza / Caos social	Amplia / Diálogo gubernamental
	3. Volada	Refuerza / Desestabilización	Refuerza / Responsabilidad estatal	Refuerza / Ventarización	Contextualiza / Medidas institucionales
	4. Subtítulos	Refuerza / Criminalización	Refuerza / Destrucción	Refuerza / Destrucción	Promueve / Estabiliza institucional
	5. Imágenes y Elementos Visuales	Refuerza discurso textual / Enfrentamientos	Complementa discurso textual / Víctimas civiles	Refuerza discurso textual / Caos urbano	Refuerza discurso institucional / Diálogo
	6. Contexto Social e Ideológico	Refuerza / Desorden social	Denuncia / Represión gubernamental	Refuerza / Conflicto generalizado	Promueve / Orden y estabilidad
	7. Tematización Principal y Secundaria	Conflicto / Violencia	Represión / Derechos humanos	Violencia / Criminalización	Solución / Reconciliación
	8. Representación de Actores Sociales	Criminalización / Manifestantes	Victimización / Civiles	Criminalización / Ideas sociales	Mediación / Gobierno
	9. Agencia y Responsabilidad	Manifestantes / Culpa	Gobierno / Represión	Mixta / Responsabilidad compartida	Gobierno / Resolución
	10. Elección Léxica y Estilo	Sensacionalista / Alarmante	Sensacionalista / Crítica	Técnico / Descriptivo	Formal / Diplomático
	11. Modalización y Grado de Certeza	Especulativa / Generalizaciones	Catagórica / Denuncia	Confirmativa / Datos verificables	Confirmativa / Acciones concretas
	12. Estructura Narrativa	Priorización / Caos	Priorización / Represión estatal	Priorización / Choques violentos	Lineal / Resolución
	13. Retórica Visual y Simbología	Refuerza / Miedo y alarma	Refuerza / Empatía hacia víctimas	Refuerza / Percepción de desorden	Refuerza / Estabilidad gubernamental
	14. Intertextualidad	Explícita / Continuidad de conflictos	Implícita / Exclusiones históricas	Implícita / Gobernabilidad cuestionada	Explícita / Soluciones previas
	15. Ausencias Textuales y Visuales	No visibiliza / Demandas sociales	Ausencia / Mediadores	No visibiliza / Contextos estructurales	Ausencia / Voces espontáneas
	11/1/2023	1. Título Principal	Refuerza / Criminalización	Refuerza / Crítica social	Refuerza / Amenaza al orden
2. Bajada		Refuerza / Amenaza externa	Refuerza / Impacto emocional	Refuerza / Medidas gubernamentales	Amplia / Proyección resolutiva
3. Volada		Refuerza / Fossilización en el desorden	Introduce / Responsabilidad estatal	Refuerza / Control del caos	Contextualiza / Orden y diálogo
4. Subtítulos		Refuerza / Criminalización	Refuerza / Víctimas y violencia	Refuerza / Tensión social	Promueve / Diálogo institucional
5. Imágenes y Elementos Visuales		Refuerza discurso textual / Violencia explícita	Complementa discurso textual / Víctimas humanas	Refuerza discurso textual / Escalada de conflicto	Refuerza discurso institucional / Gobierno trabajando
6. Contexto Social e Ideológico		Refuerza / Narrativa de caos	Denuncia / Violencia estatal	Refuerza / Tensión social escalada	Promueve / Estabiliza
7. Tematización Principal y Secundaria		Conflicto / Violencia	Violencia / Derechos	Seguridad / Gobernabilidad	Soluciones / Estabilidad
8. Representación de Actores Sociales		Criminalización / Manifestantes	Victimización / Policía	Criminalización / Protestantes	Mediación / Gobierno
9. Agencia y Responsabilidad		Manifestantes / Culpa	Gobierno / Críticas	Mixta / Protestas y Estado	Gobierno / Responsabilidad
10. Elección Léxica y Estilo		Sensacionalista / Lenguaje alarmista	Sensacionalista / Lenguaje emotivo	Técnico / Lenguaje institucional	Formal / Resolutivo
11. Modalización y Grado de Certeza		Alta certeza / Generalización	Alta certeza / Alarma sin matices	Alta certeza / Basado en hechos	Alta certeza / Afirmaciones precisas
12. Estructura Narrativa		Priorización / Escalamiento del conflicto	Priorización / Denuncia de represión	Priorización / Medidas de control	Lineal / Resolución progresiva
13. Retórica Visual y Simbología		Emotivo / Impacto visual del conflicto	Emotivo / Caos en la víctima	Emotivo / Caos y violencia	Mixta / Continúa institucional
14. Intertextualidad		Implícita / Continuidad de conflictos previos	Implícita / Exclusiones sociales históricas	Implícita / Contexto de crisis	Explícita / Políticas de estabilidad
15. Ausencias Textuales y Visuales		Falta de contexto social / Demandas invisibles	Ausencia de contextos / Mediaciones	No aborda causas sociales / Protestas justificadas	Contexto parcial / Aborda medidas gubernamentales
16. Consecuencias Ideológicas y Sociales		Criminalización / Legítima represión policial	Crítica / Destaca el impacto en víctimas	Refuerza orden / Justifica intervención estatal	Legítima estabilidad / Reafirma gobernabilidad
13/1/2023	1. Título Principal	Sensacionalista/Conflicto	Sensacionalista/Conflicto	Neutral/Conflicto	Neutral/Soluciones
	2. Bajada	Refuerza narrativa	Amplia narrativa	Refuerza narrativa	Amplia narrativa
	3. Volada	Enfatiza conflicto	Introduce demandas sociales	Introduce conflicto	Contextualiza soluciones
	4. Subtítulos	Refuerza la narrativa	Complementa	Refuerza la narrativa	Complementa
	5. Imágenes y Elementos Visuales	Emotiva/Violencia	Emotiva/Protestas	Emotiva/Conflicto	Neutral/Soluciones
	6. Contexto Social e Ideológico	Tensión/Polanización	Tensión/Demandas Sociales	Tensión/Conflicto	Estabilidad/Gobierno
	7. Tematización Principal y Secundaria	Conflicto/Minería	Protestas/Demanda Social	Violencia/Destrucción	Soluciones/Proyectos
	8. Representación de Actores Sociales	Criminalización	Victimización	Criminalización	Visibilización
	9. Agencia y Responsabilidad	Manifestantes como responsables	Responsabilidad compartida	Manifestantes como responsables	Gobierno como responsable
	10. Elección Léxica y Estilo	Sensacionalista/Polarizado	Sensacionalista	Emotivo	Técnico
	11. Modalización y Grado de Certeza	Certeza	Especulación	Certeza	Certeza
	12. Estructura Narrativa	Lineal	Priorización del conflicto	Lineal	Priorización de soluciones
	13. Retórica Visual y Simbología	Refuerza caos	Refuerza demandas	Refuerza violencia	Refuerza institucionalidad
	14. Intertextualidad	Implícita	Explícita	Explícita	Explícita
	15. Ausencias Textuales y Visuales	Omisión de soluciones	Omisión de causas estructurales	Omisión de voces ciudadanas críticas	Omisión de voces de protesta
	16. Consecuencias Ideológicas y Sociales	Refuerza narrativa dominante	Desafía narrativa dominante	Refuerza narrativa dominante	Refuerza narrativa gubernamental
14/1/2023	1. Título Principal	Sensacionalista / Conflicto	Sensacionalista / Protestas	Neutral / Seguridad	Neutral / Soluciones
	2. Bajada	Refuerza / No matiza	Amplia / Refuerza	Refuerza / Matiza	Amplia / Matiza
	3. Volada	Enfatiza	Contextualiza	Introduce	Introduce
	4. Subtítulos	Refuerza narrativa dominante	Complementa	Refuerza	Complementa narrativa institucional
	5. Imágenes y Elementos Visuales	Emotiva / Refuerza	Emotiva / Contraste	Neutral / Refuerza	Neutral / Refuerza
	6. Contexto Social e Ideológico	Tensión / Promueve	Tensión / Promueve	Estabilidad / Promueve	Estabilidad / Refuerza
	7. Tematización Principal y Secundaria	Conflicto / Criminalización	Protestas / Exigencias sociales	Seguridad / Orden	Soluciones / Estabilidad jurídica
	8. Representación de Actores Sociales	Criminalización / Actores visibles	Actores visibles / Justicia	Actores visibles / Gobierno	Actores visibles / Gobierno
	9. Agencia y Responsabilidad	Manifestantes	Manifestantes	Gobierno	Gobierno
	10. Elección Léxica y Estilo	Sensacionalista / Emotivo	Sensacionalista / Técnico	Neutral	Formal
	11. Modalización y Grado de Certeza	Certeza	Certeza	Neutral	Certeza
	12. Estructura Narrativa	Priorización del conflicto	Priorización del conflicto	Lineal	Lineal
	13. Retórica Visual y Simbología	Refuerza narrativa	Refuerza narrativa	Refuerza estabilidad	Refuerza estabilidad
	14. Intertextualidad	Implícita	Explícita	Implícita	Implícita
	15. Ausencias Textuales y Visuales	Actores locales ausentes	Causas estructurales ausentes	Voces ciudadanas críticas ausentes	Contexto de regiones ausente
	16. Consecuencias Ideológicas y Sociales	Refuerza narrativa dominante	Desafía narrativa dominante	Refuerza narrativa dominante	Refuerza narrativa gubernamental
18/1/2023	1. Título Principal	Sensacionalista / Conflicto y caos	Neutral / Resistencia y conflicto	Neutral / Desabastecimiento y caos	Neutral / Progreso y gobernabilidad
	2. Bajada	Refuerza / Destaca actores violentos	Amplia / Enfatiza contexto social	Amplia / Proporciona detalles logísticos	Amplia / Reafirma enfoque en salud
	3. Volada	Enfatiza / Conflictividad	Contextualiza / Impacto social	Contextualiza / Falta de recursos	Introduce / Reorganización de servicios
	4. Subtítulos	Refuerza / Acusa a "violencia"	Contradice / Exige cambios políticos	Refuerza / Efectos de bloqueo	Refuerza / Fortifica montaje de estabilidad
	5. Imágenes y Elementos Visuales	Emotiva / Grupos movlizados, tensión	Emotiva / Protesta masiva	Emotiva / Carreteras bloqueadas	Neutral / Escenario de trabajo y orden
	6. Contexto Social e Ideológico	Tensión / Promueve narrativa del caos	Tensión / Promueve resistencia	Tensión / Promueve sentido de urgencia	Estabilidad / Promueve narrativa de orden
	7. Tematización Principal y Secundaria	Bloqueos / Violencia	Protestas / Renuncia	Bloqueos / Falta recursos	Salud / Gestión de gobierno
	8. Representación de Actores Sociales	Visibiliza manifestantes como disruptivos	Visibiliza manifestantes como víctimas	Visibiliza manifestantes como responsables	Visibiliza al gobierno como gestor
	9. Agencia y Responsabilidad	Manifestantes / Actores violentos	Gobierno / Pide soluciones	Manifestantes / Bloqueos	Gobierno / Eficiencia
	10. Elección Léxica y Estilo	Sensacionalista / Carga negativa	Emotivo / Exigencia	Neutral / Objetivo	Formal / Técnico
	11. Modalización y Grado de Certeza	Certeza / Hechos cerrados	Especulación / Necesidad de cambios	Certeza / Detalles logísticos	Certeza / Planes y objetivos claros
	12. Estructura Narrativa	Priorización de conflicto	Lineal / Resistencia	Priorización de conflicto	Lineal / Progresiva
	13. Retórica Visual y Simbología	Contradice / Enfatiza caos	Refuerza / Resistencia y lucha	Refuerza / Impacto económico	Refuerza / Gobernabilidad
	14. Intertextualidad	Implícita / Referencias a días previos	Implícita / Conexión con demandas previas	Implícita / Bloqueos continuos	Implícita / Narrativa de progreso
	15. Ausencias Textuales y Visuales	Ausencia / Resueto del gobierno	Ausencia / Actores de protesta y diálogo	Ausencia / Soluciones políticas	Ausencia / Impacto negativo de bloqueos
	16. Consecuencias Ideológicas y Sociales	Refuerza / Gobierno débil	Desafía / Exige reformas	Refuerza / Urgencia de control	Refuerza / Gobernabilidad y progreso
19/1/2023	1. Título Principal	Sensacionalista / Violencia	Neutral / Marcha y Diálogo	Neutral / Prevención	Neutral / Diálogo
	2. Bajada	Refuerza / No matiza	Amplia / Matiza	Amplia / Matiza	Amplia / Matiza
	3. Volada	Enfatiza / Violencia	Contextualiza / Marcha y Conflicto	Contextualiza / Prevención	Introduce / Diálogo
	4. Subtítulos	Refuerza / Violencia	Refuerza / Marcha	Refuerza / Prevención	Refuerza / Diálogo
	5. Imágenes y Elementos Visuales	Emotiva / Refuerza / Representa vandalismo	Emotiva / Refuerza / Representa movilización	Neutral / Refuerza / Representa control	Neutral / Refuerza / Representa diálogo
	6. Contexto Social e Ideológico	Tensión / Promueve la narrativa de caos y violencia	Tensión / Promueve narrativa de protesta y diálogo	Tensión / Promueve narrativa de control y prevención	Estabilidad / Promueve narrativa de diálogo
	7. Tematización Principal y Secundaria	Conflicto / Violencia	Conflicto / Marcha	Seguridad / Prevención	Diálogo / Soluciones
	8. Representación de Actores Sociales	Actores visibilizados / Manifestantes criminalizados	Actores visibilizados / Manifestantes protagonistas	Actores visibilizados / Fuerzas de seguridad proactivas	Actores visibilizados / Gobierno proactivo
	9. Agencia y Responsabilidad	Manifestantes responsables	Gobierno como incapaz de diálogo	Manifestantes responsables	Gobierno responsable del diálogo
	10. Elección Léxica y Estilo	Sensacionalista / Negativa	Emotiva / Negativa	Formal / Neutra	Formal / Positiva
	11. Modalización y Grado de Certeza	Certeza / Hechos definidos	Certeza / Hechos definidos	Certeza / Hechos definidos	Certeza / Hechos definidos
	12. Estructura Narrativa	Priorización del conflicto	Lineal / Enfocada en la marcha	Priorización del conflicto	Lineal / Enfocada en el diálogo
	13. Retórica Visual y Simbología	Refuerza / Emotiva / Incentivos y caos	Refuerza / Emotiva / Movilización masiva	Refuerza / Neutra / Vehículos y calles bloqueadas	Refuerza / Neutra / Símbolos placia
	14. Intertextualidad	No explícita	Implícita / Vincula con marchas previas	Explícita / Refuerza contexto nacional	Explícita / Refuerza contexto institucional
	15. Ausencias Textuales y Visuales	Actores de gobierno ausentes	Fuerzas del orden ausentes	Voces civiles ausentes	Manifestantes ausentes
	16. Consecuencias Ideológicas y Sociales	Refuerza narrativa de caos / Impacto negativo en	Refuerza narrativa de diálogo y conflicto / Impacto	Refuerza narrativa de control / Impacto positivo en fuerzas	Refuerza narrativa de diálogo / Impacto positivo para el

20/1/2023	1. Título Principal	Sensacionalista / Violencia	Sensacionalista / Tensión	Sensacionalista / Violencia	Neutral / Orden
	2. Bajada	Refuerza / No maliza	Refuerza / No maliza	Refuerza / No maliza	Amplia / Matiza
	3. Volada	Enfatiza / Conflicto	Contextualiza / Tensión	Enfatiza / Conflicto	Introduce / Estabilidad
	4. Subtítulos	Refuerza / No contradice	Refuerza / No contradice	Refuerza / No contradice	Neutros / Refuerza
	5. Imágenes y Elementos Visuales	Emotiva / Refuerza	Emotiva / Refuerza	Emotiva / Refuerza	Neutra / Refuerza
	6. Contexto Social e Ideológico	Tensión / Promueve	Tensión / Promueve	Tensión / Promueve	Estabilidad / Desafía
	7. Tematización Principal y Secundaria	Conflicto / Seguridad	Conflicto / Descontento	Conflicto / Casos	Orden / Seguridad
	8. Representación de Actores Sociales	Criminalizados / Agresores	Visibilizados / Víctimas	Criminalizados / Destruidores	Visibilizados / Mediadores
	9. Agencia y Responsabilidad	Manifestantes / Conflicto	Gobierno / Represión	Manifestantes / Violencia	Gobierno / Solución
	10. Elección Léxica y Estilo	Sensacionalista / Negativa	Sensacionalista / Negativa	Sensacionalista / Negativa	Formal / Neutral
	11. Modalización y Grado de Certeza	Certeza	Certeza	Certeza	Certeza
	12. Estructura Narrativa	Priorización del conflicto	Priorización del conflicto	Priorización del conflicto	Lineal / Resultados
	13. Retórica Visual y Simbología	Refuerza / Emotivo	Refuerza / Emotivo	Refuerza / Emotivo	Refuerza / Neutro
	14. Intertextualidad	Implícita	Implícita	Implícita	Explícita
	15. Ausencias Textuales y Visuales	Ausentes	Ausentes	Ausentes	Presentes
	16. Consecuencias Ideológicas y Sociales	Refuerza / Negativo	Refuerza / Negativo	Refuerza / Negativo	Refuerza / Positivo
21/1/2023	1. Título Principal	Sensacionalista / Violencia	Sensacionalista / Tensión	Sensacionalista / Violencia	Neutral / Diálogo
	2. Bajada	Refuerza / No maliza	Refuerza / No maliza	Refuerza / No maliza	Amplia / Matiza
	3. Volada	Enfatiza / Conflicto	Contextualiza / Tensión	Enfatiza / Casos	Introduce / Estabilidad
	4. Subtítulos	Refuerza / No contradice	Refuerza / No contradice	Refuerza / No contradice	Neutros / Refuerza
	5. Imágenes y Elementos Visuales	Emotiva / Refuerza	Emotiva / Refuerza	Emotiva / Refuerza	Neutra / Refuerza
	6. Contexto Social e Ideológico	Tensión / Promueve	Tensión / Promueve	Tensión / Promueve	Estabilidad / Desafía
	7. Tematización Principal y Secundaria	Conflicto / Seguridad	Descontento / Represión	Casos / Seguridad	Orden / Diálogo
	8. Representación de Actores Sociales	Criminalizados / Agresores	Visibilizados / Víctimas	Criminalizados / Destruidores	Visibilizados / Mediadores
	9. Agencia y Responsabilidad	Manifestantes / Conflicto	Gobierno / Represión	Manifestantes / Violencia	Gobierno / Solución
	10. Elección Léxica y Estilo	Sensacionalista / Negativa	Sensacionalista / Negativa	Sensacionalista / Negativa	Formal / Neutral
	11. Modalización y Grado de Certeza	Certeza	Certeza	Certeza	Certeza
	12. Estructura Narrativa	Priorización del conflicto	Priorización del conflicto	Priorización del conflicto	Lineal / Soluciones
	13. Retórica Visual y Simbología	Refuerza / Emotivo	Refuerza / Emotivo	Refuerza / Emotivo	Refuerza / Neutro
	14. Intertextualidad	Implícita	Implícita	Implícita	Explícita
	15. Ausencias Textuales y Visuales	Ausentes	Ausentes	Ausentes	Presentes
	22/1/2023	1. Título Principal	Sensacionalista / Subversión	Sensacionalista / Represión	Sensacionalista / Criminalización
2. Bajada		Refuerza / No maliza	Refuerza / No maliza	Refuerza / No maliza	Amplia / Matiza
3. Volada		Enfatiza / Estrategia violenta	Contextualiza / Violencia estatal	Contextualiza / Consecuencias económicas	Introduce / Solidaridad
4. Subtítulos		Refuerza / No contradice	Refuerza / No contradice	Refuerza / No contradice	Neutros / Refuerza
5. Imágenes y Elementos Visuales		Emotiva / Refuerza	Emotiva / Refuerza	Emotiva / Refuerza	Neutra / Refuerza
6. Contexto Social e Ideológico		Tensión / Promueve	Tensión / Promueve	Tensión / Promueve	Estabilidad / Desafía
7. Tematización Principal y Secundaria		Subversión / Destrucción	Represión / Derechos	Criminalización / Protestas	Ayuda / Seguridad
8. Representación de Actores Sociales		Criminalizados / Subversivos	Víctimas / Represión	Criminalizados / Destruidores	Visibilizados / Mediadores
9. Agencia y Responsabilidad		Manifestantes / Violencia	Gobierno / Represión	Manifestantes / Violencia	Gobierno / Solución
10. Elección Léxica y Estilo		Sensacionalista / Negativa	Sensacionalista / Negativa	Sensacionalista / Negativa	Formal / Neutral
11. Modalización y Grado de Certeza		Certeza	Certeza	Certeza	Certeza
12. Estructura Narrativa		Priorización del conflicto	Priorización de la represión	Priorización del caos	Lineal / Soluciones
13. Retórica Visual y Simbología		Refuerza / Emotivo	Refuerza / Emotivo	Refuerza / Emotivo	Refuerza / Neutro
14. Intertextualidad		Implícita	Implícita	Implícita	Explícita
15. Ausencias Textuales y Visuales		Ausentes	Ausentes	Ausentes	Presentes
23/1/2023		1. Título Principal	Sensacionalista / Subversión	Sensacionalista / Represión	Sensacionalista / Impacto económico
	2. Bajada	Refuerza / No maliza	Refuerza / No maliza	Refuerza / No maliza	Amplia / Matiza
	3. Volada	Enfatiza / Estrategia violenta	Contextualiza / Violencia estatal	Contextualiza / Consecuencias económicas	Introduce / Mensaje papal
	4. Subtítulos	Refuerza / No contradice	Refuerza / No contradice	Refuerza / No contradice	Neutros / Refuerza
	5. Imágenes y Elementos Visuales	Emotiva / Refuerza	Emotiva / Refuerza	Emotiva / Refuerza	Neutra / Refuerza
	6. Contexto Social e Ideológico	Tensión / Promueve	Tensión / Promueve	Tensión / Promueve	Estabilidad / Desafía
	7. Tematización Principal y Secundaria	Subversión / Violencia	Represión / Derechos	Economía / Protestas	Diálogo / Reconciliación
	8. Representación de Actores Sociales	Criminalizados / Subversivos	Víctimas / Represión	Criminalizados / Destruidores	Visibilizados / Mediadores
	9. Agencia y Responsabilidad	Manifestantes / Violencia	Gobierno / Represión	Manifestantes / Impacto económico	Gobierno / Solución
	10. Elección Léxica y Estilo	Sensacionalista / Negativa	Sensacionalista / Negativa	Formal / Negativa	Formal / Positiva
	11. Modalización y Grado de Certeza	Certeza	Certeza	Certeza	Certeza
	12. Estructura Narrativa	Priorización del conflicto	Priorización de la represión	Priorización de consecuencias económicas	Lineal / Soluciones
	13. Retórica Visual y Simbología	Refuerza / Emotivo	Refuerza / Emotivo	Refuerza / Emotivo	Refuerza / Neutro
	14. Intertextualidad	Implícita	Implícita	Implícita	Explícita
	15. Ausencias Textuales y Visuales	Ausentes	Ausentes	Ausentes	Presentes
	24/1/2023	1. Título Principal	Sensacionalista / Subversión	Sensacionalista / Crisis política	Sensacionalista / Emergencia
2. Bajada		Refuerza / No maliza	Refuerza / No maliza	Refuerza / No maliza	Amplia / Matiza
3. Volada		Enfatiza / Estrategia violenta	Contextualiza / Debate político	Contextualiza / Salud	Introduce / Contexto económico
4. Subtítulos		Refuerza / No contradice	Refuerza / No contradice	Refuerza / No contradice	Neutros / Refuerza
5. Imágenes y Elementos Visuales		Emotiva / Refuerza	Emotiva / Refuerza	Emotiva / Refuerza	Neutra / Refuerza
6. Contexto Social e Ideológico		Tensión / Promueve	Tensión / Promueve	Tensión / Promueve	Estabilidad / Desafía
7. Tematización Principal y Secundaria		Subversión / Violencia	Elecciones / Protestas	Emergencia / Protestas	Economía / Estabilidad
8. Representación de Actores Sociales		Criminalizados / Subversivos	Víctimas / Crisis política	Criminalizados / Protestantes	Visibilizados / Técnicos
9. Agencia y Responsabilidad		Manifestantes / Violencia	Congreso / Crisis	Manifestantes / Impacto social	Gobierno / Economía
10. Elección Léxica y Estilo		Sensacionalista / Negativa	Sensacionalista / Negativa	Sensacionalista / Negativa	Formal / Neutral
11. Modalización y Grado de Certeza		Certeza	Certeza	Certeza	Certeza
12. Estructura Narrativa		Priorización del conflicto	Priorización de la crisis política	Priorización de emergencias	Lineal / Soluciones
13. Retórica Visual y Simbología		Refuerza / Emotivo	Refuerza / Emotivo	Refuerza / Emotivo	Refuerza / Neutro
14. Intertextualidad		Implícita	Implícita	Implícita	Explícita
15. Ausencias Textuales y Visuales		Ausentes	Ausentes	Ausentes	Presentes
25/1/2023		1. Título Principal	Neutral / Llamado a tregua	Sensacionalista / Militarización	Sensacionalista / Crisis económica
	2. Bajada	Refuerza / Conciliador	Refuerza / Tensión	Refuerza / Impacto económico	Amplia / Matiza
	3. Volada	Enfatiza / Diálogo	Contextualiza / Presión social	Contextualiza / Emergencia social	Introduce / Reconciliación
	4. Subtítulos	Refuerza / No contradice	Refuerza / Militarización	Refuerza / Crisis económica	Neutros / Refuerza
	5. Imágenes y Elementos Visuales	Neutra / Refuerza	Emotiva / Refuerza	Emotiva / Refuerza	Neutra / Refuerza
	6. Contexto Social e Ideológico	Estabilidad / Promueve	Tensión / Promueve	Tensión / Promueve	Estabilidad / Promueve
	7. Tematización Principal y Secundaria	Diálogo / Conflicto	Militarización / Protestas	Economía / Impacto social	Diálogo / Seguridad
	8. Representación de Actores Sociales	Gobierno / Mediador	Gobierno / Represor	Manifestantes / Causa del problema	Gobierno / Facilitador
	9. Agencia y Responsabilidad	Gobierno / Solución	Gobierno / Represión	Manifestantes / Causa	Gobierno / Solución
	10. Elección Léxica y Estilo	Neutral / Formal	Sensacionalista / Negativa	Sensacionalista / Negativa	Formal / Positiva
	11. Modalización y Grado de Certeza	Certeza	Certeza	Certeza	Certeza
	12. Estructura Narrativa	Priorización del conflicto	Priorización de la militarización	Priorización de las pérdidas económicas	Lineal / Diálogo
	13. Retórica Visual y Simbología	Refuerza / Neutra	Refuerza / Emotiva	Refuerza / Emotiva	Refuerza / Neutra
	14. Intertextualidad	Implícita	Implícita	Implícita	Explícita
	15. Ausencias Textuales y Visuales	Presentes	Ausentes	Ausentes	Presentes
	27/1/2023	1. Título Principal	Refuerza / Positivo	Refuerza / Negativo	Refuerza / Negativo
2. Bajada		Refuerza / Inyección estatal	Refuerza / Impacto social	Refuerza / Alternativa política	Amplia / Estabilidad
3. Volada		Enfatiza / Aumento de tensión	Contextualiza / Crisis nacional	Contextualiza / Soluciones políticas	Introduce / Plan económico
4. Subtítulos		Refuerza / Protestas	Refuerza / Desabastecimiento	Refuerza / Problemas sociales	Neutros / Refuerza
5. Imágenes y Elementos Visuales		Emotiva / Refuerza	Emotiva / Refuerza	Neutra / Refuerza	Neutra / Refuerza
6. Contexto Social e Ideológico		Tensión / Promueve	Tensión / Promueve	Estabilidad / Promueve	Estabilidad / Promueve
7. Tematización Principal y Secundaria		Desabastecimiento / Conflicto	Desabastecimiento / Violencia	Economía / Protestas	Economía / Estabilidad
8. Representación de Actores Sociales		Manifestantes / Conflicto	Ciudadanos / Víctimas	Gobierno / Mediador	Gobierno / Facilitador
9. Agencia y Responsabilidad		Gobierno / Incapacidad	Gobierno / Represión	Congreso / Debate	Gobierno / Solución
10. Elección Léxica y Estilo		Sensacionalista / Negativa	Sensacionalista / Negativa	Formal / Neutral	Formal / Positiva
11. Modalización y Grado de Certeza		Certeza	Certeza	Certeza	Certeza
12. Estructura Narrativa		Priorización del conflicto	Priorización de la crisis	Priorización del debate político	Lineal / Soluciones
13. Retórica Visual y Simbología		Refuerza / Emotivo	Refuerza / Emotivo	Refuerza / Neutro	Refuerza / Neutro
14. Intertextualidad		Implícita	Implícita	Implícita	Explícita
15. Ausencias Textuales y Visuales		Ausentes	Ausentes	Ausentes	Presentes
29/1/2023		1. Título Principal	Sensacionalista / Enfasis en violencia	Sensacionalista / Reclamo ciudadano	Sensacionalista / Enfasis en caos
	2. Bajada	Refuerza / Criminalización de protestas	Refuerza / Relevancia del adelanto electoral	Refuerza / Impacto social de los conflictos	Amplia / Reconocimiento estatal
	3. Volada	Enfatiza / Ataques a fuerzas del orden	Contextualiza / Encuestas nacionales	Contextualiza / Crisis nacional	Introduce / Beneficios económicos
	4. Subtítulos	Refuerza / Escenas violentas	Refuerza / Participación ciudadana	Refuerza / Tensiones y debates	Neutros / Refuerza
	5. Imágenes y Elementos Visuales	Emotiva / Refuerza	Emotiva / Refuerza	Emotiva / Refuerza	Neutra / Refuerza
	6. Contexto Social e Ideológico	Conflicto / Promueve	Ciudadanía / Refuerza	Tensión / Promueve	Estabilidad / Promueve
	7. Tematización Principal y Secundaria	Desorden / Ataques	Participación / Cambios políticos	Crisis / Violencia	Educación / Reconocimiento
	8. Representación de Actores Sociales	Manifestantes / Criminalización	Ciudadanía / Protagonismo	Gobierno / Ineficiencia	Gobierno / Proveedor
	9. Agencia y Responsabilidad	Manifestantes / Culpabilidad	Gobierno / Inacción	Gobierno / Falta de control	Gobierno / Compromiso
	10. Elección Léxica y Estilo	Sensacionalista / Negativa	Formal / Neutral	Sensacionalista / Negativa	Formal / Positiva
	11. Modalización y Grado de Certeza	Certeza	Certeza	Certeza	Certeza
	12. Estructura Narrativa	Escalada del conflicto	Progresión / Enfoque en solución	Priorización de caos	Lineal / Beneficios
	13. Retórica Visual y Simbología	Refuerza / Negativa	Refuerza / Neutral	Refuerza / Negativa	Refuerza / Positiva
	14. Intertextualidad	Implícita	Explícita	Implícita	Explícita
	15. Ausencias Textuales y Visuales	Gobierno como mediador	Actores violentos	Alternativas sociales	Actores opositores
	16. Consecuencias Ideológicas y Sociales	Refuerza / Criminalización de manifestantes	Refuerza / Necesidad de cambios	Refuerza / Desgobierno	Refuerza / Estabilidad